.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Repositorio Digital Institucional

Tipo de documento: Tesis de Doctorado

Título del documento: La reparación de los crímenes de Estado: prácticas indemnizatorias en Argentina (1983-2015)

Autores (en el caso de tesistas y directores):

Ludmila Nair Schneider

Daniel E. Feierstein, dir.

Datos de edición (fecha, editorial, lugar,

fecha de defensa para el caso de tesis): 2022

Documento disponible para su consulta y descarga en el Repositorio Digital Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Para más información consulte: http://repositorio.sociales.uba.ar/

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 (CC BY 4.0 AR)
La imagen se puede sacar de aca: https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

Repositorio Digital Institucional

.UBAsociales
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Ludmila Nair Schneider

La reparación de los crímenes de Estado.

Prácticas indemnizatorias en Argentina (1983-2015)

Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

Director: Daniel E. Feierstein

Buenos Aires

2022

Resumen

La problemática de la reparación de los actos criminales ejercidos por representantes del Estado contra su propia población ha cobrado un impulso sin precedentes tras la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, en el marco de la configuración de un régimen de derechos humanos en la sociedad internacional, se construyeron diversos abordajes tendientes a precisar el alcance de la reparación, que confluyeron en las últimas décadas en la perspectiva de la justicia transicional.

En diálogo con estos abordajes, el objetivo de esta tesis es comprender la reparación de los crímenes de Estado perpetrados en Argentina en el marco de la última dictadura militar (1976-1983) a partir del análisis de la multiplicidad de prácticas reparatorias implementadas entre 1983 y 2015. Dichos crímenes son concebidos como un genocidio cuyo objetivo fue la transformación de las formas esenciales de vida de la sociedad mediante el exterminio y el ejercicio del terror. La reparación forma parte del proceso de reconstrucción que tiene lugar en la sociedad posgenocida tras haber atravesado la experiencia de aniquilamiento, y se inscribe en el marco de disputas ideológicas que los grupos sociales entablan por dotar de sentido a la violencia estatal, que encuentran en el Estado un escenario privilegiado para su expresión.

Desde esta perspectiva, en un primer nivel de análisis, la tesis aborda la multiplicidad de medidas implementadas por el Estado en el seno de sus instituciones con el objetivo de reparar los crímenes que otrora cometió, conceptualizadas como *prácticas reparatorias*. A partir de su caracterización y análisis, se construye una periodización en la cual se identifican tres constelaciones reparatorias en el transcurso del período abordado, en cuyo seno se construyeron representaciones diferenciales acerca de la reparación, a partir de la dinámica particular entre prácticas indemnizatorias -aquellas que suponen el otorgamiento de una suma de dinero a las víctimas a modo de compensación económica por los daños sufridos- y prácticas de juzgamiento a los responsables de los crímenes perpetrados.

A partir de la ponderación de las prácticas indemnizatorias para la comprensión de la reparación, se ha delimitado un segundo nivel de análisis, orientado a construir nuevo conocimiento acerca de las mismas. Con ese propósito, en primer lugar se reconstruyó la evolución histórica de su desarrollo, a partir de la elaboración de una base de datos que surge de los registros referidos a la implementación de las “Leyes Reparatorias”. Seguidamente, se analizaron las representaciones

que subyacen a las prácticas indemnizatorias en relación a tres tópicos: a) el dinero como instrumento de la reparación; b) la configuración del universo de víctimas en tanto sujetos de la reparación; y c) el daño que las indemnizaciones pretenden reparar. Abordar estas dimensiones en términos de representaciones implica considerar estas últimas como abordables de la ideología que se expresa en determinadas instituciones y prácticas, a la vez que se las concibe como diferenciales de acuerdo a las relaciones sociales fundamentales hegemónicas al interior de una sociedad concreta. Desde esta perspectiva, esta investigación se propone abordar la problemática de la reparación en el seno del entramado social en el cual tiene lugar, a la vez que articular las prácticas indemnizatorias y sus representaciones con los posibles modos en que la sociedad comprende, explica y otorga sentido a la experiencia genocida atravesada.

Abstract

The problem of repairing criminal acts carried out by representatives of the State against its own population has gained an unprecedented momentum after crimes commited by Nazism during World War II. Since then, within the framework of the configuration of a Human Rights regime in international society, various approaches have been developed to specify the scope of reparation, which have converged in recent decades in the perspective of transitional justice.

In dialogue with these approaches, the purpose of this thesis is to comprehend the reparation of State crimes perpetrated in Argentina in the framework of the last military dictatorship (1976-1983), based on the analysis of the multiplicity of reparation measures implemented between 1983 and 2015. These crimes are conceived as a genocide whose objective was the transformation of the essential forms of life in a society through extermination and terror. Reparation is part of the reconstruction process that takes place in post-genocidal society after having gone through the experience of annihilation, and is part of ideological disputes that social groups develop to give meaning to state violence, which find a privileged place for its expression in the State.

From this perspective, at a first level of analysis, the thesis addresses the multiplicity of measures implemented by the State within its institutions with the aim of repairing the crimes it once committed, conceptualized as reparatory practices. From its characterization and analysis, a periodization is constructed in which three reparatory constellations are identified in the course of the period addressed. In each period there were constructed differential representations about reparations, based on the particular dynamics between compensatory practices –which involve the granting of a sum of money to the victims as economic compensation for the damages suffered- and practices of judging those responsible for the crimes perpetrated.

From the weighting of compensation practices for understanding reparation, a second level of analysis has been delimited, aimed at building new knowledge about them. For this purpose, it was first reconstructed the historical evolution of its development, based on the elaboration of a database that arises from the records referred to the implementation of the "Reparatory Laws". Representations that underlie compensation practices were analyzed then in relation to three themes: a) money as the instrument of reparation; b) the configuration of the universe of victims as subjects of reparation; and c) the damage that the indemnities seek to repair. Addressing these

dimensions in terms of representations implies considering them as an ideology indicators, which is expressed in certain institutions and practices. Representations are also differential according to fundamental hegemonic social relations within a specific society. From this perspective, this research aims to address the issue of reparation within the social framework in which it takes place, and articulate compensation practices and their representations with the possible ways in which society understands, explains and makes sense to the genocidal experience.

Índice

Resumen ... **2**

Abstract ... **4**

Índice ... **6**

Agradecimientos ... **10**

Introducción ... **12**

Acerca de los desafíos, preguntas e hipótesis de esta investigación ... 15

Los capítulos que componen esta tesis ... 24

Capitulo 1. Coordenadas teórico metodológicas ... **28**

1. La reparación del genocidio en Argentina ... 28

2. La pregunta por el Estado ... 36

3. Los aportes de la perspectiva de las representaciones ... 41

3. a) Representaciones: breve genealogía de un concepto ... 42

3. b) Los aportes de la perspectiva piagetiana para el estudio de las representaciones de la reparación ... 47

4. Reparación del genocidio y relaciones sociales ... 51

5. Fuentes analizadas y construcción del corpus ... 56

Capítulo 2. Reparar lo irreparable. De la justicia transicional a las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado ... **60**

1. El surgimiento de la reparación como un derecho de las víctimas ... 60

2. Las dimensiones involucradas en la reparación integral ... 64

3. La reparación en la Justicia Transicional ... 71

3.a) Los postulados que subyacen a la justicia transicional ... 74

- La cuestión de la justicia ... 74

- La problemática de la transición ... 81

- La concepción de democracia ... 85

4. Las tipologías construidas para analizar las medidas reparatorias ... 88

5. Las prácticas reparatorias ... 92

5.a). Una propuesta de categorización de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado ... 93

Capítulo 3. Hacia una periodización de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado en Argentina (1983-2015) ... **98**

1. El fin de la dictadura....102
2. Primer período: Los albores de la democracia....104
2.a) Prácticas de juzgamiento y prácticas de reconocimiento para alumbrar la transición...105
2.b) Prácticas de democratización para enmarcar la sociedad del porvenir....109
2.c) La impronta restitutiva de los incios democráticos....111
3. Segundo período: Si no hay justicia, hay dinero....113
3.a) Primer subperíodo: la consolidación de la impunidad....114
- Resabios de la impronta restitutiva....116
3.b) Segundo subperíodo: la consolidación de las prácticas indemnizatorias....117
3.c) Tercer subperíodo: la impunidad en crisis....120
4. Tercer período: Hacia la integralidad de la reparación....124
4.a) Primer subperíodo: la expansión de la prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social....127
4.b) Segundo subperíodo: la profundización de la integralidad de la reparación....133
- La profundización de la expansión de las prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social....135
- La emergencia de las prácticas de rehabilitación....138
Capítulo 4. Las prácticas indemnizatorias de los crímenes de Estado en Argentina....142
1. El nacimiento de las prácticas indemnizatorias y el fin de la transición....151
2. La consolidación de las prácticas indemnizatorias en el marco de la impunidad....155
2.a) Antecedentes e inicios de las indemnizaciones....155
2.b) La conformación del cuerpo de prácticas indemnizatorias....158
- Prácticas indemnizatorias dirigidas a los ex detenidos....158
- Prácticas indemnizatorias dirigidas a los desaparecidos y asesinados....161
3. Las prácticas indemnizatorias en el marco de la reparación integral....166
3.a) La "Ley de Hijos"....167
3.b) Algunas consideraciones acerca de la reparación económica del exilio....170
3.c) La ampliación del alcance de las prácticas indemnizatorias dirigidas a los presos políticos....171
3.d) El establecimiento de un "régimen reparatorio" para los ex presos políticos....174
4. La implementación de las "Leyes Reparatorias": un panorama de las prácticas indemnizatorias....176

Capítulo 5. El dinero como instrumento de la reparación en las prácticas indemnizatorias 182

1. Acerca del "dinero maldito" 184

2. Algunas consideraciones preliminares acerca del dinero 187

3. Representaciones "negativas" del dinero: el daño a reparar como mercancía 192

3.a) "No aceptamos que se le ponga precio a la vida" 194

3.b) "El que cobra la reparación económica se prostituye" 198

3.c) "La vida sólo vale vida" 202

4. Representaciones "positivas"del dinero: el dinero como comunidad 204

5. El dinero en la esfera de la implementación de las Leyes Reparatorias 209

5. a) Los bonos como forma de dinero 209

5.b) Indemnización vs. Pensión 212

Capítulo 6. Las representaciones sobre los sujetos de la reparación y la configuración del universo de víctimas 218

1. Acerca de la interpelación ideológica de la categoría de víctima 222

2. La centralidad del desaparecido en las representaciones de las víctimas "directas" 225

2.a) Víctimas directas "evidentes": los desaparecidos como sujetos de la reparación 226

2.b) Víctimas directas "no tan evidentes": los "ex detenidos" como sujetos de la reparación 229

2.c) Víctimas directas invisibilizadas: los ex detenidos desaparecidos 235

2.d) Transformaciones en la configuración del universo de víctimas a partir de la ley "Dovena" 240

3. Víctimas mediatas: los familiares de los desaparecidos como sujetos de la reparación 246

4. Los hijos como sujetos víctimas de la reparación 251

Capítulo 7. Las representaciones sobre el daño a reparar en las prácticas indemnizatorias 260

1. La reparación de las lesiones y los desplazamientos en torno del daño a reparar 263

1.a) Acerca de las juntas de evaluación de daños 266

1.b) La intervención del Ulloa en las evaluaciones de daños 270

2. La emergencia del daño subjetivo como representación del daño a reparar 276

3. El daño a reparar y las relaciones sociales vulneradas en el marco del genocidio 283

Conclusiones 290

Bibliografía y fuentes **301**
Fuentes documentales 301
Fuentes judiciales 301
Diarios y periódicos 301
Bibliografía 302
Anexo 1. Corpus documental **321**

Agradecimientos

Esta tesis es producto de un proceso de aprendizaje que comenzó en el año 2010, cuando Daniel Feierstein me invitó a formar parte del *Equipo de Asistencia Sociológica a las Querellas*, tras haber cursado la materia *Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas* que hoy sigue dictando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Este equipo fue y sigue siendo el espacio privilegiado en el cual aprendí la importancia decisiva de la reflexión colectiva tanto para la construcción de conocimiento como para el oficio de la investigación, y es por ello que quiero agradecer en primer lugar a todas mis compañeras y compañeros del EASQ por este camino recorrido, en especial a Alejandra y Julieta Stupenengo, Luz Roa, Patricio Abalos, Cecilia Samanes, Florencia Urosevich, Julia Nesprias, Nahuel Contreras, Lucrecia Molinari, Marcelo Ferreira, Mariela Zelenay, con quienes compartimos no sólo el trabajo sino también el entusiasmo desde los tiempos iniciales, y a María Belén Olmos, Florencia Corradi, Lucía Dana, Lucía Tejada, Ana Laura Sucari, Matías Eidem, Amparo Quiroga, Matías Figal, Gabriel Tchabrassian, Josefina Bergues, Paula Cesnovar, Verónica Cortiñas, Romina Grilleta, Denise Mayor Moreno, Ana Zanotti, Macarena Peralta y Adrian Rojze, que se fueron sumando al equipo y con quienes enfrentamos distintos desafíos en el transcurso de estos años.

A los miembros del *Centro de Estudios sobre Genocidio* de la Universidad de Tres de Febrero, equipo al cual me incorporé en el año 2015, por sus lecturas atentas y valiosos comentarios que resultaron fundamentales para esta investigación, en especial a Adriana Taboada, Lior Zylberman, Perla Sneh, Barbara Ohanian, Iván Fina, Jorge Wozniak, Carolina Ravello, Eva Camelli y Guillermo Levy.

A la Universidad de Buenos Aires, de la que me gradué como primera generación universitaria de mi familia gracias a las posibilidades que otorga la educación pública y gratuita. A quienes pasaron por el Seminario de investigación "*Sistema de campos de investigación en Argentina*", que dirige Daniel Feierstein en esta casa de estudios, del que tengo la alegría de formar parte como docente, por hacer del mismo un espacio fraterno en el que nos animamos a cuestionar nuestras certezas. A quienes construyen todos los días esta Universidad, en especial a las profesoras y profesores que me acercaron a las diversas tradiciones teóricas que confluyeron en esta tesis.

A la Universidad Nacional de Tres de Febrero, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por su apoyo fundamental para llevar adelante esta investigación.

A mi director Daniel Feierstein, por su generosidad y su confianza, por su acompañamiento y por haberme abierto las puertas de este mundo, que hoy es también el mío.

A cada una de las personas que me compartieron sus experiencias, sus saberes, y sobre todo, parte de su historia, sin las cuales hubiera sido imposible comprender el entramado complejo que se teje alrededor de la reparación.

A mis queridas amigas Malena Silveyra, Ana Jemio y Natalia Crocco, mis pilares fundamentales a lo largo de estos años. A Nati, por la compañía cotidiana de aquellos primeros tiempos, y por volver simple todo lo que me resulta complicado. A Male y Anita, porque sólo se pensar y escribir si es con ustedes, esta tesis es tan mía como suya. A Male, por ser mi compañera imprescindible, impulso fundamental para que un conjunto de ideas desordenadas llegaran hasta acá.

A mi hermana Ariadna, a mi familia y a mis amigas y amigos que durante todos estos años escucharon mis preocupaciones monotemáticas, a veces muy alejadas de las suyas propias, porque nunca dejaron de apoyarme y alentarme.

A mi mamá y mi papá, Liliana y Alejandro, porque su mirada de confianza marcó mi vida, y porque siento que de alguna forma misteriosa han permanecido siempre a mi lado.

A Iván, por todos estos años de todo y por tu sostén incondicional, y a Julia, por tu existencia luminosa. Porque con ustedes vuelvo a descubrir cada día que no hay fuerza más poderosa que el amor.

Introducción

Pasaron más de diez años desde que Daniel Feierstein me invitó a formar parte del equipo de investigación que dirige en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y que por entonces había sido recientemente bautizado con el nombre de *Equipo de Asistencia Sociológica a las Querellas (EASQ)*. Para mí, que me encontraba en el tramo final de mi carrera de grado, esa fue la puerta que me abrió a un mundo en el que la Sociología parecía ser una herramienta para pensar y hacer con otros, y desde allí aportar a la construcción de otros mundos posibles.

Al sumarme al EASQ hice propias las aspiraciones del equipo por contribuir a la disputa por el sentido de los crímenes de Estado perpetrados en Argentina entre 1975 y 1983, concebidos como un genocidio reorganizador cuyo objetivo fue la reconfiguración de las relaciones sociales a partir del aniquilamiento y el ejercicio del terror (Feierstein, 2007). A partir de la reapertura del proceso de juzgamiento tras la anulación de la legislación de impunidad que por muchos años había impedido el avance de las causas, el ámbito judicial se configuró como escenario privilegiado para esta disputa. [1] En este marco, nos propusimos como objetivo que los tribunales receptaran la calificación de genocidio para caracterizar el proceso represivo atravesado, asumiendo que las calificaciones jurídicas generan efectos de verdad y producen consecuencias en los modos en que nuestra sociedad puede explicarse a sí misma lo vivido, preguntarse por los daños que ha sufrido y avanzar en intentos de reparación de lo dañado. Con este norte, trabajamos colaborativamente con compañeros de organismos de derechos humanos –en especial, con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte- en la recolección, sistematización e interpretación de una importante cantidad de información que nos permitieron construir nuevo conocimiento acerca de dicho proceso, así como de los sujetos individuales y colectivos que lo habían protagonizado.

Entre el cruce de variables en bases de datos y la escucha de los testimonios que los sobrevivientes brindaban en los juicios, se iban forjando las inquietudes que dieron origen a esta investigación: ¿Cómo fue que algo así pudo ocurrir? ¿*Qué podemos hacer con todo esto,* ahora que conocemos la cara del horror? ¿Existe aquello que pueda reparar el genocidio? ¿Los juicios

[1] Tras el acontecimiento sin precedentes del juicio a las juntas, en el cual los altos jefes militares fueron sentados en el banquillo de los acusados apenas recuperada la democracia, las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987) primero, y los indultos presidenciales después (1989-1990) abrieron un largo período de detenimiento del accionar de la justicia, que se extendió hasta la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005.

alcanzan? ¿Qué otras iniciativas conocemos en este sentido, cuántas se han intentado, cuántas nos quedan todavía por intentar? Nacida en el seno de estas preocupaciones, esta tesis es el fruto de una convicción profunda acerca de la importancia teórico política de conocer un poco más acerca de qué hacemos, con qué herramientas, de qué manera nos proponemos como sociedad reparar la experiencia genocida que se propuso transformar nuestros modos de hacer y estar en el mundo.

Claro que estas primeras preguntas no surgieron como preguntas sociológicas. A ello me enfrenté años más tarde, al momento de presentarme al concurso para obtener la beca doctoral otorgada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) en el año 2015, cuya continuidad estaría dada por la Beca de Finalización de Doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y que en conjunto me permitieron llevar adelante la investigación que se plasma en estas páginas.

Algunas cuestiones debieron ser reformuladas para adecuar mis inquietudes iniciales al marco de un proyecto académico. La primera de ellas puede presentarse a modo de una advertencia: en esta tesis no se encontrarán recetas que prescriban cómo llevar a cabo una reparación exitosa del genocidio en Argentina, cuáles son las herramientas adecuadas para ello, ni a quiénes debería estar dirigida esta reparación. Debo asumir que realicé un esfuerzo consciente por dejar a un lado cualquier *debería,* para ceñir mi indagación a lo que efectivamente se ha realizado en materia de reparación para los crímenes de Estado desde la recuperación democrática en adelante. De esta manera, he desplazado aquella pregunta-motor fuertemente instalada en mi fuero íntimo acerca de *cómo hacer para reparar*, hacia un conjunto de interrogantes que sirvan de puntapié para iluminar *cómo se ha intentado llevar a cabo la reparación.*

En este camino, me topé pronto con una pregunta que configura el punto de partida de esta investigación: ***¿Es posible la reparación del genocidio?***

Esta pregunta ya había sido formulada en términos filosóficos a propósito del genocidio nazi, cuya naturaleza atroz había llevado a postular que se trataba de crímenes irreparables e imperdonables (Arendt, 1993; Derrida, 2003; Jankelevicth, 1987). Sin embargo, fue a partir de este mismo acontecimiento histórico que comenzó a constituirse un ordenamiento normativo de carácter internacional que consagró el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparaciones.

En el transcurso de esta evolución se estableció la obligación de los Estados de conceder una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas, que ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, y entre cuyos objetivos cuenta lograr siempre que sea posible, que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes de la violación manifiesta de derechos humanos. [2] Al calor de la evidencia de que no existe una manera de recuperar el estado de cosas anterior a la comisión de crímenes que traspasaron la frontera del daño imaginable, comenzaron a ponerse en marcha múltiples instrumentos que buscaron justamente *reparar lo irreparable*. Hoy es posible aseverar con idéntica certeza que la reparación se sitúa en el campo de lo imposible, de lo irreparable; pero que a su vez, las sociedades no han abandonado la búsqueda por alcanzarla: es esta la tensión constitutiva de la que nace la problemática de la reparación.

Esta tensión puede reinterpretarse a la luz de la propia etimología del término "reparar", en tanto este deriva del latín *reparāre*; compuesto por el léxico *re* –que implica volver, ir hacia atrás- y el verbo *parare* – cuya raíz proviene de la palabra *pere,* a partir del cuál se derivaron abundantes palabras, entre ellas el verbo sufijado *parere* que significa parir, dar a luz. Ello habilita a interpretar la reparación como un renacimiento; en este caso, la reparación se vuelve posible en la medida en que deja de abocarse a la restitución de lo dañado al momento previo de la perpetración del daño, para hacer lugar a una nueva reconstrucción que ocupará el lugar de aquello que ha sido dañado. Pensar la reparación implica asumir que no es posible volver atrás como si el daño no se hubiera producido; por el contrario, esta siempre se presenta como un proceso de carácter simbólico, en tanto nunca puede ser equivalente a aquello que se ha perdido irremediablemente, sino que busca producir una nueva configuración a partir del reconocimiento de la experiencia atravesada.

[2] Los primeros instrumentos tendientes a la sistematización de las medidas necesarias para lograr una reparación adecuada establecieron que el derecho a la reparación comprendía "a) Medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes); b) Medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios psíquicos y morales, así como pérdida de oportunidades, los daños materiales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia jurídica); c) Medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o psiquiátrica)" (E/CN.4/Sub.2/1997/20:10). Estas medidas se fueron ampliando y precisando hasta el establecimiento de los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*", mediante Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, disponible en línea en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

Desde este punto de partida, esta tesis intenta ser un aporte para la comprensión de este proceso de reconstrucción que conlleva la reparación, a partir del análisis de las medidas tendientes a la reparación de los crímenes de Estado en Argentina implementadas entre 1983 y 2015.

Acerca de los desafíos, preguntas e hipótesis de esta investigación

Entre los desafíos que ha debido afrontar esta investigación, hay dos que me interesa subrayar. Si bien ambos forman parte del horizonte de esta tesis, no pueden ser considerados objetivos por alcanzar, en la medida en que su cumplimiento efectivo no puede ser abarcado en los límites de una investigación doctoral. Sin embargo, su enunciación resulta fundamental dado que han operado como su motor y es en esa dirección en que se pretende inscribir parte de los aportes que surgen como producto de la misma.

El primero de ellos se vincula con su inscripción disciplinar. A partir de los crímenes cometidos por representantes del Estado contra su propia población durante la Segunda Guerra Mundial, la reparación ha suscitado el interés de un número creciente de investigadores que se han abocado a su estudio (Nowak, 2003; van Boven, 2009; Wolfe, 2013). Estas investigaciones dieron lugar a la emergencia de un campo de estudios sobre reparaciones, revitalizado a partir de la consolidación de la perspectiva de la *justicia transicional* hacia fines de los años 80, de acuerdo a la cual las medidas de reparación se sitúan en las transiciones hacia régimenes políticos democráticos que asumen la responsablidad por los crímenes cometidos por regímenes autoritarios que los precedieron (De Greiff, 2006; Kritz, 1995; Teitel, 2000). Dado que el campo jurídico ha sido el terreno en el cual la reparación ha emergido como problemática, las investigaciones vinculadas a esta temática se anclaron principalmente en una perspectiva jurídica, y desde allí privilegiaron el estudio de los mecanismos involucrados en la misma, así como de los actores que la han llevado a cabo. A medida que en diversas latitudes comenzaron a implementarse programas de diverso alcance que intentaban reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante dictaduras militares o conflictos internos, la preocupación por la reparación alcanzó a la psicología y la antropología como disciplinas que se abocaron a analizar los efectos que la reparación produce en los sujetos y comunidades involucradas en los procesos reparatorios (Beristain, 2010; Danieli, 2009; Hamber, 2006).

No obstante, pese a esta proliferación de investigaciones que avanzaron en dilucidar la dialéctica entre pasado y presente, e individuo y sociedad que implica la reparación, una indagación en

perspectiva sociológica continúa al día de hoy en el terreno de lo pendiente. En este marco, el primer desafío sobre el que transita esta investigación es el de la construcción de un andamiaje sociológico para la comprensión de la reparación. Partiendo de la consideración de las múltiples perspectivas desde las cuales se ha abordado hasta el momento la reparación, parte del horizonte de esta tesis es construir en su intersección una pregunta sociológica que las contenga pero sobre todo, que pueda trascenderlas.

En estrecha vinculación con lo antedicho, un segundo desafío se vincula con cómo caracterizar la reconstrucción involucrada en toda iniciativa de reparación de lo dañado. La perspectiva del genocidio ha brindado las herramientas conceptuales que permitieron situar esta recomposición en el ámbito de las relaciones sociales, y con ello abrió la puerta para construir un abordaje de la reparación en el terreno sociológico por excelencia.

El concepto genocidio nació de la mano del jurista polaco Raphael Lemkin, quien en 1943 lo definió como "un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los grupos mismos" (Lemkin, 2009, p. 153). Desde esta perspectiva, el aniquilamiento es concebido como un medio para la transformación de las formas de vida de grupos sociales, a partir de la destrucción de los individuos que conforman dichos grupos. En su definición de *prácticas sociales genocidas*, Daniel Feierstein recuperó este elemento como central para designar una tecnología de poder que persigue la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación por medio del aniquilamiento y el uso del terror, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios (2007, p. 83).

Entendido el genocidio como un proceso tendiente a la vulneración de determinados lazos sociales al interior de una sociedad particular, la reparación forma parte del proceso de reconstrucción mediante el cual se construyen respuestas ante esa vulneración, en el marco de las cuales se configuran nuevas maneras en las cuales los sujetos se vinculan entre sí y con el mundo que los rodea, tras haber atravesado la experiencia genocida. Ahora bien: si los tipos de lazos sociales que fueron objeto del aniquilamiento se corresponden con vínculos de solidaridad y cooperación, resta dilucidar cuál es el tipo de vínculo social que caracteriza al momento de su reconstrucción.

Recuperando los aportes de Jean Piaget (1986), las relaciones sociales se estructuran de acuerdo a dos tipos de vínculos fundamentales, que configuran una gradiente cuyos polos refieren a los

vínculos de autonomía y solidaridad por un lado, y los vínculos de presión y autoridad por el otro. Y es aquí donde emerge la pregunta que ha impulsado esta investigación y que le marca el camino a transitar: si el genocidio tuvo por objetivo la reconfiguración de las relaciones sociales, *¿Cuál es el vínculo social que las medidas reparatorias habilitan a recomponer, o por el contrario, contribuyen a obturar?* Entre los elementos que conforman estas iniciativas reparatorias, *¿Cuáles pueden considerarse afines a la construcción de relaciones sociales de cooperación y cuáles por el contrario, propenden vínculos de carácter asimétrico?*

Si bien la naturaleza de este interrogante impide que el mismo pueda saldarse en el marco de los límites de esta tesis, ello no implica que a lo largo de los capítulos no sean presentadas algunas consideraciones en este sentido que abonen una respuesta de carácter interpretativo, fundamentadas en el análisis de las medidas reparatorias y las representaciones que las subyacen. Y desde este lugar, esta investigación se hace eco del debate en torno a la consideración de los crímenes perpetrados en Argentina como un genocidio, que ha suscitado profundos debates que se encuentran abiertos al día de hoy. [3]

Muy tempranamente esta caracterización fue adoptada por el movimiento popular para referir al proceso represivo, tal como se evidencia en la *Carta abierta de un escritor a las juntas militares* que Rodolfo Walsh escribió el 24 de marzo de 1977, y el Informe "Argentina proceso al genocidio" que la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) elaboró en enero del mismo año. Desde entonces, fue adquiriendo fuerza en términos de una analogía con el nazismo que permitía resaltar la gravedad y magnitud del aniquilamiento perpetrado. No obstante, los tribunales fueron el ámbito en el cual este debate adquirió mayor visibilidad, muy especialmente a partir de la reapertura de las causas en el año 2006. [4] En esta última etapa del proceso de juzgamiento, la argumentación en torno a la pertinencia de la calificación jurídica del genocidio para el caso argentino promovió discusiones que involucraron tópicos que trascendieron su tipificación penal, como ser la caracterización del proceso histórico sociológico que enmarcó el genocidio y la causalidad del proceso represivo.

[3] El propio campo de estudios sobre genocidio se erige sobre la discusión definicional en torno a los alcances y limitaciones del genocidio como concepto. Para una revisión exhaustiva de estos debates, ver: Feierstein (2007, pp. 31-73). Para una perspectiva crítica del concepto de genocidio en relación al caso argentino, ver: Alonso (2013), Franco (2018), Vezzeti (2015).

[4] La caracterización del genocidio ya había sido introducida en los tribunales en 1984, en ocasión del Juicio a las Juntas, cuando en su presentación Eduardo Barcesat definió de este modo los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). Posteriormente, una vez reabierto el proceso de juzgamiento en 2006, la pertinencia de esta calificación jurídica atravesó la gran mayoría de las causas judiciales, tal como demuestran los análisis realizados por Feierstein (2015, pp. 197-248) y profundizados en EASQ (2015) y Feierstein & Silveyra (2017).

A diferencia de lo que sucedió en el marco de las causas judiciales, en el seno de las cuales la discusión en torno a la existencia de un genocidio en Argentina ha formado parte de las preocupaciones de los distintos actores involucrados en las mismas, este debate no parece haber permeado el ámbito en el cual se desarrollaron las restantes iniciativas que constituyen el objeto de estudio de esta investigación. Con la excepción de aquellas sentencias judiciales que caracterizaron el proceso represivo como un genocidio –como producto de la disputa instalada a tal fin al interior de los tribunales- la categoría consagrada institucionalmente para denominar los crímenes perpetrados en el conjunto restante de medidas estatales tendientes a la reparación fue la de *terrorismo de Estado*.

El origen de la categoría "terrorismo de Estado" se vincula con la concepción de "Estado terrorista", mediante la cual Eduardo Duhalde caracterizó el modelo represivo de la dictadura en términos de un desdoblamiento de su aparato represivo en una faz pública, sometida a leyes, y otra clandestina, que se institucionaliza con carácter permanente. Este concepto puso de relieve la funcionalidad del terror para llevar a cabo el objetivo central de esta forma específica de Estado de excepción: la desarticulación de la sociedad (Duhalde, 1999, p. 249). [5] Sin embargo, su deriva en el vocablo "terrorismo de Estado", produjo una resignificación del término que pasó a designar cualquier modalidad represiva estatal implementada con el objetivo de infundir terror.

La noción poco específica del "terrorismo de Estado" se articuló con una visión de Estado demoníaco, producto de la usurpación del poder constitucional por parte de la dictadura militar, introduciendo una lectura del conflicto de raigambre liberal basada en la oposición entre dictadura y democracia. Por un lado, ello eliminó la dualidad simétrica entre fuerzas represivas y fuerzas insurgentes que había promovido la denominada *teoría de los dos demonios* como modelo explicativo de la experiencia dictatorial. [6] En su lugar, puso el foco en las violaciones de los derechos individuales de los ciudadanos que había perpetrado el Estado terrorista,

[5] Para una revisión crítica del concepto de Estado terrorista, ver Jemio (2021).

[6] La denominada *teoría de los dos demonios* como modelo explicativo de la experiencia represiva emergió durante el período de la transición democrática, y propuso una equiparación entre el accionar de los grupos armados y la represión estatal en tanto actos violentos, criminales e igualmente ilícitos, ambos enfrentados a una sociedad que permaneció ajena y víctima de dos violencias contrapuestas. Algunos trabajos que abordan la teoría de los dos demonios son, entre otros: Feierstein (2007, 2012, 2018), Acuña y Smulovitz (2007), Crenzel (2008) y Franco (2008).

produciendo así una despolitización en relación a su concepción original desde una perspectiva institucionalista. [7]

Fue a partir de esta concepción –y no desde la perspectiva del genocidio como punto de partida- que se pusieron en juego un conjunto de representaciones en torno a cómo reparar, qué reparar y a quién reparar que serán recorridas en los próximos capítulos.

El camino que llevó a institucionalizar la denominación "terrorismo de Estado" como modo de referir al proceso represivo atravesado en Argentina, así como las diferencias que es posible establecer en relación a la caracterización de genocidio, no serán objeto de estudio de esta tesis. En este sentido, la consideración de los crímenes perpetrados en el caso argentino como un genocidio no constituye una constatación por probar en el marco de esta investigación, sino una perspectiva para el análisis que ha resultado productiva para la reflexión en el terreno de la diálectica entre destrucción/reconstrucción de las relaciones sociales que invoca la reparación.

Sin embargo, interesa señalar que el término terrorismo de Estado y sus sentidos asociados presentan una afinidad con la ideología jurídica, que concibe la persona como sujeto jurídico y la sociedad como una comunidad conformada por individuos "libres e iguales". Esta perspectiva liberal permea los ordenamientos normativos propios del derecho moderno, y el ámbito jurídico en el que emerge la problemática de la reparación no constituye una excepción. Dado que esta tesis aborda la reparación como una iniciativa estatal, no resulta llamativo que las medidas reparatorias recojan del campo del derecho las nociones que le resultan propias, y por consiguiente, caractericen lo sucedido en el marco del terrorismo de Estado. El genocidio subvierte en cierto modo el paradigma del derecho liberal, en la medida en que su eje no está puesto en las personas en tanto individuos, sino que las considera como parte de un grupo, un colectivo que encarna determinadas relaciones sociales, sobre las cuales se ha intentado perpetrar el aniquilamiento. [8]

[7] Para un análisis crítico de los usos y resignificaciones del término terrorismo de Estado, ver Feierstein (2012, 2015, 2018).

[8] El movimiento según el cual las medidas reparatorias se inscriben institucionalmente en el marco de la categoría "terrorismo de Estado" resulta análogo al que en el ámbito judicial privilegia la calificación jurídica de "crímenes de lesa humanidad" por sobre la de genocidio para referir a los crímenes perpetrados durante la última dictadura. Siguiendo a Feierstein (2012, 2015), las formulaciones "crímenes de lesa humanidad" y "terrorismo de Estado" pueden inscribirse en un mismo tipo de narratividad, afín al paradigma liberal, según la cual las violaciones a los derechos humanos producidas desde el Estado se ciernen sobre los individuos en tanto ciudadanos, descartando el concepto de grupo. Para profundizar sobre las implicancias diferenciales de las calificaciones jurídicas de genocidio y lesa humanidad en las sentencias emitidas por los tribunales argentinos, ver Feierstein & Silveyra (2020).

Ahora bien, las relaciones sociales que la reparación se propone reconstruir no pueden abordarse en el vacío. Estas no sólo no existen al margen de los sujetos que las encarnan, sino que tampoco se presentan al interior de cada sociedad concreta como absolutos: en las sociedades modernas conviven múltiples individuos y grupalidades cuyos modos de relacionarse pueden corresponderse con tipos diferenciales de vínculos sociales entre los extremos de la obligación y la cooperación. *¿Cómo abordar la reconstrucción de los vínculos sociales vulnerados por los crímenes que se intenta reparar en el marco de esta multiplicidad?*

Esta dificultad intentó sortearse al circunscribir la indagación hacia las medidas reparatorias impulsadas e implementadas desde el Estado, concebido como la cristalización de las relaciones sociales hegemónicas de la sociedad concreta en la cual la reparación tiene lugar. De esta manera, los vínculos que se intentará recomponer mediante las medidas a analizar serán la expresión de un tipo particular de equilibrio social, que es aquel al que aspira el Estado. Ello implica por un lado, que en el caso argentino, el terreno de la reconstrucción de las relaciones sociales estará demarcado por las relaciones sociales asimétricas que se corresponden con toda formación social capitalista; pero a su vez, permitirá observar las disputas que se libran en su seno y que se expresan en las distintas respuestas construidas para afrontar los daños que se pretende reparar. Desde esta perspectiva, la reparación encuentra su límite y a la vez su potencialidad en la trama de relaciones sociales sobre la cual se configura.

El Estado se concibe como una relación social que se expresa en la articulación de dos momentos del campo estatal: el funcionamiento del aparato represivo mediante la coerción, en conjunto con el funcionamiento ideológico. No obstante, este estudio privilegia la dimensión ideológica y entiende la ideología como cuerpos de representaciones que existen en determinadas instituciones y determinadas prácticas, las cuales contribuyen a organizar el modo en el cual los hombres se relacionan con otros hombres y el mundo en el que habitan (Althusser, 1975; Gramsci, 2000b).

Es aquí donde se inscribe la **primera hipótesis** que atraviesa esta investigación: las medidas tendientes a la reparación intervienen en las disputas ideológicas en torno de los modos de comprender, narrar, explicar y dotar de sentido a la violencia estatal. La respuesta estatal a la reparación se dirime en el marco de estas disputas ideológicas que encuentran en el Estado una arena privilegiada para su expresión. Las definiciones que se adoptan en cada medida reparatoria en torno a qué se repara, cómo se repara y a quiénes se dirige la reparación son la resultante de un proceso de lucha entre las representaciones de la reparación que circulan en la sociedad, y deben

entenderse por lo tanto como la cristalización de un momento de una correlación de fuerzas que está siempre en movimiento.

En este marco, para el análisis de estas iniciativas tendientes a la reparación se ha construido la herramienta conceptual de *prácticas reparatorias*, definidas como aquellas medidas implementadas por el Estado en el seno de sus instituciones con el objetivo de reparar los crímenes que otrora cometió, y que tuvieron lugar con posterioridad a la dictadura militar. Esta conceptualización enfatiza en lo que el Estado efectivamente *hace* cuando se propone llevar a cabo la reparación; en este sentido, los instrumentos jurídicos que el Estado sanciona constituyen el observable privilegiado de las prácticas reparatorias, en tanto son su condición de posibilidad: si bien no se consideran en sí mismos prácticas reparatorias, se *transforman* en ellas al momento en el cual ponen en marcha acciones concretas tendientes a reparar a quienes en cada caso, se define como destinatarios de cada medida particular.

Con la lente de las prácticas reparatorias para el análisis del corpus documental recuperé aquellas preguntas iniciales que me había planteado originalmente en el marco de las tareas desarrolladas en el EASQ. Una primera conclusión a la que arribé rápidamente fue que el Estado había hecho muchas más cosas aparte de juicios para reparar el genocidio. De hecho, los juicios habían presentado un comportamiento variable a lo largo del tiempo, pese a que la demanda hacia el Estado por juicio y castigo se había mantenido por parte de la sociedad en general y los organismos de derechos humanos en particular desde la recuperación democrática en adelante. Sin embargo, se habían implementado una vasta multiplicidad de medidas guiadas por el objetivo de alcanzar la reparación, no ya en representación del Poder Judicial del Estado –como era el caso de los juicios-, sino en el marco de la actuación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo –como lo demostraban las múltiples medidas reparatorias relevadas.

En este escenario se sitúa el primer nivel de análisis en el que se desarrolla esta investigación.

A partir del análisis de la multiplicidad de prácticas reparatorias, se elaboró una categorización de las mismas. La base empírica para su construcción comprende la totalidad de políticas estatales de alcance nacional orientadas a la reparación sancionadas entre 1983 y 2015. En función de la introducción de la variable temporal en el análisis, fueron identificadas prácticas reparatorias hegemónicas en distintos períodos que se plasmaron en la construcción de una periodización.

De esta sistematización se desprenden una serie de cuestiones significativas. Primero: al interior de este universo de prácticas reparatorias, aquellas caracterizadas como *prácticas*

indemnizatorias –que suponen el otorgamiento de una suma de dinero a las víctimas a modo de compensación económica por los daños sufridos- fueron las únicas que no sólo se mantuvieron vigentes sino que presentaron un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado. Segundo: la ampliación permanente de las prácticas indemnizatorias acompañada por diversas prácticas reparatorias dio lugar a tres constelaciones reparatorias entre 1983 y 2015, al interior de las cuales se construyeron diversas representaciones hegemónicas en torno de la reparación. Tercero: los desplazamientos que dieron lugar a distintas constelaciones reparatorias estuvieron determinados por el comportamiento variable que presentaron los juicios concebidos como *prácticas de juzgamiento*.

De aquí emerge una **segunda hipótesis** que recorre esta tesis: las sucesivas constelaciones reparatorias en cuyo seno se identifican representaciones diferenciales acerca de la reparación, se construyen sobre el contrapunto particular entre prácticas indemnizatorias y prácticas de juzgamiento que tiene lugar al interior de cada una de ellas.

Y en este punto, debí tomar una decisión que terminó por estructurar el recorrido de esta investigación. Tanto las prácticas indemnizatorias como las prácticas de juzgamiento presentaban particularidades que las evidenciaban como medidas reparatorias significativas. Originalmente, me había propuesto analizar las representaciones acerca de la reparación en las sentencias judiciales dictadas contra los responsables de los crímenes de Estado así como en la legislación de alcance nacional en materia de reparación. El exhaustivo trabajo de archivo realizado a tal fin durante los primeros años de esta investigación, en el marco de los grupos de estudio en los que participo abocados al análisis de los juicios, así como la publicación de sus primeros resultados así lo evidencian (Schneider, 2017). Sin embargo, al adentrarme en el universo de las *indemnizaciones* descubrí un mundo complejo y a la vez muy poco explorado, que requería de un abordaje específico y diferencial al que venía utilizando para el análisis de las sentencias. A esa tarea me aboqué de allí en adelante.

Desde entonces, los esfuerzos realizados en el marco de esta investigación estuvieron dirigidos al estudio de las prácticas indemnizatorias, por lo que espero que sea en este terreno en el cual esta tesis pueda realizar aportes significativos. Esta tarea recupera como antecedentes los valiosos trabajos previos que abordaron la reparación económica (Guembe, 2006; E. Zamorano, 2012), problematizando las significaciones del dinero para el pago de reparaciones (Luzzi, 2015, 2018; Tello, 2003), y discutiendo las definiciones para referir a los beneficiarios (Goyochea et al., 2011;

Surraco, 2013). Asimismo, considera los estudios que articularon las indemnizaciones con otras medidas tendientes a la reparación. Entre ellos, cuentan quienes se centraron en la descripción y análisis de las medidas involucradas (Gualde & Luterstein, 2009; Solís Delgadillo, 2015), reconstruyeron el proceso de formalización de la categoría de víctima en las medidas reparatorias (Vecchioli, 2013) y estudiaron las transformaciones identificadas en las mismas respecto a la dimensión de lo reparable (Guglielmucci, 2015).

Este segundo nivel de análisis fue delimitado por la ponderación de las prácticas indemnizatorias para la comprensión de la reparación. En este marco, esta investigación adquiere relevancia en la medida en que hasta este momento no se han realizado investigaciones que aborden el universo de las *indemnizaciones* desde una perspectiva que contemple sus características estructurales así como los desplazamientos que las mismas presentaron a lo largo del tiempo. Esta relativa ausencia se explica por dos dificultades nodales que esta investigación asumió como parte de sus desafíos, y que atraviesan el estudio de las prácticas indemnizatorias.

La primera refiere a las controversias suscitadas en torno al dinero como herramienta de la reparación. Desde los inicios de las reparaciones económicas, el otorgamiento de dinero hacia las víctimas por parte del Estado dio lugar a posicionamientos de repudio, que rechazaron el pago de indemnizaciones por considerarlo un intercambio por la vida de los desaparecidos. Esto llevó a que el debate acerca de las reparaciones se mantuviera en la esfera privada de las víctimas, e hizo de las mismas un tema tabú que sigue resultando espinoso abordar. Este tabú se hizo presente en reiteradas ocasiones en el transcurso de esta investigación, en diversos espacios de intercambio y discusión en los cuales recibí palabras de aliento por abordar este tema que en Argentina, a todos nos produce *un nudo en la garganta*.

La segunda se vincula con que el propio Estado contribuyó a crear un halo de misterio en torno de las reparaciones económicas ante la falta de información oficial respecto de su implementación. Esto supuso una dificultad metodológica para esta investigación, que intentó superarse mediante la construcción de una base de datos propia compuesta por más de 10.000 registros que contempla la información contenida en las carátulas de las resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación de las leyes reparatorias entre los años 2000 y 2015. Si bien esta reconstrucción no puede suplir la ausencia de datos oficiales, sí ha permitido la estimación de algunas tendencias generales acerca de la evolución de las prácticas indemnizatorias.

En este marco, el estudio de las prácticas indemnizatorias estuvo orientado a la comprensión de las representaciones que subyacen a las mismas en torno a cuál es el instrumento de la reparación, quiénes son los sujetos a quienes están dirigidas las prácticas reparatorias, y finalmente, cuál es el daño que intentan reparar. Abordar estas dimensiones en términos de representaciones implica considerar estas últimas como abordables de la ideología que se expresa en determinadas instituciones y prácticas, a la vez que se las concibe como diferenciales de acuerdo a las relaciones sociales fundamentales hegemónicas al interior de una sociedad concreta. Desde esta perspectiva, esta investigación se propone abordar la problemática de la reparación en el seno del entramado social en el cual tiene lugar, a la vez que articular las prácticas indemnizatorias y sus representaciones con los posibles modos en que la sociedad comprende, explica y otorga sentido a la experiencia genocida atravesada.

Los capítulos que componen esta tesis

En el **capítulo 1** se presenta el andamiaje conceptual construido para abordar el estudio de la reparación de los crímenes de Estado en Argentina en el período 1983-2015, en la intersección de diversas tradiciones teóricas en las cuales se inscribe.

Con este objetivo, se profundiza en las implicancias de caracterizar los crímenes que se intenta reparar como un genocidio, y su potencialidad para situar la reparación en el marco de la reconfiguración de las relaciones sociales que el proceso genocida se propuso. El capítulo avanza en la pertinencia de circunscribir la indagación al ámbito de las prácticas reparatorias en tanto medidas implementadas desde el Estado y su articulación con la dimensión ideológica involucrada en la reparación. Seguidamente, se presenta una revisión teórica de la perspectiva de las *representaciones* a partir de la cual se fundamenta su elección como herramienta para analizar los significados que se construyen acerca de la reparación mediante las prácticas reparatorias. Por último, son presentadas las fuentes analizadas y la construcción del corpus documental que constituyen la base empírica que sustenta esta investigación.

El **capítulo 2** reseña la producción existente acerca de la problemática de la reparación de los crímenes de Estado, con el objetivo de ubicar el abordaje adoptado en esta tesis en proximidad y distancia respecto de sus antecedentes. Tras situar su emergencia en las preocupaciones surgidas de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, presenta un recorrido que comienza con la consolidación de un régimen de derechos humanos en la sociedad internacional

y se articula con la denominada *perspectiva de las víctimas* primero, y con los *principios de la reparación integral* después. Dado que en las últimas décadas, ambos enfoques fueron recuperados desde la perspectiva teórico-política de la *justicia transicional*, su revisión crítica permite explorar en qué medida sus postulados han permeado las representaciones de la reparación en el caso argentino.

Considerando las limitaciones y alcances de las perspectivas reseñadas, se presentan las *prácticas reparatorias* como herramienta conceptual para el análisis de las medidas orientadas a la reparación en Argentina, así como la categorización que emerge de su sistematización.

Los dos capítulos siguientes están dedicados a la presentación desdoblada de una periodización construida en función de esta sistematización. Considerando la totalidad de prácticas reparatorias implementadas entre los años 1983 y 2015, se han identificado tres períodos cuya caracterización global se presenta en el **capítulo 3.** En cada uno de estos tres períodos se observa una constelación reparatoria diferente que nace de la articulación entre diversas prácticas reparatorias hegemónicas, y en el seno de las cuales la reparación evoca significados diferenciados. Esta periodización permite contrastar la hipótesis que indica que a partir de la dinámica entre prácticas de juzgamiento y prácticas indemnizatorias es posible comprender la reparación de los crímenes de Estado así como sus representaciones hegemónicas durante todo el período posdictadura. Asimismo, fundamenta la relevancia otorgada a las prácticas indemnizatorias al interior de este universo, dada su permanencia y crecimiento constante a lo largo del período analizado, lo que lleva a profundizar en su devenir y desarrollo en el **capítulo 4**. Una reconstrucción pormenorizada de las prácticas indemnizatorias se acompaña con la presentación de un conjunto de datos construidos con el objetivo de dar cuenta de algunas tendencias y comportamientos generales que presentaron las indemnizaciones en el transcurso del tiempo.

Los capítulos restantes se corresponden con el segundo nivel de análisis en el que se desarrolla esta investigación. Se circunscriben al estudio de las prácticas indemnizatorias y abordan el interrogante acerca de las representaciones que subyacen a las mismas, a partir de tres cuestionamientos nodales que las estructuran: ¿Cómo se repara? ¿A quién se repara? ¿Qué es lo que se pretende reparar?

El *cómo* en el caso de las prácticas indemnizatorias se presenta en principio de manera unívoca, dado que el dinero es en todos los casos el instrumento mediante el cual se hace efectiva la reparación y que las define como tales; de allí que el eje del **capítulo 5** sea la indagación en torno

del dinero como herramienta para la reparación. Partiendo de una revisión teórica de las perspectivas que ponen de relieve el poder que se le confiere al dinero en la configuración de las relaciones sociales, este capítulo tiene por objetivo explorar en las vinculaciones entre las representaciones del dinero y la problemática de la reparación. Para ello, analiza las representaciones negativas del dinero –asociadas a lo que se considera que el dinero tiene el poder de destruir- conjuntamente con sus representaciones positivas –que se vinculan con el carácter constructivo del dinero. La consideración de la complejidad del dinero en su doble carácter destructor y creador de determinados vínculos sociales, así como las implicancias que conlleva en el terreno de la reparación es el principal aporte que se desprende de esta argumentación.

En el desarrollo de los capítulos 6 y 7 cobra relevancia la inscripción de las prácticas reparatorias en el marco del aparato de Estado jurídico político, en la medida en que el derecho proporciona los lineamientos para responder a las preguntas acerca del *quién* y el *qué* de la reparación, íntimamente ligadas a las figuras de la víctima y el delito, constitutivas del campo jurídico. Los últimos capítulos de esta tesis intentan iluminar la tensión entre estas definiciones jurídicas y la naturaleza de los crímenes de Estado que las prácticas indemnizatorias se proponen reparar.

Recuperando críticamente estas definiciones, el **capítulo 6** postula que la categoría de víctima ejerce una *interpelación ideológica* sobre los sujetos considerados beneficiarios de las leyes reparatorias. Desde allí, analiza la construcción de una jerarquía de sujetos de la reparación que ha resultado de la aplicación de dos principios clasificatorios que se articularon sobre el universo de víctimas en el transcurso del tiempo que aborda esta tesis.

El primero de estos principios corresponde a la centralidad otorgada a la figura del desaparecido como víctima emblemática, que opera como línea divisoria entre quienes se incluyen o por el contrario, se excluyen de esta definición. Como producto de la aplicación de este principio clasificatorio, en un primer momento –de emergencia y consolidación de las prácticas indemnizatorias- se consolidó una representación de las víctimas en términos de una gradiente en cuyos extremos figuran las víctimas "evidentes" –los desaparecidos- y las víctimas "invisibilizadas" –los sobrevivientes. En el transcurso del tiempo, se postula que este principio fue perdiendo fuerza al calor de la reunificación del universo de víctimas frente al accionar represivo del Estado. Complementariamente, el segundo principio que estructura el universo de víctimas refiere al grado de contacto que las mismas tuvieron con el sistema represivo, a partir

del cual se postula una distinción entre víctimas que atravesaron personalmente el sistema concentracionario para quienes se reserva el término de "víctimas directas" y aquellas que han sido afectadas por la desaparición de otro sujeto-víctima, a quienes se propone denominar como "víctimas mediatas".

La tesis cierra en el **capítulo 7** con el análisis de las representaciones del daño a reparar que subyacen a las prácticas indemnizatorias. A la luz de la reconstrucción del funcionamiento de las juntas de evaluación de daños, constituidas con el objetivo de constatar la existencia de lesiones graves y gravísimas en las víctimas, propone un recorrido por la concepción de daño cuyo punto de partida es la revisión del concepto de daño jurídico. En la evolución del daño jurídico al calor de la consolidación de la perspectiva de la integralidad en el marco del paradigma de derechos humanos, se identifica un desplazamiento que tras jerarquizar el daño psicológico como dimensión constitutiva del daño jurídico, lleva a la emergencia de la concepción de *daño subjetivo*, con el objetivo de alojar las particularidades que presenta el daño a reparar en los casos de crímenes de Estado. El daño subjetivo se concibe como un daño que afecta la singularidad de la víctima, y permite asir la dimensión de lo dañado en el terreno del ser y hacer del sujeto en términos subjetivos. Por último, se presentan algunas consideraciones en torno al daño a reparar en el terreno de las relaciones sociales vulneradas por los crímenes de Estado, reinstalando así la pregunta por el daño en el corazón de los interrogantes de esta tesis.

Capitulo 1

Coordenadas teórico metodológicas

La convicción en torno a la relevancia teórico política de profundizar en torno de la comprensión de la reparación de los crímenes de Estado en Argentina ha servido de guía en el camino de formulación de los interrogantes que atraviesan esta tesis. A poco de andar, la pregunta inicial, que se había planteado conocer cuáles habían sido los modos en que esos crímenes se habían intentado reparar, reveló su complejidad intrínseca. Fue así como esta primera pregunta-paraguas se fue desglosando en una serie de interrogantes interrelacionados, en cuya intersección se ha delimitado el marco teórico conceptual para esta investigación.

Este capítulo tiene por objetivo presentar las respuestas construidas en la búsqueda por desenredar estos nudos problemáticos, a partir de un entrecruzamiento particular entre diversos campos de estudios, tradiciones teóricas e investigaciones precedentes. Para ello, recorre los tópicos centrales que enmarcan las discusiones que atraviesan esta tesis, y que permiten inscribirla en sus grandes ámbitos de pertenencia.

A tal fin, en el primer apartado se presenta la potencialidad de la perspectiva del genocidio para la comprensión de la reparación en el caso argentino. A continuación, el apartado dos aborda la especificidad del Estado en tanto responsable de los crímenes perpetrados así como de su reparación, a partir de la cual postulo que la reparación interviene en las disputas ideológicas acerca de los modos de comprender la experiencia atravesada. En tanto la ideología se expresa en representaciones existentes al interior de determinadas prácticas e instituciones, el apartado tres realiza una revisión de la perspectiva de las representaciones para fundamentar su elección como herramienta conceptual para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Seguidamente, el apartado cuatro presenta algunas consideraciones que surgen de la reflexión en torno a la vinculación entre la problemática de la reparación y las relaciones sociales hegemónicas al interior del entramado social en el cual tienen lugar las medidas reparatorias, articulación que enmarca las preocupaciones centrales que impulsaron este estudio. Por último, en el apartado cinco se presentan la multiplicidad de fuentes analizadas y la construcción del corpus que la sustenta empíricamente.

1. La reparación del genocidio en Argentina

Las experiencias masivas de aniquilamiento de grupos humanos son un fenómeno de larga data, que han dado lugar a múltiples términos creados para describir, caracterizar y denominar a las mismas, y que muchas veces circulan socialmente de manera indistinta para referir a estas experiencias. Sin embargo, a la hora de abordar su reparación, resulta indispensable precisar cómo se conciben dichos crímenes, dado que ambas cuestiones se presentan en espejo: dependiendo de cómo se caractericen estas experiencias de aniquilamiento, se pondrán en marcha iniciativas reparatorias diferenciales consideradas adecuadas para cada caso. En este sentido, una de las preguntas centrales contenidas en el interrogante en torno a la reparación de los crímenes de Estado se vincula con el modo de concebir los crímenes cuya reparación se intenta llevar a cabo.

En el caso argentino, la necesidad de comprender las particularidades del proceso represivo desplegado durante la década del 70 así como las condiciones sociales que lo posibilitaron fueron estudiadas muy tempranamente desde la perspectiva de la lucha de clases y el conflicto social (Izaguirre, 1994, 2009; Marín, 2007), así como privilegiando las características del sistema concentracionario en relación con el Estado y la sociedad (Corradi, 1996; Duhalde, 1999; Villarreal, 1985). En este marco, fue el movimiento de derechos humanos el pionero en denominar dicho proceso represivo implementado por la dictadura militar argentina como un genocidio (CADHU, 1977; Duhalde, 1999).

El concepto genocidio había sido acuñado en 1944 por el jurista Raphael Lemkin, fruto de su preocupación por comprender las particularidades del aniquilamiento perpetrado por el nazismo y las transformaciones que el mismo había implicado en las identidades de los pueblos bajo su control. En *El dominio del eje en la Europa ocupada*, Lemkin utilizó por primera vez el neologismo y lo definió como un plan coordinado de acciones cuyo objetivo radica en la destrucción de las formas de vida de grupos de individuos, con el objetivo de aniquilar a los grupos mismos. De acuerdo a esta conceptualización, el genocidio consta de dos etapas: "una, la destrucción del patrón nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición del patrón nacional del opresor (Lemkin, 2009, p. 154).

Pocos años después, en el marco de los debates generados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio fue codificado jurídicamente con la aprobación de la *Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948)* en Naciones Unidas. Allí, el genocidio fue definido a partir de un conjunto específico de actos "perpetrados con la intención

de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". [9] La definición de genocidio surgida de la Convención ha sido objeto de críticas desde el ámbito del derecho por su carácter restrictivo – en la medida en que el genocidio queda restringido a los cuatro grupos mencionados, quedando los grupos políticos excluidos en la tipificación- y por ser definido a partir de una categorización de las víctimas y no por las prácticas que lo originan, quebrando de este modo el principio de igualdad ante la ley (Feierstein, 2000; Folgueiro, 2004; Markusen et al., 2005).

Tanto la concepción de Lemkin como la definición jurídica de la Convención coinciden en señalar la importancia de considerar a las víctimas del crimen de genocidio como miembros de un grupo, más allá de sus individualidades, dado que es justamente su pertenencia a un grupo la condición que los convierte en objeto de la persecución. Sin embargo, mientras que la Convención sólo refiere a la primera etapa del proceso genocida -vinculada al aniquilamiento material de estos individuos por su pertenencia a un grupo-, la definición de Lemkin incorpora una segunda etapa que permite considerar al aniquilamiento como un medio para un fin: la imposición de los patrones identitarios de otro grupo (opresor). Considerar este segundo momento en la definición de genocidio permite mirar las transformaciones ocurridas en la sociedad en la cual tuvo lugar el proceso genocida; desde esta perspectiva, el genocidio no sólo se propone *destruir* un patrón identitario, sino que a su vez tiene la intención de *construir* un patrón identitario diferente. Por eso esta tesis adoptará una definición sociológica del genocidio, que permita trascender las discusiones en torno a la pertinencia de caracterizar el proceso argentino como un genocidio de acuerdo a la normativa jurídica. [10]

---

[9] Entre los actos mencionados en la Convención, se enumeran: a) matanza de miembros de grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El texto completo de la *Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio* puede consultarse en línea en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm

[10] Como he mencionado en la introducción, el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos por el Estado en Argentina reabierto en el año 2006 ha receptado la discusión en torno a la pertinencia de su calificación como un genocidio, principalmente debido al impulso de las querellas que representan a víctimas y sobrevivientes en los juicios. Los argumentos en contrario han versado principalmente en torno a 3 cuestiones: a) el respeto al principio de congruencia, referido a la imposibilidad de calificar a los hechos de otro modo que el planteado en la imputación inicial; b) la falta de tipificación del delito de genocidio en el derecho interno y c) la definición de cuál sería el grupo atacado para el caso argentino, en virtud de la exclusión de los grupos políticos en la definición jurídica del genocidio (Feierstein, 2015). No obstante, en el período 2006-2015 correspondiente al marco temporal de esta investigación, del total de 154 sentencias libradas en el marco de dichas causas, 36 (23,3%) fallaron a favor de reconocer la existencia de un genocidio en el caso argentino, ya sea en términos histórico sociales como incorporando este reconocimiento como parte de su calificación legal (Feierstein & Silveyra, 2017).

No obstante, vale señalar que estas discusiones suscitadas en torno a las definiciones jurídicas y sociológicas del genocidio dieron lugar hacia la década del ochenta a la emergencia del campo de estudios sobre genocidio, el cual se consolidó internacionalmente hacia principios de los años 90. En sus orígenes, los trabajos considerados de la "primera generación" de este campo de estudios buscaban identificar las particularidades de las experiencias genocidas a través de una perspectiva comparativa, de la cual resultó la jerarquización del Holocausto como "genocidio canónico", junto con el genocidio armenio y ruandés como experiencias emblemáticas. [11] En los últimos años, la "segunda generación" de estudios sobre genocidio ha centrado su atención en las consecuencias que los procesos genocidas implican para las sociedades que los sufren, atendiendo a las transformaciones producidas por el aniquilamiento (Feierstein, 2007; Hinton, 2013; Woolford, 2013). Esta corriente, también referida como de *estudios críticos sobre genocidio*, desembarcó en el contexto local de la mano de Daniel Feierstein, quien en su análisis comparativo del caso argentino con el genocidio nazi acuñó el concepto *prácticas sociales genocidas.* Con él da cuenta del intento de reorganización de las relaciones sociales que caracterizaron los crímenes de Estado perpetrados durante la última dictadura en Argentina (Feierstein, 2007). [12]

Desde esta perspectiva, en esta tesis los crímenes perpetrados por el Estado en Argentina se conciben como un genocidio en tanto práctica social

> … cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad, y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios (Feierstein, 2007, p. 83).

Esta conceptualización ilumina dos cuestiones de relevancia relacionadas con la problemática de la reparación que aborda esta tesis.

En primer lugar, de acuerdo a esta definición heredera de los desarrollos de Lemkin, la esencia del genocidio reside en su intento de transformación identitaria de la sociedad. Si bien esta reconfiguración involucra el aniquilamiento material de una parte significativa de la misma, la

[11] Para profundizar en las investigaciones que conformaron esta primera generación de estudios sobre genocidio, ver: Dadrian (1975), Kuper (1981), Horowitz (1980), Chalk & Jonnasohn (1990), Fein (1993), Charny (1994), entre otros.

[12] La dictadura militar y sus antecedentes también constituyeron el objeto de estudio del campo de la historia reciente, particularmente abocado a la reconstrucción de los procesos históricos que confluyeron en el proceso represivo así como su despliegue (Águila, 2008; Franco, 2012; Hilb & Lutzky, 1984; Vezzetti, 2002, 2009).

especificidad de este proceso no debe buscarse en el exterminio, sino en las consecuencias que estas muertes producen en el conjunto social. Esta particularidad es retomada por Feierstein en su tipología de prácticas sociales genocidas, a partir de la cual considera el caso argentino como un genocidio reorganizador, propio de las sociedades modernas, cuyo propósito es la transformación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un Estado nación existente (Feierstein, 2007, p. 100).

En línea con este señalamiento, la periodización construida por Feierstein para analizar las prácticas sociales genocidas desde una lógica procesual da cuenta por un lado, que ciertas prácticas anteceden al momento del aniquilamiento –comenzando por la construcción de una otredad negativa, que impulsa un salto a la acción que habilita las prácticas de hostigamiento, aislamiento y debilitamiento sistemático-. Pero a su vez, advierte que el genocidio no culmina con el exterminio material de sus víctimas, sino que involucra un momento posterior al mismo, concerniente a la destruccion simbólica de las relaciones sociales que esos sujetos encarnaban. Se trata del momento de la *realización simbólica del genocidio* en el cual se produce la efectiva reconfiguración de la sociedad mediante la transformación de las relaciones sociales, a traves de la constitución de nuevos patrones identitarios. En analogía con la concepción de Marx en torno a la realización de la mercancía en el ámbito de la circulación por medio de su venta, Feierstein postula que las prácticas genocidas deben "realizarse" a través del procedimiento simbólico de su representación, para completar el proceso de transformación de relaciones sociales. (2007, p. 237).

Desde esta perspectiva, determinados modos de comprender y explicar lo sucedido forman parte de este proceso de realización simbólica, vinculado con mecanismos que contribuyen a instalar en el conjunto social una relación de ajenización respecto a la experiencia atravesada. Esta ajenización refiere al borramiento simbólico de aquellos cuerpos que fueron aniquilados materialmente, y opera a través de narrativas que desvinculan el genocidio del orden social que lo produjo, trastocando el sentido, la lógica y la intencionalidad atribuidas al mismo (Feierstein, 2007, p. 239). De esta manera, a nivel del conjunto social, la ajenización conlleva un extrañamiento que impide la inscripción de la propia historia –tanto individual como colectiva-

en la trama de relaciones sociales sobre la cual se ha perpetrado el genocidio, transformando a los sujetos en "extranjeros ante su propia vivencia" (Feierstein, 2012, p. 80). [13]

Sin embargo, no todos los intentos de otorgar sentido al genocidio abonan su realización simbólica: la construcción de memorias y representaciones que permitan anudar aquellas identidades aniquiladas con la propia identidad tanto individual como colectiva, habilitarán por el contrario, una relación de apropiación de la experiencia genocida. No se trata de distinguir de modo binario entre los sentidos que realizan el genocidio en oposición a aquellos que lo elaboran, sino de situar los mismos al interior de un amplio gradiente de matices cuyos extremos pueden concebirse entre la ajenización y la apropiación del proceso genocida (Feierstein, 2007, 2012).

En tanto las medidas tendientes a la reparación que constituyen el objeto de esta tesis intervienen en estas disputas de sentido acerca de lo sucedido, este concepto resulta clave a los fines de esta investigación. Al construir determinadas representaciones acerca de lo que debe ser reparado, las prácticas reparatorias conllevan una concepción acerca de lo que fue destruido, y pueden articularse con diversos modos de elaboración del pasado reciente signado por la violencia estatal. La realización simbólica del genocidio es la llave que permite situar la problemática de la reparación como parte del momento en que la sociedad se reconstruye sobre la base de nuevas relaciones sociales que expresan a su vez nuevos modelos identitarios, focalizando así en los efectos producidos por las prácticas sociales genocidas en el conjunto social.

Relacionado con lo anterior, vale señalar que los modos en que la sociedad recuerda y se representa el proceso represivo formaron parte de las preocupaciones en torno de las cuales se configuró el campo de estudios sobre memoria. Recuperando los aportes de Halbwachs (2004b) en cuanto a la relevancia de los marcos sociales en los cuales se inscriben las memorias individuales, esta perspectiva entiende los procesos de memoria como un terreno de disputas por los sentidos del pasado (Crenzel, 2008; Feld, 2002; Feld & Franco, 2015; Jelin, 2002). Esta tesis presenta puntos de articulación con el campo de estudios sobre memoria en tanto comparte la importancia otorgada al proceso de representaciones sobre el pasado así como el carácter conflictivo y dinámico de las mismas. Sin embargo, se inscribe en la línea de los estudios críticos sobre genocidio en la medida en que su objetivo principal se orienta a la comprensión de la

[13] Siguiendo a Feierstein, la realización simbólica del genocidio en el caso argentino involucra mecanismos tales como la negación de la identidad de las víctimas, los modos de transferencia de la culpa, el uso de un horror abstracto y sus efectos paralizantes, y las consecuencias de dichos procesos en la reconstrucción de las identidades (2007, pp. 237-250).

reparación como parte de las disputas ideológicas en torno a la elaboración del genocidio, proceso que comprende diversos modos de narrar y dotar de sentido a la violencia estatal y que se sitúa en la etapa posgenocida.

Por otra parte, una segunda cuestión que la concepción de genocidio permite poner de relieve se vincula con la caracterización de las transformaciones que el genocidio produjo –o al menos, intentó producir- en el terreno de las relaciones sociales, que da lugar a la pregunta acerca de *cuál fue la sociedad que el genocidio se propuso destruir*. En este sentido, coincido con la interpretación que postula que aquello que configuró el blanco del genocidio fue el proceso ascendente de organización de los sectores populares en pos de una reconfiguración del modelo de acumulación del capital, en un momento histórico en el cual comenzaban a fortalecerse las bases sobre las cuales parecía posible construir una manera cooperativa, solidaria y no burguesa de habitar este mundo (Izaguirre, 2009; Silveyra, 2018). Estas maneras de ser y estar en el mundo, que generaban fricción al ejercicio del poder en la sociedad existente, constituyeron las relaciones de reciprocidad que el genocidio se propuso clausurar. Para impedir el desarrollo de relaciones sociales de creciente autonomía respecto del poder, y estructurar vínculos sociales más cercanos a la heteronomía basados en la asimetría, fue requisito indispensable el borramiento de la memoria de su existencia. Ello fue posible a través de narrativas que postularon que estos vínculos cooperativos nunca existieron, y produjeron así una relación de ajenización respecto de los mismos.

Esta distinción entre dos tipos fundamentales de relaciones sociales parte de los aportes realizados por Jean Piaget, quien basado en su amplio caudal de investigaciones en epistemología genética concluyó que

> hay que distinguir en todos los terrenos, dos tipos de relaciones sociales: la obligación y la cooperación; la primera implica un elemento de respeto unilateral, de autoridad, de prestigio; la segunda un simple intercambio entre individuos iguales (Piaget, 1984, p. 50).

Recuperando esta distinción, y dadas las reconfiguraciones producidas en la sociedad en la cual fue desplegado el genocidio, esta tesis está atravesada por un interrogante de carácter interpretativo que sitúa la problemática de la reparación en el terreno de dicha reconfiguración. La pregunta que le ha servido de guía gira en torno a cómo se articulan las prácticas reparatorias con los distintos tipos fundamentales de relaciones sociales; en cada caso, cuál es la tendencia dominante en cuanto al vínculo social que habilitan a recomponer o por el contrario, contribuyen

a obturar: ¿Qué elementos de las prácticas reparatorias son tendientes a la construcción de relaciones sociales de paridad, identificadas como aquellas que el genocidio tuvo intención de destruir? ¿Cuáles por el contrario, son afines a una recomposición dirigida al establecimiento de relaciones sociales de heteronomía, basadas en vínculos asimétricos, que propenden a la atomización de los individuos frente al poder-autoridad?

Si bien ya se ha advertido que una respuesta cabal a estas preguntas no puede saldarse en el marco de los límites de esta tesis, la investigación está atravesada por este interrogante, el cual se abordará de manera explotaria a lo largo de los próximos capítulos. Previo a presentar algunas consideraciones que permitan profundizar en las implicancias de este modo de abordaje, restan dos aclaraciones antes de avanzar hacia el próximo apartado. En primer lugar, la interpretación a presentar no persigue un objetivo prescriptivo: cómo reparar los crímenes de Estado, cuáles son las herramientas adecuadas para llevarla a cabo, son preguntas que exceden ampliamente el ámbito de esta investigación. Por el contrario, el objeto de análisis está constituido por las prácticas reparatorias efectivamente formuladas e implementadas con posterioridad a la dictadura militar, a partir de las cuales espero contribuir a iluminar la compleja problemática de la reparación.

En segundo lugar, entre los múltiples desafíos que plantea la reparación –cuyas posibles conceptualizaciones serán revisadas en el próximo capítulo-, quisiera detenerme en uno en especial. Si bien pensar la reparación requiere abordar la pregunta en torno a cómo contrarrestar, cómo enfrentar los efectos de las prácticas genocidas, el lugar desde el cual se formula esa pregunta es siempre desde la propia sociedad atravesada por la violencia estatal. Por lo tanto, los sentidos construidos en torno a la elaboración de esa experiencia se encuentran en movimiento y en disputa al momento de formular e implementar cada una de las prácticas tendientes a la reparación del genocidio. Si las prácticas reparatorias se han propuesto reconstruir las relaciones sociales que el genocidio ha intentado transformar, esta investigación apuesta a explorar el horizonte de esta reconstrucción, con el objetivo de presentar algunos lineamientos en esta dirección que quedarán abiertos para ser profundizados en futuras investigaciones. Y desde este lugar, partiendo de postular que las prácticas reparatorias intervienen en las disputas por la construcción de sentido acerca de la experiencia genocida, se propone realizar un aporte a la comprensión de las transformaciones producidas por el genocidio.

2. La pregunta por el Estado

Si bien son múltiples los actores sociales que están involucrados en las disputas por los sentidos atribuidos al proceso genocida, las luchas que entablan distintos grupos sociales por imponer sus interpretaciones acerca de la experiencia atravesada encuentran en el Estado un escenario privilegiado para su expresión. Ello me ha llevado a abordar el estudio de la reparación a partir del análisis de las medidas orientadas a tal fin que han sido implementadas desde el Estado, entendidas como la resultante de un proceso en el cual se ponen en juego diversos modos de concebir el proceso genocida y su reparación, y que he conceptualizado como prácticas reparatorias. A su vez, estas medidas adquieren especificidad en términos de reconocimiento de lo sucedido, en tanto suponen la asunción por parte del Estado de la responsabilidad estatal por llevar a cabo la reparación de los crímenes que otrora cometió.

En este marco, he mencionado en la introducción de esta tesis que el Estado se concibe como una relación social que se expresa en la articulación de dos momentos del campo estatal: el funcionamiento del aparato represivo mediante la coerción, en conjunto con el funcionamiento ideológico. Si bien ambos momentos se postulan como inescindibles, dada la delimitación del objeto a abordar en esta investigación, es la dimensión ideológica la que se privilegia en el análisis de las prácticas reparatorias.

Los modos de articulación entre el Estado y la ideología han resultado una puerta de entrada fructífera para abordar la problemática teórico política del Estado en la obra de Marx, que ha promovido un conjunto de lecturas de su vasta obra tendientes a precisar algunos de sus puntos nodales. [14]

Entre ellos, interesa recuperar la perspectiva que se distancia de la concepción del Estado como mero instrumento en las manos de una clase-sujeto que ejerce exclusivamente funciones

[14] La problemática del Estado en la tradición marxista ha estado atravesada por la representación topológica de la base y la superestructura, a partir de la cual el Estado ha sido concebido o bien como un apéndice-reflejo de lo económico, o bien como un instrumento tendiente a la aseguración de la dominación de la burguesía mediante la utilización de la violencia (Lenin, 1986; Marx, 2003, 2004, 2005b). En palabras de Marx: "El Estado cobra un existencia especial junto a la sociedad civil y al margen de ella; pero no es tampoco mas que la forma de organización que se dan necesariamente los burgueses, tanto en lo interior como en lo exterior, para la mutua garantía de su propiedad y de sus intereses (…) Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de el una forma política" (Marx, 1985, p. 72). Partiendo de estos desarrollos teóricos, las miradas economicistas e instrumentalistas del Estado se han ido complejizando para trascender la noción del Estado como un mero aparato de represión. En esta línea se inscriben las contribuciones de Antonio Gramsci, Louis Althusser y Nicos Poulantzas entre otros, que nutren el marco teórico de esta investigación. Para una revisión de la problemática del Estado en la obra de Marx ver: Jessop (1982).

coercitivas y económicas. Por el contrario, se considera que el Estado capitalista involucra conjuntamente el funcionamiento de la coerción con el funcionamiento ideológico y económico, en el seno de la dialéctica de las relaciones entre la infraestructura y las superestructuras.

Entre los exponentes más significativos de esta concepción del Estado se encuentran Antonio Gramsci y Louis Althusser, quienes comparten una visión crítica al economicismo desde la cual el Estado se concibe como un reflejo superestructural de la base económica de la sociedad de clases. [15] Ambos autores se oponen a la perspectiva que reduce al Estado a jugar un papel accesorio frente a la reproducción económica, vinculado con la organización de la violencia al interior de una sociedad determinada, en cumplimiento de sus funciones represivas. Por el contrario, sus aportes inscriben la lucha de clases y la dominación política en la estructura institucional del Estado, el cual se concibe como su condensación material. En otras palabras, desde la perspectiva adoptada en esta tesis, la forma Estado define las articulaciones básicas que constituyen a la sociedad, en la medida en que el Estado "concentra, condensa, materializa y encarna las relaciones político-ideológicas en las relaciones de producción y en su reproducción" (Poulantzas, 2005, p. 137).

La concepción ampliada del Estado se evidencia en el análisis gramsciano al afirmar que "la noción general de Estado comporta elementos que hay que relacionar con la noción de sociedad civil (en el sentido en que podríamos decir que Estado = sociedad política + sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada de coerción)" (Gramsci, 2000a, p. 76). De acuerdo a esta mirada, mediante la incorporación de la noción de hegemonía a la problemática estatal, el Estado interviene en el proceso de construcción del sentido común en tanto concepción del mundo en determinado momento histórico. La ideología es parte fundamental de este proceso,

> … si al término ideología se le da precisamente el significado más alto de una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva (Gramsci, 2008, p. 12).

[15] Las producciones de Gramsci y Althusser tendieron a ser leídas como dos tendencias contrapuestas al interior del marxismo, asociados a horizontes filosóficos diversos. Mientras que el primero se considera un exponente del humanismo y el historicismo, la obra de Althusser se ubica en la corriente estructuralista. Sin embargo, y pese a haber realizado fuertes críticas a algunos aspectos de la obra gramsciana, el propio Althusser reconoció la relevancia de sus aportes en el terreno de la superestructura e inscribió su trabajo como una continuidad de sus indagaciones, habilitando puentes entre ambos pensamientos. Aquí se recuperan estas vinculaciones, que permiten identificar una clave de lectura común a ambos autores en cuanto a la problemática del Estado y la ideología. Para profundizar en las críticas althusserianas al pensamiento de Gramsci, ver Althusser y Balibar (2010).

En tanto concepción del mundo que produce una actividad práctica y una voluntad, en tanto filosofía convertida en movimiento cultural, religión, fe; Gramsci rompe resueltamente con una concepción de la ideología como ideología-ilusión o como simple sistema de ideas, para extender su dominio a todas las prácticas y actividades que el hombre realiza en el mundo en el que vive.

En este aspecto, es posible señalar una coincidencia con la mirada althusseriana, que afirma que

> las ideologías no son puras ilusiones sino cuerpos de representaciones existentes en determinadas instituciones y determinadas prácticas: figuran en la superestructura y están fundadas en la lucha de clases (Althusser, 1975, p. 120).

Lejos de constituir un mero reflejo ilusorio de las relaciones económicas, la ideología posee una eficacia específica, en tanto contribuye a organizar el modo en el cual los hombres se relacionan con otros hombres y el mundo en el que habitan. Tanto Gramsci como Althusser revalorizan así el concepto de ideología otorgándole un lugar estratégico en el terreno de la lucha de clases, y principalmente, resaltando la importancia de su materialidad, adscribiendo a una postura crítica de una concepción fenomenista de las ideologías y las superestructuras. [16]

En este sentido, la materialidad de la ideología es una de las piezas claves en la concepción de *aparatos ideológicos del Estado* que Althusser construye para dar cuenta de la especificidad del funcionamiento ideológico del Estado, el cual distingue del aparato de Estado asociado a su funcionamiento represivo. [17] [18] Los designan así a un "cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas" (Althusser, 2005, p. 24), pero que tienen en común el hecho de que funcionan masivamente con la ideología como forma predominante. Al interior de esta multiplicidad, esta investigación se

[16] Desde que Destutt de Tracy acuñó el concepto de ideología en las postrimerías del siglo XVIII con el objetivo de dar nombre a una "ciencia de las ideas", han convivido en tensión permanente una acepción "positiva" –que ubica su origen en la experiencia sensorial humana- con una "negativa" de la ideología –que le otorga un estatuto metafísico y la vincula con una "ilusión abstracta". La reconceptualización del término de la mano de Marx y Engels no permaneció ajena a esta tensión. Así, en la tradición marxista es posible identificar diversos significados asociados a la ideología, entre los que puede distinguirse una interpretación vinculada a la "falsa conciencia" en términos de distorsión y mistificación por un lado (acepción negativa), y a la productividad de la ideología en términos de ideas aporta al funcionamiento de la vida social, por el otro (acepción positiva). Para una revisión exhaustiva de las conceptualizaciones acerca de la ideología, ver: Eagleton (2005).

[17] Siguiendo a Buci-Glucksmann, la materialidad de la ideología puede rastrearse asimismo en el pensamiento de Gramsci, asociada al concepto de *aparato de hegemonía* como un conjunto complejo de instituciones, de ideologías, de prácticas y de agentes que encuentra su unificación en una expansión de clase. La noción de aparato de hegemonía –en profunda sintonía con el concepto de aparatos ideológicos del Estado acuñado por Althusser- supone que una hegemonía se constituye en y por la mediación de múltiples subsistemas, entre los que cuentan el aparato escolar, el aparato cultural, el aparato mediático, entre otros (Buci-Glucksmann, 1975).

[18] Al interior de la enumeración que hace Althusser, las prácticas reparatorias se sitúan en los aparatos ideológicos del Estado tanto político como jurídico, siendo este último considerado como perteneciente tanto al aparato represivo del Estado como al sistema de los AIE [aparatos ideológicos del Estado] (Althusser, 2005, p. 25).

sitúa en el terreno del aparato jurídico-político, en la medida en que su objeto de indagación contempla el conjunto de instituciones estatales asociadas a la formulación de las prácticas reparatorias.

De acuerdo a este señalamiento, las prácticas reparatorias se encuentran insertas en un campo afecto a disputas ideológicas, y son ellas mismas cristalización y efecto de estas disputas constitutivas de los aparatos ideológicos. En línea con una visión de Estado no monolítico, ello implica considerar en el análisis la multiplicidad de actores que forman parte de estas disputas, cuyas visiones del mundo chocan y entran en lucha, hasta que una de ellas logra imponerse sobre las demás, en un proceso que siguiendo a Gramsci supone la construcción de hegemonía. En este punto, esta diversidad obedece a una de las particularidades de los aparatos ideológicos del Estado, que se diferencian del aparato represivo del Estado en tanto

> … son múltiples, distintos, "relativamente autónomos" y susceptibles de ofrecer un campo objetivo a contradicciones que, bajo formas unas veces limitadas, otras extremas, expresan los efectos de los choques entre la lucha de clases capitalista y la lucha de clases proletarias, así como sus formas subordinadas (Althusser, 2005, p. 40).

La manifestación de una ideología en las prácticas reparatorias bajo análisis implica un proceso de construcción de hegemonía, el cual a su vez

> indica el paso claro de la estructura a la esfera de las sobrestructuras complejas; es la fase en la cual las ideologías antes germinadas se hacen "partido", chocan y entran en lucha, hasta que una sola de ellas, o por lo menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer e imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando, además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no ya en un plano corporativo, sino en un plano "universal", y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados (Gramsci, 2013, pp. 414-415).

La hegemonía de determinado grupo social cristaliza en la forma Estado que en tanto su sostén material, se encargará de presentar como naturales las relaciones de clase, y como universal su visión del mundo. Las ideas propias de la clase dominante lucharán por imponerse al conjunto social, y es esa disputa por la hegemonía –siempre en movimiento- con las ideas de los grupos sometidos la que cobra su expresión en el Estado. [19]

[19] "Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para

Finalmente, la relevancia que adquiere la tesis que reza que "la ideología tiene una existencia material" (Althusser, 2005, p. 47) no se agota en la existencia de su aparato, sino que tiene su correlato en la noción de práctica, entendida como la realización material de una ideología. La ideología abandona así definitivamente el terreno de la existencia ideal y espiritual para ubicarse en el ámbito de las prácticas materiales; parafraseando a Althusser, la ideología se inscribe en las prácticas reguladas por rituales definidos por los aparatos ideológicos del Estado. De este modo, "no hay práctica sino por y bajo una ideología" (Althusser, 2005, p. 51). Tal como se profundizará en el próximo capítulo, la concepción de *prácticas reparatorias* que ha organizado el nivel de análisis más general en el cual se desarrolla esta tesis, es tributaria de esta noción de práctica, en la medida en que permite observar el Estado *en acción* a través de las prácticas materiales que prescribe en relación a esta problemática.

En este marco, a partir del análisis de la multiplicidad de prácticas reparatorias que se han implementado entre los años 1983 y 2015, se ha delimitado un segundo nivel de análisis, en el cual la indagación se circunscribe a las prácticas indemnizatorias, por tratarse de las prácticas más extendidas y con mayor permanencia durante todo el período bajo estudio. Al acercar la lupa a este tipo particular de práctica, fue posible circunscribir el análisis al terreno de las representaciones que subyacen a las mismas. En consonancia con el desarrollo presentado, las representaciones se conciben como abordables de la ideología que encuentra su expresión en las prácticas indemnizatorias bajo análisis.

Antes de profundizar en torno a los aportes de la perspectiva de las representaciones para el análisis propuesto, tarea a la que estará dedicado el siguiente apartado, quisiera retomar un último punto vinculado a la concepción de ideología que resulta relevante para esta presentación. Si bien la lente construida para observar las prácticas reparatorias está dirigida predominantemente hacia el Estado, en tanto responsable de la formulación e implementación de las mismas, esta mirada no debe soslayar que la ideología sólo existe para los sujetos concretos, "no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos" (Althusser, 2005, p. 51). En este sentido, la ideología contenida en las prácticas reparatorias *alcanza* a todo aquel que es considerado como destinatario de las mismas. Este alcance conceptualizado en términos de *interpelación ideológica* conlleva entre sus

---

la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otras que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones dominantes concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas". (Marx, 1985, p. 50)

implicancias la constitución de los individuos concretos en sujetos, es decir, interviene en la conformación de su subjetividad, los *hace sujetos*.

El universo de destinatarios de las prácticas reparatorias es un universo múltiple y heterogéneo y no ha permanecido invariable a lo largo del tiempo. A la luz de la caracterización construida, fueron identificadas prácticas reparatorias que han estado dirigidas tanto al conjunto social como a las consideradas "víctimas directas". La fuerza y las características de la interpelación ideológica que opera es diferencial en ambos casos, tal como se profundizará en el capítulo 6, en el cual se presentarán a su vez las implicancias conceptuales en torno a la operación de interpelación ideológica. No obstante, quiero subrayar a los fines de esta argumentación, que al tratarse de prácticas realizadas desde el Estado, el alcance de esta interpelación se extiende a cada sujeto que forma parte de la sociedad concreta en la cual se sitúan las mismas. Si bien al momento de circunscribir la esfera de acción de cada práctica reparatoria, se definen destinatarios o beneficiarios de las mismas sobre quienes recae esta interpelación de una manera particular, ningún sujeto que forme parte de la sociedad queda por fuera de la misma: con distintos niveles, las prácticas reparatorias forma parte de la constitución como sujetos de todo aquel que forme parte de la sociedad en que la misma se inscribe.

Hasta el momento, se ha presentado el recorrido que ha llevado a conceptualizar las prácticas reparatorias como un modo de abordaje a la reparación de los crímenes de Estado en Argentina, concebidos a su vez como un genocidio reorganizador. Entre los aportes de esta mirada cuenta la posibilidad de iluminar la ideología que configura dichas prácticas reparatorias, ideología que como se ha mencionado se consideran cuerpos de representaciones que existen en determinadas instituciones y determinadas prácticas, y que contribuyen a organizar el modo en el cual los hombres se relacionan con otros hombres y el mundo en el que habitan. Desde esta perspectiva, el análisis de las representaciones que subyacen a estas prácticas reparatorias parece adecuado para cumplir los objetivos propuestos, lo que vuelve necesario una revisión de este concepto que será presentada en el próximo apartado.

3. Los aportes de la perspectiva de las representaciones

Un último interrogante que debió ser despejado en este camino, se vincula con cuál es la herramienta conceptual apropiada para dar cuenta de la reparación como un proceso situado a escala social, a la vez que orientado a la configuración o afianzamiento de determinado tipo de

vínculo social. Al momento de dar los primeros pasos en esta investigación, la estrategia de abordaje teórico-metodológica había propuesto indagar en las representaciones en tanto *representaciones sociales*. Desde ese punto de partida, en diversas instancias fui impulsada a abandonar el uso de este concepto por ser considerado problemático, y en su lugar, reemplazarlo por el de nociones, sentidos o narrativas. Es que si bien el concepto de *representaciones* es ampliamente utilizado en el campo de las ciencias sociales, pocas veces su uso se acompaña de una definición precisa, viendose así asociado a múltiples conceptos, tales como ideas, narrativas, memorias o discursos, los cuales incluso son empleados de manera indistinta. En este marco, me propongo realizar una aproximación teórica del concepto para reflexionar en torno a la pertinencia del mismo para un estudio de las representaciones de la reparación de los crímenes de Estado. Con este objetivo, se presentará una breve genealogía del concepto, previo a avanzar hacia las consideraciones metodológicas que sustentan la potencialidad de las representaciones como lente para la observación y estudio de la problemática a abordar en esta tesis. La concepción de las representaciones como abordables de la ideología que encuentra su expresión en las prácticas reparatorias, tal como ha sido presentada en el apartado precedente, es el punto de llegada de esta reflexión.

3. a) Representaciones: breve genealogía de un concepto

Desde la sociología clásica, es ineludible la pionera definición de Emile Durkheim, cuya obra puede considerarse como un vasto intento por explicar los fenómenos individuales por el estado de la sociedad en su conjunto, y no viceversa. Este autor acuñó el término de representaciones colectivas para referir a un fenómeno de origen social a través del cual la sociedad se explica y representa el mundo en el que vive. Muy tempranamente, en uno de los textos fundantes de la sociología, *Las reglas del método sociológico*, definió las representaciones colectivas como estados de la conciencia colectiva, que "traducen la manera en que el grupo se piensa en sus relaciones con los objetos que lo afectan" (1895, p. 17).

Partiendo de la analogía con las representaciones individuales que surgen de la vida mental del individuo, Durkheim entendía que las representaciones colectivas encuentran en la vida social su sustrato material, vida social que cuenta entre sus manifestaciones más características a las creencias y las prácticas religiosas, las reglas de la moral y los preceptos del derecho. Toda vez que lo social es irreductible a la suma de sus elementos individuales, las representaciones

colectivas no pueden explicarse partiendo de las representaciones individuales que las conforman. Así, en línea con su concepción de hecho social, postuló que las representaciones colectivas se caracterizan por ser exteriores respecto del individuo: no surgen de los individuos considerados aisladamente sino en su conjunto, y para conocerlas hay que distinguirlas de las conciencias individuales y comprenderlas como fenómenos sui generis que se desarrollan sobre la base de la asociación de los individuos.

En su ensayo *"Representaciones individuales y representaciones colectivas"*(1898), profundizó en la concepción de representaciones colectivas al postular que las mismas nacen de las relaciones sociales que se entablan entre individuos de tal modo combinados, o bien entre los grupos que estos individuos conforman, a la vez que pueden originarse tanto en el tiempo presente como ser heredadas por la colectividad de generaciones pasadas. Sin embargo, una vez establecidas, se desembarazan de las relaciones sociales que le dieron surgimiento, adquiriendo un carácter moral que las lleva a presentarse ante los individuos como obligatorias. Allí, Durkheim entiende las representaciones colectivas como la trama sobre la cual se desenvuelve la vida social, y advierte que las mismas varían según el modo en que los individuos se unifican en cada sociedad concreta. [20]

Esta concepción permeó todo el análisis de *Las formas elementales de la vida religiosa* (Durkheim, 1912), en donde se advierte la potencia del concepto de representaciones colectivas para el análisis sociológico. Allí continúa distinguiendo entre representaciones individuales y colectivas y da un paso más en la definición de estas últimas:

> Por sí mismas, las conciencias individuales son inaccesibles unas a otras; no pueden comunicarse más que por medio de signos que traducen sus estados interiores. Para que la relación que se establece entre ellas pueda arribar a una comunión, es necesario que los signos que las hacen manifiestas lleguen a fundirse en una sola y única resultante. Es la aparición de esta resultante la que advierte a los individuos que están al unísono y ella la que les hace tomar conciencia de su unidad moral. Es al lanzar un mismo grito, al pronunciar una misma palabra, al ejecutar un mismo gesto concerniente al mismo objeto que se ponen y se sienten de acuerdo (…) [Las representaciones colectivas] suponen que las conciencias actúen y reaccionen unas sobre otras; resultan de esas acciones y de estas reacciones que en si mismas no son posibles más que gracias a intermediaciones

[20] Estos modos en los que los individuos se unifican se relacionan con todo lo que constituye la base sobre la que se eleva la vida social, conformada por elementos tales como la disposición de los individuos en un territorio, la naturaleza y el número de vías de comunicación al interior de una sociedad determinada (Durkheim, 1898, p. 117).

> materiales. No se limitan entonces a revelar el estado mental al que se encuentran asociadas, sino que contribuyen a realizarlo (Durkheim, 1912, p. 256).

Dos elementos ya se vislumbran como centrales en esta definición. El primero, la materialidad de la representación, aspecto que se vincula con la materialidad de la ideología tal como ha sido abordado precedentemente. El segundo, la relación entre las representaciones y la acción, sobre lo cual se profundizará en el próximo apartado. [21]

Es posible postular que hay dos grandes caminos que se abren a partir de las lecturas a las que dieron lugar estas primeras intuiciones durkheimianas en relación con el proceso de construcción de las representaciones. El primero es aquel que llevará a la elaboración del concepto de *representación social,* con un fuerte anclaje en el ámbito de la psicología social pero que ha permeado a las ciencias sociales en general y a la sociología en particular. El segundo, sitúa las reflexiones de Durkheim en los orígenes de la sociología del conocimiento, campo de estudios cuya preocupación central es la comprensión de los modos en los cuales los hombres construyen determinados sistemas de pensamiento que les permiten conocer y explicarse el mundo en el que viven a partir de actuar en él.

Ambas derivas presentan puntos en común, pero diferenciarlas analíticamente permitirá precisar el concepto de representaciones con el cual se trabaja en la presente investigación. Se espera que ello también contribuya a despejar algunas de las inconsistencias teórico-metodológicas que suelen acompañar los trabajos desde el abordaje de las representaciones en el campo de la sociología.

En la génesis de la primera corriente se ubican los trabajos de Serge Moscovici, quien fue el primero en recuperar el "concepto olvidado" de Durkheim desde el campo de la psicología social, y situó la noción de representación social en el punto de intersección entre lo psicológico y lo social. Con este concepto –que suponía en la base de una psicología del conocimiento- designó a las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad que los circunda. Sobre la base de esta primera definición, Denise Jodelet señaló que las representaciones sociales son fenómenos que se presentan bajo las formas más variadas cuya particularidad reside en que constituyen una *forma de pensamiento social.* [22] Estas representaciones son sociales en la

[21] Para una revisión del pensamiento durkheimiano en relacion con las representaciones sociales, ver: Sidicaro (2000).

[22] Jodelet definió a las representaciones sociales como "imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo

medida en que son socialmente elaboradas pero también por el hecho de ser compartidas por individuos y grupos que mediante las mismas fijan su posición en relación con diversas situaciones o acontecimientos. [23] Así, todo el conocimiento "espontáneo", habitualmente denominado "de sentido común", pasa a ser concebido en términos de representaciones sociales.

La sociología del conocimiento, por su parte, recupera la importancia que Durkheim había otorgado a las representaciones en la vida y la mentalidad de los hombres, pero incorpora un elemento decisivo que había estado ausente en esa primera formulación. Si la sociología durkheimiana sienta las bases para la construcción de una teoría de las representaciones, no problematiza el modo en que las representaciones colectivas se relacionan con los conflictos sociales. Al suponer que las mismas son comunes a todos los integrantes del grupo social y se imponen a los invididuos con fuerza constrictiva, impide ver que éstas no necesariamente son compartidas por todos los miembros de una sociedad. Por el contrario, en cada sociedad concreta pueden corroborarse diversos modos de pensar y representarse el mundo de acuerdo al lugar que los individuos y grupos ocupan al interior de la misma. [24]

Este hecho fue claramente advertido por Karl Marx, quien a diferencia de Durkheim, situó el proceso de construcción de representaciones en el marco de la relación entre las formas de pensamiento y la actividad colectiva de la cual los grupos sociales participan:

> La producción de las ideas y representaciones de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan, todavía aquí, como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc de un

---

que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones son todo ello junto" (1986, p. 472). En la misma línea: "Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida, etc." (1986, p. 473).

[23] Desde su perspectiva, las representaciones sociales "constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal (…) La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interaccion con el mundo y los demás. (Jodelet, 1986)

[24] Quien sistematizó la perspectiva de la sociología del conocimiento fue Karl Mannheim, poniendo de relieve el elemento de conflicto existente entre diversas concepciones del mundo pertenecientes a diversos "grupos sociales". Para profundizar, ver: Mannheim (1993).

> pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. (Marx, 1985, pp. 25-26)

Las representaciones son concebidas como expresiones colectivas a través de las cuales los hombres toman conciencia -de diversos modos y en distintos grados- de las relaciones que se entablan en su vida social, ya sean estas solidarias como antagónicas. Así entendidas, son manifestaciones de determinadas concepciones del mundo que corresponden a la estructura de clases de una formación social particular. [25] Siguiendo esta línea de razonamiento, las representaciones deben situarse en el entramado de relaciones sociales en las cuales éstas tienen lugar, lo que permite arriesgar la hipótesis de que una mirada hacia las mismas es una manera de adentrarse en la comprensión de la sociedad en la cual éstas se manifiestan. En este punto reside la relevancia del concepto para esta tesis, en tanto al estudiar las representaciones en torno a la reparación expresadas en las prácticas reparatorias es posible avizorar cuál es el tipo de vínculo social que llevan implícito estas prácticas.

En este punto, la obra de Jean Piaget brinda elementos de suma importancia para profundizar en esta hipótesis, ya que la misma constituye una contribución decisiva en cuanto a la vinculación de las representaciones colectivas con el carácter de las relaciones sociales fundamentales de cada sociedad concreta. Si bien su vasto caudal de investigación experimental estuvo orientada principalmente a desentrañar las estructuras que subyacen al desarrollo cognitivo de los sujetos individuales en el campo de la psicogénesis, éstas constituyeron la base empírica a partir de la cual formuló su epistemología genética. Ello le permitió trascender esta perspectiva a escala social, y situar el proceso de construcción de representaciones en el marco general de interdependencia entre los factores psicogenéticos y sociogenéticos, tal como se profundizará en el próximo apartado.

[25] "En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de produccion que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de produccion constituye la estructura economica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de produccion de la vida material determina el proceso social, politico e intelecutal de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia". (Marx, 2005a, pp. 4-5).

3. b) Los aportes de la perspectiva piagetiana para el estudio de las representaciones de la reparación

Entre las consideraciones acerca del proceso de construcción de representaciones que propone la perspectiva de Jean Piaget, hay dos que revisten especial importancia para esta investigación.

En primer lugar, este proceso es concebido como una actividad intelectual y como tal, integradora de aspectos biológicos, aspectos mentales o psicológicos, y aspectos sociales, que tiene lugar en la interrelación social. Una de sus particularidades es la consideración acerca de la construcción de conocimiento sobre lo real como un proceso de carácter secuencial, es decir, que se reestructura por etapas sucesivas en un proceso dialéctico, cuyo punto de partida es la acción del sujeto sobre el mundo que lo rodea. Este elemento constituye un aporte significativo para desentrañar la relación entre las representaciones y la acción, que había sido mencionada en el apartado precedente y cuya indagación se encontraba pendiente.

Un segundo postulado de relevancia señala que el proceso representativo debe situarse al interior de una formación histórico social concreta, de la cual depende que determinadas relaciones sociales sean propiciadas y otras obturadas, tanto al nivel de las interrelaciones interpersonales (como las que entabla un niño pequeño con sus padres) como de las relaciones intergrupales (de clase, políticas, económicas, culturales, etc.). Al abrir la posibilidad de profundizar en la vinculación entre las representaciones construidas y las relaciones sociales fundamentales al interior de la sociedad en la cual tienen lugar las prácticas reparatorias, este señalamiento resulta decisivo para esta investigación.

En las próximas páginas serán presentadas las implicancias del primero de estos postulados para el análisis propuesto, quedando el segundo de ellos reservado para el apartado final del capítulo, en el cual se abordará la vinculación entre las prácticas reparatorias del genocidio y las relaciones sociales fundamentales de la sociedad en que las mismas se sitúan.

Antes de ello, quiero formular un señalamiento que permita enmarcar la propuesta de Piaget en el ámbito de esta tesis. Tal como se ha mencionado, muchas de las conclusiones a las que llega Piaget se desprenden de investigaciones realizadas con el objetivo de comprender cómo se construyen las representaciones en el plano de la psicogénesis, que han servido de base a su epistemología genética. Desde este punto de partida, la preocupación por considerar individuo y sociedad como dos aspectos indisociables en este desarrollo atravesó toda su obra, y lo llevó a postular la existencia de una analogía entre el desarrollo cognitivo psicogenético y la

sociogénesis histórica del conocimiento humano. [26] Esta analogía no implica una similitud de contenidos, ni habilita el traspaso de categorías construidas para un nivel de análisis individual hacia un análisis situado a escala social. Por el contrario, se trata de una analogía de los instrumentos y procesos que intervienen en su génesis y desarrollo, que permite resinstalar en una escala de tipo social los procesos y mecanismos empleados en el proceso de construcción de conocimiento del mundo circundante: sin *ser lo mismo*, es posible encontrar un isomorfismo entre las representaciones individuales y los procesos sociales que las configuran y reproducen al nivel de los agrupamientos humanos. [27]

Esta investigación comparte con en el campo de la sociogénesis la pregunta por las significaciones atribuidas por parte de un grupo social –cristalizado de un modo específico en el Estado- a un fenómeno en particular –en este caso, la reparación del genocidio. Desde esta perspectiva, una mirada hacia las representaciones de la reparación parece una vía fructífera para esbozar una respuesta a los interrogantes que le sirven de guía. Dado que los capítulos 5, 6 y 7 estarán abocados al análisis del contenido de estas representaciones -entendidas como manifestación de la ideología contenida en las prácticas reparatorias-, en este apartado los esfuerzos estarán dirigidos a dilucidar algunas cuestiones en torno a su forma y funcionamiento, que como se verá a continuación, nutren a su vez su contenido.

Para comenzar, vale recordar que la acción es el elemento clave para el estudio del proceso representativo. No obstante, Piaget distingue entre la acción y el conocimiento de la misma. En primer lugar, la acción de un sujeto precede a su conocimiento; para que este último tenga lugar, es necesario un proceso de reconstrucción conceptual sobre las acciones realizadas. Este proceso no implica el descubrimiento de algo que se encontraba "dentro del sujeto", al que se accede repentinamente a modo de iluminación. Por el contrario, implica reconstrucciones en el plano de la representación de aquellas acciones efectivamente realizadas por el sujeto en el mundo que habita, que sea posible reconstruir en la conciencia aquello que hasta el momento se había

[26] En palabras de Piaget, la epistemología genética "estudia el aumento de los conocimientos en el doble plano de su formación psicológica y de su evolución histórica, depende tanto de la sociología como de la psicología, y no se puede decir que la sociogénesis de los diversos modos de conocimiento tenga ni mayor ni menor importancia que su psicogénesis, pues se trata de dos aspectos indisociables de toda formación real. Desde este punto de vista hay que discutir sobre todo dos cuestiones, porque de su solución depende en definitiva toda la epistemología genética: las relaciones entre la sociogénesis y la psicogénesis en la formación de las nociones del niño en el curso de su socialización y la de las mismas nociones en la elaboración de las nociones científicas y filosóficas que se han sucedido en la historia (Piaget, 1986, p. 25)

[27] Para profundizar en el campo investigativo que analiza la interrelación entre la psicogénesis y la sociogénesis del conocimiento humano, ver: Elías (2016), Piaget & García (1989), Muleras (2008).

realizado de manera práctica. Por lo tanto, es la reflexión sobre la propia práctica lo que desencadena el proceso de construcción de representaciones. El mismo involucra tanto la toma de conciencia, que consiste en la interiorización bajo la forma de representaciones, de las acciones materiales que el sujeto realiza en el medio que lo rodea, como la toma de conocimiento de las consecuencias que esas acciones producen en el mundo en el que actúa. [28]

Si explicar la construcción de representaciones implica remontarse a la acción y el proceso de toma de conciencia de la misma, habrá que indagar en el terreno de las relaciones sociales si se quiere comprender los tipos de representaciones colectivas. Para desentrañar estas representaciones que son producto de la vida social, la mirada no debe ya dirigirse al individuo, ni al conjunto de individuos entendido como su mera sumatoria, sino a las relaciones sociales, que como se ha adelantado y se profundizará hacia el final de este apartado, existen entre los extremos del constreñimiento y la cooperación.

Esta tarea consiste en ligar el pensamiento a la acción, pero no ya la acción individual, sino las acciones que son ejecutadas colectivamente: acciones en común realizadas en el mundo por grupos sociales para la transformación de determinado medio material, acciones concretas que se prolongan en representaciones colectivas. En este sentido, "la superestructura social es a la infraestructura lo que la conciencia del hombre individual es a su conducta" (Piaget, 1986, p. 86). Este señalamiento inscribe la construcción de representaciones en la relación dialéctica entre estructura y superestructura, y permite vincular la producción de ideas y representaciones con las actividades materiales que los sujetos realizan en el mundo para transformarlo, de acuerdo a la formación social en la que éstas tienen lugar:

> Al ligar estrechamente el pensamiento a la acción, la sociología de la misma manera que la psicología y casi con la única diferencia de que en aquel caso se trata de representaciones colectivas y de conductas ejecutadas en común introduce, más pronto que tarde, en los modos de pensamiento comunes o diferenciados que pretende explicar,

[28] Piaget define la toma de conciencia, como un mecanismo que "… aparece en todos esos aspectos como un proceso de conceptualización, que reconstruye y luego sobrepasa, en el plano de semiotización y de la representación, lo que se había adquirido en el de los esquemas de acción. En tal perspectiva, no hay, pues, diferencia de naturaleza entre la toma de conciencia de la acción propia y la toma de conocimiento de las secuencias exteriores al sujeto, implicando las dos una elaboración gradual de nociones a partir de un dato, éste consiste en aspectos materiales de la acción ejecutada por el sujeto o de las acciones que se efectúan entre los objetos" (Piaget, 1985, pp. 263-264). Tanto la complejidad de los procesos involucrados en la toma de conciencia como principalmente, la distinción entre la acción y el conocimiento de la misma presentan una evidente vinculación con la conceptualización relativa a la conciencia de clase desarrollada en la obra de Marx.

> una distinción análoga a la que se puede hacer, en el dominio individual, entre el pensamiento egocéntrico o subjetivo y el pensamiento descentrado u objetivo: reconocerá en ciertas formas de pensamiento el reflejo de las preocupaciones del grupo restringido al que pertenece el individuo, ya se trate del sociomorfismo descrito en las representaciones colectivas de las clases primitivas o del sociomorfismo nacional o de clase, cada vez más refinado y disfrazado, que se encuentra en las ideologías y las metafísicas; por el contrario, en otras formas de pensamiento la sociología discernirá la posibilidad de universalización de las operaciones en juego, como es el caso del pensamiento científico (Piaget, 1986, p. 29).

La caracterización de las formas colectivas de pensamiento como sociocéntricas supone que las representaciones colectivas son siempre relativas a un grupo social particular. Están centradas en las aspiraciones y conflictos propios de la vida social de determinados grupos al interior de una situación histórica y social concreta; expresan el modo en que dichos grupos se representan a sí mismos y al mundo que los rodea. En este marco, la ideología, en tanto expresión conceptualizada de las creencias y valores de un grupo, configura un simbolismo sociocéntrico, que corresponde a los grupos constituidos por las clases sociales con sus intereses, y que de acuerdo a la argumentación presentada, la forma Estado condensa y materializa de un modo particular, como resultado de una disputa entre diversas representaciones colectivas existentes al interior de una sociedad concreta.

La concepción de *prácticas reparatorias* construida para el estudio de las medidas tendientes a la reparación del genocidio es heredera de estas apreciaciones, en la medida en que coloca en el centro del análisis las acciones que conforman esas prácticas efectivamente realizadas para llevar a cabo la reparación. Al hablar entonces de representaciones, se hace referencia a las expresiones de diversos contenidos de significación que se construyen acerca de la reparación a partir de las prácticas reparatorias. Si bien las representaciones encuentran en dichas prácticas el punto de partida para su construcción, esta construcción se concibe con carácter dialéctico, dado que en el proceso de interrelación se van construyendo unas y otras. Particularmente en los capítulos 3 y 4, en los cuales se presenta el devenir y desarrollo de las prácticas reparatorias, podrá observarse el carácter secuencial de este proceso, en la medida en que nuevas prácticas se van construyendo a partir de transformar y reorganizar lo construido previamente: las prácticas reparatorias y sus representaciones se transforman al igual que la acción y el pensamiento, a lo largo de sucesivas equilibraciones.

Las prácticas reparatorias pueden ser concebidas como la manifestación de un estado de equilibrio al interior de este proceso, equilibrio que es traducido en un conjunto de normas que confieren derechos e imponen obligaciones a la sociedad toda. [29] En el próximo aparatado se presentarán algunas reflexiones que permiten vincular la problemática de la reparación con la noción de equilibrio social. Por el momento, vale decir que este equilibrio no es espontáneo, sino que involucra un elemento de regulación de las relaciones sociales del cual se deriva un tipo de intervención sobre la realidad. Y en este punto, vale introducir el segundo elemento de la epistemología genética que se ha postulado como relevante para esta investigación: aquel que permite vincular las representaciones con los tipos fundamentales de relaciones sociales existentes al interior de una sociedad particular.

4. Reparación del genocidio y relaciones sociales

A la luz del desarrollo presentado, es posible finalizar este recorrido abordando un último interrogante que será recuperado de manera exploratoria en esta investigación y que plantea la pregunta en torno a qué vinculación es posible establecer entre la reparación del genocidio y las relaciones sociales hegemónicas de la sociedad en que se desarrollan las prácticas reparatorias.

En el primer apartado de este capítulo se ha mencionado que a partir de sus investigaciones, Jean Piaget ha distinguido entre las relaciones sociales de heteronomía y de autonomía como los dos tipos fundamentales de relaciones sociales existentes al interior de toda sociedad, y que esta distinción ha permitido iluminar las transformaciones producidas por el genocidio reorganizador perpetrado en Argentina. Para llegar a esta conclusión, Piaget dedicó parte fundamental de su obra a analizar el desarrollo psicogenético de los niños, con el objetivo de evidenciar cómo y bajo qué condiciones se construyen estas relaciones sociales.

En este sentido, Piaget analizó la construcción de las reglas del juego en los niños para dar cuenta del modo en que las relaciones sociales se traducen en la construcción de órdenes normativos, entendidos como sistemas de normas que regulan la práctica y permiten la comprensión de la

[29] Esta noción de equilibrio no debe entenderse en términos de armonía, sino que es heredera del mecanismo que Piaget denominó como *proceso de equilibración* para dar cuenta de una modalidad de construcción de conocimiento al nivel de las estructuras cognitivas de los sujetos. Desde esta perspectiva, el equilibrio alude a un mecanismo de construcción que conduce de "ciertos estados de equilibrio aproximado a otros, cualitativamente diferentes, pasando por múltiples desequilibrios y reequilibraciones" (Piaget, 1990, p. 5). El equilibrio no constituye desde esta perspectiva una forma estática ni armónica, sino que implica un proceso permanente de construcción y superación de las formas de equilibrio anteriores, mediante equilibraciones maximizadoras de las formas precedentes de equilibrios.

realidad existente. A partir de allí, identificó que en las etapas primarias de desarrollo, las representaciones en el niño tienen una lógica autocentrada: el egocentrismo es la clave para comprender la confusión entre el pensamiento propio y el de los demás. El niño ignora que su punto de vista es subjetivo, se cree en el centro del mundo, y dado que no puede distinguir entre el mundo exterior a sí mismo de su mundo interno, no puede diferenciar el orden de las cosas que se producen en el universo de su propia acción en el mismo.

En este estadio, el niño recibe de sus padres las reglas morales elaboradas previamente, y las respeta por obligación, como una extensión del respeto que siente por ellos. Este respeto por las reglas que se presentan como coercitivas y exteriores al individuo, es un respeto unilateral, basado en la autoridad y el prestigio, producto de las relaciones de presión de los adultos sobre los niños. Las relaciones de heteronomía que priman en este estadio están basadas en la asimetría generacional entre el niño y los adultos que lo rodean.

Progresivamente, las formas autocentradas de representación del mundo van dando lugar a formas descentradas de representación, a medida que se construye la existencia de un yo diferenciado y la delimitación entre un mundo exterior y uno subjetivo, vinculado con la adquisición de la conciencia por parte del niño. A través del proceso de socialización, a medida que el niño entabla relaciones con sus pares, el descentramiento le permitirá distinguir su punto de vista del de los adultos, para lo que será fundamental que el niño tenga oportunidad de confrontar su propio pensamiento con el de los demás. [30] En este proceso de toma de conciencia, se produce de manera simultánea el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento de la existencia de un otro: el predominio de una lógica descentrada conlleva este doble reconocimiento que no sólo se asocia con el funcionamiento del pensar sino principalmente, se relaciona con la posibilidad de incidir, de intervenir sobre la realidad, y con la posibilidad de identificar los efectos que producen las propias acciones sobre los hechos de la realidad. En el vínculo con otros se abre entonces la posibilidad para el niño de tomar conciencia de que él no es el centro del mundo, sino por el contrario, que habita un mundo rodeado de muchos otros, y que este mundo incluso es susceptible de ser transformado si orienta su acción hacia ello.

A su vez, a medida que va interiorizando las normas, el respeto por las mismas comienza a

[30] La importancia de la confrontación en el proceso de la toma de conciencia es señalada por Piaget en los siguientes términos: "Muy probablemente, a la adquisición de conciencia de su propio pensamiento que tiene el niño (...) Esta adquisición de conciencia está bajo la dependencia de factores sociales, como hemos intentado demostrar: el contacto con otro y la práctica de la discusión fuerzan al espíritu a adquirir conciencia de su subjetividad y a notar de este modo los procesos del pensamiento propio" (Piaget, 1978, p. 83).

presentarse como el resultado de una libre decisión. Las relaciones de cooperación, propias de los vínculos que se establecen entre pares, transforman el fundamento del respeto a la norma, que ya no reside en la imposición externa proveniente de los adultos, sino en el consentimiento mutuo, construido a partir del intercambio entre individuos iguales. De esta manera, a la preeminencia de relaciones sociales de heteronomía suceden relaciones sociales de mayor autonomía. Hay que considerar sin embargo, que la superación de las etapas primarias del desarrollo psicogenético no está "garantizada": si bien se podría suponer que en la vida adulta esta sucesión de etapas ha concluido, puede ocurrir que el desarrollo de algún ámbito específico se detenga en las fases primarias de la sucesión. [31]

De este desarrollo se desprenden varias cuestiones relevantes para esta investigación.

En primer lugar, si la construcción de reglas -tanto a nivel de la práctica como de la conciencia de la misma- resulta diferencial según éstas se construyan en el seno de relaciones sociales asimétricas, o por el contrario, en el marco de relaciones sociales de equidad y reciprocidad propias de vínculos cooperativos, la dimensión normativa de las prácticas reparatorias resulta una buena vía de entrada para la comprensión de las relaciones sociales hegemónicas al interior de la sociedad en que las mismas se sitúan.

Así como el proceso de descentramiento libra al niño de su egocentrismo mediante la toma de consciencia, es posible establecer una analogía con el desarrollo histórico de las formaciones sociales. En este sentido, Piaget postuló que habrá sociedades en las que predominen las relaciones sociales asimétricas, propias de vínculos de presión y constreñimiento, y otras en las que primen relaciones sociales de solidaridad y reciprocidad. Desde una perspectiva sociogenética, es posible identificar en este desarrollo histórico un proceso que va desde las sociedades primarias -sociedades poco desarrolladas- a sociedades complejas interdependientes con una creciente división del trabajo que contribuiría al establecimiento de los vínculos cooperativos.

Sin embargo, de igual modo que la evolución de los estadios de desarrollo psicogenético no está determinada de antemano, puede ocurrir que las relaciones sociales predominantes en el seno de

[31] En este sentido, profundiza Piaget: "no existen estadios globales que definan el conjunto de la vida psicológica de un sujeto en un momento determinado de su evolución: los estadios deben concebirse como las fases sucesivas de procesos regulares, que se reproducen como ritmos, en los terrenos superpuestos del comportamiento y la conciencia. No podemos hablar de estadios globales caracterizados por la autonomía o la heteronomía, sino solo de fases de heteronomía y de autonomía que definen un proceso que se repite para cada nuevo conjunto de reglas o cada nuevo plan de conciencia o de reflexión" (1984, p. 71).

una sociedad contemporánea no se correspondan con vínculos sociales de autonomía. En las sociedades en las que predominen las relaciones de clase en tanto formaciones sociales capitalistas, será posible identificar la presencia de elementos afines al establecimiento de relaciones sociales de carácter heterónomo, fundadas no ya en una asimetría generacional, sino en una asimetría de clase. Las formas de heteronomía que adquieren estas relaciones sociales requieren ser exploradas, en articulación con las formas de autonomía que también se encuentran presentes en esta configuración particular y compleja de vínculos sociales propios de las sociedades capitalistas modernas.

Y ahora bien, ¿por qué importa explorar el carácter de las relaciones sociales fundamentales de una sociedad sobre la que se ha perpetrado un genocidio para comprender sus prácticas reparatorias?

Para transformar las relaciones sociales imperantes al interior de una sociedad determinada, el genocidio ha producido una ruptura de los vínculos sociales, que tal como se ha venido insistiendo, comenzaban a manifestarse progresivamente hacia una mayor autonomía. Este quiebre implicó un profundo trastocamiento en el modo en que eran reguladas las interacciones sociales al interior de la sociedad de entonces: las respuestas a qué era lo deseable, qué era lo esperable, qué era lo justo y lo injusto, debieron ser repensadas a la luz de un nuevo orden normativo, que emanaba de las relaciones sociales que habían intentado ser impuestas genocidio mediante. En este sentido, el genocidio ha producido una ruptura del equilibrio social, y por lo tanto, la reparación puede pensarse como una respuesta construida para su restablecimiento, con miras a la reconstrucción del lazo social que el genocidio ha vulnerado.

Ahora bien, no hay un único modo de reconstruir ese equilibrio. Desde una perspectiva psicogenética,

> tanto en el niño como en el adulto, existen dos tipos psicológicos de equilibrio social: un tipo basado en la presión de la edad, que excluye la igualdad y la solidaridad orgánica, pero que canaliza sin excluirlo el egocentrismo individual, y un tipo basado en la cooperación, basado en la igualdad y la solidaridad (Piaget, 1984, p. 268).

De igual manera, las prácticas reparatorias se articularán con distintos modos de reconstruir el equilibrio, y en esta reconstrucción se conjugarán elementos orientados a la recomposición de los vínculos sociales de autonomía que el genocidio se propuso destruir, así como elementos que promuevan la reconstrucción de un nuevo tipo de equilibrio, en el cual intervendrán distintas formas de autonomía así como distintas formas de heteronomía.

En este marco, explorar cuál es el tipo de equilibrio al cual se encuentran orientadas las prácticas reparatorias –es decir, qué elementos de las prácticas reparatorias son afines a qué tipos de autonomía y a qué tipos de heteronomía- será crucial para articular las mismas con diversos modos de elaboración del genocidio. En el apartado inicial de este capítulo, se ha mencionado que las representaciones construidas sobre el genocidio pueden vincularse con modos de comprender el aniquilamiento que habiliten ya sea la apropiación o bien la ajenización de esa experiencia. En este último caso, la ajenización implica que la sociedad sobreviviente al genocidio se mantiene extraña, ajena a su propia historia: no puede reconocerse a sí misma en el proceso atravesado, sino que lo explica como algo que sucedió a *otros*, y por lo tanto no puede dar cuenta de lo que fue aniquilado como parte de la propia identidad individual y colectiva. La potencialidad de los procesos de apropiación reside por el contrario en la construcción de herramientas que permitan el reconocimiento de sí mismos en la experiencia represiva, así como en las identidades arrasadas por el genocidio.

Y en este punto, se ha visto con Piaget que el reconocimiento de sí mismo y reconocimiento del otro como par, son dos procesos que se identifican en el pasaje de la heteronomía hacia la autonomía, que requieren del establecimiento de relaciones de paridad. Y aquí es donde se puede advertir la huella de las relaciones sociales en la configuración de las prácticas reparatorias. Es allí, en el carácter de las relaciones sociales fundamentales de la sociedad, donde germina la posibilidad de que las prácticas reparatorias se orienten hacia la apropiación o a la ajenización del genocidio. A riesgo de caer en una simplificación, dado que estos procesos no ocurren de manera binaria sino que involucran un amplio abanico de gradientes y matices, puede decirse que mientras que en una sociedad en la cual la heteronomía sea el vínculo social hegemónico, es esperable que la reparación tienda a un equilibrio signado por la ajenización de la experiencia genocida, en una sociedad en la que primen las relaciones de paridad, resultará más plausible la posibilidad de apropiarse de lo sucedido.

Claro que esta correspondencia no es lineal, sino que por el contrario, se construye al calor de procesos de disputas ideológicas que cristalizan en determinado momento histórico, en un conjunto de prácticas reparatorias como las que esta tesis analiza. Con el objetivo de desentrañar aunque más no sea de modo exploratorio esta vinculación entre el carácter de las relaciones sociales y las prácticas reparatorias que las mismas habilitan, se ha organizado la investigación en dos niveles de análisis, que se presentarán a continuación.

5. Fuentes analizadas y construcción del corpus

Con el objetivo de conocer cuáles fueron los modos de reparación implementados por el Estado en Argentina durante el período democrático, el punto de partida de esta investigación fue el relevamiento de la totalidad de las políticas estatales de alcance nacional orientadas a la reparación sancionadas entre 1983 y 2015, posteriormente conceptualizadas en tanto prácticas reparatorias. En este primer momento, que definió el primer nivel de análisis más general en el que transita esta tesis, la estrategia del trabajo de campo consistió en el relevamiento de materiales documentales mediante la técnica del análisis documental (Valles, 2000).

Estos materiales configuraron un corpus documental integrado por un total de 155 documentos entre los que cuentan leyes, decretos presidenciales reglamentarios y de necesidad y urgencia, así como resoluciones ministeriales de relevancia. [32] Sobre este corpus documental se realizó el análisis y categorización de la multiplicidad de prácticas reparatorias, que permitieron la construcción de la periodización que se presenta en el capítulo 3 de esta tesis. En este sentido, para dar cuenta tanto del contexto de emergencia así como de los principales debates propiciados en torno de estas prácticas reparatorias, fue necesario acompañar el análisis de estas fuentes con informes y documentos emitidos por dependencias estatales, y en menor medida discursos presidenciales y sentencias judiciales. Asimismo, recurrí a entrevistas disponibles en el Archivo Oral de Memoria Abierta realizadas a funcionarios públicos que hubieran revistado funciones en las dependencias encargadas de la formulación e implementación de las políticas estatales tendientes a la reparación en el período bajo análisis, así como al Archivo documental disponible en dicha organización. [33]

Un primer análisis sobre este corpus documental permitió identificar la relevancia de un tipo particular de práctica reparatoria al interior de este universo inicial: las prácticas indemnizatorias, aquellas caracterizadas por el otorgamiento de una suma de dinero como medio de efectivizar la reparación. Este hallazgo delimitó el segundo nivel de análisis de la investigación, cuya

[32] La totalidad de instrumentos que conforman este corpus documental puede ser consultado en el Anexo 1.

[33] Memoria Abierta es una asociación civil constituida por una alianza de ocho organizaciones no gubernamentales de derechos humanos creada en 1999 para promover acciones a favor de la memoria sobre lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura militar. Los organismos que la conforman son: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria Asociación Civil, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.

emergencia devino de la ponderación de las *prácticas indemnizatorias* para la comprensión de la reparación, no sólo por su alcance y permanencia a lo largo del tiempo, sino también porque el Estado ha mantenido institucionalmente la denominación de "*Leyes Reparatorias*" para hacer referencia exclusivamente a estas medidas, entre el amplio abanico de prácticas implementadas. En un segundo momento, la investigación se circunscribe entonces al estudio de las prácticas indemnizatorias para abordar los interrogantes planteados en relación a las representaciones acerca de la reparación.

Ello permitió profundizar en el análisis de las representaciones que habían emergido de las primeras fuentes documentales relevadas: en primer lugar, las implicancias de las representaciones del dinero como instrumento de la reparación; a continuación, las representaciones acerca del daño que las prácticas indemnizatorias se proponen reparar; finalmente las representaciones sobre las víctimas de la reparación. Para este segundo nivel de análisis se ha construido un corpus documental heterogéneo compuesto no sólo por la legislación correspondiente, sino que fue ampliado para incluir la totalidad de los debates parlamentarios involucrados en la sanción de estas leyes, documentos producidos en diversas instancias de la Administración Pública Nacional (APN), material de prensa de los organismos de derechos humanos y por último, una serie de entrevistas realizadas a informantes clave. Estas últimas fueron particularmente enriquecedoras para esta investigación, en la medida en que permitieron el acceso a documentos internos y brindaron información relativa al funcionamiento del circuito de las leyes reparatorias al interior de diversas dependenciales estatales en las cuales se tramitan, fundamentales para la comprensión de las mismas en tanto prácticas reparatorias.

El análisis de las prácticas indemnizatorias estuvo atravesado por la falta de información oficial respecto a la implementación de las indemnizaciones. Con el objetivo de superar este escollo metodológico, se ha construido una base de datos compuesta por el listado completo de resoluciones emanadas del área en la cual tramitan las leyes reparatorias durante el período 2000-2015. Esta base de datos comprende más de 10.000 registros e incluye la información pública relativa a la actuación del Ministerio de de Justicia y Derechos Humanos, en cuya órbita se han implementado las leyes reparatorias durante el período referido. Las particularidades acerca de la información que contiene este listado de resoluciones así como los criterios para la construcción de la base de datos se presentarán en el capítulo 4.

En cuanto al recorte temporal realizado, su fecha de inicio obedece a la finalización de la dictadura militar y el retorno del gobierno democrático. En este sentido, vale aclarar que si bien el nacimiento de las prácticas indemnizatorias en tanto objeto específico a abordar en esta tesis data del año 1986, al iniciar la indagación en el año 1983 es posible situar su emergencia en el marco más general que lo contiene, constituido por el conjunto de prácticas reparatorias implementadas con el objetivo de reparar los crímenes de Estado durante todo el período posdictadura. Por otra parte, el cambio de signo político del gobierno que tuvo lugar a fines del año 2015 fue el criterio que marcó el límite hasta el cual se extendió la indagación. Como se desarrollará en el capítulo 3, las políticas de memoria, justicia y reparación fueron uno de los pilares sobre los cuales la fuerza política que emergió tras la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 –el kirchnerismo- fundó su legitimidad, y uno de los ejes centrales en las políticas de estado asumidas por los sucesivos gobiernos kirchneristas entre los años 2003 y 2015. Durante estos años, se han cimentado una serie de consensos sociales acerca del pasado dictatorial, que fueron uno de los blancos privilegiados de las disputas de sentidos que se desplegaron con el triunfo de la Alianza Cambiemos en 2015.

Presentada esta disputa en el marco de la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo, el gobierno encabezado por Mauricio Macri marcó una distancia explícita respecto de sus antecesores en el terreno de los derechos humanos y la memoria. Entre las estrategias puestas en juego para este distanciamiento se destacan el cuestionamiento a las estimaciones del número de desaparecidos, la necesidad de construir una "memoria completa" que le diera voz a las "víctimas de la subversión", la condena a la "violencia terrorista", y la asociación de la lucha de los organismos de derechos humanos a la idea de corrupción, entre otros (Feierstein, 2018). Sin embargo, la ofensiva por la conquista de los sentidos construidos en torno de los crímenes de Estado perpetrados durante los años 70 no obedeció exclusivamente a esta necesidad de diferenciación respecto de su adversario político: la "deskirchnerización" también implicaba una vuelta al modelo de acumulación neoliberal y el modelo de Estado de la década del 90. Consecuentemente, las transformaciones estructurales promovidas durante estos años estuvieron acompañadas de un desmantelamiento sistemático de las áreas encargadas de la implementación de políticas tendientes a la reparación del genocidio, el vaciamiento de contenidos y el retiro de financiación a través de la subejecución presupuestaria (Taboada, 2017).

La hipótesis que emerge de estas apreciaciones indica que durante el período 2015-2019, las prácticas reparatorias se han posicionado como una arena privilegiada en la lucha por definir los significados de lo político y de lo estatal, disputa que ha cristalizado en novedosas representaciones en torno del genocidio y su reparación. De esta manera, se intentó transformar los ejes centrales de un universo de sentidos que se había construido durante más de 30 años de gobiernos constitucionales, y que conformaron un piso básico de consenso acerca de la experiencia atravesada contra el que apuntaron las políticas desplegadas a partir del año 2015. El análisis pormenorizado de este período que permita dar cuenta de las implicancias de estas transformaciones queda en el saldo de lo pendiente que deja esta investigación. El abordaje del período 1983-2015 permitirá dar cuenta de la conformación de un universo de sentidos que con rupturas y discontinuidades se ha ido construyendo durante esos años, y que será sin dudas retomado para comprender las transformaciones de las que ha sido objeto con posterioridad, que por el momento, sólo pueden intuirse como significativas.

Capítulo 2

Reparar lo irreparable.

De la justicia transicional a las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado

Las preocupaciones acerca de la reparación en Argentina que han motorizado esta investigación deben inscribirse en una discusión que trasciende el caso argentino y que ha cobrado un impulso sin precedentes como consecuencia de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial: la problemática de la reparación de los actos criminales ejercidos por representantes del Estado contra su propia población, entendidos como crímenes de Estado (Chambliss, 1989). En el marco de la configuración de un régimen de derechos humanos en la sociedad internacional que conllevó la consolidación de la reparación como un derecho, se construyeron progresivamente diversos abordajes tendientes a precisar el alcance de la reparación. En las últimas décadas, estos abordajes confluyeron en la perspectiva de la *justicia transicional*, la cual ha hegemonizado los desarrollos relativos al emergente campo de las reparaciones.

Este capítulo se propone como un ejercicio crítico sobre el conjunto de estas perspectivas a partir del andamiaje conceptual construido en el capítulo previo. Particularmente, realiza una revisión de los principales postulados de la perspectiva de la justicia transicional, en la medida en que la misma se ha posicionado como la perspectiva dominante para pensar y concebir la reparación. En línea con el abordaje adoptado, al dilucidar las representaciones que subyacen a sus postulados será posible avizorar cuáles son los lineamientos acerca de la reconstrucción a la que la justicia transicional aspira con la reparación. Asimismo, se establecerá el diálogo entre esta perspectiva y la experiencia argentina, con la intención de explorar en qué medida las representaciones que subyacen a la justicia transicional han permeado el tratamiento de las medidas tendientes a la reparación en el caso concreto que esta tesis estudia.

Una vez realizado este ejercicio, se presentará la conceptualización de *prácticas reparatorias*, construida tras la identificación de los alcances y limitaciones que presentan los abordajes precedentes. Desde esta perspectiva, se propone finalmente una categorización de las prácticas reparatorias, que será adoptada a lo largo de esta tesis para el análisis del caso argentino.

1. El surgimiento de la reparación como un derecho de las víctimas

El acontecimiento histórico en el que se ubica la emergencia de la problemática de la reparación de los crímenes de Estado es el genocidio nazi. Frente a su magnitud y atrocidad, surgió por un lado el cuestionamiento filosófico a la posibilidad misma de la reparación, en tanto sus crímenes se concibieron como irreparables e imperdonables (Arendt, 1993; Derrida, 2003; Jankelevicth, 1987).[34] Pero a su vez, este acontecimiento sentó las bases para un cambio normativo a nivel mundial a partir del cual el Estado comenzó a ser identificado como el responsable de la reparación al interior de sus fronteras.

Hasta ese momento, la normativa relativa a la problemática de la reparación había estado centrada en las relaciones interestatales. La perspectiva tradicional de la reparación evocaba la responsabilidad de los Estados por los daños producidos injustamente contra otro Estado en el contexto de una guerra, los cuales debían ser reparados una vez finalizado el conflicto. Los protagonistas del proceso de rendición de cuentas eran los perpetradores -agentes del Estado-, y el acento estaba puesto en el castigo a los culpables de los crímenes. Todo agravio que un Estado cometiera al interior de sus fronteras era considerado un asunto de carácter interno, y no existían precedentes históricos ni normas internacionales que incentivaran a los Estados a reparar sus ciudadanos (Nowak, 2003; van Boven, 2009; Wolfe, 2013).

A partir del Acuerdo de Luxemburgo (1952)[35], punto de inflexión en el modo de concebir la reparación de dichos crímenes (Colonomos & Armstrong, 2006), el Estado pasó a ser considerado como responsable de las políticas de reparación a sus ciudadanos. El reconocimiento progresivo de la situación de las víctimas de los crímenes de Estado alimentó la consolidación de una "perspectiva de las víctimas" como eje central para abordar la reparación, de acuerdo a la cual ésta pasó a ser concebida como un derecho de los individuos que han sufrido dichos crímenes en lugar de una prerrogativa interestatal (Gómez Isa, 2007; van Boven, 2009). Esta perspectiva iluminó programas de diverso alcance que han configurado intentos por reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante dictaduras militares o

[34] La caracterización de los crímenes de Estado como irreparables no se circunscribe a la experiencia del nazismo, sino que es extensiva al conjunto de los estudios acerca de la reparación de los crímenes de Estado, no sólo desde una perspectiva filosófica sino también psicosocial. Al respecto, ver Hamber (2000, 2005).

[35] Mediante la firma del Acuerdo de Luxemburgo, Alemania Occidental se comprometía a reparar a través del pago de compensaciones monetarias a los individuos víctimas del genocidio nazi. Para una reseña de la historia que lo precede así como un análisis de sus principales características, ver Honig (1954).

conflictos internos en Europa Occidental (Pross, 1998), Sudáfrica[36], Europa del Este (Pogany, 1997; Quint, 1997) y América Latina (Barahona de Brito, 2002), por mencionar sólo algunos. [37]

La *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (1948) establecida por Naciones Unidas es un antecedente ineludible en el desarrollo de esta perspectiva, en tanto promovió la noción de dignidad de las víctimas así como su derecho a reclamar reparación ante la justicia. Sin embargo, no fue hasta la adopción de la *Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder* (1985) que se configuró el acercamiento global a los derechos de las víctimas (Gómez Isa, 2007). Si bien el castigo a los responsables de los crímenes no se excluye en esta nueva aproximación, el acento está puesto en la situación de la víctima y sus familiares así como en la posibilidad de reparación de los daños sufridos. Tras la inclusión del derecho de las víctimas a recibir reparación entre las disposiciones del Estatuto de Roma[38] y del mandato para que la Corte Penal Internacional (CPI) establezca principios relacionados con la reparación contemplando la restitución, la indemnización y la rehabilitación[39], la perspectiva de las víctimas cobró relevancia en el ámbito jurídico. Una vasta jurisprudencia de Cortes Internacionales y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han contribuido a la interpretación del derecho de las víctimas a obtener reparaciones desde un enfoque integral que trasciende el plano jurídico (Beristain, 2010).

Por otra parte, al no existir tratados internacionales que aborden específicamente el derecho a la reparación, es fundamental la incorporación de instrumentos de derecho internacional de carácter no contractual a la hora de indagar sobre sus alcances. En este sentido, se destacan los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional*

[36] Sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación implementada con el objetivo de llevar a cabo la reparación en Sudáfrica, ver entre otros: Boraine (2000), Verdoolaege (2001), Graybill (2002). El informe final de la Comisión puede consultarse en: www.doj.gov.za/trc/index.html [consultado el 06/12/2021].

[37] Dado que la reposición de las formas concretas que adquirieron estos programas de reparaciones durante las últimas décadas excede por mucho los límites de esta tesis, esta selección de casos es incompleta, y su inclusión pretende dar cuenta de la generalidad que adquiere la problemática de la reparación durante la segunda mitad del S. XX, y que ha motorizado experiencias tan diversas como las de las cortes comunitarias *gacaca* para la reparación del genocidio en Ruanda (Rettig, 2008; Waldorf, 2014) o la implementación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia tendiente a la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados (Uprimmy et al., 2009), por mencionar tan sólo algunas de las experiencias destacadas.

[38] El Estatuto de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998 y ha entrado en vigencia en julio de 2002

[39] Los principios relativos a la "Reparación a las víctimas" están establecidos en el artículo 75 del Estatuto de Roma que puede consultarse en https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/estatuto_roma.pdf [consultado el 10/01/2022]

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (2005) –en adelante, Principios [40]-, que si bien no tienen carácter vinculante para los Estados, configuran el instrumento más sistemático para precisar el significado de la reparación. [41]

En este punto vale la pena introducir un aspecto interesante respecto a la normativa sobre la reparación que permea todo el desarrollo relativo a esta problemática. Frente a la incuestionable importancia de reparar a las víctimas y los enormes esfuerzos realizados en la implementación de medidas a tal fin, la precisión en el diagnóstico acerca de cuál es el daño a reparar no suele colocarse en el centro de las reflexiones del campo. Esta falencia queda evidenciada en la referencia a las "violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos" o a las "violaciones graves del derecho internacional humanitario" en la jurisprudencia presentada. Los autores consultados abordan asimismo la problemática de la reparación de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y las violaciones a los derechos humanos de manera indistinta, sin precisar los alcances, las características ni las implicancias diferenciales de los mismos en profundidad.

Un abordaje contrario en este sentido puede hallarse en el trabajo de Henry Theriault (2014), quien en su indagación respecto de las reparaciones al genocidio armenio postuló la imposibilidad del derecho liberal occidental para llevar a cabo una reparación adecuada del genocidio. El aporte de esta autor reside en su lúcido análisis de la profunda tensión ontológica entre los daños grupales ocasionados por el genocidio y la perspectiva jurídica que intenta traducirlos al lenguaje de las violaciones a los derechos individuales. Theriault cuestiona las iniciativas de reparación a partir de la consideración de los daños individuales, e incluso los procesos de asignación de la responsabilidad a los perpetradores a modo de individuos, por resultar inadecuados a la naturaleza colectiva de los daños producidos por el genocidio. Señala en este sentido que la propia noción de daño grupal es concebida desde el derecho liberal en tanto sumatoria de daños individuales, impidiendo así una auténtica reparación colectiva, que apunte a la reparación de los contextos sociales o culturales en los cuales se constituyen los individuos y que fueron afectados por el genocidio.

---

[40] En la nota 2 se ha referenciado que los "*Principios"* fueron aprobados mediante Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, y se encuentran disponibles en línea en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

[41] La sanción de los *Principios* fue el corolario de largos años de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en la tarea de codificación y precisión de los principios internacionales sobre el derecho a la reparación. Para una mirada sistemática de este desarrollo se recomienda consultar la compilación de documentos de la ONU presentada en Comisión Colombiana de Juristas (2007).

Estos señalamientos resultan relevantes para el caso bajo estudio, dado que como se ha mencionado en la introducción de esta tesis, si bien esta investigación considera que los crímenes perpetrados en Argentina configuran un genocidio, sus prácticas reparatorias no parten de un diagnóstico preciso acerca de los daños que deben ser reparados. La consideración de estos crímenes en el marco del "terrorismo de Estado" -cuyos sentidos asociados resultan afines al paradigma del derecho liberal individual- admite una lectura desde el andamiaje teórico desarrollado por Theriault para la comprensión del caso armenio.

Hecho entonces este señalamiento y volviendo a los *Principios,* su importancia radica no sólo en la cristalización jurídica de la perspectiva de las víctimas, sino en su abordaje desde la perspectiva de la integralidad de la reparación. La misma implica el establecimiento de cinco dimensiones básicas: la *restitución,* tendiente al restablecimiento de la situación previa de la víctima; la *indemnización*, referida a la compensación monetaria; la *rehabilitación,* que comprende medidas tales como la atención médica y psicológica; *las medidas de satisfacción*, que implica la sanción a los perpetradores y el conocimiento público de la verdad, y la *prevención,* que pretende brindar garantías de no repetición de las violaciones a los derechos de las víctimas.

Partiendo de esta concepción, el alcance jurídico de la reparación integral implica la conjunción de diversos aspectos que serían capaces de reparar el daño a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; es decir que para brindar una reparación integral, los Estados tienen la obligación de llevar adelante una multiplicidad de políticas públicas, que en su conjunto vendrían a reparar el daño ocasionado a las víctimas. Dada la pluralidad de aspectos contemplados en los Principios, los estudios sobre políticas reparatorias han abordado cada uno de ellos atendiendo a su singularidad, profundizando en el alcance de las mismas así como dando cuenta de su complejidad. En el próximo apartado abordaré críticamente estas dimensiones, como punto de partida para la construcción de una categorización de las prácticas reparatorias en Argentina.

2. Las dimensiones involucradas en la reparación integral

En primer lugar, el principio a partir del cual es posible abordar la reparación en términos de ***restitución*** establece que todo individuo que haya sido dañado debería ser restituido tan cercanamente como sea posible a la situación anterior a que el daño se produzca (Principios, art. 19). A su vez, la restitución configura la representación simple de la reparación, en tanto el ideal

que anima las reparaciones en conjunto es la "plena restitución" (restitutio in integrum), la restauración del *statu quo ante* (De Greiff, 2006, p. 415). Al menos dos consideraciones surgen al respecto.

La primera es que este principio está orientado hacia el pasado, al proponer el regreso a una condición previa a la comisión de los crímenes como objetivo de la reparación. Siguiendo a Wenar (2006), sobre la base de toda teoría de la reparación orientada hacia el pasado existe una noción de restauración moral que indica en sentido metafórico que la tela del orden social ha sido rasgada y debe ser enmendada. Esto resulta particularmente problemático para los casos en los cuales la situación original de las víctimas está caracterizada por vulneraciones de sus derechos humanos. Asimismo, esta perspectiva impide problematizar las condiciones estructurales previas que facilitaron la perpetración de los crímenes de Estado. En este sentido, en sociedades excluyentes y desiguales, cuyas estructuras de exclusión pueden ser consideradas como un factor esencial del conflicto, el propósito de la reparación no puede restringirse a la restitución de la situación en que las víctimas se encontraban previo al régimen en que se cometieron las atrocidades (Uprimmy & Saffon, 2007).

Una segunda consideración está relacionada con la imposibilidad misma de restitución en aquellos casos en que resulta imposible volver lo dañado al estado anterior, como surge claramente en los casos de experiencias masivas de aniquilamiento. Si bien se abordará este aspecto en profundidad más adelante, por el momento basta decir que esta limitación puede sortearse asumiendo que incluso cuando los daños son en sí irreparables, es posible avanzar en el terreno de la reparación recuperando el señalamiento realizado en la introducción de esta tesis, según el cual toda reparación pretende la restitución no de aquello que se ha perdido, dada su imposibilidad, sino de lo que representa.

Hechas estas consideraciones, debe mencionarse que la dimensión de la restitución incluye no sólo el restablecimiento de derechos vulnerados sino también aspectos materiales concretos como ser el retorno al lugar de residencia, la devolución de bienes y el empleo. En cuanto a la problemática relativa a la restitución de la tierra, debe destacarse que los desplazamientos masivos, el abandono de hogares y territorios por parte de la población se encuentran entre las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, que en ocasiones se insertan en una larga lucha por el derecho a la propiedad de la tierra por parte de comunidades despojadas de sus territorios ancestrales (Beristain, 2010; Leckie, 2005).

En segundo lugar, en cuanto a la dimensión relativa a la ***indemnización***, ésta

> ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario (Principios, art. 20)

Así entendida, la reparación compensatoria se reduce a términos financieros y se instrumenta mediante el otorgamiento de indemnizaciones económicas (Valls, 2003), constituyendo uno de los elementos más recurrentes en el diseño de medidas reparatorias, cuyo aspecto más controversial reside en la valuación económica de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos. En cuanto a los daños que pueden dar lugar a la indemnización cuentan primeramente los daños materiales, que abarcan tanto el daño emergente como el lucro cesante. Mientras que el primero refiere a los daños patrimoniales producidos directamente por los crímenes perpetrados, el segundo se relaciona con aquello que la víctima dejó de percibir como consecuencia de dichos crímenes, en tanto pérdida de ingresos económicos futuros que hubieran ingresado a su patrimonio si las violaciones no hubieran ocurrido.

Pero además, la dimensión indemnizatoria de la reparación propone la cuantificación -el establecimiento en términos contables- de daños morales, físicos y psicológicos que la víctima ha sufrido como consecuencia de la violación de sus derechos. En otras palabras, la indemnización entendida como compensación se refiere a las medidas que buscan compensar los daños sufridos a través de la cuantificación de dichos daños, desde una perspectiva que comprende el daño como algo que trasciende la esfera económica e incluye lesiones físicas, psicológicas y morales, la pérdida de oportunidades de empleo, educación y prestaciones sociales (De Greiff, 2008, p. 409) o incluso conceptos menos precisos como el "daño al proyecto de vida" (Siri, 2011). [42]

No sólo hay circunstancias en las cuales el ideal de compensación no es realizable sino que además en este caso, este aspecto está relacionado con la dificultad que supone asignar valores a los distintos tipos de daños de manera efectiva y confiable. En este sentido, la cuantificación del daño ocasionado a las víctimas sobre el principio de las "compensaciones efectivas" o "compensación en proporción al daño" aparece como problemática: ¿Cuánto vale la pérdida de

[42] El daño al proyecto de vida ha sido introducido como concepto en las sentencias dictadas por la CIDH y atiende a "la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas" (Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147)

un ser querido, el sufrimiento ocasionado por la tortura o el trauma psicológico? Incluso suponiendo que el valor del daño puede ser establecido ¿Permanece invariable para todas las personas afectadas?

Finalmente, la reparación económica genera dilemas éticos por parte de las víctimas sobre "su significado, el sentido de la aceptación, la relación con la pérdida y el contexto o la manera en que se produce" (Beristain, 2010, p. 251). En el capítulo cinco se profundizará en las implicancias de estas consideraciones a partir de las representaciones del dinero asociadas a la reparación.

Una tercera dimensión comprendida en la reparación integral es la ***rehabilitación,*** que contempla la atención médica y psicológica, así como la provisión de servicios jurídicos y sociales a las víctimas (Principios, art. 21). Estas medidas tienen por objetivo contrarrestar los efectos negativos para la salud en términos de enfermedades y deterioro de las condiciones de vida, así como de las situaciones traumáticas que han atravesado las víctimas como consecuencia de las violaciones sufridas. En cuanto a las medidas en salud, éstas pueden implementarse siguiendo diversos modelos como el reembolso de los gastos médicos solventados por las víctimas o la atención a través de los servicios públicos (Beristain, 2010).

Por otra parte, se ha destacado la importancia de asumir una perspectiva psicosocial en la implementación de medidas de rehabilitación, en tanto aspecto fundamental para la articulación del proceso de implementación de la reparación con los procesos individuales y familiares de las víctimas, que muchas veces se encuentran regidos por tiempos, lógicas y necesidades diferentes. El acompañamiento a las víctimas -que refiere al trabajo con las víctimas teniendo en cuenta sus propias necesidades- resulta un aspecto clave para impedir su revictimización y supone la actuación de profesionales de la salud mental (Beristain, 2010, pp. 44-61).

En la misma línea, la rehabilitación se ha abordado como un componente esencial del proceso ligado a la recuperación de las víctimas en tanto superación de las secuelas del "trauma masivo" (Danieli, 2009). [43] A tal fin, la rehabilitación comprende intervenciones psicosociales y acompañamiento de salud mental a víctimas y sobrevivientes desde un abordaje que se propone trascender el paradigma dominante de la psicología clásica basada en la medicalización para la curación de trastornos post traumáticos (Lykes & Mersky, 2006). Por el contrario, los abordajes

[43] Algunos autores proponen incluso abandonar el concepto de "trauma" partiendo de señalar sus limitaciones para la comprensión de los efectos de la violencia estatal (Lykes & Mersky, 2006).

psicosociales consideran a los individuos, familias y comunidades insertos en los contextos históricos y socioculturales en los cuales las violaciones han ocurrido, con la intención de promover la reconstrucción de los lazos sociales vulnerados (Gómez, 2012; Lykes & Mersky, 2006).

Por último, tanto la dimensión relativa a la ***satisfacción*** como la asociada a las ***garantías de no repetición*** configuran dos categorías especialmente amplias entre las que cuentan una multiplicidad de medidas muy diversas y que ha dado lugar a su conceptualización en tanto medidas de reparación simbólica (De Greiff, 2008; Gómez Isa, 2007), categoría que será problematizada en el próximo apartado.

Las medidas de satisfacción refieren a aquellas medidas que no tienen alcance pecunario, e involucra un conjunto de iniciativas orientadas al conocimiento público de la verdad de lo sucedido con el objetivo de dignificar a las víctimas. Entre estas cuentan la investigación y difusión de la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, los actos oficiales de disculpas públicas, la sanción a los responsables de los crímenes y las conmemoraciones y homenajes a las víctimas (Principios, art. 22). Estas medidas permiten aprehender la vinculación que existe entre la justicia, la verdad y la reparación, dimensiones profundamente imbricadas que difícilmente puedan ser pensadas escindidas entre sí.

Un aspecto relevante entre las medidas de satisfacción a considerar es el proceso de juzgamiento a los responsables de los crímenes de Estado como un elemento fundamental de la reparación. En términos históricos, los Juicios de Nuremberg son un antecedente ineludible en cuanto al desarrollo de jurisprudencia internacional que posibilitó la realización de juicios por violaciones masivas a los derechos humanos, ya sea por tribunales internacionales como por tribunales de justicia local durante todo el Siglo XX y lo que va del Siglo XXI. En lo que hace específicamente a los procesos de juzgamiento, así como se ha puntualizado en la potencialidad reparatoria de los juicios (Douglas, 2005; Sikkink, 2011), es necesario señalar que la misma depende en gran medida de las características que estos asumen en cada caso, atendiendo al cómo se desarrollan los mismos, en tanto determinadas circunstancias pueden provocar la revictimización de las víctimas durante el proceso de juzgamiento, especialmente a la hora de brindar testimonio (Beristain, 2010; Dembour, 2004).

A su vez, se destaca entre las medidas de satisfacción el desarrollo de comisiones de la verdad. Su implementación suele tener lugar en el marco de las transiciones hacia gobiernos

democráticos y persigue el objetivo de llevar adelante una investigación oficial respecto de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el régimen saliente. Frente a las limitaciones que presentan los contextos transicionales para el juzgamiento de los criminales, la constitución de comisiones de la verdad configuran un modo de respuesta por parte del Estado a los abusos del pasado reciente (Hayner, 2001).

Considerando que las mismas no poseen potestades judiciales, su contribución principal se vincula con su capacidad para realizar una interpretación de los hechos investigados con enorme incidencia en la construcción de la memoria colectiva de las sociedades posconflicto, debido a su habilidad para construir narrativamente un puente histórico entre un pasado caracterizado por el terror y un futuro en el que prime el reconocimiento por los derechos humanos (Grandin, 2007). Dado que son impulsadas por el Estado, estas investigaciones configuran una memoria oficial sobre lo sucedido que forma parte de la lucha entablada en el plano simbólico por la construcción de sentidos sobre la experiencia atravesada. [44]

Profundizando en este aspecto, son múltiples los actos de memoria que participan de esta lucha simbólica y que se encuentran comprendidos dentro de las medidas de satisfacción. Entre ellos se destaca la marcación de territorios y lugares identificados como espacios en los cuales ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, así como la construcción de memoriales y monumentos en recuerdo de las víctimas (Jelin & Langland, 2003; Nora, 2008). Estas prácticas se inscriben en un proceso de memorialización, entendido como la cristalización de los modos en que la sociedad recuerda y elabora el pasado, el cual combina la necesidad individual de recordar a las víctimas con la aspiración colectiva de narrar la historia y plasmarla en el espacio público (Schindel, 2009). Siguiendo su argumentación, la memorialización implica una voluntad de incidencia política y en tal medida supone "iniciativas que ponen algo en movimiento en la esfera pública y cuyos efectos, impredecibles e irreversibles, crean las condiciones para la historia futura" (Schindel, 2009, p. 67).

Vinculado a su vez a los procesos de memorialización, una última cuestión que interesa destacar respecto de las medidas de satisfacción es que todas ellas están permeadas por la cuestión del reconocimiento. [45] En términos generales, la reparación entendida como reconocimiento articula

[44] Sobre memoria colectiva, ver Halbwachs (2004a).

[45] Si bien se admite que el reconocimiento como concepto proviene de la filosofía hegeliana, en el campo de la reparación el reconocimiento no es abordado como un paradigma filosófico, sino como un paradigma popular de la

la violación de los derechos fundamentales del individuo con la vulneración de la ciudadanía. Partiendo de allí, toda medida tendiente a institucionalizar el reconocimiento del individuo como ciudadano puede entonces ser interpretada como un acto de reconocimiento, el cual implicaría "devolver" -o en el caso de que fuera necesario, establecer por primera vez- a los individuos su estatus de ciudadanos.

Asimismo, en tanto la igualdad de derechos constituye uno de los pilares de toda democracia constitucional, el reconocimiento a esta igualdad es fundamental para que el individuo goce efectivamente de su estatus de ciudadano. [46] Para lograr el restablecimiento de las condiciones de igualdad que conlleva la restitución de la ciudadanía y por lo tanto, en los términos que se viene conceptualizando, lograr el reconocimiento, es necesario que sean reconocidos los daños sufridos por aquellos individuos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales. Este reconocimiento del estatus de víctimas conlleva el reconocimiento de los crímenes que se cometieron, lo cual puede ser instrumentado por la vasta multiplicidad de medidas de satisfacción anteriormente mencionadas entre las que cuentan la realización de juicios penales a los perpetradores, la actuación de comisiones de la verdad, pedidos de disculpas públicas, y políticas de memorialización, por nombrar sólo algunos de los más relevantes. En síntesis, el reconocimiento implica reconocer al sujeto a la vez como individuo, como ciudadano y como víctima (Beristain, 2010; De Greiff, 2006).

Finalmente, la asunción de responsabilidad por parte del Estado expresada en el reconocimiento de lo ocurrido reviste una importancia central a partir de la cual propiciar un cambio en la relación entre el Estado y las víctimas sobre la base de la confianza cívica, entendida como la capacidad del Estado de generar una confianza social que permita a los ciudadanos desarrollar un sentido mutuo de compromiso con las normas y valores compartidos (De Greiff, 2006).

De lo anterior se desprende que los actos de reconocimiento están fuertemente vinculados a las garantías de no repetición. Con el objetivo explícito de contribuir a la prevención de futuras

---

justicia en el seno de las reivindicaciones que se discuten en las esferas públicas y que involucra las luchas en la sociedad civil. Para ahondar en la perspectiva hegeliana del reconocimiento véase Hegel (2015, pp. 113-121).

[46] La relación entre reparación y reconocimiento haciendo hincapié en el reconocimiento a la igualdad de derechos ha sido abordada desde la perspectiva de las políticas de la identidad, cuyo eje central es el análisis de las exigencias de reconocimiento de las identidades colectivas que se apartan de los patrones culturales dominantes, a la vez que la reivindicación de la aceptación de estas diferencias. Si bien no centran su atención en la problemática de la reparación de los crímenes de Estado que constituye el eje del presente trabajo, sus planteos son retomados desde el campo de las reparaciones al incorporar la importancia de reconocer las identidades de las víctimas que han sufrido los crímenes cuya reparación se pretende (De Greiff, 2006). Para profundizar en el abordaje de las políticas de identidad, ver Fraser & Honneth (2003).

violaciones, éstas consisten en reformas institucionales que van desde el control afectivo de las fuerzas armadas por parte de las autoridades civiles hasta el fortalecimiento de la independencia judicial, y otras medidas tendientes a la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos humanos (Principios, art. 23).

En este sentido, el reconocimiento puede ser concebido como un modo de prevención, en la medida en que por un lado los actos de reconocimiento pueden tener un valor educativo para el conjunto de la sociedad así como para las fuerzas de seguridad en particular, y a su vez, pueden convertirse en la expresión de un compromiso de ruptura con la práctica de las violaciones (Beristain, 2010). Sin embargo, las garantías de no repetición no se agotan en los actos de reconocimiento, sino que plantean la necesidad de llevar adelante reformas estructurales en el funcionamiento del Estado que incluyen cambios en los procedimientos administrativos, puesta en marcha de mecanismos de control y la formación de funcionarios en el campo de los derechos humanos, entre otras. En definitiva, el postulado fundamental que atraviesa la concepción de las *garantías de no repetición* indica que la implementación de cambios institucionales podrá evitar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en el futuro, aspecto que muestra una afinidad evidente con la concepción de democracia que se le puede adjudicar a la perspectiva de la justicia transicional, tal como se verá en el próximo apartado.

El paradigma de la justicia transicional no sólo se ha hecho eco de la perspectiva de la integralidad de la reparación, sino que a partir de su consolidación durante la década del 80, devino en la perspectiva dominante en los debates en torno a las medidas tendientes a reparar las violaciones de derechos humanos perpetradas por regímenes militares o autocráticos. El próximo apartado estará dedicado a su análisis, dado el papel significativo que la misma juega en el campo sobre reparaciones en que se sitúa esta tesis.

3. La reparación en la Justicia Transicional

De acuerdo a la perspectiva de la justicia transicional, las medidas de reparación se inscriben en los procesos de transición de un régimen político a otro, durante el cual los gobiernos democráticos asumen la responsabilidad de la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por regímenes políticos antecedentes (De Greiff, 2006; Elster, 2006; Kritz, 1995). En una primera aproximación, la justicia transicional puede ser definida como un proceso de justicia que involucra una diversidad de aspectos complejos de distinta duración en el tiempo -entre las que

cuentan los procesos de juzgamiento, la implementación de comisiones de verdad, los programas de reparaciones así como diversas reformas de índole institucional, por mencionar sólo algunas - y que en cada sociedad concreta puede tomar formas específicas muy diferentes entre sí.

Si bien algunos autores definieron la justicia transicional en sentido amplio como aquella propia de todo período de transición política, la acepción mayoritaria en la literatura del campo considera la justicia transicional como un fenómeno emergente en el siglo XX. Como exponente de la primera corriente, Elster definió la justicia transicional como aquella que

> se compone de los procesos de juicios, purgas y reparaciones que tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro (2006, p. 15).

Así entendidos, estos procesos no son exclusivos de los regímenes modernos, toda vez que es posible constatar procesos de sustitución entre regímenes políticos desde la Antigüedad, lo que sitúa históricamente sus orígenes en las transiciones que tuvieron lugar en Atenas durante los años 411 y 403 a.C. (Elster, 2006).

Por su parte, el International Center of Transitional Justice (ICTJ) enmarca la justicia transicional en el paradigma internacional de los derechos humanos surgido tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. [47] En este sentido restringido, en su sitio web oficial especifica que

> la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. [48]

En la misma línea, de acuerdo a la genealogía propuesta por Teitel (2003), es en la posguerra posterior a 1945 que se desarrolló la primera fase de la justicia transicional, en la cual se asistió al apogeo de la justicia internacional asociada con la cooperación interestatal y los juicios y sanciones por los crímenes perpetrados durante la guerra. Siguiendo esta genealogía, una segunda fase se ubicó tras la finalización de la Guerra Fría, asociada con la ola de transiciones que comenzó en 1989 tras la desintegración de la Unión Soviética. Finalmente, una tercera fase está caracterizada por lo que la autora denomina una justicia transicional en estado "estable" o

[47] El ICTJ fue fundado en 2001 como una organización no gubernamental de alcance internacional, actualmente dirigida por Barron M. Tenny, de reconocida trayectoria vinculada a la Fundación Ford. De acuerdo a la información que brindan en su sitio web, su objetivo consiste en remediar y prevenir las violaciones a los derechos humanos desde la investigación en justicia transicional, y para ello informa y asesora a gobiernos y actores de la sociedad civil en más de 30 países alrededor del mundo. Para más información, ver: https://www.ictj.org/es [consultado el 03/01/2022].

[48] Disponible en línea en: https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional [consultado el 03/01/2022]

"estacionario", correspondiente a las condiciones contemporáneas de inestabilidad política en el marco del cual la justicia transicional pasa de ser la excepción a la norma hasta convertirse en un paradigma del estado de derecho. [49]

En la medida en que la mayoría de los estudios de la justicia transicional se sitúan en el paradigma internacional de los derechos humanos así como en el marco de la llamada perspectiva de las víctimas, esta acepción es la que será considerada de aquí en adelante para avanzar en la revisión de los postulados sobre los que se erige este campo. Sus categorías han sido ampliamente utilizadas en múltiples programas de reparaciones de diversas latitudes y recuperadas por numerosos autores dedicados al estudio de la reparación. En este sentido, esta revisión resulta fundamental para situar esta investigación en el incipiente campo de estudios sobre reparaciones, que aún no se ha configurado en Argentina, y al cual esta tesis pretende contribuir.

En este sentido, vale considerar que el caso argentino ha sido objeto privilegiado de la literatura clásica del campo de la justicia transicional (Elster, 2006; Kritz, 1995; Sikkink, 2011; Sikkink & Walling, 2008; Teitel, 2000, 2003; Wolfe, 2013). Dichos análisis coinciden en señalar que el mismo constituye un caso ejemplar en los procesos de justicia de transición debido al vasto alcance de sus medidas de reparación, caracterización que ha encontrado eco en la literatura regional durante los últimos años (Crenzel, 2008; Galante, 2019; Parenti & Pellegrini, 2009; Solís Delgadillo, 2015). Dado que este paradigma no se había consolidado aún a nivel internacional al momento de llevarse a cabo la apertura democrática en Argentina, la terminología de la justicia transicional permaneció en ese entonces ajena al campo local de los derechos humanos, y su retórica fue muy poco utilizada en los documentos oficiales o académicos locales. [50] En la medida en que en los últimos años esta perspectiva ha ido ganando mayor terreno en el plano

[49] Profundizando en este sentido, Teitel agrega que "la aparente normalización de la justicia transicional también es evidente en la tolerancia de una mayor discreción política, la politización en los usos de la justicia, el surgimiento de procedimientos altamente irregulares y las desviaciones explícitas de la ley vigente, todos justificados en términos humanitarios" (2003, p. 92). Si bien por razones de extensión este aspecto no puede ser profundizado en esta tesis, esta perspectiva deja abierta la pregunta acerca de las implicancias concretas que conlleva la implementación de medidas de justicia transicional en el escenario geopolítico mundial durante esta tercera fase. De la mano de la consideración de que el fin último de la justicia transicional reside en la consolidación de un estado de derecho, tal como señala Teitel con agudeza, en la tercera fase de justicia transicional en estado permanente, se normaliza un discurso de justicia humanitaria que bajo la concepción de una "defensa preventiva" construye la base normativa sobre la que se legitima la "guerra contra el terrorismo", apelando a un lenguaje de moralidad universal propio del discurso jurídico humanitario.

[50] Para una mirada crítica de la concepción de la justicia transicional para la comprensión de los juicios contra los responsables de los crímenes de la dictadura, ver Figari Layús (2015).

local, se irán desplegando algunas reflexiones en torno a la experiencia argentina a la luz del abordaje de la justicia transicional.

3.a) Los postulados que subyacen a la justicia transicional

Este apartado tiene por objetivo reconstruir y analizar los postulados fundamentales del paradigma de la justicia transicional, con la intención de explorar su fecundidad para la comprensión de los procesos que analiza. A partir de las concepciones de justicia, transición y democracia que subyacen a la misma, se presentarán algunas consideraciones relativas al modo en que ésta concibe y explica los procesos involucrados en la reparación de los crímenes de Estado. Como eje transversal a estas concepciones, el tratamiento de la temporalidad permea a todas las nociones anteriormente mencionadas en la medida en que está presente en cada una de ellas a la vez que las excede, tal como se irá viendo en cada una de las secciones que siguen. La conclusión a la que permite arribar esta indgación indica que la justicia transicional construye una representación del pasado asociada al conflicto y la violencia, en oposición a una sociedad futura en la cual la democracia se configura como garantía de la no violencia,

- La cuestión de la justicia

Una de las preocupaciones que atraviesa a la justicia transicional se relaciona con cuáles son los elementos que permiten en sociedades pos conflicto sentar las bases de una estabilidad sostenible una vez instaurado el nuevo régimen. Si bien en la construcción de dicha estabilidad intervienen factores como la posibilidad de articular nuevos acuerdos sociales así como la construcción de una cultura política democrática, para la justicia de transición la importancia decisiva reside en la dimensión normativa e institucional.

Como consecuencia, el cambio normativo fundamentado en las respuestas legales que se implementan en los períodos de transición para lidiar con el pasado represivo adquieren un papel constitutivo (Teitel, 2000). El instrumento central de este proceso es la jurisprudencia de transición, entendida como “un paradigma extraordinario de ley transformativa que ayuda a construir el cambio liberalizador” (Teitel, 2000, p. 213). La jurisprudencia de transición intenta plasmar las concepciones ideales del estado de derecho en “programas de reparaciones” concretos de cobertura masiva entendidos como “conjuntos más o menos coordinados de medidas

de reparación", mediante los cuales se "ofrecen beneficios directamente a las víctimas de ciertos tipos de crímenes" (De Greiff, 2006, p. 410).

Este énfasis puesto en las respuestas legales que se brindan en términos institucionales en períodos de transición es lo que fundamenta la conceptualización de la justicia transicional en tanto proceso de justicia. Esto significa que la misma no es concebida como un tipo particular de justicia en términos filosóficos, sino que hace referencia a una noción de justicia que sólo es esbozada con contornos imprecisos. Por el contrario, parece referir a determinadas circunstancias en las cuales puede tener lugar –o no, dependiendo de cada caso- la justicia en términos concretos. En esta línea, "el elemento justicia en la justicia de transición debe ser comprendido ampliamente", dado que "en última instancia, la justicia de transición es una justicia de excepción que aspira a cambiar la situación de conflicto o posconflicto "de un peor a un mejor estado" (Ambos et al., 2009, p. 28).

Un segundo modo de entender la justicia en un sentido restringido de acuerdo a esta perspectiva es homologándola a las medidas de naturaleza judicial que forman parte de la justicia transicional. En virtud de ello, la referencia a la justicia aparece como sinónimo de los procesos de juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos por los regímenes salientes. En este punto, la exigencia por llevar a juicio a los genocidas ha ocupado un lugar central entre las demandas de la sociedad argentina. Tal como se profundizará en los próximos capítulos, la asimilación de los juicios contra los responsables de los crímenes de la dictadura con la noción de justicia indica una consonancia con el "paradigma jurídico" de la justicia transicional.

La asociación de la justicia exclusivamente a los juicios penales trae aparejada diversas implicancias al momento de pensar la reparación de los crímenes de Estado. Una de ellas es la oposición postulada entre verdad y justicia, que subyace a buena parte de los análisis de la justicia transicional y que se fundamenta en la inestabilidad política de la coyuntura propia de los períodos transicionales.

En palabras de Snyder & Vinjamuri,

> "[La estrategia de] enjuiciamiento de los perpetradores de atrocidades según los estándares universales, corre el riesgo de causar más atrocidades de las que podría evitar, porque presta una atención insuficiente a las realidades políticas" (Snyder & Vinjamuri, 2003, p. 5).

A su vez, la advertencia respecto de la realización de juicios penales en estos contextos indica que éstos pueden tomar la forma de una venganza o una represalia que lejos de contribuir al

sostenimiento de la paz, reavivaría los conflictos que se quiere dejar en el pasado (Elster, 2006; Zalaquett, 1995).

En rigor, puede decirse que hay una dicotomía anterior a esta oposición entre verdad y justicia sobre la que se fundamenta esta última, y es aquella que opone paz y justicia. El argumento central de esta tesis reza que toda vez que la búsqueda de estabilidad basada en la paz y la reconciliación es la motivación principal de la justicia transicional, ésta puede entrar en conflicto con el castigo a los responsables de los crímenes que supone la persecución penal. Kai Ambos señala explícitamente que

> El abstenerse de una persecución penal y/o del castigo es a veces una condición necesaria para facilitar la paz y la reconciliación. Para decirlo sin rodeos, el precio de la paz es a menudo la justicia o un "compromiso" [trade off] entre paz y justicia (2009, p. 29).

El tratamiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por regímenes salientes es una tarea difícil en coyunturas transicionales en donde los responsables de dichas violaciones conservan aún –al menos parcialmente- influencia y poder. En una sociedad convulsionada que se encuentra atravesando una transición, surge entonces el dilema entre la necesidad de juzgar los crímenes del pasado reciente y el riesgo que esto conlleva para la estabilidad política que se quiere construir. Ya sea porque los juicios impedirían una transición pacífica o bien porque éstos podrían debilitar el régimen democrático recientemente instaurado, los esfuerzos de la justicia transicional están dirigidos a priorizar el mantenimiento de la paz y la estabilidad política en detrimento de la justicia penal.

Una posibilidad para evitar este riesgo sería directamente garantizar la impunidad de los crímenes mediante una amnistía, ya sea que ésta alcance la totalidad o sólo algunos de los niveles de responsabilidad en los crímenes cometidos. Sin embargo, si se considera que la transición es el momento de sentar las bases para una nueva sociedad libre de confrontaciones, puede resultar fundamental enfrentar los crímenes del pasado como modo de evitar que éstos vuelvan a ocurrir. Y para conseguirlo sin recurrir a la justicia penal puede emprenderse en su lugar la búsqueda de la verdad de lo sucedido, materializada en la conformación de una comisión de la verdad, definida como "un cuerpo temporal investido con autoridad oficial para investigar trayectorias de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y para emitir un informe" (Hayner, 2001, p. 14).

La oposición entre verdad y justicia por lo tanto surge como un desprendimiento de la oposición entre paz y justicia. Y a su vez, considero que lo que está en el seno de esta oposición entre paz y justicia no es otra cosa que la dicotomía entre paz y conflicto, asociando la paz a la estabilidad y el conflicto a la violencia. La búsqueda de justicia impide la clausura del conflicto, manteniéndolo abierto no sólo durante el proceso de juzgamiento sino también con posterioridad al mismo, en las acciones que pueden producir las sentencias judiciales -que van desde el establecimiento de las condenas hasta las definiciones acerca de cuál es el daño ocasionado por los crímenes que se juzgan y quiénes son sus responsables. Es por ello que la justicia transicional convida a optar en su lugar por la búsqueda de la verdad, que aparece como menos riesgosa para la construcción de una paz sostenible.

Respecto a la oposición entre verdad y justicia es ineludible la argumentación de Claudia Hilb, quien en diversos trabajos analizó las consecuencias de priorizar alguna de las dos opciones a la luz del contrapunto entre las experiencias argentina -como exponente de la opción por la justicia, encarnada en el Juicio a las Juntas- y sudafricana -como la "más extraordinaria elección por la verdad", en referencia a la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudráfica-. En pocas palabras, la autora menciona que la condena judicial a la cúpula militar que tuvo lugar tras finalizar la dictadura argentina habría obturado la posibilidad de que los perpetradores asuman su responsabilidad por los crímenes cometidos, negándose –salvo contadas excepciones- a contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, y adscribiendo de manera generalizada a un pacto de silencio en torno a "aquello que pasó". Contrariamente, la "solución sudafricana" habría abierto la posibilidad de que los perpetradores expusieran sus crímenes ante la Comisión de Verdad y Reconciliación a cambio de acceder al beneficio de una amnistía, con la única condición de que pudieran demostrar la motivación política de los mismos. Señala Hilb que en este contexto, de modo paradójico, serían los propios criminales los más interesados en decir la verdad (Hilb, 2013; Hilb et al., 2014).

En esta línea argumentativa, considero que lo que está detrás de la amenaza que representa el proceso de juzgamiento es ni más ni menos que la explicitación de las responsabilidades de los perpetradores en los crímenes que cometieron. En la ilusión de una nueva comunidad sin fisuras que propone la justicia transicional, esta adjudicación de responsabilidades en tanto fin último de la justicia penal atentaría contra la construcción de una base de confianza requerida para la fundación de un nuevo régimen (democrático).

Profundizando en este punto, vale decir que para la fundación de esta nueva sociedad deben ser incluidos sin distinciones culpables como inocentes, víctimas y victimarios: todos confluyen en la institución de una nueva comunidad de intereses basada en la paz y en la ausencia de conflictos. Resulta sugerente al respecto citar las palabras del presidente Thabo Mbeki a propósito de la Comisión de Verdad y Reconciliación Sudafricana, en tanto paradigma de la opción por la verdad:

> Juntos, decidimos que en la búsqueda de una solución para nuestros problemas nadie debía ser demonizado o excluido. Acordamos que todos debían formar parte de la solución, sin importar lo que hubieran hecho o representado en el pasado. Acordamos que no tendríamos tribunales de crímenes de guerra ni tomaríamos el camino de la revancha y la retribución (Martin, 2014, p. 108).

Es decir que en la medida en que no haya juicios, no hay inocentes ni culpables. Sin importar lo que hayan hecho, la nueva sociedad aparece como una tabula rasa en donde todos los actores se encuentran –o más precisamente, se reencuentran tras haber atravesado un período signado por la violencia y el conflicto- en igualdad de condiciones.

Por su parte, quienes postulan que la verdad ha de ser el modo predominante de hacer frente a las violaciones de derechos humanos argumentan que las sociedades en transición no cuentan con los dispositivos institucionales adecuados que permitan llevar a cabo el proceso penal, o que la búsqueda de la verdad está dirigida a la víctima a diferencia de los juicios cuyo protagonista es el perpetrador (Bohmer, 2014). Asimismo, se postula que en la medida en que la verdad sea pronunciada por los responsables de los hechos, los perpetradores se encuentran ante una oportunidad única de enfrentarse con sus propios crímenes, dando lugar al arrepentimiento e inclusive al perdón (Hilb et al., 2014). De esta manera, la verdad podría restituir no sólo la humanidad de los perpetradores sino principalmente la relación de humanidad entre víctimas y victimarios, tan cara a los fines de construir un nuevo lazo social como base de una nueva sociedad como ya se viene insistiendo (Martin, 2014).

Esta definición tiene varios elementos problemáticos. En primer lugar, identificar la verdad exclusivamente con la palabra del perpetrador impide tomar en consideración la verdad construida en el espacio de los juicios, que se compone de una gran cantidad de elementos probatorios que permiten la reconstrucción de buena parte de lo acontecido. [51]

[51] Al respecto, algunos autores proponen distinguir entre verdad histórica y verdad jurídica, de acuerdo a la cual ésta última se limita a subsumir los hechos históricos a la lógica de la inocencia-culpabilidad, mientras que la primera

Cabe pensar también que durante el proceso penal los perpetradores se enfrentan con los crímenes que cometieron, con el agregado que lo hacen inclusive en la voz de las propias víctimas. Por último, puede relativizarse la afirmación de que los juicios están dirigidos exclusivamente a la persecución de los culpables a la luz de una buena cantidad de bibliografía que pone de relieve el potencial reparador de los juicios por crímenes de lesa humanidad (Douglas, 2005; Sikkink, 2011).

No obstante, debe recordarse que el aspecto central por el cual se sugiere optar por la verdad en detrimento de la justicia es el hecho de que los juicios por violaciones a los derechos humanos serían políticamente insostenibles y podrían socavar las democracias nacientes. Al respecto, Sikkink y Walling (2008) analizan lo que denominan como "cascada de la justicia" para hacer referencia al importante aumento de la judicialización de las violaciones a los derechos humanos que se verifica empíricamente en América Latina desde mediados de la década de 1980. La conclusión principal a la que arriban es que, contrariamente a la creencia de que los juicios debilitan las democracias incipientes, las regiones que recurrieron ampliamente a los mismos han hecho una transición a la democracia más completa que aquellas regiones que no enjuiciaron a los perpetradores. [52]

Otra cuestión a la que me interesa referir en relación con la oposición entre verdad y justicia es que al presentarse como opciones, éstas aparecen como alternativas dicotómicas, insinuando la necesidad de elegir una de ellas como modo predominante de elaborar el pasado en las sociedades en transición. Por el contrario, parte de la riqueza de la perspectiva de la justicia transicional es habilitar un continuo de opciones con el objetivo de enfrentar las violaciones perpetradas. Es en este sentido que parece más fructífero considerar verdad y justicia como dos elementos tendientes a un mismo objetivo más que como opciones dicotómicas y/o excluyentes (Filippini & Magarrell, 2006; Sikkink & Walling, 2008).

---

permite inscribir los hechos bajo juzgamiento en una trama histórica, poniendo de relieve aspectos ignorados por el proceso judicial y contribuyendo a la constitución de una verdad integral (Crenzel, 2014). Considero que esta distinción puede ser discutida en la medida en que las "verdades jurídicas" forman parte del proceso de construcción de memorias y representaciones del pasado y resultan relevantes en la configuración de una "verdad integral" acerca de lo sucedido.

[52] Para estudiar el impacto de los juicios por violaciones a los derechos humanos, las autoras examinan la situación de derechos humanos en los países latinoamericanos antes y después de la realización de los juicios, utilizando los promedios de la *escala de terror político* (PTS por sus siglas en inglés), elaborada en base los Informes de País del Departamento de Estado sobre Prácticas de Derechos Humanos, el Informe Anual de Amnistía Internacional y el Informe Mundial de Human Rights Watch. Sin intenciones de analizar la construcción de este indicador, lo que se quiere destacar en este punto es el intento que realizan las autoras por otorgar basamento empírico a sus afirmaciones para refutar buena parte de los postulados de la justicia transicional.

Ahora bien, pese a que en el caso argentino se observa una acepción restringida de justicia para referir exclusivamente a los procesos de juzgamiento tal como reza el paradigma de la justicia de transición, un análisis de los elementos que componen la cuestión de la justicia permite poner en crisis esta vinculación. Sin intenciones de profundizar en este análisis, en la medida en que será desplegado en el próximo capítulo, vale señalar en primer lugar, que el carácter de *excepcionalidad* presenta algunos matices al estudiar las medidas involucradas en el proceso de juzgamiento en el caso argentino. Si bien tanto el juicio a las juntas como los denominados "juicios por la verdad" pueden considerarse como medidas excepcionales, la etapa de prácticas de juzgamiento reabierta en el año 2006 no parece obedecer a esta caracterización. Elementos tales como su tramitación en el fuero penal ordinario, a cargo de sus jueces naturales, y la ausencia de procedimientos penales particulares para su juzgamiento, permite aseverar que estas prácticas de juzgamiento no constituyen una excepcionalidad.

Una segunda cuestión a tener en cuenta se relaciona con la oposición establecida desde el paradigma de la justicia transicional entre verdad y justicia como alternativas dicotómicas. Tal como se ha señalado, el juicio a las juntas le ha valido a la experiencia argentina su caracterización como exponente de la "opción por la justicia", y esta elección fue considerada el motivo por el cual los perpetradores han mantenido oculta toda información relacionada con los crímenes cometidos en torno a un pacto de silencio. Sin embargo, en Argentina la implementación de juicios no se ha presentado como una alternativa excluyente a la búsqueda de verdad. Por el contrario, verdad y justicia fueron parte desde comienzos del período democrático de una estrategia conjunta para enfrentar el pasado dictatorial. [53]

Asimismo, la periodización a presentar dará cuenta de que en Argentina no hubo una tendencia uniforme hacia la realización de juicios. Períodos de justicia e impunidad se han alternado a lo largo del tiempo, e incluso en momentos en los cuales la "opción por la verdad" se impuso por sobre la justicia, los genocidas nunca aportaron información que permitiera esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura. De lo antedicho se desprende que la experiencia argentina no se trata de un "caso puro" de opción por la justicia, en la medida en que períodos de justicia e impunidad se han alternado a lo largo del tiempo; tampoco puede sostenerse que verdad y justicia

[53] El análisis de las primeras medidas propiciadas por el gobierno de Alfonsín apenas asumida la presidencia, entre las que constan tanto los decretos de enjuiciamiento de las juntas militares (157/83) como de creación de la comisión de la verdad nombrada como CONADEP (187/83), evidencian esta estrategia conjunta que involucró verdad y justicia, tal como se desarrollará en el capítulo 3.

impliquen alternativas excluyentes. Por el contrario, en el caso argentino verdad y justicia se han entrelazado de una manera compleja y cambiante, e incluso han presentado una influencia recíproca entre sí.

Finalmente, una última cuestión que merece ser tamizada es la que vincula el tratamiento judicial de los crímenes con la perpetuación de un clima de inestabilidad política propio de las transiciones democráticas. En el próximo capítulo se abordará este punto a la luz del caso concreto bajo estudio, que evidencia que los juicios contra los responsables de crímenes de Estado no necesariamente provocan tensiones al interior de las sociedades en las cuales estos procesos se desarrollan. En un sentido diferente, considero que dichos juicios *revelan* determinadas relaciones de poder que subyacen a esa sociedad, las disputas protagonizadas por actores en pugna que no son exclusivas de períodos transicionales sino por el contrario, se encuentren presentes en toda sociedad. A diferencia de la comunidad sin fisuras que se propone construir el paradigma de la justicia transicional, el conflicto es constitutivo de todo conjunto social, y el modo de resolución de estos conflictos difícilmente pueda encontrarse obturando la justicia para las víctimas del horror. En la misma línea, la existencia de estos conflictos así como su modo de expresión en el ámbito de los juicios no necesariamente indica que la democracia como modelo político institucional se encuentra en riesgo de ser socavada.

Estas últimas consideraciones llevan a enlazar la argumentación con el próximo postulado, en torno a la problemática de la transición. Si bien la cuestión de la temporalidad permea transversalmente a las conceptualizaciones de este campo de estudios, es en el análisis de la transición donde ésta cobra mayor dimensión, tal como se verá a continuación.

- La problemática de la transición

Tal como su nombre lo indica, la justicia transicional no ocurre en cualquier momento histórico sino que es contemporánea a los períodos de transición entre regímenes políticos. Pese a que este aspecto reviste una importancia fundamental, sus autores no suelen explicitar a qué hacen referencia al hablar de transición, por lo cual vale la pena detenerse brevemente en esta problemática.

Según O´Donell y Schmitter, la transición es el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro, período delimitado de un lado por la disolución de un régimen autoritario y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen

autoritario o bien el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Tras la disolución de regímenes autoritarios, la transición ocurre hacia "una otra cosa incierta", que bien puede propender hacia la instauración de una democracia como por el contrario, hacia la restauración de una forma más severa de gobierno autoritario (O'donnell & Schmitter, 1989).

La incertidumbre característica de esta etapa trae consigo el problema de un cambio social indeterminado. Este período que aparece fértil para las grandes transformaciones sociales suele acompañarse a su vez de una falta de parámetros estructurales que permitan guiar y predecir el resultado de los cambios acontecidos. En este sentido, pensar la transición implica asumir la existencia de elementos de imprevisibilidad junto a dilemas éticos irresolubles y confusiones ideológicas.

Así entendida la transición entonces, puede decirse que una de sus principales características es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas, sino que se hallan en disputa permanente por parte de los actores sociales que entablan las luchas por su definición. Un nuevo mapa político de ganadores y perdedores así como un conjunto de reglas y procedimientos que definen al régimen emergente se configura como resultado de estas luchas cuyo final es incierto. Por lo expuesto hasta aquí cobra sentido que en las definiciones de la justicia transicional se haga hincapié en su naturaleza transitoria sin definir exactamente en qué consiste el estado postransicional que se encuentra en el horizonte de las medidas tendientes a la reparación de los crímenes cometidos por los regímenes salientes.

Sin embargo, O´Donnell y Schmitter mencionan que incluso cuando no hay garantías de que esto suceda, la instauración y posterior consolidación de una democracia política constituye en sí misma un objetivo deseable. Este aspecto queda en evidencia al profundizar en las lecturas del campo de estudios de la justicia transicional, en tanto la indefinición respecto del estado postransicional justificada por la condición del fenómeno va cediendo para postular que el fin último de estas medidas reside en la consolidación de un estado de derecho. De aquí surge una de las tensiones principales que atraviesa la perspectiva de la justicia transicional, aquella que se da entre el estudio empírico de las transiciones -que como se ha dicho son inciertas e imprevisibles- y un posicionamiento prescriptivo respecto de la instauración democrática tras regímenes caracterizados por las violaciones a los derechos humanos.

En otras palabras, no es la transición hacia una otra cosa incierta lo que se encuentra en el centro de las preocupaciones de la justicia transicional, sino particularmente el pasaje de un régimen de

violencia hacia un régimen democrático. En esta línea puede leerse el informe de Naciones Unidas titulado "El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos", en el cual se define la justicia transicional como

> Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación (Naciones Unidas, 2004).

Puede afirmarse por tanto que el horizonte liberalizador que subyace a la justicia transicional está fundamentado en las concepciones morales, políticas y jurídicas ideales del estado de derecho adaptadas a contextos de profundas transformaciones sociales. A la luz de este desarrollo se entiende la vinculación entre la justicia transicional y las medidas tendientes a la estabilización política tras períodos de profundas transformaciones sociopolíticas, lo que a su vez tiene su correlato en una vasta producción que vincula la problemática con el estudio de los procesos de democratización (Barahona de Brito, 2002; Hayner, 2001; Skaar, 2011). De lo antedicho se desprende que si bien algunos autores contemplan todo período de transición entre regímenes políticos como parte del estudio de la justicia transicional, ésta se centra de manera hegemónica en el análisis de las transiciones democráticas.

Para profundizar en este aspecto, se vuelve necesario articular la problemática de la transición a la concepción de democracia que subyace a la justicia transicional, tarea a la que estará dedicado el próximo apartado. Antes de ello, quisiera agregar algunas reflexiones respecto de la ambigüedad con la que se aborda la cuestión de la temporalidad y que se encuentra profundamente enlazada a la cuestión de la transición. Dicha ambigüedad ha llevado a acuñar la noción de justicia postransicional para dar cuenta de aquellas medidas características de la justicia transicional realizadas al menos un ciclo electoral después de la transición a la democracia, para diferenciarlas de aquellas implementadas por el primer gobierno en el poder durante la transición (Skaar, 2012; Solís Delgadillo, 2015).

Esta conceptualización parece adecuada si se entiende que los procesos asociados a la justicia de transición culminan cuando tras un régimen autocrático finalmente se instaura un régimen democrático. Sin embargo, si se asume que el fin último de estas iniciativas se relaciona con los intentos por elaborar un pasado de violaciones a gran escala, resulta difícil advertir el aporte específico de esta distinción anclada en una temporalidad determinada para la comprensión de procesos sociales complejos que transcurren a lo largo del tiempo en diversas etapas. La pregunta

que está detrás de este señalamiento es ¿Cuándo puede decirse que están resueltos los problemas surgidos de las violaciones a los derechos humanos? Si es que en algún momento fuera posible dar por terminado este trabajo de elaboración social, ¿Cuál es el hecho que permite delimitar esta instancia?

Anudando la transición a una temporalidad determinada, es posible seguir profundizando estos interrogantes para pensar la justicia transicional como lo que podría llamarse una justicia fundacional. Dejando de lado el dinamismo y la incertidumbre que caracterizan por definición a las transiciones políticas, el interés principal de la justicia transicional en esta clave reside más que nada en la realización de un corte abrupto entre el pasado y el futuro. En este sentido, la transición representa la oportunidad de dejar atrás el pasado signado por la violencia y el conflicto y en oposición, el futuro encarna la promesa de paz y estabilidad de la mano de la democracia.

Los esfuerzos fundacionales de la justicia transicional están dirigidos entonces a enfrentar las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado reciente, pero no así a reflexionar en torno de las causas que le dieron origen. Esto impide en primer lugar, situar históricamente el conflicto social como parte de un proceso mucho más vasto, que comienza antes de la perpetración de los crímenes y difícilmente culmina con la instauración de un régimen democrático. Como consecuencia de esta invisibilización del conflicto, la transición es concebida como un espasmo más que como un proceso, en la lógica de una teleología política de un estado de violencia a uno de paz democrática y con su respectivo horizonte de construcción de una futura comunidad moral (Castillejo Cuellar, 2017).

Los interrogantes que se desprenden de la problemática de la transición tal como han sido reseñados son particularmente potentes para analizar el caso argentino, cuyas prácticas reparatorias no han estado circunscriptas al período de transición hacia la democracia. Por el contrario, su dinamismo no ha mermado –más bien, todo lo contrario- en los casi 40 años de institucionalidad democrática que esta tesis aborda. En este sentido, la caracterización de la transición de acuerdo al paradigma de la justicia transicional no aporta a la comprensión del proceso involucrado en la reparación de los crímenes de Estado en Argentina. Algo similar ocurre en relación a la noción de *justicia fundacional*, con la cual se hace referencia a la intención de los gobiernos transicionales por realizar un corte abrupto entre el pasado de violencia y el futuro caracterizado por la estabilidad político institucional. En el mismo sentido, tampoco la naturaleza

transitoria de la justicia transicional se puede aplicar a un proceso que se desarrolla en un lapso temporal de alrededor de cuatro décadas como el que aquí se estudia.

Finalmente, en cuanto a la noción de *justicia postransicional* que podría dar cuenta de las prácticas reparatorias implementadas durante los períodos que siguieron a la transición, se ha mencionado que la misma no se presenta como fructífera para la elaboración de un pasado signado por la violencia estatal. Esta afirmación se sustenta en la dificultad para dar por cerrado un proceso que va más allá de los ciclos electorales que hayan transcurrido desde la finalización de los gobiernos autocráticos, e incluso independientemente de cuán afianzada puede encontrarse la institucionalidad democrática al interior de una sociedad particular.

- La concepción de democracia

Tal como se viene sosteniendo, la democracia aparece como el objetivo último al que tienden las medidas que componen la justicia transicional. Ahora bien, ¿Qué se entiende por democracia de acuerdo al paradigma de la justicia de transición?

Más allá de las dimensiones normativas e institucionales que caracterizan la democracia, esta perspectiva hace hincapié en la ciudadanía como el principio rector de la democracia (O'donnell & Schmitter, 1989), la cual se considera a su vez como "una condición que los individuos se confieren unos a otros, donde cada uno de los cuales se concibe como valioso en sí mismo" (De Greiff, 2006, p. 423). Es en este sentido que la democracia en contextos transicionales se vincula con un cambio de paradigma en donde se pone en juego una mutación fundamental de valores, mediante los cuales aquellos grupos que hubieran presentado fuertes antagonismos confluyen en una nueva integración democrática, a partir de la articulación de nuevos acuerdos sociales (Filippini & Magarrell, 2006).

Resulta pertinente recuperar en este punto algunas consideraciones críticas del campo de estudios bajo revisión. En primer lugar, algunos autores sostienen que los procesos referidos como transiciones hacia la democracia desde este campo podrían definirse más específicamente como una conversión a una definición particular de democracia (Castillejo Cuellar, 2017; Grandin, 2007). En esta línea, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial prevaleció una interpretación social de la democracia asociada con la participación política popular y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerados de la sociedad. Sin embargo, los procesos de recuperación democrática que tuvieron lugar tras la finalización de dictaduras represivas en

América Latina a partir de los años sesenta se caracterizaron por el estrechamiento de sus concepciones de democracia, que pasaron a centrarse en los derechos políticos y legales en detrimento de los derechos sociales (Grandin, 2007).

En oposición al abordaje de la justicia transicional que construye narrativamente una fractura radical entre el pasado y el futuro mediante la promesa de construcción de una nueva sociedad, esta perspectiva -que aquí será referida como crítica al paradigma transicional- pone de relieve la importancia de hacer visible la dialéctica entre las fracturas y las continuidades que caracterizan el proceso de la transición. En sintonía con estas ideas, Castillejo Cuellar profundiza este señalamiento crítico al postular que

> Toda transición es al fin de cuentas un movimiento teleológico hacia una forma de capitalismo global donde, en casos de conflictos armados asociados a violencias crónicas estructurales, se fundamentan sobre una serie de continuidades más que de fracturas (Castillejo Cuellar, 2017, p. 3).

En síntesis, este abordaje plantea que desde la perspectiva de la justicia transicional se invisibiliza la continuidad de las diversas formas de violencia intrínsecas al capitalismo mediante la presentación del escenario transicional como un momento en el cual se presenta la ilusión de la emergencia de nuevas configuraciones sociales, sobre el establecimiento de una línea imaginaria entre un "pasado violento" y un "futuro porvenir". Es por ello que esta perspectiva se distancia de la centralidad otorgada a la jurisprudencia de transición y a la configuración de la institucionalidad por parte del paradigma transicional, para otorgar énfasis a los matices sociales y significados construidos por las personas y comunidades concretas en torno al Estado y a la construcción de la sociedad futura.

En estos términos, la democracia encarna para la justicia transicional la promesa de dejar atrás las confrontaciones para dar nacimiento a una nueva sociedad, en la cual las diferencias existentes podrán ser dirimidas bajo las reglas del juego democrático. Aparece por lo tanto como marco privilegiado –y excluyente- para la resolución de todo conflicto, impidiendo la reflexión en torno a las causas que originan la violencia en un orden profundamente desigual. La democracia se asocia así con el "post-conflicto", la "post-violencia", a la emergencia de una sociedad en la cual el consenso tiene un lugar central y la institucionalidad es capaz de contener todo posible enfrentamiento.

Considerando la dimensión de la temporalidad, la democracia representa el futuro en tanto abre el prospecto de una nueva sociedad imaginada, a la vez que permite dejar la violencia en el pasado

(Castillejo Cuellar, 2015, 2017). Esta fundamentación permite problematizar asimismo la noción de transición anteriormente desarrollada, trayendo la pregunta sobre las características de la inflexión que la misma propone. Nuevamente, el corte radical entre un pasado violento y un futuro en el cual el espacio de lo político se juegue exclusivamente en la democracia emerge como el postulado central en torno a la temporalidad de acuerdo a la justicia transicional.

La clave interpretativa de la transición a partir de la oposición entre dictadura y democracia, tópico central del paradigma de la justicia transicional, adquirió un peso diferencial en los diversos períodos de prácticas reparatorias implementadas en Argentina. En la inmediata posdictadura, atravesada por la preocupación en torno a la recuperación democrática, esta clave de lectura tuvo un peso significativo. Aunque en menor medida, persistió en los años subsiguientes durante los cuales mediante el llamado a la reconciliación se intentó consensuar la integración democrática de aquellos grupos sociales que habían protagonizado fuertes antagonismos en el pasado. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, con la democracia en su dimensión normativa como certeza, esta oposición se reconfiguró para dar lugar a cierta visibilización de algunas continuidades entre el período dictatorial y el tiempo histórico en el que éste se situó, tanto respecto del tiempo anterior como del tiempo posterior a su instauración.

Recuperando los señalamientos de la corriente crítica del campo de la justicia transicional, al mencionar cierta visibilización de las continuidades me refiero a que si bien la dictadura militar comenzó a ser considerada como parte de un proceso más extendido en el tiempo, algunos otros aspectos continuaron permaneciendo inobservados. Los desplazamientos en las representaciones acerca de las víctimas de la reparación son un terreno fértil para dar cuenta de este punto, tal como será profundizado en el capítulo 6. Por el momento basta decir que en los primeros años tras la recuperación democrática, la reconstrucción de las identidades de las víctimas puso el acento en su inocencia frente a la violencia estatal indiscriminada. Dicha reconstrucción se caracterizó por la preeminencia de datos identitarios básicos de las víctimas, tales como la edad y el sexo, a las que pronto se sumaron categorías como ocupaciones o prácticas religiosas.

Progresivamente, estas representaciones de las víctimas fueron incorporando sus prácticas políticas, encuadradas en una amplia diversidad de organizaciones sociales, de carácter gremial o partidario. Esto permitió dejar atrás la noción de víctimas pasivas con la cual se había identificado a los sobrevivientes y desaparecidos desde los comienzos del período bajo análisis. A su vez, la consideración de la militancia de las víctimas le dio un lugar en la narrativa al

conflicto social, entendido como constitutivo de la trama de relaciones sociales en las cuales tuvo lugar la dictadura militar y por consiguiente, permitiendo su historización. Esta visibilización del conflicto encuentra un límite cuando las luchas y los proyectos políticos que las organizaciones populares encarnaban son asimiladas a la violencia: la lucha insurgente no encuentra su lugar en las representaciones de las víctimas del genocidio. Este punto ilustra las limitaciones que surgen de la tensión señalada entre las formas de violencia como manifestación del conflicto social y la concepción de democracia que subyace al paradigma de la justicia transicional. En el mismo sentido, el postulado acerca de la necesidad de construir una sociedad democrática basada en el estado de derecho, esconde que las transiciones implican continuidades con formas de violencia que se encuentran en la base de los conflictos que se quiere reparar.

Habiendo analizado hasta aquí los postulados de la justicia transicional, se evidencia la fuerte vinculación existente entre este campo de estudios y la problemática de las reparaciones. Ya sea por concebir la reparación en sentido amplio como el objetivo al que tienden las medidas transicionales como una totalidad; ya sea por señalar la importancia de las medidas reparatorias como un elemento que forma parte de un conjunto más amplio de medidas, la dimensión reparatoria se encuentra siempre presente en los esfuerzos por conceptualizar la justicia transicional. Sin embargo, se ha observado que buena parte de sus postulados entran en crisis al momento de vincularlos con el caso argentino, lo que evidencia que la misma está lejos de encarnar un "caso puro" o "ejemplar" de justicia transicional. Asimismo, aquellos elementos que presentan cierta correspondencia en la experiencia bajo estudio, conllevan representaciones que presentan algunas limitaciones para la comprensión del proceso genocida perpetrado en Argentina, así como de su reparación. Este señalamiento obliga entonces a orientar la búsqueda hacia la construcción de un marco teórico político alternativo que permita comprender el caso argentino dando cuenta de sus particularidades.

Antes de avanzar en esa construcción, vale mencionar que incluso teniendo en cuenta las limitaciones y debilidades que presenta la perspectiva de la justicia transicional, uno de sus principales aportes a los estudios sobre la reparación reside en las múltiples tipologías construidas para analizar las medidas reparatorias. Estas categorizaciones constituyen el eje en torno del cual se desarrolla el análisis del próximo apartado.

4. Las tipologías construidas para analizar las medidas reparatorias

Las categorizaciones de las medidas reparatorias no se agotan en las dimensiones de la reparación integral, sino que comprenden además múltiples tipologías construidas para el análisis de dichas medidas, considerando diversas variables como las más relevantes para la comprensión de los procesos tendientes a la reparación. El objetivo de este apartado es presentar una sistematización de estas tipologías, con el fin de problematizar algunas categorías ampliamente utilizadas en diversos programas de reparaciones implementados en los últimos años, así como recuperadas por numerosos autores dedicados al estudio de la reparación.

En este marco, uno de los desarrollos más extendidos es el que puntualiza en la ***forma de justicia*** involucrada en las medidas reparatorias. Es importante señalar que éstas no aluden a la justicia en términos filosóficos sino que refieren al tipo de respuestas legales involucradas en las medidas reparatorias, entendidas como el objetivo que persigue la justicia en términos institucionales en períodos de transición.

En este sentido, es pionera la publicación de Kritz (1995) que distingue entre la *justicia penal* y la *justicia no penal*. Si bien la justicia transicional no puede ser discutida sin considerar su aspecto punitivo dada la importancia que reviste la cuestión de la responsabilidad así como la impunidad (Schabas, 2011), esta distinción deja ver que ya en ese entonces surgía la necesidad de pensar la justicia más allá del castigo a los responsables de los crímenes cometidos por el régimen saliente. Teitel (2000) complejiza años más tarde esta distinción y propone que así como la justicia transicional está compuesta por la *justicia penal*, comprendida por mecanismos de persecución judicial a los perpetradores, también deben considerarse la *justicia histórica* -referida a las leyes que impulsan la investigación de lo sucedido-, la *justicia administrativa* -que redefine los parámetros de conformación de la comunidad política vulnerados durante el régimen antecedente mediante el derecho público-, la *justicia constitucional* -expresada en las reformas constitucionales que dan origen al nuevo orden político- y la *justicia reparatoria* entre las formas de justicia asociadas a la reparación.. Esta última se compone por las iniciativas centradas en la reivindicación de los derechos de las víctimas, independientemente de las medidas concretas que sean promovidas a tal fin y la esfera del derecho en el que las mismas se inserten, involucrando así un amplio conjunto de medidas. La elección del término justicia reparatoria en tanto acepción restringida de la reparación puede dar lugar a cierta confusión, ya que las medidas asociadas a los demás tipos de justicia también comparten la intención de reparar a las víctimas, diluyendo así su especificidad.

Enfatizando en la importancia que reviste el hecho de que estos tipos de justicia sean llevados a cabo por el Estado que ha cometido las atrocidades que se intenta reparar, Wolfe (2013) retoma la tipología de Teitel e introduce dos modificaciones. En primer lugar, propone que la justicia administrativa así como la justicia constitucional sean ambas consideradas como *justicia legislativa*, en tanto se fundamentan en la instauración de medidas legislativas; y en segundo lugar, la verdadera novedad está en la incorporación de la categoría de *justicia simbólica* para abarcar aquellas acciones realizadas por el estado que tienen "significado simbólico", tales como la emisión de disculpas públicas y la creación de monumentos conmemorativos.

Por último, Elster (2006) realiza un aporte interesante al agregar entre las formas institucionales la *justicia política*, referida a la parcialidad en la administración de las demás formas de justicia por parte de los nuevos gobiernos, cuando de manera unilateral y sin posibilidad de apelación señalan a los criminales y deciden qué hacer con ellos. El ejemplo emblemático de la justicia política es el "juicio orquestado", aquel en el cual el resultado está determinado previamente.

Volviendo a la dimensión simbólica de las reparaciones a la que hacía referencia la *justicia simbólica*, ésta ha sido señalada en un segundo grupo de tipologías que apuntan a caracterizar las ***formas que asume la reparación***, intentando trascender su perspectiva jurídica para analizar las medidas contenidas en los programas de reparaciones de cobertura masiva para las víctimas de determinados crímenes.

En primer lugar, al interior del universo de medidas contenidas en dichos programas se distingue entre las *reparaciones materiales*, que incluyen compensaciones económicas así como paquetes de servicios como ser la provisión de educación, salud y vivienda; y las *reparaciones simbólicas*, comprendidas por ejemplo por disculpas oficiales, medidas de rehabilitación y la creación de días de conmemoración. Mientras que algunos autores presentan ambas categorías como excluyentes (De Greiff, 2008; Gómez Isa, 2007), otros señalan que toda reparación tiene un componente simbólico, especialmente desde la perspectiva de las víctimas, para quienes el significado de toda medida tendiente a reparar los daños implica un reconocimiento orientado a restablecer su dignidad (Beristain, 2010; Hamber, 2006). En este caso, se postula que la particularidad de las medidas de reparación simbólica se sitúa en el terreno de la construcción de sentido sobre los hechos ocurridos –aspecto que bien puede decirse corresponde a toda medida reparatoria-, ampliando incluso los límites de esta categoría para incluir medidas que a primera vista podrían categorizarse como materiales, como la construcción de un memorial o el cambio de nombre de

una calle en rememoración de las víctimas. En este punto, la distinción entre reparación materiales y simbólicas se vuelve difusa.

En aras de clarificar esta confusión, vale introducir una reflexión desde la perspectiva psicoanalítica, para postular que

> La reparación es simbólica porque pretende una compensación que siempre es un desplazamiento desde el daño real hacia un acto de justicia, pretende representarlo en magnitud cualitativa o cuantitativamente, pero nunca repara el daño real producido sobre la víctima (Guilis & Equipo de Salud Mental del CELS, 2005).

Ya ha sido señalado anteriormente que los daños que producen los crímenes de Estado son en sí irreparables, en tanto no es posible volver lo que se ha lesionado al estado anterior a producido el daño; en este sentido, la reparación no persigue la restitución de aquello que se ha perdido, dado que esto es imposible, sino de algo que representa lo que fue dañado. Desde esta perspectiva, la consideración de toda medida reparatoria como simbólica contribuye a una comprensión más adecuada acerca de la reparación.

En este punto, vale considerar que la concepción de prácticas reparatorias, al hacer pie en la práctica concreta mediante la cual se pretende llevar a cabo la reparación, permite trascender la disyuntiva entre medidas simbólicas y materiales, al considerar que ambas dimensiones resultan constitutivas de toda práctica tendiente a la reparación.

En segundo lugar, para analizar las formas que asume la reparación se distingue entre las *reparaciones individuales* y las *reparaciones colectivas* para hacer referencia a la distribución de cualquiera de las formas de reparación mencionadas. Esta categorización está vinculada al carácter de la víctima, y apunta a diferenciar entre los daños individuales que han afectado a las personas y los daños colectivos sufridos por los grupos victimizados (Beristain, 2010; De Greiff, 2008; van Boven, 2009). Una primera indicación al respecto es que no basta con que las medidas reparatorias estén dirigidas a un alto número de víctimas para ser consideradas colectivas, por lo tanto deben diferenciarse entre las reparaciones colectivas y las reparaciones masivas o procesos de reclamos masivos. Hablar de lo colectivo aquí no significa una suma de personas, tal como señaló Theriault en su crítica a las reparaciones colectivas implementadas desde la lógica del derecho liberal occidental. Más precisamente, la reparación colectiva evoca las medidas tendientes a reconstruir las comunidades afectadas a través de medidas de impacto colectivo situadas en el contexto de una comunidad (Beristain, 2010). Y en este sentido, una dificultad que presenta esta categorización es la naturaleza individualizada de muchos de los procedimientos

mediante los cuales se implementan las reparaciones, incluso en los casos de víctimas de daños colectivos. [54]

Ahora bien, toda vez que los daños individuales y colectivos se encuentran estrechamente relacionados, las reparaciones individuales y colectivas pueden ser pensadas no como dos formas excluyentes que puede asumir la reparación sino como dos dimensiones a considerar en toda medida reparatoria. Resulta sugerente la propuesta de Hamber (2006) para quien toda medida involucra una dimensión micro –centrada en las víctimas individuales- y una dimensión macro. Esta última no sólo es colectiva porque está dirigida a reparar los daños sufridos por las colectividades o grupos afectados, sino que pretende tomar en consideración los efectos de las medidas reparatorias en el mundo de lo social y lo político en el cual se inscriben los programas de reparaciones.

5. Las prácticas reparatorias

En los apartados precedentes se han reseñado críticamente los diversos abordajes en torno a la reparación de los crímenes de Estado que se desarrollaron en el escenario que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial y la construcción de un régimen de derechos humanos en la sociedad internacional. Habiendo analizado las fortalezas y limitaciones que presentan estas perspectivas, se ha optado por proponer una herramienta alternativa para el estudio de la reparación de los crímenes de Estado en Argentina.

La herramienta conceptual construida para el análisis de las iniciativas dirigidas a reparar el genocidio es la de *prácticas reparatorias*, entendidas como las acciones implementadas por el Estado en el seno de sus instituciones tendientes a la reparación de los crímenes que otrora cometió, y que tuvieron lugar con posterioridad a la dictadura militar. Al establecer como punto de partida las prácticas realizadas por el Estado a tal fin, esta perspectiva intenta distanciarse de los abordajes prescriptivos en relación a la problemática de la reparación, para posicionarse a partir de lo efectivamente existente. A diferencia de los enfoques que se han reseñado a lo largo de este capítulo, el aporte de esta definición reside en poner el foco en cuál es la acción específica y concreta que el Estado realiza en aras de alcanzar el objetivo de reparar el daño ocasionado. Tal como ha sido mencionado en la introducción, el observable de las prácticas reparatorias está constituido por los instrumentos jurídicos que impulsan al Estado a llevar a cabo las acciones con

[54] Para profundizar en los retos conceptuales que involucra la reparación colectiva, ver: Díaz (2009).

las cuales se propone la reparación. En este punto, es preciso señalar que si bien potencialmente pueden existir acciones del Estado tendientes a la reparación que no se hayan institucionalizado bajo la forma de instrumentos jurídicos, esta resulta la modalidad privilegiada y específica de las prácticas reparatorias debido a su capacidad performativa.

Recuperando el desarrollo presentado en el capítulo previo, la concepción de prácticas reparatorias es tributaria por un lado, de la noción althusseriana de práctica, lo que permite iluminar su dimensión ideológica, a la vez que poner el acento en su materialidad. Asimismo, al comenzar el análisis partiendo de las prácticas reparatorias es posible establecer un marco para el análisis de las representaciones en torno a la reparación, en virtud de la vinculación entre las prácticas y las representaciones que permea tanto la problemática de la ideología en la perspectiva de Althusser, como el abordaje en torno de las representaciones de acuerdo a los aportes de la epistemología genética de Piaget.

El recorrido que estructura esta tesis, y que comienza con las prácticas reparatorias y prosigue estudiando sus representaciones, resulta en primer lugar pertinente para analizar las disputas ideológicas que subyacen a las medidas involucradas en la reparación del genocidio. Pero principalmente, este modo de abordaje de la problemática permite establecer una vinculación –aunque más no sea que de manera exploratoria- de las prácticas reparatorias con el carácter de las relaciones sociales al interior de la sociedad posgenocida en la cual estas se sitúan. De esta manera, no sólo se vincula la problemática de la reparación con el entramado social en el que las mismas tienen lugar, sino que se habilita una interpretación acerca del posible horizonte de esa reparación, en articulación con la transformación de las relaciones sociales que se propuso el genocidio.

En el transcurso de esta investigación, al observar con este lente teórico metodológico las diversas medidas que conformaban el corpus de prácticas reparatorias a analizar, se hizo evidente que la multiplicidad de prácticas relevadas requería un ordenamiento para poder avanzar en su comprensión. Fue así que surgió la necesidad de construir una categorización de prácticas reparatorias, que se presentará a continuación.

5.a). Una propuesta de categorización de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado

Este apartado tiene por objetivo proponer una categorización construida para el análisis de las prácticas reparatorias implementadas por el Estado argentino entre 1983 y 2015, a partir de la

reelaboración de las múltiples categorías y tipologías propuestas para categorizar las medidas reparatorias construidas desde el campo de estudios sobre reparaciones, que han sido reseñadas críticamente en los apartados previos. La relevancia otorgada a la práctica involucrada en la reparación permitió comenzar el análisis desde un mínimo nivel de abstracción, como punto de partida para la construcción de niveles de análisis de mayor complejidad.

En este sentido, esta categorización distingue en primer lugar entre aquellas prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social y aquellas que tienen como destinatarios principales a las víctimas directas. Si bien ambas dimensiones se encuentran presentes en toda práctica reparatoria, esta distinción analítica permite diferenciar aquellas prácticas cuya implementación tiene una naturaleza individualizada de aquellas de carácter general, cuya implementación se propone reparar los daños sufridos por la sociedad afectada por los crímenes de Estado, las cuales se orientan a la construcción de la memoria en la sociedad del presente.

Entre estas últimas se ubican a) la *democratización* y b) la *memorialización*; mientras que las prácticas reparatorias dirigidas a las víctimas directas se dividen entre a) la *restitución*; b) la *indemnización*; c) el *juzgamiento* a los responsables de los crímenes de Estado y d) la *rehabilitación.* Finalmente, vale mencionar un conjunto de prácticas que bien podrían ubicarse en cualquiera de los conjuntos anteriormente mencionados, concebidas como prácticas de *reconocimiento*.

Como puede observarse, mientras que en algunos casos se han recuperado conceptos o categorías preexistentes por considerarse adecuadas para dar cuenta de la práctica involucrada, en otros casos se trata de nociones nuevas construidas a partir del análisis concreto del caso bajo estudio. Asimismo, esta categorización se encuentra abierta, en la medida en que si bien la totalidad de las prácticas reparatorias relevadas entre 1983 y 2015 constituyen expresiones estas nociones, bien puede ser ampliada en un futuro para incorporar categorías que no han sido identificadas hasta el momento. Seguidamente, se profundizará en el alcance de cada una de estas categorías.

Las prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social se han definido como aquellas cuyo propósito se vincula a la reparación de los daños sufridos por la sociedad en su conjunto, y por consiguiente, su implementación no incluye definiciones individualizadas respecto de las víctimas a quienes se encuentran dirigidas.

En primer lugar, cuentan entre ellas las *prácticas de democratización*. En su acepción liberal clásica, la democratización se encuentra ligada al reestablecimiento de los principios de

ciudadanía al interior de las instituciones estatales tras la recuperación democrática. Desde esta perspectiva, estas prácticas se vinculan con la vigencia de normas y procedimientos que conllevan derechos y obligaciones que han de ser conocidas y respetadas por todos los miembros de una sociedad, lo que implica a su vez que el Estado debe asumir la responsabilidad de sus acciones ante el conjunto social (O'donnell & Schmitter, 1989). La concepción de prácticas reparatorias de democratización que aquí se propone se inscribe en este marco, pero a la vez es heredera de la impronta que la justicia transicional le ha dado a la concepción de democracia. En este sentido, las prácticas de democratización no sólo se orientan a garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sino que en su práctica concreta se relacionan con la limitación del ejercicio del poder represivo del aparato de Estado, con el objetivo implícito de desarraigar la violencia como modo de resolución de la confrontación social.

Un segundo conjunto de prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social son las *prácticas de memorialización*, en tanto cristalización de las memorias en el espacio público. Esta denominación recupera la conceptualización propuesta por Schindel para referir a los procesos en que las memorias se inscriben y marcan en el territorio, mediante la instalación de monumentos, placas, recordatorios, o señalización de sitios en los que fueron perpetrados los crímenes de Estado. Al estampar las marcas de la memoria en la superficie urbana, éstas suponen una inscripción de determinadas representaciones del pasado que lejos de encontrarse selladas, son un terreno de disputa, disputa que impulsa el involucramiento de actores no estatales en las definiciones que atañen a las prácticas de memorialización.

En tercer lugar, vale mencionar las prácticas reparatorias de *reconocimiento*. El reconocimiento al que se hace referencia se enmarca en el derecho a la verdad, en la medida en que involucra la búsqueda de la verdad, así como la investigación para el esclarecimiento de lo sucedido, aspecto que resulta fundamental dadas las condiciones de clandestinidad en la que fueron cometidos los crímenes. Sin embargo, se las ha denominado prácticas de reconocimiento porque las mismas no se agotan en el establecimiento de la verdad de los hechos, sino que avanzan en arrojar luz sobre aquello que ha intentado ser mantenido en las sombras. Desde esta perspectiva, las medidas que cuenten entre sus propósitos iluminar la verdad de lo sucedido serán consideradas prácticas de reconocimiento. Ello implica otorgar a las mismas una amplia gama de matices, dado que en el reconocimiento de lo ocurrido está involucrado el reconocimiento no sólo de qué fue lo que pasó, sino también qué actores estuvieron involucrados en la perpetración de prácticas represivas así

como de quiénes emprendieron la lucha contra las mismas en una multiplicidad de iniciativas. Esta categoría se ubica en un lugar intermedio entre las prácticas dirigidas al conjunto social y las que se orientan a la reparación de las víctimas directas, dado que si bien en algunas prácticas los sujetos a quienes se dirige la misma se presentan con carácter individualizado, en otros casos, estas prácticas hacen hincapié en el impulso a la investigación y el esclarecimiento del período dictatorial sin dirigirse específicamente a las víctimas directas.

En cuanto a las prácticas reparatorias dirigidas a las víctimas directas, hay dos que revisten una importancia particularmente significativa en la experiencia argentina. Se trata de las *prácticas de indemnización,* que suponen el otorgamiento de una suma de dinero a las víctimas a modo de compensación económica por los daños sufridos, y de las *prácticas de juzgamiento* a los responsables de los crímenes de Estado. Estas últimas se artículan íntimamente con las prácticas de reconocimiento, en tanto la búsqueda de la verdad es una dimensión central de los procesos judiciales; a su vez, sus efectos se extienden al conjunto social, toda vez que en las sociedades modernas resultan una instancia fundamental en la construcción de representaciones, en la que el Estado establece un relato sobre los hechos ocurridos y un juicio moral sobre los mismos que es socialmente legitimado (Feierstein, 2015). No obstante, las prácticas de juzgamiento se consideran prácticas reparatorias dirigidas a las víctimas directas, en tanto la realización de juicios penales en el marco del derecho liberal requiere de la identificación de víctimas individuales sobre quienes recayeron los crímenes como condición para la apertura de cada proceso judicial, y es hacia la reparación de estas víctimas particulares a quienes está dirigido cada juicio en particular.

El análisis a presentar en el capítulo 3 permite inferir que la configuración particular entre prácticas indemnizatorias y prácticas de juzgamiento han marcado la impronta de los distintos períodos en que se identifican distintas constelaciones reparatorias, a las que corresponden a su vez representaciones hegemónicas diferenciales en torno a la reparación de los crímenes de Estado. Mientras que las prácticas de juzgamiento han oscilado entre la realización de juicios y su impedimento mediante la impunidad, las prácticas indemnizatorias han permanecido vigentes y en continua ampliación durante todo el período que esta tesis aborda. Esta valoración ha llevado a reservar un espacio predominante para su análisis, que incluye la construcción de algunas respuestas en torno a los interrogantes que surgen de este modo particular de instrumentar la reparación mediante el dinero.

Por su parte, también forman parte de las prácticas reparatorias dirigidas a las víctimas con carácter individualizado las prácticas reparatorias de *restitución*, que involucra medidas dirigidas a retornar tanto como sea posible a la situación anterior a que los crímenes se produzcan. Como se ha mencionado al revisar críticamente esta categoría, la imposibilidad de una restitución efectiva en los casos de crímenes como la muerte y la desaparición forzada pueden salvarse si se considera que esta restitución pueda ser considerada simbólica, al operar en el plano de las representaciones cuando lo dañado no pueda devolverse al estado anterior a la comisión de los crímenes. Si bien en la exposición del próximo capítulo se enumerarán distintas prácticas de restitución, debe señalarse como un ejemplo prototípico de esta categoría en el caso argentino a los casos de *restitución* de hijos de desaparecidos. Esta demanda ha operado como norte para la acción de organismos de derechos humanos constituidos en torno de la búsqueda de aquellos niños que tras nacer en cautiverio o bien ser secuestrados junto con sus padres, fueron separados de sus familias biológicas y entregados a familias apropiadores, en cuyo seno ha transcurrido su vida con sus identidades adulteradas.

Finalmente, las prácticas de *rehabilitación* se vinculan a la recuperación de las víctimas en tanto superación de las secuelas de los acontecimientos traumáticos vividos como producto de la violencia estatal, secuelas que se considera que pueden recaer en el terreno de la salud física como en el campo de la salud mental. Estas prácticas han ingresado al repertorio de la reparación tardíamente en el caso a analizar, tal como será explicitado en el capítulo siguiente.

Hasta aquí se ha desarrollado la categorización de prácticas reparatorias construidas para el análisis de las medidas reparatorias en el caso argentino. A continuación, esas categorías se pondrán en movimiento. Al introducir una mirada procesual sobre las prácticas reparatorias, se ha construido una periodización que permite identificar entre los años 1983 y 2015 tres períodos al interior de los cuales se constatan modos hegemónicos diferenciales de comprender la reparación. A la presentación de esta periodización y al análisis de sus tres momentos están abocados los próximos dos capítulos.

Capítulo 3

Hacia una periodización de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado en Argentina (1983-2015)

A partir de la reapertura democrática en Argentina, se advirtió tempranamente la necesidad de llevar a cabo medidas tendientes a dar respuesta a los crímenes cometidos durante la dictadura militar saliente. Desde entonces, avances y retrocesos en el proceso de juzgamiento a los responsables de dichos crímenes junto a un vasto universo de políticas públicas de reparación configuraron un complejo escenario que continúa abierto en la actualidad. En este marco, el objetivo de este capítulo es proponer una periodización para el análisis de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado en Argentina entre 1983 y 2015, en función de la categorización desarrollada en el capítulo precedente.

Entre los objetivos que guían la construcción de esta periodización, cuenta la realización de un relevamiento exhaustivo y sistemático del conjunto de prácticas reparatorias que tuvieron lugar durante los años bajo estudio. Esta tarea, que hasta el momento no había sido emprendida, no sólo resulta fundamental para brindar un soporte histórico concreto al análisis a desarrollar en esta tesis, sino que servirá de base para futuras investigaciones que aborden las iniciativas tendientes a la reparación del genocidio en Argentina. Esta sistematización ha permitido identificar algunas tendencias en cuanto al devenir de las prácticas reparatorias que hacen posible su periodización en tres etapas, las cuales analizaré a lo largo de dos capítulos consecutivos.

Mientras que en este capítulo se presentará la periodización construida para el análisis del conjunto de prácticas reparatorias referidas, el próximo capítulo estará dedicado exclusivamente a profundizar en el desarrollo de las prácticas indemnizatorias, una vez presentadas en el marco de esta periodización. Esta distinción es meramente analítica, dado que las prácticas indemnizatorias no sólo formaron parte sino que cumplieron un papel esencial en las constelaciones reparatorias a lo largo de los diversos períodos. En la misma línea, para comprender las prácticas indemnizatorias cabalmente, es preciso dar cuenta de las vinculaciones que las enlazan al universo de prácticas reparatorias que aborda esta periodización. Con el objetivo de facilitar una lectura integradora de las prácticas indemnizatorias en el marco general que las contiene, las mismas serán enunciadas a lo largo de su recorrido, dejando su reconstrucción pormenorizada entre los objetivos a abordar en el capítulo siguiente. Desde este punto de partida, el desarrollo

del presente capítulo conlleva el riesgo inherente al planteo de las generalizaciones, pero a su vez resulta fundamental para brindar una perspectiva completa del cuadro al análisis particular de las prácticas indemnizatorias que constituyen el objeto de esta investigación.

El principal hallazgo que se desprende de esta periodización de prácticas reparatorias corresponde a la identificación del lugar significativo que ocuparon las prácticas de juzgamiento y las prácticas indemnizatorias al interior de las diversas constelaciones reparatorias. Desde este punto de partida, la hipótesis que ha guiado esta reconstrucción indica que a partir de la dinámica entre ambos tipos de prácticas es posible comprender la reparación de los crímenes de Estado así como sus representaciones hegemónicas durante todo el período posdictadura. Profundizando en este sentido, quiero postular que esta configuración puede asociarse a un contrapunto entre justicia y reparación, en el cual el extremo justicia está asociado a las prácticas de juzgamiento, mientras que la reparación se vincula con las prácticas indemnizatorias.

Una mirada conjunta hacia ambos tipos de prácticas permite afirmar en primer lugar, que estas tuvieron comportamientos dispares: mientras que las prácticas indemnizatorias se mantuvieron constantes y crecientes desde su surgimiento, las prácticas de juzgamiento fueron las que presentaron mayor variabilidad, alternando períodos de mayor dinamismo con otros de relativa parálisis. Sin embargo, el peso específico de cada una de ellas, así como su gravitación en el tiempo obedece en ambos casos a motivos diferentes.

En cuanto a las prácticas indemnizatorias, se destaca el hecho de que al interior de un universo compuesto por múltiples medidas tendientes a la reparación, el Estado argentino mantuvo institucionalmente la denominación genérica de *"Leyes Reparatorias"* para referir exclusivamente a las políticas de reparación económica. A su vez, con el correr de los años, y sin importar los cambios de signo político de los sucesivos gobiernos, el modelo reparatorio basado en las *indemnizaciones* no sólo se mantuvo vigente sino que se fue profundizando de manera continua. Esta profundización no sólo obedeció a la ampliación permanente del universo de beneficiarios alcanzados por la reparación económica mediante la sanción de nuevos instrumentos reparatorios, sino que también se constata en la curva siempre ascendente que dibujan las indemnizaciones otorgadas por parte del Estado a los beneficiarios de la reparación económica. Si bien los datos que sustentan esta afirmación serán analizados específicamente en el próximo capítulo, resulta relevante mencionar que a partir de una reconstrucción realizada en base a la información disponible, se ha verificado la tendencia creciente que presentaron las

prácticas indemnizatorias en el período bajo análisis. Este incremento persistente así como su simbolización por parte del Estado como reparaciones es lo que ha llevado a privilegiar el estudio de las reparaciones económicas en el marco de esta investigación.

Por otra parte, pese a la inconstancia que caracterizó a las prácticas de juzgamiento, la relevancia otorgada a las mismas se debe en primer lugar, a que el reclamo por juicio y castigo no ha dejado de ser la columna vertebral de las demandas de la sociedad argentina hacia el Estado incluso desde tiempos dictatoriales. Pero además, fueron las transformaciones en el terreno de las prácticas de juzgamiento las que concatenaron los pasajes entre los sucesivos períodos que conforman la periodización a presentar. Esto permite aseverar que las mismas ejercen una influencia diferencial en el conjunto de prácticas reparatorias, y que el hecho de que se presenten en su acepción de justicia, o bien en su contracara de impunidad, genera desplazamientos en el conjunto de prácticas reparatorias así como en sus representaciones hegemónicas. En este sentido, las prácticas de juzgamiento se han configurado como el ámbito de disputa privilegiado al interior de las múltiples prácticas reparatorias implementadas en el período que esta tesis analiza. [55]

Hechas estas consideraciones generales, se ha construido una periodización para el análisis de las prácticas reparatorias que consta de tres momentos.

La primera etapa comienza con el retorno de la institucionalidad democrática en 1983, y se caracterizó por sentar las bases sobre las cuales la transición fue representada en clave de oposición entre dictadura y democracia. A ello contribuyeron principalmente un conjunto de prácticas de juzgamiento y reconocimiento que otorgaron una impronta específica a este momento fundacional. Junto con estas prácticas emblemáticas, durante este período fueron llevadas a cabo la mayor cantidad de prácticas de restitución de toda la etapa democrática. El final del mismo obedeció por un lado, a la sanción de la primera de las consideradas "leyes de impunidad", conjuntamente con la implementación de la primera práctica indemnizatoria relevada. Esta combinación daría por clausurado el breve interregno transicional, dejando sobre

[55] El análisis de las representaciones de la reparación que subyacen a las prácticas de juzgamiento es una de las principales deudas pendientes que deja el saldo de esta investigación. Si bien como se ha mencionado en la introducción, el interés por comprender la dimensión reparatoria de los juicios estaba presente en sus aproximaciones iniciales, el propio curso del proceso investigativo fue desplazando su centralidad para privilegiar el análisis de las prácticas indemnizatorias, mucho menos abordadas desde el campo académico y de fundamental relevancia en la construcción de las representaciones en torno de la reparación durante todo el período democrático. Se espera poder profundizar en esta indagación pendiente en el marco de futuras investigaciones.

la mesa las disputas centrales que acompañarían durante todo el período bajo análisis el despliegue de las prácticas reparatorias.

El segundo período presentó una configuración reparatoria que combinó por un lado, el detenimiento del accionar de la justicia mediante el despliegue de prácticas de juzgamiento en su contracara de impunidad y por el otro, la creciente hegemonía de las prácticas indemnizatorias. Esta etapa será presentada a partir de tres subperíodos, correspondientes a la emergencia, la consolidación y el declive de la configuración reparatoria reseñada, respectivamente.

Finalmente, un tercer momento comenzó con la declaración de la nulidad de las leyes de impunidad que posibilitaron la reapertura de los juicios contra los responsables del genocidio, los cuales permearon el conjunto de prácticas reparatorias y generaron transformaciones en cuanto a las representaciones acerca de la reparación. En un contexto atravesado por el impacto producido por las prácticas de juzgamiento, este período -que se divide a su vez en dos subperíodos- se ha caracterizado por una configuración reparatoria tendiente a la integralidad, atendiendo a la extensión e interrelación que presentaron las prácticas reparatorias durante el mismo. El puente entre ambos subperíodos fue ubicado en la segunda desaparición de Jorge Julio López, en torno a la cual se evidenciaron los alcances y limitaciones de las prácticas de juzgamiento y sellaron el curso de su profundización.

Dado que la construcción de esta periodización estuvo guiada por el objetivo de identificar las tendencias generales que presentaron las prácticas reparatorias, las distintas etapas que la componen no deben concebirse como compartimentos rígidos o estancos. En este sentido, ninguno de los períodos presenta una configuración reparatoria hegemónica "pura", sino que por el contrario, junto a ella se presentan otras prácticas reparatorias dispersas, que hacen a la complejidad y riqueza de cada período. A su vez, si bien se han establecido límites que separan las etapas entre sí, estos límites no obedecen a un hito singular, sino a una configuración en la que se encuentran involucradas más de una práctica reparatoria. Como consecuencia, el modo de delimitación de estas fronteras da cuenta de la imbricación entre los elementos que componen los distintos períodos analizados.

Por otra parte, con el objetivo de situar la reparación al interior de la sociedad concreta en la que las prácticas reparatorias tienen lugar, esta periodización incorpora elementos relativos al contexto sociohistórico en el cual las mismas se desarrollan. Como parte fundamental de este contexto situado, esta tesis propone una visión del Estado en profunda interrelación con otros

actores sociales. El carácter relacional de las prácticas reparatorias permite considerar las tramas que se tejieron entre el Estado, las víctimas directas del genocidio y los organismos de derechos humanos en torno a la cuestión de la reparación. En este sentido, se consideran los posicionamientos que estos actores fueron adoptando en relación a esta problemática, en tanto resultaron fundamentales para delinear el camino a seguir por las prácticas reparatorias.

1. El fin de la dictadura

El 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín, tras la salida del gobierno de la Junta Militar que se había propuesto la transformación de la sociedad argentina en nombre de la lucha antisubversiva. Enmarcado ideológicamente en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) había profundizado la represión política a una escala sin precedentes, llevando la desaparición forzada de personas al rango de política de Estado y estableciendo una red de más de 700 centros clandestinos de detención. En este marco, la restauración democrática estuvo signada por la complejidad que implicaba enfrentar estos crímenes con las herramientas del estado de derecho, aspecto sobre el cual se había desplegado la campaña electoral del presidente entrante. [56]

La pérdida de legitimidad del régimen producto de la derrota en la guerra de Malvinas en 1982 aceleró la apertura política y el consiguiente llamado a elecciones por parte de los militares. En este contexto, los medios de comunicación rompieron el silencio instalado durante los años previos en torno a los crímenes cometidos durante la dictadura, dando lugar a la difusión de las denuncias de los familiares de los desaparecidos. [57] La crisis económica terminó de delinear un escenario de descontento por parte de la población que ha llevado a caracterizar la transición argentina como una "transición por colapso" en la que el doble fracaso político y militar del régimen produjo su derrumbe, abriendo un nuevo escenario político (O'donnell & Schmitter, 1989). [58]

[56] La campaña electoral de 1983 adoptó el tono histórico de confrontación entre el peronismo y el radicalismo una vez disuelta la Multipartidaria. Mientras que el radicalismo encabezado por Raúl Alfonsín había recogido y hecho propias muchas de las demandas de los organismos de derechos humanos, tal como evidenciaba la elección de la consigna "*Somos la vida*", el candidato del peronismo Italo Luder había mantenido una posición ambigua respecto de la cuestión militar que lo llevó a la derrota en el proceso eleccionario (Jelin, 1995).

[57] El modo en que estas denuncias fueron presentadas llevó a caracterizar estas representaciones con el nombre de "El show del horror". Para profundizar, ver Feld (2010).

[58] En la literatura acerca de las transiciones en el campo de las ciencias políticas es extensiva una distinción entre aquellas transiciones "por colapso" del régimen y aquellas transiciones "pactadas" en las cuales se trata de una transición concertada entre los gobiernos autoritarios con el ámbito de la sociedad civil. Algunos trabajos que hacen

Si bien los efectos producidos por la derrota en la guerra de Malvinas y la crisis interna que la misma produjo no deben soslayarse, el fin de la dictadura no obedeció a una caída del régimen por su propio peso, sino que fue el corolario de ciertas dinámicas que ya habían comenzado a configurarse antes de la derrota militar. [59] Durante los años previos a la guerra, diversos actores sociales se habían organizado en resistencia a la dictadura militar, creando las condiciones que hicieran posible su derrumbe. En primer lugar, hacia 1981, la *Multipartidaria* como espacio de convergencia del arco político había empezado a reclamar el llamado a elecciones libres y había intensificado la participación de las estructuras partidarias en la escena pública. [60] Por su parte, el movimiento obrero había comenzado a reorganizarse a partir de la conformación de la "Comisión de los 25" en 1979, cuyas acciones confluyeron en un paro general bajo la consigna "Paz, Pan y Trabajo" el 30 de marzo de 1982. [61] Finalmente, el *movimiento de derechos humanos* –que nucleaba algunos agrupamientos creados con anterioridad junto a muchos organismos que se habían conformado al calor de la lucha contra la dictadura [62]- se había consolidado como un actor de relevancia en la esfera pública, por su incansable denuncia de las violaciones a los derechos humanos, el reclamo por "Juicio y castigo" a sus responsables y la organización de la difusión de información al respecto tanto a nivel local como internacional. [63]

En este contexto, la apertura democrática estuvo caracterizada por la debilidad de la dictadura para imponer sus condiciones al gobierno entrante. Frente a esta imposibilidad, el 28 de abril de

---

propia esta distinción son Barahona de Brito (2002), Linz (1990), O´donnel y Schmitter (1989). Para consultar otras tipologías desarrolladas para analizar las transiciones políticas, ver Mainwaring (1992), Huntington (1991).

[59] Desde fines de 1977, una vez que el gobierno reconoció haber triunfado en la "guerra antisubversiva", habían comenzado a surgir diversos proyectos al interior de las Fuerzas Armadas tendientes a ordenar la transición política. Entre las principales iniciativas en este sentido se destacaron la invitación a la CIDH en 1979 en un intento por blanquear la política represiva del régimen – con resultados contrarios a los esperados- y un primer intento de reorganización de la actividad política conocido como "el diálogo político" (González Bombal, 1991).

[60] La Multipartidaria estaba compuesta por los dirigentes de los principales partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Partido Intransigente, Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo. Para una genealogía y análisis del surgimiento de la Multipartidaria, ver Velázquez Ramírez (2015).

[61] Para profundizar en la resistencia obrera a la dictadura militar ver Basualdo (2006), Pozzi (1988), Abós (1984).

[62] El *movimiento de derechos humanos* para el momento de la recuperación democrática estaba conformado por un organismo de larga data –la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-, otros dos colectivos de reciente creación – la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y un conjunto de organismos creados durante la dictadura militar: las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo, la Comisión de Desaparecidos y Presos por Razones Políticas, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio de Paz y Justicia. Poco después, en octubre de 1984, fue presentada públicamente la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), primer organismo de derechos humanos formado por sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, que desde entonces se ha incorporado al movimiento de derechos humanos y ha tenido una importante participación en la lucha por memoria, verdad y justicia.

[63] Para profundizar en la literatura sobre el movimiento de derechos humanos ver, entre otros: Alonso (2008), Barros (2008), Da Silva Catela (2001), Jelin (1995).

1983 emitió el *Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo*, en el cual asumía su responsabilidad en la guerra librada contra la subversión y relegaba al "juicio de Dios" los errores y excesos que pudieran haberse cometido. Este documento de coyuntura con el cual se pretendía condicionar al futuro gobierno adquirió fuerza de ley con la sanción de la ley 22.924/83 de "*Pacificación nacional*", sancionada un mes antes de los comicios presidenciales. En su texto, la ley también conocida como "*de Autoamnistía*", declaraba extintas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, garantizando así la impunidad de los crímenes perpetrados. En igual sentido, el decreto confidencial 2726/83 que ordenaba la destrucción de toda documentación relacionada con la lucha contra la subversión completaba el marco jurídico desde el cual los militares pretendían rehuir la responsabilidad por los delitos cometidos.

En el marco de estos condicionamientos se celebraron las elecciones que dieron el triunfo al candidato radical, quien tras haber recogido durante la campaña muchas de las demandas propias del movimiento de derechos humanos, se había posicionado a favor de derogar la ley de Autoamnistía, lo que posibilitaría la puesta en marcha de mecanismos de justicia retroactiva para los responsables de las acciones ilícitas cometidos durante la dictadura. Sin dudas el tratamiento de los crímenes de la dictadura ocupaba un espacio preponderante en la agenda política de la transición.

2. Primer período: Los albores de la democracia

Las primeras prácticas reparatorias implementadas por el gobierno entrante fueron las que le valieron al mismo su encuadre en el marco de la justicia transicional, en tanto marcaron la clave interpretativa de la transición a partir de la oposición entre dictadura y democracia, tópico central del mencionado paradigma. Esta concepción se vio desplegada en un conjunto de medidas de amplia resonancia que tuvieron lugar principalmente en las esferas de la justicia y el reconocimiento, que serán presentadas conjuntamente debido a la influencia recíproca que presentaron entre sí. Por otra parte, en cuanto a las prácticas orientadas a las víctimas directas, este período se caracterizó por la mayor presencia de prácticas de restitución de toda la etapa democrática, que en este caso tuvieron el objetivo de recomponer las relaciones laborales afectadas por el hostigamiento desplegado contra los trabajadores durante la dictadura militar.

Esta etapa de la periodización se extendió hasta la entrada en escena de la legislación de impunidad así como de la primera práctica indemnizatoria, cristalizada en la ley 23.466/86, mediante la cual se otorgaba una pensión a los familiares de personas desaparecidas, y que se abordará en profundidad en el próximo capítulo. A partir de entonces, quedó inaugurado un nuevo modo de concebir el tratamiento de los crímenes producidos en el marco del genocidio, que signará el modo en que el Estado se ha propuesto su reparación desde entonces, al mismo tiempo que marca el fin de la impronta transicional propia de las primeras prácticas reparatorias.

2.a) Prácticas de juzgamiento y prácticas de reconocimiento para alumbrar la transición

El puntapié inicial en relación a las prácticas de juzgamiento estuvo dado por los decretos 157/83 y 158/83 firmados por Alfonsín apenas asumida la presidencia, que ordenaban enjuiciar a los responsables de las "formas violentas de acción política cuya presencia había perturbado la vida argentina" hasta entonces. El reconocimiento por su parte vendría con la constitución de una comisión para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, que llevó el nombre de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Los citados decretos emitidos tras la anulación de la ley de Autoamnistía [64] sentaron las bases de la política de justicia retroactiva del gobierno, que había sido pensada sobre el principio de los tres niveles de responsabilidad que permitía circunscribir los juicios por violaciones a los derechos humanos a la esfera de los grandes responsables. [65] [66] Mientras que el decreto 157/83 ordenó el procesamiento de siete jefes guerrilleros, el decreto 158/83 instaba a la realización de un juicio contra las juntas militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La controversia en torno a la jurisdicción de los juicios fue saldada con la reforma del Código de Justicia Militar –que será abordada en el próximo apartado-, tras la cual los tribunales civiles

[64] La ley 23.040 que declaraba la nulidad de la ley de autoamnistía fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso el 22 de diciembre de 1983.

[65] Estos tres niveles de responsabilidad eran entendidos de acuerdo a la siguiente concepción: "Identificamos tres categorías de autores respecto a los aberrantes delitos cometidos: 1, los autores intelectuales, es decir, aquellos que planearon la represión y dieron las órdenes; 2, los que se excedieron en el cumplimiento de ellas sin justificación alguna salvo sus propios motivos, su crueldad o su apetencia de poder, y 3, aquellos que estrictamente ajustaron su accionar a las órdenes impartidas. De estos tres grupos, sólo a los últimos convenía concedérselas la posibilidad de reinsertarse, sin juzgamiento, en el proceso democrático" (Nino, 2015, p. 19).

[66] Para un análisis pormenorizado del diseño de las políticas de juzgamiento del gobierno de Alfonsín, así como de los obstáculos jurídicos y políticos que surgieron del mismo y sus intentos de resolución, ver Nino (2015).

fueron autorizados a hacerse cargo del proceso en caso de que el mismo fuera demorado injustificadamente.

Los decretos 157 y 158 no sólo delinearon el devenir de los juicios, sino que cristalizaron una lectura política del conflicto que proponía a la insurgencia como antecedente de la violencia estatal. En este sentido, a diferencia de los militares que serían juzgados por los actos ilícitos cometidos entre 1976 y 1979, el accionar de la guerrilla sería indagado a partir de 1973, incluyendo así los actos cometidos previo al golpe militar, lo que permitía concebir la violencia estatal como respuesta a la violencia insurgente. La equiparación entre el accionar de los grupos armados y la represión estatal en tanto actos criminales e igualmente ilícitos que subyace a estas medidas, frente a una sociedad que permaneció ajena y víctima de dos violencias contrapuestas es conocida hasta el presente como *la teoría de los dos demonios*. [67]

A tan sólo cinco días de finalizadas las tareas de la CONADEP con la entrega de su Informe final, el tribunal castrense declaró como "inobjetables" las órdenes que regularon la actividad militar contra la subversión, lo que llevó a que la Cámara Federal asumiera el control del juicio. Como resultado, fue promovido un proceso judicial sin precedentes, conocido como el Juicio a las Juntas Militares (causa 13/84), en el que fueron condenados los responsables máximos del gobierno militar. [68] El juicio penal tuvo lugar entre abril y octubre de 1985 y llevó al banquillo de los acusados a los nueve miembros de las Juntas Militares que gobernaron durante el PRN, por una multiplicidad de delitos que surgían del análisis de los más de 700 casos presentados para su tratamiento en el juicio oral y público. [69]

En paralelo a las prácticas relacionadas con el tratamiento jurídico del pasado, una práctica de reconocimiento fue moldeando la elaboración de una verdad en torno a los hechos bajo juzgamiento. Se trató de la conformación de la CONADEP, pionera entre las experiencias de creación de comisiones de la verdad a nivel mundial y cuyas tareas produjeron un fuerte impacto en la incipiente democracia argentina. Una vez desestimada la propuesta inicial de los

[67] Ver referencias en la nota 6 de la Introducción de esta tesis.

[68] Para una genealogía sobre los usos y resignificaciones sociales del juicio a las juntas ver Galante (2019).

[69] El 9 de diciembre de 1985 fue dictada la sentencia correspondiente a 709 casos testigos seleccionados de los 8961 registrados por la CONADEP. La misma condenó a prisión perpetua a Jorge Rafael Videla (Ejército) y Emilio Massera (Armada); a 4 años y medio a Orlando Agosti (Aeronáutica); a 17 años a Roberto Viola (Ejército); a 8 años a Armando Lambruschini (Armada); y absolvió a Leopoldo Fortunato Galtieri (Ejército), Omar Graffigna (aeronáutica), Jorge Anaya (Armada) y Basilio Lami Dozo (aeronáutica) (Silveyra, 2020, p. 8).

organismos de derechos humanos que promovían la creación de una comisión bicameral[70], la CONADEP tomó la forma de una "comisión de personalidades", convocando a legisladores de ambas cámaras del Congreso y figuras públicas de prestigio en representación de la sociedad civil.

De acuerdo al decreto 187/83 de creación de la CONADEP, sus funciones estaban orientadas a la investigación del sistema de desaparición de personas, y contemplaban la recepción de denuncias y pruebas y su remisión a la justicia, la averiguación del paradero de los desaparecidos y de los niños apropiados, y la denuncia de todo intento de ocultamiento o destrucción de pruebas relacionadas con los hechos investigados. Sobre una vasta base de testimonios de sobrevivientes y la inspección in situ de los centros clandestinos de detención identificados a lo largo y ancho del país, la CONADEP elaboró su informe final, que fue publicado con el nombre de *Nunca Más*.[71]

El informe, cuyo prólogo es considerado como una de las expresiones más acabadas de la mencionada *teoría de los dos demonios*, cristalizó la narrativa humanitaria que había ido homogeneizando el lenguaje de las denuncias durante el transcurso de la dictadura, la cual ponía el acento en la inocencia de las víctimas frente a la violencia estatal indiscriminada, en detrimento de la clave revolucionaria con la que había sido denunciada hasta entonces la represión política desde la matriz de la lucha de clases (Crenzel, 2008). Pero además, entre los efectos políticos y jurídicos que produjo, debe destacarse la elaboración del conocimiento público sobre la dimensión de las desapariciones y la conformación de un corpus probatorio de gran envergadura que terminaría de clausurar la estrategia oficial de juzgamiento a las cúpulas militares. [72] [73]

[70] El principal argumento a favor de la constitución de una comisión bicameral versaba sobre la expectativa en que la misma diera lugar al desarrollo de un juicio político por los delitos cometidos durante la dictadura, que sentara precedente para un futuro juicio penal ordinario, en un contexto en el cual no se confiaba en la actuación de la justicia como institución. Para profundizar sobre la propuesta de la comisión bicameral ver Novaro (2009) y Mignone (1991).

[71] Para profundizar en los procesos relativos a la producción, circulación y recepción del Nunca Más, ver Crenzel (2008).

[72] La tarea realizada por la CONADEP trajo consigo la necesidad de un organismo encargado de la sistematización de toda la información recabada para ser entregada a la justicia, así como de la recepción de nuevas denuncias y de llevar a cabo las recomendaciones realizadas en el Informe Final. Fruto de esta necesidad fue creada la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales, en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación (Decreto PEN 3090/84). La creación de esta subsecretaría – a la cual le fue asignada la custodia de la documentación reunida por la CONADEP- puede concebirse como una práctica reparatoria de reconocimiento, por su contribución a la consideración de los derechos humanos como política de estado. El mismo sentido adquiere la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a través de la ley 23.054 sancionada el 1 de marzo de 1984.

Con las siguientes palabras el fiscal Strassera finalizó el Juicio a las Juntas:

> Señores jueces: quiero renunciar a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más. [74]

Esta alocución hizo evidente la vinculación entre las prácticas de juzgamiento y las prácticas de reconocimiento configuradas en la creación de la CONADEP y mostraron el entrecruzamiento entre los saberes construidos públicamente y la construcción de una verdad jurídica. En este sentido, pese a la limitación impuesta a la CONADEP en cuanto a sus alcances jurídicos [75], la justicia se convirtió en un interlocutor central para la Comisión, no sólo porque la información recabada había servido de prueba en el Juicio a las Juntas, sino también porque todas las denuncias recibidas en el marco de la investigación fueron remitidas para su tratamiento en los tribunales. [76]

La sentencia librada en el Juicio a las Juntas estuvo lejos de significar el fin del proceso de juzgamiento. Por el contrario, en el punto 30 el tribunal posibilitó la ampliación del alcance de los juicios, al establecer el deber de investigar y enjuiciar a "todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones". [77] Sumado al conocimiento de la magnitud de los crímenes cometidos tras las audiencias del Juicio y la labor emprendida por la CONADEP, "lo que era el "máximo imaginable" en 1983 se volvió un "mínimo inaceptable" entre 1985 y 1986." (Novaro, 2010, p. 50). La intención original de Alfonsín de procesar y condenar a algunos altos oficiales como parte de una estrategia de "autojuzgamiento" de las Fuerzas Armadas, que desde su perspectiva permitiría cumplir con sus promesas electorales sin enemistarse con el actor militar en su conjunto, comenzaba a vislumbrarse como insuficiente para responder a las crecientes demandas de justicia (Acuña & Smulovitz, 2007, p. 37).

---

[73] El movimiento de derechos humanos no adoptó una posición unívoca ante la creación de la CONADEP. Mientras que algunos organismos entregaron a la Comisión la documentación que habían recabado durante la dictadura, otros participaron abiertamente del proceso de investigación, y también hubo quienes se opusieron a su conformación y actuación. Para profundizar en estos distintos posicionamientos, ver: González Bombal & Sondereguer (1987).

[74] Alegato de Julio César Strassera, 18 de septiembre de 1985 (Ciancaglini & Granovsky, 1995, p. 182)

[75] El art. 2 del decreto 187/83 señala expresamente que "La Comisión no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial".

[76] La radicación de las denuncias recibidas ante la CONADEP fue materia de debate en un momento atravesado por el proceso de reforma de la ley de Justicia Militar, que será abordado en el apartado relativo a las prácticas de democratización. En esas circunstancias, la CONADEP decidió radicar la totalidad de las denuncias en la Justicia Federal y a la vez remitir al Ministerio de Defensa aquellas denuncias cuyos damnificados directos así lo requiriesen, para ser tratadas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Crenzel, 2008).

[77] Para un análisis de los sentidos construidos en la sentencia del Juicio a las Juntas, ver Silveyra (2020). La sentencia completa puede ser consultada en línea en https://www.cij.gov.ar/juicio-a-las-juntas-25-anios.html [consultado el 25/11/2021]

El descontento de la corporación militar ante la posibilidad de juicios masivos que abrió la sentencia del Juicio a las Juntas se intensificó al comenzar la tramitación de causas en algunos tribunales provinciales. Hacia fines de 1986, más de 6000 casos se habían presentado ante tribunales, que implicaban a unos 600 oficiales (Barahona de Brito, 2002, p. 199). Para ese momento, la idea de restringir el alcance de los juicios ya era conocida por declaraciones de algunos funcionarios del gobierno y por los diversos pedidos del presidente a los tribunales para que asumieran una definición que fijara límites a los procesamientos (Galante, 2019; Nino, 2015). Ante la intensificación de la presión militar, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley con la cual intentó contener el proceso punitivo, mediante el cual se establecía una fecha límite para todos los juicios.

La ley 23.492, conocida como la "ley de punto final", fue sancionada el 23 de diciembre de 1986, en medio de demostraciones públicas de repudio. La misma estableció un límite de sesenta días para interponer denuncias ante las dependencias judiciales, período a partir del cual quedaría extinta la acción penal. Para entonces, el proceso de juzgamiento ya había escapado al control del gobierno, en lo que se considera el punto de quiebre que marca el fin del primer período de prácticas reparatorias de los crímenes de la dictadura.

2.b) Prácticas de democratización para enmarcar la sociedad del porvenir

Las prácticas de democratización ocuparon un lugar preponderante entre las medidas implementadas en este período, en tanto tenían por objetivo sentar las bases institucionales de la democracia naciente. El espíritu fundacional del alfonsinismo se vio reflejado en una amplia cantidad de reformas que pretendían construir el marco en cuyos límites tendría lugar la vida social y política del porvenir democrático. Entre estas medidas cuentan las modificaciones en el Código de Procedimientos Penal Federal en relación a la excarcelación (ley 23.042/84) y la duración de los juicios (ley 23.050/84), así como modificaciones en el Código Penal respecto del delito de tortura (ley 23.097/84), la conmutación de penas durante el PRN (ley 23.070/84) y la regulación de la condena condicional y la reincidencia (ley 23.057/84). En el mismo sentido, fue sancionada la ley 23.077/84 "de protección del orden constitucional y defensa de la democracia", que estableció penas para quienes tomaran las armas contra la Constitución con el fin de cambiar "de modo permanente" el sistema de Gobierno.

En estos tiempos en los cuales la democratización adquirió una relevancia particular, hay dos medidas sobre las cuales quiero detenerme: la reforma de la justicia militar y la ley de reparación histórica.

En cuanto a la reforma de la justicia militar, ésta se encontraba entre las medidas que Alfonsín había anunciado al asumir la presidencia, y su proyecto fue enviado al Congreso el mismo día de la firma de los decretos de juzgamiento, en tanto resultaba clave para la realización de los juicios. La ley 23.049 -sancionada el 9 de febrero de 1984- consagró la reforma mediante la cual se confería al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la jurisdicción inicial para la prosecución de los militares, pero tal como se ha mencionado anteriormente, permitía que los tribunales civiles encausaran los juicios ante dilaciones injustificadas.

Esta práctica debe situarse en el marco de la política militar de Alfonsín, cuyos esfuerzos estuvieron dirigidos a corregir algunos aspectos que habían contribuido a la larga historia de intervencionismo por parte de las Fuerzas Armadas, mediante el establecimiento de su control civil. [78] A partir de diciembre de 1983, se designó un civil al frente del Ministerio de Defensa, quien respondía directamente al Ejecutivo y pasó a ser la máxima autoridad en materia de política militar, a la vez que obtuvo prerrogativas para controlar el presupuesto y las empresas militares. Con el mismo objetivo, fue promovido el control ejecutivo y legislativo sobre los ascensos militares, práctica que se mantuvo vigente durante todo el período analizado en esta tesis. [79]

Por otra parte, la práctica de democratización vinculada a la ley de reparación histórica 23.062/84 puede concebirse como una cabal muestra del modo en el que la oposición entre dictadura y democracia tan cara a la justicia transicional no sólo fue establecida en relación a la nueva etapa que comenzaba en 1983, sino que también implicó una distinción entre el gobierno militar y el gobierno constitucional precedente. Esta perspectiva encapsulaba el conflicto asociado a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar e impedía su historización. Por un lado, lo escindía de lo que había ocurrido antes; por el otro, invisibilizaba las continuidades que podían presentarse durante el gobierno entrante, toda vez que la

[78] De acuerdo al análisis realizado por Battiglino (2020), durante la presidencia de Alfonsín se llevaron a cabo las siguientes políticas de control civil: 1) la resolución de los conflictos limítrofes; 2) la modificación del marco normativo; 3) el fortalecimiento de rivales funcionales; 4) el fortalecimiento del Ministerio de Defensa; 5) la reducción de la organización militar y 6) el control ejecutivo y legislativo de los ascensos militares.

[79] Los *Informes Anuales sobre la situación de derechos humanos en Argentina* presentados por el CELS desde 1994 en adelante dan cuenta del seguimiento realizado por el organismo en torno a los impedimentos interpuestos por el Senado frente a propuestas de ascensos a personal militar involucrado en delitos de lesa humanidad. Dichos informes pueden consultarse en: https://www.cels.org.ar/web/publicacion-tipo/informe-anual/ [consultado el 25/11/2021]

instauración del estado de derecho se concebía como una superación de toda forma de conflicto anterior.

En concreto, la ley de reparación histórica fue producto de una negociación entre el gobierno e Isabel Martínez de Perón -para entonces presidenta del Consejo Nacional Justicialista, pero que había sido presidenta constitucional hasta la instauración del golpe de 1976. Su gobierno no sólo había amparado el accionar de la organización paramilitar denominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), sino que también había recrudecido el accionar represivo del Estado, en el marco de la declaración del estado de sitio[80] y la emisión de los "decretos de aniquilamiento"[81] que ordenaban la realización de operaciones tendientes a neutralizar y/o aniquilar los elementos subversivos. [82]

Con el fin de evitar el juzgamiento de los crímenes perpetrados durante el período previo al golpe de Estado, la ley de reparación histórica estableció la falta de validez jurídica respecto de las normas emanadas de autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y de los procesos judiciales y sus sentencias, cuyo objeto fuera el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales. La sanción de esta ley fue producto de una negociación entre Alfonsín y el peronismo con la intención de alivianar la presión que éste ejercía sobre su gobierno, a pocos meses de asumir la presidencia. [83]

2.c) La impronta restitutiva de los incios democráticos

Pese a que no han sido señaladas como medidas emblemáticas de la transición ni fueron objeto privilegiado en la literatura especializada, durante este primer período la restitución fue la práctica más extendida para la reparación de los crímenes de la dictadura. Ante el conocimiento público de los crímenes atroces de tortura y desaparición forzada, y la monumentalidad de acontecimientos como el Juicio a las Juntas y el Nunca Más, las leyes dirigidas a subsanar situaciones particulares de trabajadores cesanteados quedaron relegadas a un lugar secundario. Mientras que algunos consideraron esta práctica restitutiva como una respuesta a las demandas de los propios afectados (Guembe, 2006), otros ubicaron estas medidas entre los intentos por

[80] El decreto de estado de sitio fue emitido el 6 de noviembre del año 1974.
[81] Se trató de los decretos 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975.
[82] Entre los principales trabajos que estudian el período 1973-1976, se sugiere consultar: Jemio (2019), Franco (2012), Izaguirre (2009), Marín (2007).
[83] Si bien se ha optado por categorizar esta medida como una práctica de democratización porque su principal objeto se relaciona con el establecimiento de la institucionalidad democrática, es también posible considerarla como una práctica de juzgamiento considerando la impunidad que habilita la misma.

contener la crisis económica que azotó contra los niveles de empleo durante estos años (Solís Delgadillo, 2015, pp. 142-147). En cualquier caso, la restitución fue una arista de importancia al momento de enfrentar la herencia que había dejado el gobierno militar, ya que debido a la naturaleza de los delitos que se proponía subsanar, estas prácticas permitían efectivamente devolver aquello que había sido dañado al estadio previo a la comisión de los delitos como modo de reparar las injusticias cometidas.

En este sentido, fueron impulsadas una serie de leyes dirigidas a subsanar situaciones particulares de los trabajadores que habían sido apartados de sus puestos laborales en virtud de la persecución política ejercida por el PRN. Las primeras de ellas dispusieron el reingreso al cuadro permanente activo del servicio exterior de la nación (ley 23.053/84) [84] y la reincoporación de los trabajadores estatales que hubieran sido despedidos por motivos gremiales o políticos durante la dictadura (ley 23.117/84). Esta última se propuso como una ampliación de los alcances de la ley de Amnistía que había dispuesto la libertad de los presos políticos en 1973, la cual había legislado sobre la readmisión laboral a los cesanteados sin justa causa en la administración pública. [85] Esta ley fue objeto de polémicas que llegaron a sugerirla como una pieza clave en la definición de la política represiva de los militares a favor de las desapariciones, dada su irreversibilidad en relación al encarcelamiento de opositores al régimen. El hecho de que la restitución de empleos estatales recuperase la ley de Amnistía en su fundamentación puede ser interpretado como un esfuerzo por parte del gobierno de Alfonsín por establecer una línea de continuidad – aunque más no fuera que una continuidad democrática e institucional- con el gobierno peronista que la había impulsado. [86]

Las prácticas restitutivas continuaron durante el año 1985, durante el cual fueron reincorporados en sus cargos los docentes interinos cesanteados o declarados prescindibles por motivos gremiales y políticos (ley 23.238/85). Para entonces, a los docentes titulares en similares circunstancias ya les había sido reconocido el derecho a la reincorporación. [87] En ambos casos el

[84] Esta ley fue sancionada el 22 de febrero de 1984 y alcanzó a aquellos funcionarios que hubieran sido declarados prescindibles así como aquellos que hubieran renunciado por connotaciones políticas.

[85] La ley 23.117 fue retomada en el año 2008 en un proyecto de ley para la "reparación histórica a los cesanteados por la dictadura militar" enviada al Congreso por el Frente para la Victoria. Este proyecto, que proponía otorgar una indemnización para todos aquellos trabajadores estatales despedidos sin justa causa hasta la recuperación democrática, nunca llegó a tomar estado parlamentario. (Expdte. 2153-D-2008).

[86] La liberación de los presos políticos de 1973 conocida como "Devotazo" fue producto de una amplia movilización popular tras el triunfo que llevó a Héctor Cámpora al poder tras 17 años de proscripción del peronismo. Apenas asumir, Cámpora emitió un indulto presidencial a los presos políticos y al día siguiente la Amnistía fue convertida en ley 20508 tras haber sido votada en forma únanime por el Congreso Nacional.

[87] Resolución 56/83 del Ministerio de Educación y Justicia del 30 de diciembre de 1983.

período de cese fue computado como trabajado en la docencia, siempre que se declinaran los reclamos por remuneraciones caídas.

En igual sentido, no menos importante fue la norma que estableció el reconocimiento del tiempo de inactividad producto de las mencionadas situaciones a efectos del cómputo jubilatorio, al igual que la situación de quienes habían sido obligados a renunciar a sus cargos o forzados al exilio hasta el 9 de diciembre de 1983 (ley 23.278/85). La relevancia de esta última ley se debe a la extensión del alcance de las prácticas restitutivas al ámbito de los trabajadores en relación de dependencia que gozaran de empleos estables en el ámbito privado. Esta medida no devolvió a los trabajadores a sus antiguos puestos de trabajo, pero implicó un reconocimiento al despido injustificado a la vez que garantizó la continuidad de sus aportes previsionales.

La recomposición de las relaciones laborales afectadas por la persecución hacia los trabajadores durante la dictadura no volvió a ser objeto de prácticas reparatorias una vez transcurrida esta primera etapa del gobierno de Alfonsín. [88] Desde entonces, fueron las prácticas indemnizatorias las que caracterizaron el modo hegemónico en que el Estado se propuso la reparación del genocidio.

3. Segundo período: Si no hay justicia, hay dinero

Poco después de la sanción de la ley 23.466/86 y la ley de punto final que marcaron el término del período transicional, llegó el turno de la ley de obediencia debida, mediante la cual quedó clausurada la posiblidad de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. [89] De este modo quedaron sentadas las bases para una configuración predominante en materia reparatoria que combinó el detenimiento del accionar de la justicia con la consolidación de las políticas de reparación económica, contribuyendo a la gestación de una representación que asoció las compensaciones monetarias como moneda de cambio por la justicia. El contrapunto entre justicia y reparación en este período asumió por lo tanto la forma de impunidad en cuanto a las prácticas de juzgamiento, al tiempo que las indemnizaciones se posicionaron como las prácticas reparatorias hegemónicas dirigidas a las víctimas directas.

Tras un primer momento de consolidación de la impunidad en tanto contracara de las prácticas reparatorias de juzgamiento, se consolidaron las prácticas indemnizatorias con la sanción de sus

[88] Con excepción de la ley de reincorporación de los trabajadores bancarios que será retomada en el próximo apartado.

[89] Para una perspectiva general del proceso de impunidad en Argentina, ver Ageitos (2011).

principales instrumentos, que mediante diversas prórrogas, ampliatorias y modificatorias se mantuvieron vigentes durante todo el período estudiado en esta tesis. Con la derogación de las leyes de impunidad en 1998 comenzó a vislumbrarse el germen de una nueva configuración en materia de reparación, junto con la emergencia de prácticas reparatorias de memorialización y la declaración de la nulidad de las leyes de impunidad. A continuación, este extenso período será abordado a partir de la identificación de tres momentos que corresponden a la emergencia, la consolidación y el declive de la configuración reparatoria reseñada.

3.a) Primer subperíodo: la consolidación de la impunidad

Se ha mencionado que al momento de sanción de la ley de punto final, el proceso de juzgamiento había escapado al control del gobierno. Esta afirmación obedece al hecho de que la ley de punto final produjo el efecto contrario al buscado por sus impulsores, y provocó un estallido de la actividad judicial, que incluyó la suspensión de la feria de verano en los tribunales en donde se trabajó sin descanso para reunir la mayor cantidad de denuncias posibles antes de la fecha tope establecida.

Las Fuerzas Armadas respondieron a esta situación resistiéndose a comparecer ante las citaciones judiciales. Seguidamente, comenzaron una serie de levantamientos en cuarteles militares, entre los que se destaca el ocurrido durante la Semana Santa de 1987. Esta rebelión, liderada por el teniente coronel Aldo Rico, y cuyo principal ideólogo fue el coronel Mohamed Alí Seineldín, llegó a su fin cuando el propio presidente Alfonsín se apersonó en el Regimiento de Campo de Mayo a exigir la rendición incondicional de los militares sublevados. Una multitud lo recibió de vuelta en la casa de gobierno, quien coronó la jornada con un discurso que pasó a la historia por su célebre frase “la casa está en orden y no hay derramamiento de sangre en Argentina”.

Pese a las manifestaciones de apoyo al gobierno por su accionar en defensa de la democracia, las presiones no cedieron y obligaron al gobierno a retomar la propuesta original de Alfonsín de distinguir entre los tres niveles de niveles de responsabilidad, con el objetivo de apaciguar las tensiones que se habían agudizado en el frente militar. En consonancia, fue enviada al Congreso un proyecto de ley que creaba una casi irrefutable defensa para oficiales de mediano y bajo rango (Nino, 2015, p. 179). La ley 23.521/87, conocida como “ley de obediencia debida”, limitaba la responsabilidad de los miembros de las fuerzas armadas que habían cometido crímenes mediante

el cumplimiento de órdenes dentro de la cadena de mando y daba la estocada final al proceso punitivo abierto durante el gobierno transicional.

Pese a que la ley de obediencia debida implicaba una concesión a las demandas de los militares, en los meses siguientes tuvieron lugar nuevas rebeliones, en un contexto general de agravamiento de la crisis económica que se expresaba en una incontenible espiral hiperinflacionaria. El deterioro de la posición del gobierno se aceleró hasta desencadenar en el traspaso de mando anticipado al peronista Carlos Menem, que asumió en julio de 1989 a sólo dos meses de alzarse ganador en la contienda electoral. [90]

El rumbo que tomaría la política de memoria del nuevo gobierno se evidenció con el dictado de una serie de indultos presidenciales que beneficiarían a alrededor de 300 personas con proceso judicial abierto por delitos cometidos en el período dictactorial, en cuya fundamentación se hacía explícito que "la idea fuerza de este tiempo es la de reconciliación". [91] [92] Dejar atrás los hechos del pasado, perdonar a quienes habían cometido errores, superar las divisiones que atravesaban profundamente a la sociedad, aparecían como requisitos indispensables para "crear las condiciones de la pacificación nacional". Persiguiendo este objetivo, cuando un año después de los primeros indultos se produjo una nueva rebelión militar, el presidente Menem respondió con una nueva tanda de decretos que dejó en libertad a los condenados y restantes procesados. De esta manera, se reafirmaba la estrategia pacificadora de sepultar definitivamente todo lo concerniente a los crímenes del pasado y a la vez de afianzar la subordinación de las Fuerzas Armadas, lo que permitiría dar por cerrado el conflicto con el actor militar. [93] [94]

---

[90] La campaña electoral estuvo atravesada por los debates en torno a la conveniencia o no de impulsar una amnistía, y forzó a los candidatos a posicionarse al respecto. Mientras que Eduardo Angeloz, candidato por el radicalismo, se declaraba en contra de una posible amnistía, Menem parecía más permeable a la idea de la reconciliación. En este sentido, el triunfo del candidato del Partido Justicialista puede ser indicativo de cierta pérdida de consenso en torno a la política de derechos de humanos del alfonsinismo.

[91] La primera tanda de indultos, de fecha 7 de octubre de 1989, benefició a la totalidad de los jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (Decreto 1002); los jefes de las organizaciones populares que habían sido acusadas de subversión (Decreto 1003); el personal militar que intervino en las rebeliones contra el gobierno constitucional durante los años 1987 y 1988 (Decreto 1004) y los militares condenados por su responsabilidad en la Guerra de Malvinas (Decreto 1005).

[92] Tal como señaló Alicia Pierini, titular del área de Derechos Humanos del gobierno de Menem entre 1992 y 1997, los indultos aparecían como "el mal menor" ante la opción de la amnistía, dado que mientras el instrumento legislativo de la amnistía anula los delitos sobre los cuales recae, los indultos dejan sin efecto las sentencias condenatorias contra estos delitos, y perdonan a sus responsables pero sin borrar su existencia (Entrevista a Alicia Pierini, Memoria Abierta, 2003).

[93] Se trató de los decretos 2741, 2742, 2743, 2745 y 2746 del 30 de diciembre de 1990.

[94] Para profundizar acerca de las estrategias de subordinación de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Menem, ver Canelo (2011).

En esta línea, vale mencionar que la única práctica de democratización registrada durante este breve subperíodo se vinculó con la Ley de Defensa Nacional, todavía durante la presidencia de Alfonsín, mediante la cual se estableció que la defensa del Estado debe dirigirse a repeler o disuadir agresiones de origen externo, quitando a las Fuerzas Armadas la prerrogativa legal de participar en misiones de seguridad interna. En la práctica, la ley 23.554/88 no sólo implicó una limitación a la actuación de los militares sino que representó la derogación formal de la Doctrina de la Seguridad Nacional (Battaglino, 2020).

Considerando el contexto general del período bajo análisis, la pacificación de la sociedad impulsada por el menemismo se dirigía hacia dos frentes. Por un lado, perseguía el objetivo de implantar las condiciones de posibilidad para una profunda reforma estructural que transformó el modelo económico vigente. Sobre la base de altísimos niveles de desempleo y flexibilización laboral se impuso el modelo neoliberal basado en la ampliación de la esfera del mercado, la liberalización del comercio, la desregulación de la economía, el recorte del gasto público y las privatizaciones. A su vez, la estrategia de pacificación constituía un aspecto central en el ámbito de las políticas de memoria, toda vez que para inaugurar un nuevo tiempo y fundar un nuevo país tal como se había propuesto el gobierno de Menem, precisaba liberarse de toda atadura con el pasado (Novaro, 2007). Si bien esta concepción puede ser vislumbrada hacia finales de este subperíodo, será durante la etapa siguiente que alcanzará su expresión más acabada, tal como se desarrollará más adelante.

- Resabios de la impronta restitutiva

Junto con las prácticas de juzgamiento en su variante por la impunidad, durante este breve período tuvieron lugar dos prácticas restitutivas de relevancia, ambas gestadas en el período anterior al calor del impulso que recibieron las medidas así caracterizadas, pero que debieron esperar hasta este momento para ser finalmente implementadas.

La primera de ellas tuvo que ver con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticoss (BNDG), institución pionera a nivel mundial dedicado a la obtención y almacenamiento de información genética con miras al esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación de personas desaparecidas durante la dictadura militar. El proyecto de creación del BNDG fue redactado por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde muy temprano recurrieron a la ciencia para perfeccionar los métodos que permitieran avanzar en la búsqueda de sus nietos

nacidos en cautiverio. La ley 23.511/87 posibilitó que la genética fuera considerada como auxiliar de la justicia, permitiendo que la realización de pruebas tendientes a la determinación de la identidad fuera ordenada con fuerza de ley, y al mismo tiempo creó las condiciones adecuadas para que las mismas fueran realizadas y conservadas. [95] [96]

La otra práctica restitutiva de este subperíodo se vincula con la reincorporación de los trabajadores bancarios pertenecientes a instituciones bancarias oficiales que hubieran sido despedidos por razones políticas entre el 1 de enero de 1959 y el 10 de diciembre de 1983. Esta particularidad distintiva en relación a las anteriores prácticas restitutivas implementadas, obedece a la importancia asignada por el gremio bancario al ciclo de huelgas protagonizadas por el sector que iniciaron en 1948 y 1959, año durante el cual las medidas de fuerza resultaron de mayor acatamiento a lo largo de todo el país y cuyo saldo había sido el despido de una gran cantidad de trabajadores. [97] Esta consideración puede leerse como un indicio de la participación de los propios afectados en la construcción de una política reparatoria que se ajustara a su situación particular, que en este caso excedía las cesantías dispuestas durante la última dictadura.

3.b) Segundo subperíodo: la consolidación de las prácticas indemnizatorias

Este subperíodo coincidió con la sanción de los principales instrumentos indemnizatorios, y se caracterizó por la consolidación de las prácticas indemnizatorias como modo predominante de abordar la reparación de los crímenes de Estado. Si bien el análisis específico de las medidas que le valieron a este período su caracterización hegemónica será abordado en el próximo capítulo, es necesario considerar algunos elementos de contexto en el cual las mismas se situaron y que resultan significativos para la comprensión de las representaciones a las cuales se asocian las prácticas reparatorias durante este tiempo histórico.

En primer lugar, debe mencionarse que las prácticas indemnizatorias se inscribieron en el universo de representaciones asociadas a la pacificación nacional, en línea con los sentidos hegemónicos promovidos por las políticas de memoria durante este período. La búsqueda de la pacificación nacional también aparece como la clave de lectura para una serie de medidas que tuvieron lugar en este período pero que desbordan el encuadre hegemónico que se le ha dado al mismo. Entre ellas cuenta la única práctica de democratización implementada en este subperíodo,

[95] Para profundizar en las vicisitudes en torno a la creación del BNDG, ver Abuelas de Plaza de Mayo (2008).
[96] La ley de creación del BNDG fue reglamentada mediante el Decreto 700/1989 y su modificatorio 1253/1989.
[97] Para un análisis en torno a las huelgas bancarias de 1959, ver Acha (2008).

mediante la cual se estableció la exención del servicio militar para quienes hubieran sufrido la desaparición forzada de sus padres o hermanos (ley 23.852/91). Pocos años después, a mediados de 1994, el Servicio Militar suprimió su obligatoriedad. Si bien el desencadenante puntual de esta definición fue el asesinato del conscripto Omar Carrasco en una guarnición de Neuquén, dicha supresión fue considerada como parte de un largo proceso de reestructuración del servicio militar en línea de su profesionalización (Novaro, 2007). En el marco de este proceso de cambio al interior de las Fuerzas Armadas, el general Martín Balza, quien estaba en ese entonces al frente del Ejército, asumió por primera vez el reconocimiento expreso y oficial de los crímenes cometidos durante la dictadura. El perdón pronunciado por Balza en 1995 abrió la posibilidad insospechada de una fisura al interior del pacto de silencio de los militares, protagonizada por las declaraciones de Adolfo Scilingo en las cuales confesó la ejecución de los *vuelos de la muerte*.

La coyuntura de estas declaraciones autocríticas estaba atravesada por la conmemoración de los veinte años del golpe militar, en el seno de lo que fue considerado como un "nuevo ciclo caliente" en relación con la memoria (Crenzel, 2008, p. 154). La revitalización del movimiento de derechos humanos le permitió constituirse como articulador de las múltiples expresiones de lucha de los sectores populares ante la embestida neoliberal. En el mismo sentido, la irrupción de la Agrupación H.I.J.O.S. en 1995 en torno a la cual se organizaron políticamente los hijos de detenidos desaparecidos, también contribuyó a la renovación de los debates al interior de la militancia por los derechos humanos. [98]

En este tiempo se inscriben además dos prácticas reparatorias que pueden relacionarse con el contexto de desocupación y pérdida de derechos laborales que el menemismo significó para los trabajadores. Por un lado, se reimplantó la vigencia de la ley 23.278/85 mediante la cual se había reconocido a efectos previsionales el tiempo de inactividad de aquellos trabajadores despedidos durante la dictadura por razones políticas. [99] Por otra parte, la ley 24.734/96 otorgó a los beneficiarios de la pensión establecida mediante la ley 23.466/86 el derecho a hacer uso de los servicios de cobertura médica. Estas dos medidas corresponden a las únicas medidas relevadas que configuran prácticas reparatorias de restitución y de rehabilitación respectivamente.

Finalmente, vale mencionar que durante todo este subperíodo así como en el subsiguiente, pese a que la vía judicial local se mantuvo cerrada, los organismos de derechos humanos desplegaron

[98] Para profundizar en la historia y modalidades de lucha del colectivo HIJOS, ver: Bonetto (2006), Bonaldi (2006).
[99] Esta medida se implementó mediante ley 24.736 y en esta oportunidad fue sancionada sin plazo de prescripción.

novedosas estrategias para llevar a cabo el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Durante esta etapa fueron elevadas acusiones contra los genocidas en el ámbito internacional, bajo el amparo del *principio de jurisdicción universal de los derechos humanos*, que considera que la territorialidad no se aplica a las violaciones de derechos humanos dado que éstas ofenden a la humanidad en su conjunto. Ello posibilitó la apertura de juicios en España, Francia y Alemania, entre los cuales se desatacaron los conocidos como los *Juicios de Madrid*, iniciados en el año 1996. [100]

En este marco, fueron impulsadas las leyes reparatorias que conformaron el cuerpo de prácticas indemnizatorias más relevante del período democrático, dado que sobre ellas se construyo el universo de medidas de reparación económica que se analizarán en el próximo capítulo. Su puntapié inicial fue dado por los propios damnificados, quienes recurrieron a la CIDH en reclamo por justicia, obturada por entonces en el ámbito local. Tras la emisión de una serie de decretos que buscaban encauzar esos reclamos mediante el otorgamiento de compensaciones monetarias para las víctimas, finalmente fue sancionada en el año 1991 la ley 24.043, tendiente en su formulación original a la reparación de los ex detenidos, la cual ha sido objeto de una importante cantidad de interpretaciones y modificatorias que han precisado su esfera de acción y ampliado el alcance de sus beneficiarios.

Pocos años después, hacia fines de 1994, la ley 24.411 dispuso la reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y a los asesinados por los militares. Al momento de empezar a discutirse la posibilidad de avanzar en la reparación de los desaparecidos, los familiares de las víctimas manifestaron su temor a que el otorgamiento de indemnizaciones clausurara definitivamente el camino hacia la verdad y la justicia. Producto de esta preocupación, los organismos de derechos humanos exigieron que los desaparecidos fueran declarados legalmente como tales, en lugar de verse obligados a declarar su presunción de muerte tal como se requería a los causahabientes de los desaparecidos para poder acceder al cobro de las indemnizaciones.

Como respuesta a esta demanda fue declarada en el mes de mayo de 1994 la ley de *Ausencia por Desaparición Forzada* (ley 24.321/94), en la que se considera la práctica de reconocimiento más significativa de este período, mediante la que se habilitaba a los familiares de los desaparecidos a

[100] Los Juicios de Madrid, motorizados por el juez español Baltazar Garzón, excedían el caso argentino, dado que avanzaban en el juzgamiento a militares responsables de la desaparición de ciudadanos españoles en toda América Latina en el marco del Plan Cóndor.

la tramitación de las Leyes Reparatorias sin la necesidad de presumir su muerte. [101] [102] En los fundamentos de la ley no sólo se mencionaba la resistencia de carácter emocional por parte de las familias a asumir la muerte de los desaparecidos sin haber hallado el cuerpo, sino que también se argumentaba que "no hay razón válida por la cual se obligue a las familias a reconocer un fallecimiento *de jure,* cuando las juntas militares no han reconocido haber dado muerte a dichos ciudadanos, quienes permanecen en la opinión pública nacional e internacional como desaparecidos". En la misma línea, en el debate parlamentario se dejó constancia de que la ley en cuestión recogía un reclamo que durante mucho tiempo habían hecho los organismos y se proponía subsanar jurídicamente las secuelas patrimoniales y de vínculo familiar a la que la desaparición forzada había dado lugar. La ley 24.321/94 dispuso que los efectos civiles de la declaración de ausencia por desaparición forzada fueran análogos a los correspondientes a la declaración de ausencia por presunción de fallecimiento: proponía así una resolución jurídica a la ausencia de las personas desaparecidas, a la vez que evitaba la obligación de declarar su fallecimiento.

3.c) Tercer subperíodo: la impunidad en crisis

Durante el año 1998 tuvieron lugar un conjunto de prácticas reparatorias que significaron el inicio del declive de la hegemonía de la configuración reparatoria desarrollada hasta el momento. Si bien las prácticas indemnizatorias mantuvieron su vigencia, comenzó a ponerse en crisis el trasfondo de impunidad sobre el cual las mismas se habían desplegado, al tiempo que nuevas prácticas reparatorias irrumpían en la escena pública.

En primer lugar, en 1998 fueron derogadas las leyes de punto final y obediencia debida mediante la ley 24.952/98, lo que significó un límite a la impunidad que hasta entonces había permanecido inalterable. Entre los efectos de esta práctica de juzgamiento debe señalarse que pese a que esta

[101] El tratamiento jurídico de la desaparición forzada de personas había ocupado un lugar significativo entre las preocupaciones de los organismos de derechos humanos desde la restauración democrática. Fruto de esa preocupación, se había creado en 1987 el *Grupo de Iniciativa para una Convención contra las Desapariciones Forzadas de Personas* que nucleaba organismos de derechos humanos y juristas de renombre con el objetivo de promover instrumentos jurídicos de alcance internacional y nacional tendientes a la prevención de dicho crimen. Los debates, perspectivas y proyectos impulsados desde el Grupo pueden consultarse en: Grupo de Iniciativa (1987).

[102] La otra práctica reparatoria de reconocimiento relevada durante este período también está asociada a al reconocimiento de la Desaparición Forzada: se trata de la aprobación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 24a. Asamblea General, mediante ley 24.556/95, así como su elevación a jerarquía constitucional mediante ley 24.820/97.

ley no tenía efectos retroactivos, sus consecuencias no fueron meramente declarativas. Esta derogación permitió que se realizaran nuevas imputaciones por aquellos delitos que no habían sido juzgados durante el primer período de prácticas de juzgamiento, posibilitando la reapertura de causas por apropiación de menores.

En segundo lugar, ese mismo año emergieron las prácticas de memorialización, que a partir de entonces comenzarían a ganar preponderancia entre las medidas tendientes a la reparación de los crímenes de Estado. Mediante el decreto 8/98 emitido por el PEN se disponía el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) desde su locación situada en la Ciudad de Buenos Aires hacia la Base Naval de Puerto Belgrano, con el objetivo de demoler el edificio de la ESMA para la posterior construcción de un espacio verde de uso público. El espíritu pacificador del período anterior se encontraba plenamente vigente en esta práctica reparatoria, tal como se desprende de la fundamentación del decreto en la cual se sustenta la medida en el "afan por dejar atrás las antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la voluntad de conciliación de los argentinos". Con este objetivo, se pretendía erigir el "Parque de la reconciliación" como un símbolo de la unión nacional.

Lo que llamativamente omitía este decreto es que en la ESMA había funcionado un centro clandestino de detención durante la dictadura por el que se estimaba que habían pasado alrededor de 5000 detenidos desaparecidos. Su demolición significaba no sólo el borramiento simbólico de lo que había sucedido en este sitio emblemático, sino también el borramiento de la prueba material de los crímenes que allí se habían cometido, por los cuales aún se continuaba exigiendo justicia. Finalmente, la resistencia que suscitó esta medida impidió su concreción, pero la misma instaló la discusión en torno a qué hacer –y que no hacer- con los sitios en los cuales se habían perpetrado los crímenes de la dictadura, aspecto central en torno al cual se configuraron las prácticas de memorialización de allí en adelante. Algunos años más tarde, las prácticas de memorialización llegarían al terreno de las conmemoraciones al instituirse el 24 de marzo como día nacional de la memoria por la verdad y la justicia (ley 25.633/02).

Otro conjunto de prácticas que habían quedado relegadas en los subperíodos anteriores y que volvieron a ocupar un espacio relevante entre las prácticas reparatorias durante esta etapa fueron las prácticas de restitución. En primer lugar, fue creada formalmente la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) mediante la Resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior, la cual absorbió las funciones y conservó la conformación de su antecesora Comisión Técnica, que

desde 1992 funcionaba en el ámbito de dicho Ministerio. Esta Comisión había sido creada a instancias de la organización Abuelas de Plaza de Mayo por Resolución 1.328/92 y contaba entre sus objetivos la promoción de la búsqueda y localización de niños desaparecidos y con identidad conocida, así como de niños nacidos de madres en cautiverio durante la última dictadura militar.[103] En la misma línea, mediante ley 25.066/98 fue creado en el ámbito del Poder Legislativo el "Fondo de reparación histórica" para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en argentina, destinado a solventar la tarea realizada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante este breve subperíodo debe destacarse que se profundizaron las estrategias que los organismos de derechos humanos implementaron con el objetivo de llevar a cabo el juzgamiento de los crímenes que todavía se encontraba clausurado. Bajo el amparo de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Caso Aguiar de Lapacó, en la cual fue establecido el Derecho a la Verdad de las víctimas de la dictadura, se iniciaron en 1998 en diversos tribunales federales los procesos conocidos como *Juicios por la Verdad*. El desarrollo de estos juicios puede concebirse como un modo particular de prácticas de reconocimiento, en la medida que si bien los mismos fueron llevados a cabo por la justicia ordinaria, su objetivo no fue la condena penal de los responsables de los crímenes, sino el conocimiento público de la verdad de lo sucedido. [104]

Los *Juicios por la Verdad* se inscriben en los comienzos de la horadación del largo período de impunidad que había caracterizado las prácticas de juzgamiento desde 1987. Por un lado, los procesos abiertos en España en el marco de la jurisdicción universal, seguidos de experiencias similares en Italia y Alemania, continaban avanzando, produciendo un creciente aumento de las solicitudes de extradición de los represores argentinos para su juzgamiento por parte de los tribunales españoles. En un intento por poner un freno a esa situación, el presidente Fernando de

[103] En 2001, a través de la ley 25.457 se trasladó el ámbito de funcionamiento de la CONADI del Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin modificaciones sustantivas en cuanto a sus competencias, siguiendo la trayectoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos tal como había establecido el Decreto PEN 20/99. Vale mencionar que este cambio también generó el traspaso de todos los expedientes de leyes reparatorias en trámite desde hacia el Ministerio de Justicia. Finalmente, el Decreto PEN 357/2002 elevó la Subsecretaría al rango de Secretaría de Derechos Humanos y Sociales, medida que también puede concebirse como un indicador del cambio de época relacionado con las prácticas reparatorias.

[104] Los Juicios por la Verdad se desarrollaron en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta y Sante Fe, entre los años 1998 y 2003. En el marco de estos procesos se realizaron inspecciones oculares en centros clandestinos, se ordenaron exhumaciones y se recabó una gran cantidad de declaraciones testimoniales y prueba documental, que años después resultarían fundamentales tras la reapertura del proceso de juzgamiento en 2006.

la Rúa (1999-2001) estableció el rechazo a todo pedido de asistencia judicial o extradición por tribunales extranjeros mediante el Decreto 1581/2001. Por otra parte, durante 2001 los tribunales locales también habían dado indicios de que la impunidad comenzaba a fisurarse. Así lo indicó el conocido como "fallo Poblete", en el cual el juez Cavallo declaró por primera vez la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, por ser contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes al momento de su sanción.

Estos desplazamientos en cuanto a las prácticas de juzgamiento de los crímenes de Estado sucedían al tiempo en que la conflictividad social aumentaba en una escalada que culminó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. En un contexto general de profunda crisis económica que unificaba en contra del gobierno los "cacerolazos" de las clases medias urbanas con los "piquetes" protagonizados por las clases populares, se produjo la confiscación de los depósitos bancarios particulares. Las manifestaciones suscitadas por esta medida conocida como "el corralito" llevó al ya deslegitimado gobierno de de la Rúa a establecer el estado de sitio. Contrariamente a lo esperado, esta medida avivó el fuego de la protesta, que se congregó principalmente en torno a la Plaza de Mayo. La masiva manifestación fue duramente reprimida, dejando un saldo de 32 muertos y produciendo la renuncia del presidente.

La sucesión de cinco presidentes en los días que siguieron a estos acontecimientos evidencian el tenor de la crisis en la que se encontraba sumido el país, escenario atravesado por una experiencia contestataria que cuestionó principalmente los canales de representación política como la política económica que habían contribuido al estallido del 2001. Tras un breve período en el que Eduardo Duhalde encabezó el gobierno (2002-2003), con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003, los múltiples cuestionamientos al modelo imperante en los años previos a la crisis del 2001 fueron reestructurados en una nuevo ordenamiento en el cual las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ocuparían un lugar central.

En este marco, la crisis del marco reparatorio que había articulado de un modo peculiar las prácticas indemnizatorias con las prácticas de juzgamiento en su opción por la impunidad llegaría a su fin con la sanción de la ley 25.779 en agosto del año 2003, en la que se declararon insanablemente nulas las leyes de punto final y obediencia debida. En la misma sesión legislativa, mediante ley 25.778 fue elevada a rango constitucional la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Si bien habría que esperar a que la CSJN declarase la constitucionalidad de estas leyes para que los juicios por

crímenes de Estado pudieran reanudarse, la procesión hacia una nueva configuración reparatoria signada por la reapertura del proceso de juzgamiento ya estaba en marcha.

4. Tercer período: Hacia la integralidad de la reparación

Contemporáneamente a la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, el presidente Néstor Kirchner anuló el decreto que prohibía la extradición de represores a solicitud de tribunales extranjeros (decreto 420/03) y dispuso la adhesion a la Convencion sobre la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de los crimenes de lesa humanidad, cuya jerarquía constitucional había sido recientemente aprobada (decreto 579/03). En línea con estas prácticas de juzgamiento, un conjunto de resoluciones de la CSJN terminaron por remover los obstáculos que habían impedido hasta entonces los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de la dictadura.[105] En esta coyuntura, el desbloqueo de los procesos penales inauguró el proceso de juzgamiento que será considerado como la característica más sobresaliente de este tercer período de prácticas reparatorias. A partir de entonces, los juicios se desarrollaron de manera ininterrumpida durante todo el período bajo análisis, adquiriendo una enorme trascendencia tanto a nivel local como internacional.

El proceso de juzgamiento argentino se destaca tanto por su magnitud –considerando el período analizado en esta tesis, a diciembre de 2015 se han contabilizado 154 sentencias judiciales en el marco de este proceso (Feierstein & Silveyra, 2017)- como por la permanencia en el tiempo de esta política estatal. Pero principalmente, su relevancia radica en que se trata del propio Estado el que asume la tarea de juzgar los crímenes que fueron cometidos por el aparato estatal en el pasado. A diferencia de aquellos casos en los cuales el juzgamiento estuvo a cargo de Tribunales Especiales de la Corte Penal Internacional, compuestos por jueces extranjeros, en Argentina los juicios se desarrollan con la intervencion de tribunales nacionales ordinarios. Esta particularidad permitió que el proceso de juzgamiento adquiera una marcada impronta federal, en la medida en que las causas se radican en cada una de las jurisdicciones en las cuales fueron perpetrados los delitos. De esta manera, los juicios se extendieron a lo largo y ancho del vasto territorio nacional, lo que permitió que las comunidades participen y se involucren en los procesos locales.

[105] En el año 2004, se declaró que los crímenes cometidos en el marco de la causa "Arancibia Clavel" configuraban delitos de lesa humanidad y que por lo tanto, resultaban imprescriptibles. Posteriormente, fue declarada la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en la causa "Simón", en el año 2005. Por último, el fallo en la causa "Mazzeo" de 2007 estableció la inconstitucionalidad de los indultos otorgados en el período precedente por el presidente Menem.

La reapertura de los juicios, que había configurado el eje central de las demandas de reparación hacia el Estado por parte de las víctimas y sus familiares desde la recuperación democrática, produjo un impacto significativo en el conjunto de prácticas reparatorias, desbordando el ámbito estrictamente judicial e irradiando su influencia a la totalidad de las prácticas reparatorias durante este período. Con el objetivo de clarificar la exposición que sustenta esta afirmación, este período se presentará dividido en dos subperíodos durante los cuales por primera vez desde la finalización de la dictadura militar, la lucha inclaudicable por juicio y castigo para los genocidas coincidió con la voluntad política de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015). En este sentido, ambos pueden caracterizarse conjuntamente en términos de una configuración reparatoria tendiente a la integralidad, debido a que a diferencia de los períodos anteriores, la totalidad de los distintos tipos de prácticas reparatorias conceptualizadas en el capítulo dos se encuentran presentes en la misma. En las páginas que siguen se abordarán los modos en que las diversas prácticas reparatorias se han ido articulando entre sí al calor del devenir de las prácticas de juzgamiento, lo que permitirá una comprensión más acabada de los alcances y las limitaciones de esta integralidad.

El primer subperíodo comenzó con la asunción presidencial de Néstor Kirchner en el año 2003. Si bien su posicionamiento en relación a los derechos humanos había estado ausente de su campaña electoral, desde su discurso de asunción Kirchner inscribió su gobierno en la historia de luchas populares como parte de la "generación diezmada" durante los años setenta. [106] Desde entonces, la reivindicación de las demandas históricas del movimiento de derechos humanos se fue configurando como uno de los pilares sobre los cuales el gobierno que había sido electo con un muy bajo caudal de votos tras la profunda crisis de 2001 construyó su legitimidad.

El año 2003 pasó a ser considerado como un punto de inflexión en relación a las políticas vinculadas a la memoria y los derechos humanos, y la materialidad de este clivaje se desplegó en una serie de prácticas reparatorias que permiten adjudicarle a este primer gobierno kirchnerista una pretensión refundacional en esta materia. [107] En este contexto se inscribe la emergencia de esta etapa en la cual los esfuerzos tendientes a la reparación adquirieron progresivamente la

[106] Para profundizar en los usos del pasado en función del presente en los discursos presidenciales de Néstor Kirchner, ver: Montero (2012, 2016), Ohanian (2018).

[107] Una de las aristas que suscitó mayores polémicas en relación al elemento fundacional del kirchnerismo fue el soslayo de las prácticas reparatorias implementadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el cual quedaba situdado dentro del "pasado denostado" construido para generar un "efecto de frontera" respecto del período dictatorial pero también del proceso democrático de las dos décadas previas (Ohanian, 2018).

impronta de la integralidad. [108] Este impulso fundacional contribuyó principalmente a la expansión de las prácticas reparatorias de reconocimiento, democratización y memorialización dirigidas al conjunto social.

Ubico la delimitación entre el primer y el segundo subperíodo en la desaparición de Jorge Julio López, sobreviviente del Circuito Camps, cuyo testimonio ocupó un lugar central en el juicio desarrollado contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Un día antes de conocerse la sentencia en dicha causa, el 18 de septiembre del 2006, López fue vuelto a desaparecer, y desde entonces su caso no ha sido esclarecido. [109] Este acontecimiento, que reveló la fuerza de la disputa que se abría con las prácticas de juzgamiento, en esta oportunidad no llevó a desandar el proceso de justicia sino que por el contrario, lo profundizó.

Dicha profundización de las prácticas de juzgamiento coincidente con el segundo subperíodo a desarrollar, trajo aparejada la entrada en escena de prácticas reparatorias de rehabilitación por primera vez desde el final de la dictadura militar. Simultaneamente a esta irrupción, se consolidaron las prácticas reparatorias del período previo, afianzando la configuración reparatoria tendiente a la integralidad. Vale señalar que esta integralidad no sólo refiere a la multiplicidad de prácticas que pretenden la reparación de los crímenes perpetrados en el marco del genocidio. En el caso bajo estudio, las prácticas de juzgamiento han sido el eje ordenador del conjunto de prácticas reparatorias a lo largo de todo el período democrático; la expansión de los juicios ha tenido un efecto multiplicador en el universo de prácticas reparatorias implementadas. En línea con este razonamiento, el despliegue del proceso de juzgamiento durante el primer subperíodo de esta última etapa, y su posterior consolidación en el segundo subperíodo, permitió la emergencia de nuevas preguntas y respuestas en el terreno de la reparación que confluyeron en la configuración reparatoria tendiente a la integralidad.

Ahora bien, a diferencia de lo señalado para el período anterior, durante este período la relación entre justicia –asociada a las prácticas de juzgamiento- y reparación –en relación a las prácticas indemnizatorias- presentaron ambas una tendencia expansiva. Conjuntamente con la reapertura

[108] La centralidad que adquirió la cuestión de la memoria y los derechos humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner tuvo su correlato en una profusión de trabajos académicos principalmente en dos direcciones. En primer lugar, aquellos trabajos que analizaron el vínculo entre el movimiento de derechos humanos y el Estado, ya sea en términos de "cooptación" de los organismos (Mallades & Corte, 2013; Romanin, 2014), o bien como una reapropiación –no meramente instrumental- de sus demandas históricas por parte del Estado (Morales, 2017; Ohanian, 2018). En segundo lugar se ubican los trabajos que abordaron esta relación desde la perspectiva de la institucionalización de la memoria (Alonso, 2009, 2011; Da Silva Catela, 2014; Guglielmucci, 2013).

[109] Para profundizar en la investigación judicial en torno a la segunda desaparición de López, ver Rosende & Pertot (2013).

de los juicios, las prácticas indemnizatorias fueron protagonistas de un crecimiento sostenido en este último período, durante el cual no sólo se mantuvieron vigentes las medidas establecidas con anterioridad, sino que su universo de beneficiarios se amplió con la entrada en escena de nuevos instrumentos reparatorios. Con las particularidades que se desarrollarán en el próximo capítulo, fueron incluidos en la constelación reparatoria a los hijos de desaparecidos (mediante la llamada "ley de hijos" 25.914/04) y un amplio abanico de víctimas englobadas bajo la nominación de la "resistencia peronista" (a la cual estaba dirigida la "ley Dovena" 26.564/09). Finalmente, fue establecido un régimen reparatorio de pensiones graciables para los ex detenidos mediante la ley 26.913/13. Como se verá en los capítulos subsiguientes, este conjunto de prácticas fueron alcanzadas por los desplazamientos que trajeron los juicios al terreno de la reparación.

4.a) Primer subperíodo: la expansión de la prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social

A partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia pasaron a ocupar un lugar central en la agenda pública, y prueba de ello es la expansión que se verifica en las prácticas reparatorias de reconocimiento, memorialización y democratización.

En cuanto a las prácticas de reconocimiento, la más relevante entre ellas tuvo lugar en los inicios de este tercer período. Se trató de la creación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). El decreto 1259/03 de creación de este organismo descentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), estableció entre sus actividades fundamentales la obtención, análisis, clasificación y archivo de informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que estuviera comprometida la responsabilidad del Estado Argentino, así como acerca de la respuesta social e institucional ante esas violaciones.

Esta medida es concebida como una práctica de reconocimiento en tanto su objetivo principal se vinculó a la jerarquización del conocimiento construido acerca de los crímenes cometidos por el Estado, al contar entre sus tareas la digitalización y sistematización del acervo documental que ya formaba parte de la SDH, conformado entre otros documentos por el archivo CONADEP. No obstante, su significación trasciende ese ámbito, en la medida que el ANM se erigió en una dependencia que englobaba bajo su órbita todas las cuestiones relativas a la última dictadura militar. En este sentido, junto con la preservación de los archivos de la dictadura con el objetivo

de proporcionar instrumentos fundamentales en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, el ANM tenía entre sus funciones la contribución a "mantener viva la historia contemporánea de nuestro país y sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras". Para lograr este objetivo, el ANM mencionaba expresamente la necesidad de trabajar en colaboración con organismos no gubernamentales –entre los que se listaban organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, iglesias, asociaciones profesionales, académicas, estudiantiles, sindicatos y otras similares-. Ello implicaba un reconocimiento a la labor que hasta el momento habían realizado estas agrupaciones en aquellas tareas que devenían obligaciones a cumplimentar por parte del ANM. [110]

En la misma línea de jerarquización de la lucha por los derechos humanos que habían protagonizado los organismos desde la dictadura militar, se ubicó una segunda práctica de reconocimiento mediante la cual se instituyó un premio anual denominado "Azucena Villaflor de Devincenti" (decreto 1200/03). Este premio, que llevó por nombre el de una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo asesinada por los militares en 1977, estuvo destinado a reconocer a los ciudadanos y/o entidades que se hubieren destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos.

Poco tiempo después, el 24 de marzo de 2004, coincidente con el primer aniversario del golpe militar en el cual Néstor Kirchner ejercía la presidencia, se concretó la primera práctica de memorialización de este período. [111] Se trató de la firma del Acuerdo 8/04 entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación del "Espacio para la Memoria" en las instalaciones donde hubiera funcionado la ESMA. La transformación del predio emblema del terror genocida en un espacio para la promoción de los derechos humanos abierto al conjunto de la sociedad se enmarcó en un acto oficial en el cual el presidente pidió "perdón de parte del

[110] El decreto 1259/03 mencionaba además entre sus obligaciones el ofrecer su colaboración a "Memoria Abierta", asociación constituida por una alianza de ocho organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que había sido creada en 1999 para promover acciones a favor de la memoria sobre lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura militar. A su vez, listaba como antecedentes las experiencias de recuperación de la memoria histórica representadas por la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el Museo de la Memoria dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Rosario y la "Mansión Seré" en la Municipalidad de Morón, Provincia de Buenos Aires. Estas menciones, lejos de ser exhaustivas, pueden ser interpretadas como un reconocimiento a la multiplicidad de experiencias que el ANM aspiraba a canalizar institucionalmente.

[111] El antecedente local más importante en cuanto a prácticas reparatorias de memorialización se ubica en la creación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), ente autárquico y descentralizado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado por ley 961/2002 de la Legislatura Porteña y que funcionó hasta su disolución en el año 2014, guiado por el propósito de resguardar y transmitir la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado de los años 70 e inicios de los '80 hasta la recuperación del Estado de Derecho.

Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades". [112] Este acto, que en sí mismo puede considerarse como una práctica de reconocimiento, adquirió un tono fundacional en tanto no sólo demarcó claramente el posicionamiento del gobierno en relación al tratamiento de los crímenes de la dictadura, sino que lo hizo en oposición a la postura adoptada por su gobierno predecesor. Allí donde había habido muerte y desaparición, y donde posteriormente había querido instalarse en la forma de un espacio verde la idea fuerza de la reconciliación, ahora sería un espacio donde izar la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Este acto ilustró la doble ruptura que caracterizó al kirchnerismo: junta con una ruptura de largo plazo respecto de la dictadura militar, fue anudado un quiebre de corto plazo respecto del menemismo, que incluía sus políticas de memoria así como las consecuencias sociopolíticas de las reformas neoliberales.

Ese mismo día, en otro gesto histórico sin precedentes, Kirchner ordenó retirar los retratos de los generales Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de la galería del Colegio Militar, del cual los ex miembros de la Junta Militar habían sido directores. Hacia el interior de esa institución, esta práctica de democratización estuvo dirigida a marcar un claro límite frente a lo que estos militares encarnaban: no había lugar en las Fuerzas Armadas para quienes estuvieran dispuestos a levantar las armas contra el pueblo. El mismo mensaje se había transmitido mediante la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas y el retiro del setenta y cinco por ciento del generalato en funciones anunciado por Kirchner a pocos días de su asunción. Estas prácticas evidencian la pretensión del gobierno de Kirchner de reconstituir la institución militar sobre la base de repudio a la violencia estatal del pasado, y a la vez subsumida a la autoridad del poder presidencial. [113]

Entre las prácticas reparatorias promovidas durante la presidencia de Néstor Kirchner también resultan significativas un conjunto de prácticas de reconocimiento que empalman la búsqueda de la verdad acerca de los hechos acontecidos durante la última dictadura con el matiz refundacional en relación a esta temática. La más importante de ellas refiere a la publicación en 2006 de una reedición del Nunca Más en ocasión de los treinta años del golpe de Estado con la inclusión de un

[112] "Palabras del presidente de la nación, Doctor Néstor Kirchner, en el acto de firma del convenio de la creación del museo de la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos". Disponible en: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064 [consultado el 26/11/2021]

[113] En un sentido similar, en el año 2006 fue reglamentada la ley de defensa nacional que había sido sancionada durante el gobierno de Alfonsín (ley 23.544), en el cual se refuerza la limitación del ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas y se rechaza enfáticamente su accionar en tareas de seguridad interior (decreto reglamentario 727/06).

nuevo prólogo. Si el prólogo original fue considerado una cristalización de los sentidos asociados a la "teoría de los dos demonios", en esta reedición este esquema interpretativo era expresamente repudiado, y en su lugar emergía el paradigma del "terrorismo de Estado" como hegemónico en la disputa por el sentido del pasado reciente.

En la introducción de esta tesis se ha mencionado que este paradigma propone una relectura del conflicto que coloca en el centro del análisis al accionar del Estado, y lo responsabiliza por la violencia desplegada contra el conjunto social. Ello produce por un lado, una representación de la sociedad como la víctima de este accionar terrorista encarnado por el Estado, y en el mismo movimiento invisibiliza –aunque ya no repudia expresamente- la lucha insurgente (Feierstein, 2018). A diferencia de la despolitización de las víctimas que se desprendía del prólogo original del Nunca Más, la reedición del 2006 reivindicaba las prácticas de militancia de aquella generación diezmada a la que el propio presidente pertenecía, pero resituándola en una matriz liberal que eludía todo posicionamiento respecto de la lucha armada (Silveyra, 2021). [114]

Retomando las prácticas de memorialización relevadas durante este período, tras el primer impulso en ese sentido que había significado la recuperación de la ESMA, mediante decreto 848/04 fue declarado monumento histórico nacional la "Casa Mariani – Teruggi" ubicada en la Ciudad de La Plata. [115] Con el objetivo de fortalecer estas iniciativas, en el año 2007 fue creada bajo la órbita del ANM la Red Federal de Sitios de Memoria (ReFeSiM), organismo interjurisdiccional a cargo de la articulación entre el PEN y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y municipios, con eje en las actividades de investigación, educación y comunicación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención (Res. 14/07 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). La marcación de dichos sitios de memoria mediante instalaciones que permitieran una identificación visual y conceptual común en todo el territorio nacional, acompañadas de información sobre las características represivas del lugar señalizado, cuentan entre las consecuencias más relevantes vinculadas a la creación de la Red.

[114] Inscripta en la misma línea que la reedición del Nunca Más, en 2006 se dispuso la reimpresión del *Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina ante la CIDH*, producto de la visita de este organismo internacional al país en el año 1979, y cuya difusión había sido obstaculizada por el gobierno militar (Resolución 568/06 del Ministerio de Justicia).

[115] La vivienda conocida como la "Casa de los Conejos" funcionó como una casa operativa de la agrupación Montoneros. El 24 de noviembre de 1976 fue brutalmente atacada, y los disparos producidos en ese ataque todavía se conservan en forma de huellas en sus paredes. En el operativo, la hija del matrimonio Mariani-Teruggi fue secuestrada por personal de las fuerzas de seguridad y al día de hoy se desconoce su destino.

El intercambio de experiencias y metodologías locales de señalización y recuperación de espacios para la memoria como parte de las actividades desarrolladas por la ReFeSiM, dieron lugar a renovados debates en torno a las consecuencias del genocidio en Argentina. A su vez, estos debates se canalizaron en encuentros y publicaciones en las cuales se destacó la importancia de las tareas de la ReFeSiM en el acompañamiento de los procesos judiciales que ya se habían reiniciado contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. [116] En línea con una de las claves interpretativas propuestas para el análisis de este período, esta expresa mención da cuenta de cómo las prácticas de juzgamiento motorizaron las prácticas de memorialización en este caso encarnadas en la Red.

Asimismo, en el accionar de la ReFeSiM se imbricaron fuertemente las prácticas de memorialización con las prácticas reparatorias de reconocimiento. Muestra de ello es la construcción de un Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) que permitió la unificación de un amplio cuerpo de registros generados a lo largo del tiempo en distintas áreas de la SDH y el ANM. La consolidación de la ReFeSiM fue fundamental para la coordinación y comunicación necesaria para la construcción de este sistema federal de datos, que comenzó a desarrollarse en el año 2008 y desde entonces continúa en permanente actualización. [117] Por último, vale mencionar entre las prácticas de memorialización vinculadas a este organismo la creación del Museo del Archivo Nacional de la Memoria, con la función de custodiar y exhibir los objetos relativos a la represión ilegal que le fueran dados en guarda por parte de particulares, instituciones y organismos dependientes de los poderes del Estado Nacional (decreto 1852/07).

Finalmente, las prácticas de memorialización también tuvieron su correlato en el establecimiento de fechas conmemorativas. En este sentido, el 22 de octubre de cada año fue declarado como Día Nacional del Derecho a la Identidad, en conmemoración de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo (ley 26.001/05). A su vez, el día 24 de marzo fue incorporado entre los feriados nacionales en tanto día nacional de la memoria por la verdad y la justicia (ley 26.085/06), permitiendo su incorporación a las efemérides escolares. [118]

---

[116] En la colección "*Sitios de memoria: experiencias y desafíos*" fueron publicados los debates que se dieron durante los primeros Encuentros Nacionales, los cuales dan cuenta de la multiplicidad de experiencias que pudieron ser puestas en diálogo a partir de la tarea de la ReFeSiM.

[117] Para profundizar sobre el proyecto RUVTE y sus orígenes, ver Vásquez, et.al. (2011).

[118] Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Ministerio de Educación fueron implementadas prácticas de reconocimiento en el ámbito de la política educativa que promovieron el debate en torno a la memoria y los derechos humanos al interior de las escuelas. Entre ellas se destacan el proyecto "Escuelas por la Identidad", lanzado en marzo de 2005 por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo y el proyecto "A 30 años del golpe" del año 2006, cuyo

Las prácticas reparatorias de restitución dirigidas a las víctimas directas del genocidio que tuvieron lugar en este período también estuvieron permeadas por la reinvidicación de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. En este sentido, en el año 2004 fue replicada la creación del "Fondo de reparación histórica para la localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio en Argentina", que ya había funcionado durante 1999 (ley 25.974/04). Ese mismo año, fue creada en el ámbito de la CONADI la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (decreto 715/04). Si bien la restitución no adquirió centralidad durante este período, estas medidas dan cuenta de que las mismas formaron parte de una visión integral en torno a la reparación de los crímenes de Estado. A su vez, se destaca que en este período las prácticas de restitución estuvieron dirigidas exclusivamente a la problemática de apropiación de niños, sin contemplar otros posibles terrenos de acción.

Las medidas relevadas hasta aquí se desplegaron en un escenario caracterizado por un fuerte impulso al conocimiento público de lo sucedido durante el período dictatorial que aportaban los juicios contra los represores. Hacia el final de este subperíodo, algunas causas ya llegaban al momento del dictado de su sentencia judicial. En el marco de la lectura de la sentencia del proceso abierto contra el genocida Etchecolatz, el testimoniante Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez. [119] A la luz de estas circunstancias, cobra relevancia el postulado presentado en el capítulo anterior, según el cual los juicios no necesariamente provocan tensiones al interior de las sociedades en las cuales se desarrollan, sino que en un sentido diferente, se considera que los mismos *revelan* determinadas relaciones de poder que subyacen a esa sociedad. A su vez, la existencia de estos conflictos así como su modo de expresión en el ámbito de los juicios –que sin dudas, en la desaparición de López adquirió su modalidad más cruenta y radicalizada- no necesariamente indica que la democracia como modelo político institucional se encuentra en riesgo de ser socavada, tal como señalan quienes advierten sobre el presunto peligro

objetivo fue profundizar el conocimiento de lo sucedido durante la dictadura militar como un modo de consolidar la educación en derechos humanos.

[119] La causa contra el genocida Etchecolatz fue la segunda en obtener sentencia en el marco del proceso reabierto en 2006. La primera de ellas había sido la causa contra Julio Simón, alias "el turco Julián", por la apropiación de Claudia Victoia Poblete y el secuestro y tortura de sus padres, José Poblete y Gertrudis Hlaczik. La causa que condenó a Etchecolatz, quien fue Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en perjuicio de 14 víctimas al interior del denominado circuito Camps, tramitó en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata y fue la primera en calificar los delitos perpetrados en el marco de un genocidio.

que implican los juicios para la estabilidad democrática desde la perspectiva de la justicia transicional.

La gravedad del caso López puso sobre la mesa la virulencia de las disputas protagonizadas por los actores involucrados en el proceso de juzgamiento. A partir de entonces, se fue construyendo una nueva manera de concebir la reparación a los crímenes de Estado, en el cual las prácticas de rehabilitación dirigidas a las víctimas directas fueron adquiriendo centralidad. Enmarcadas en el paradigma de la integralidad, la rehabilitación fue acompañada de una profundización continua de las prácticas reparatorias restantes durante el segundo subperíodo, tal como se desarrollará a continuación. Particularmente, su emergencia significó un parteaguas al interior de las prácticas indemnizatorias, a cuyo análisis estará dedicado el próximo capítulo.

4.b) Segundo subperíodo: la profundización de la integralidad de la reparación

La profundización de la perspectiva de la reparación en términos de su integralidad presentó durante este período dos particularidades complementarias. En primer lugar, las prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social continuaron en la tendencia expansiva que habían presentado en el subperíodo precedente. Conjuntamente, las prácticas dirigidas a las víctimas directas presentaron un dinamismo inusitado, que se observa principalmente en la emergencia de prácticas de rehabilitación así como en menor medida, en la extensión de prácticas de restitución.

Si bien se ha demarcado el año 2007 como el inicio de este último período, dado que fue a partir de la segunda desaparición de Jorge Julio López que se produjeron los desplazamientos más significativos en el terreno de la reparación, la profundización de las prácticas reparatorias debe enmarcarse en un contexto más amplio atendiendo a las transformaciones en las correlaciones de fuerza que se verifican a partir de la asunción de Cristina Fernandez de Kirchner a la presidencia. A poco de iniciarse su mandato, en marzo de 2008, fue dictada la Resolución 125/08 mediante la cual se establecía un sistema móvil de retenciones a la exportación de soja, trigo y maíz, en un escenario de fuerte incremento de sus precios internacionales. Las principales organizaciones agropecuarias con el apoyo de pequeños productores y sectores opositores al gobierno respondieron con un paro que incluyó cortes de ruta en todo el país y que dio inicio a la "crisis del campo". A partir de entonces, el conflicto político comenzó a concebirse desde una matriz dicotómica ilustrada con la metáfora de una grieta, a la luz de la cual fueron interpretadas el conjunto de prácticas estatales. La escalada en la polarización produjo una profundización por

parte del gobierno en aquellos ámbitos que se habían configurado como emblemas del "modelo kirchnerista": la redistribución de la riqueza, la ampliación de derechos sociales, la lucha contra determinados monopolios –en particular, contra los monopolios de medios de comunicación [120]- y también las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En este contexto, Feierstein sitúa la emergencia de una versión de los dos demonios que denomina como *recargada*, cuya diferencia con la teoría de los dos demonios original refiere a que la igualación de las víctimas no tiene por objetivo la jerarquización de la violencia estatal y la exculpación del conjunto social, sino la visibilización de las "víctimas negadas" que sufrieron la violencia insurgente, instalando así la sospecha sobre las víctimas del genocidio mediante la adjudicación de la responsabilidad por el despliegue de la violencia (Feierstein, 2018). Este fue el trasfondo sobre el cual se profundizaron las prácticas reparatorias que serán analizadas en los apartados siguientes.

Si el inicio de este subperíodo estuvo signado por las limitaciones que surgieron en torno a las prácticas reparatorias de juzgamiento, también sus potencialidades comenzaban a hacerse palpables. En este sentido, la inclusión de múltiples actores sociales en el ámbito de los juicios fue impulsada por la modificación del Código Procesal Penal que habilitó a los organismos de derechos humanos a presentarse como querellantes en las causas relativas a delitos de lesa humanidad (ley 26.550/09). La presencia de los organismos de derechos humanos como interlocutores privilegiados otorgó a los juicios un dinamismo sin precedentes, cuyo correlato fueron no sólo una gran cantidad de causas judiciales tramitadas durante este período, sino principalmente, se evidenció en la riqueza de los debates que allí se plasmaron en torno a las representaciones del pasado en disputa.

La medida emblema de este período fue la creación del Programa Verdad y Justicia, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros (decreto 606/07), práctica reparatoria motivada por la desaparición de Jorge Julio López. El punto de partida del Programa concebía el proceso de juzgamiento como uno de los pilares para el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, y señalaba que su reapertura requería el ajuste de las capacidades

[120] Los debates en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/09), conocida como "Ley de medios" fueron un hito en esta polarización. Esta ley reemplazaba la ley 22.285/80, promulgada durante la dictadura militar, y se proponía limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y promover un funcionamiento más democrático de la radio y la televisión. Ello potenció el enfrentamiento entre el gobierno y los principales grupos de medios, especialmente el Grupo Clarín y el Diario La Nación, cuyos propietarios fueron acusados por los crímenes cometidos en el marco de la adquisición de la empresa Papel Prensa en complicidad con el gobierno militar. Este debate fue zanjado en el ámbito judicial, y la declaración de la constitucionalidad de la ley por parte de la CSJN en el año 2013, tras cuatro años durante los cuales una medida cautelar había impedido la implementación de la mayoría de los artículos de la ley considerados "antimonopólicos".

estatales. Este ajuste refería expresamente a los hechos relativos a la desaparición de López, cuyo impacto negativo en la sociedad planteaba la exigencia de una respuesta estatal que garantice el avance del proceso de verdad y justicia.

El Programa hacía pie fundamentalmente en las prácticas de juzgamiento, en tanto su principal objetivo era realizar un seguimiento de los juicios para garantizar su desarrollo y remover los obstáculos que afecten su normal desenvolvimiento. Pero además, se proponía garantizar la contención, protección y seguridad de todas las personas intervinientes en dicho proceso, incorporando así una perspectiva más amplia en torno a la reparación asociada al proceso de justicia. Finalmente, consideraba la investigación de los crímenes cometidos por el Estado como uno de los pilares en torno al proceso integral de verdad y justicia, y lo incluía entre sus responsabilidades, acercando también su esfera de acción hacia las prácticas de reconocimiento.

En este sentido, el Programa Verdad y Justicia puede considerarse una expresión de la perspectiva de la integralidad. Ahora bien, esta integralidad adquiere un matiz particular, en tanto las prácticas de juzgamiento tienen un peso diferencial entre las diversas medidas que componen la reparación integral. A las diversas expresiones de esta configuración que han sido señaladas a lo largo de este capítulo, se añade en este caso la homologación que este programa propone entre "la verdad y la justicia" y el proceso de juzgamiento. A modo de síntesis, y a la luz de la periodización presentada, la manifestación de la integralidad en el caso argentino sitúa a las prácticas de juzgamiento como el eje central de la reparación, a partir de las cuales el conjunto de prácticas reparatorias se ven transformadas, tal como se verá a continuación.

En este último período, la frontera que permite distinguir entre los distintos tipos de prácticas se vuelve más difusa. De este modo, en su mayoría no se trata de prácticas reparatorias "puras", sino que más de un tipo de práctica reparatoria puede verse involucrada en una misma medida a implementar. Esta particularidad puede interpretarse como una demostración de que la integralidad comenzaba a crear arraigo al interior del universo de la reparación.

- La profundización de la expansión de las prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social

En continuidad con la tendencia presentada en los años anteriores, durante este subperíodo fueron implementadas una vasta cantidad de medidas correspondientes a prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social.

Entre ellas, fueron sin dudas las prácticas de memorialización las cuales en continuidad con las medidas implementadas en el subperíodo anterior, presentaron una mayor visibilidad. En principio, esta continuidad involucró las medidas relativas al "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos" en las instalaciones de la ESMA. Tras la firma de un Convenio celebrado entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 2007, al momento de concretarse la desocupación del predio, los lineamientos en cuanto a la organización y funcionamiento del ente público fueron establecidos mediante ley 26.415/08. Su aspecto más significativo fue el otorgamiento de la tenencia de los distintos edificios que conformaban el predio de la ESMA a diversas instituciones estatales y no gubernamentales para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Posteriormente, en el año 2008, fueron declarados monumentos historicos nacionales el edificio del Casino de Oficiales de la ESMA (decreto 1333/08) y la Iglesia de la Santa Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (decreto 2130/08). [121]

Asimismo, la ley 26.691/11 consagró oficialmente a los Centros Clandestinos de Detención como sitios de memoria, y estableció que su preservación debía ser garantizada por el Poder Ejecutivo Nacional. Al momento de su reglamentación en 2014, la política nacional de señalización de sitios había alcanzado a más de setenta marcaciones instaladas en todo el país. A su vez, se mencionaba una treintena de iniciativas de recuperación de espacios de memoria en curso, con amplia participación de organismos de derechos humanos, familiares y compañeros de detenidos desaparecidos así como sobrevivientes (decreto 1986/2014).

Por último, hacia el final del período se observa un momento de fuerte dinamismo en las prácticas de memorialización implementadas. Esta afirmación se sustenta en primera instancia en una multiplicidad de medidas asociadas a la declaración de monumentos y lugares históricos, así como en el ámbito de las conmemoraciones que acompañaron esta tendencia expansiva. [122] La

[121] De las puertas de este templo había sido secuestrado un grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos que durante la dictadura se reunían en una sala contigua a la Iglesia, bajo el amparo de los hermanos pasionistas a quienes el mismo pertenecía. Este grupo de personas desaparecidas, junto con la religiosa francesa Leonie Duquet, quien también asistía a las reuniones y fue secuestrada pocos días después, había sido enterrado en los jardines de la Iglesia tras la identificación de sus cuerpos gracias a la labor del EAAF.

[122] En cuanto a la declaración de sitios de memoria cuentan el Parque de la Memoria (decreto 1285/14); y el del Centro Clandestino de Detención "D-2" en la Provincia de Córdoba, la Casa por la Memoria del Chaco, la "Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge "Nono" Lizaso", ubicada en el Partido de Vicente López; y el Museo de la Memoria "Ex Comando del II Cuerpo de Ejército", en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (decreto 379/15). En cuanto a las conmemoraciones, fue instituido el 8 de enero como el Día Nacional de la Memoria en el Deporte en conmemoración del atleta Miguel Sánchez, desaparecido en 1978 durante la última dictadura cívico-militar (ley 26.990/14) y el 14 de junio como Día Nacional del Barrendero, en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva, a

creación del el Museo del Sitio de Memoria ESMA puede ser señalado como el corolario de este proceso de creciente memorialización durante este último período analizado (decreto 1133/15).

En cuanto a las prácticas de reconocimiento que tuvieron lugar en este período, cuenta la implementación de un procedimiento para dejar constancia en las actas electorales de los ciudadanos declarados ausentes por desaparición forzada (decreto 935/10). Capítulo aparte merecen un conjunto de prácticas reparatorias que es posible situar en los bordes que delimitan el reconocimiento con la restitución. Me refiero a un conjunto de medidas desplegadas en torno a la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de víctimas en los cuales se había omitido deliberadamente esta información. Estas medidas persiguieron el doble objetivo de restituir los legajos a los trabajadores a través de su entrega a sus familias, y al mismo tiempo, promovieron el reconocimiento de la verdad de lo sucedido al consignar la información certera en la documentación correspondiente. [123]

El puntapié inicial de esta iniciativa fue la firma de un Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (SOP) y el ANM en al año 2007, ratificado mediante Res. 1486/08, mediante el cual se conformaba una Comisión de Trabajo "*Por la Reconstrucción de Nuestra Identidad*", tendiente a identificar, preservar y clasificar información, testimonios y documentos referidos al accionar represivo del Estado en dicha repartición. Las tareas de relevamiento del personal de la SOP habían permitido para fines de 2011 la recuperación de doscientos setenta legajos pertenecientes a víctimas de desaparición forzada (Balé, 2018).

Siguiendo a Balé (2018), el trabajo realizado durante los primeros años de funcionamiento de la Comisión le permitió constatar un procedimiento común en cuanto al modo en que el Estado Nacional daba por concluida la relación laboral con los trabajadores secuestrados. [124] A partir de

---

Néstor Julio Sanmartino y a Julio Armando Goitía, trabajadores barrenderos del "Corralón Municipal de Floresta", desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (ley 27.069/14).

[123] Tal como fue analizado en un trabajo previo, un conjunto de sentencias judiciales dictadas en el marco del proceso de juzgamiento reabierto en 2006 avanzaron en establecer medidas de reparación más allá de la esfera de la justicia penal. Evidenciando la vinculación entre las representaciones de la reparación presentes en el ámbito judicial con las prácticas reparatorias estudiadas en estas líneas, algunas de estas sentencias dispusieron la restitución de legajos adulterados de trabajadores detenidos desaparecidos más allá del ámbito de las dependencias estatales. Para profundizar, ver Schneider (2017).

[124] El procedimiento consistía a grandes rasgos, en dar de baja de su puesto al trabajador o la trabajadora secuestrados alegando "abandono de tareas". Tras el envío de intimaciones a presentarse –que por supuesto no eran respondidas-, el trabajador era despedido "con causa justa" debido al incumplimiento de las condiciones de asistencia. Este desenlance sucedía incluso cuando los familiares se presentaban en lugar del trabajador para explicar la causa de la inasistencia, presentación que quedaba registrada en el legajo incluyendo copias de pedidos de hábeas

este hallazgo, la propia Comisión se propuso ampliar su ámbito de funcionamiento para buscar una herramienta que les permitiera identificar y corregir los legajos de personas desaparecidas no solo en la órbita del Ministerio de Planificación, sino de toda la APN, en la cual el Estado era a la vez el empleador y el secuestrador. Fruto de los esfuerzos en esta dirección, fue promulgado el decreto 1.199/12, reglamentado por Res 493/12, lo que contribuyó a la ampliación y visibilización de las tareas relativas a la reparación de legajos realizada por la Comisión.

Este decreto dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas que habían sido identificadas hasta entonces por la Comisión, y a su vez formalizó su accionar en las tareas de reparación documental en todo el ámbito de la APN. En los años que siguieron, se produjeron "actos homenajes" en diversas reparticiones estatales en los cuales la reparación de legajos culminaba con la entrega de los mismos a las familias de los trabajadores desaparecidos. Hacia el final del período bajo análisis, se habían realizado un total de veinticinco actos conmemorativos en los cuales fueron entregados ciento cincuenta y dos legajos reparados a familiares de las víctimas (Balé, 2018). [125]

Anteriormente, en 2009, la condición de detenido-desaparecido había sido incluida en los registros de las Fuerzas Armadas en los casos de aquellos soldados que habían sido secuestrados durante la conscripción obligatoria y fueron declarados "desertores" por la dictadura militar (Res. Ministerio de Defensa 420/09). Esta práctica también puede situarse en la frontera con las prácticas de democratización, anudada a la refundación de las Fuerzas Armadas que había formado parte del paradigma presentado durante el subperíodo anterior. En igual sentido resulta relevante la desclasificación de toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983 promovida mediante decreto 4/10.

- La emergencia de las prácticas de rehabilitación

---

corpus, notas internas, etc. Finalmente, también se constataron casos en los cuales el trabajador era despedido un día antes o el mismo día de que se produjera su secuestro.

[125] Entre 2013 y 2015 fueron emitidas las resoluciones que establecían la rectificación de los legajos de trabajadores que revistaban en Aerolíneas Argentinas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (CCMHC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Salud, Desarrollo Social, la Administración General de Puertos (AGP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Casa de Moneda Argentina, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.

A lo largo del presente capítulo se ha insistido en que la reapertura de los juicios produjo nuevas dinámicas en el conjunto de las prácticas reparatorias. Entre ellas, la centralidad insoslayable de las víctimas testimoniantes en las causas judiciales produjo la aparición de prácticas de rehabilitación que habían estado ausentes entre las iniciativas tendientes a la reparación por parte del Estado. Hasta entonces, incluso durante la dictadura, habían sido los propios organismos de derechos humanos quienes habían ensayado respuestas psicoasistenciales a las víctimas de la violencia estatal. Promovidos los juicios como política de Estado, la necesidad de acompañamiento y contención de los sobrevivientes y sus familiares también comenzó a plantearse como una obligación estatal a ser asumida. [126]

La experiencia inicial en este sentido se vincula con la gestación del "Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado", en el ámbito de la SDH. Si bien el funcionamiento del programa no fue formalizado hasta el año 2009, documentos oficiales dan cuenta de que el mismo ya había sido puesto en marcha a principios del 2006. [127] El mismo se proponía por un lado, el análisis e investigación de las consecuencias e impacto de los crímenes de Estado en la construcción de subjetividades, así como los efectos derivados del modo de construcción de lazos sociales a partir de las marcas de la impunidad. Por otro lado, apuntaba a pensar estrategias y políticas de abordaje terapéutico en relación a las víctimas directas, que incidan sobre las sintomatologías actuales producidas por la criminalidad dictatorial. La articulación con los diversos programas existentes en los cuales se pusieran en juego las heridas producidas por dicha criminalidad era una de las premisas fundantes del Programa (SDH, 2006).

Este programa, que implicó por primera vez la asunción del Estado en materia de rehabilitación de las consecuencias del genocidio en la salud mental, se fue complejizando en función del crecimiento de la participación de las víctimas en el marco de los juicios en calidad de testimoniantes. Pero a su vez, lo que hace de esta una práctica reparatoria significativa es que la misma se plantea como "un aporte en el campo de las políticas reparatorias del estado como concepto más abarcativo de la reparación económica, instituída por el marco jurídico." Si una de las hipótesis fundamentales que ha servido de base a la construcción de esta periodización es la hegemonía de las prácticas indemnizatorias como modo de concebir la reparación de los crímenes

[126] En este sentido, en el marco de la conmemoración del bicentenario durante el año 2010, los juicios de lesa humanidad fueron declarados como política de Estado por parte de la Cámara de Diputados de la Nación.

[127] El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado fue creado mediante Resolución MINJSDH 1207/09, en el marco de la creación de diversos Programas en el ámbito de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos.

de Estado durante todo el período bajo análisis, resulta relevante que aquí por primera vez el Estado reconoce la importancia de ampliar este paradigma para trascender el plano estrictamente económico.

Este desplazamiento no implicó una disminución en la centralidad de las prácticas indemnizatorias, dado que las mismas continuaron ampliándose y profundizándose a partir de la entrada en escena de las prácticas de rehabilitación. Sin embargo, puede pensarse que a partir de entonces, fue añadido un tercer elemento al contrapunto entre justicia e indemnizaciones que había signado las discusiones en torno a la reparación y sobre el cual se había construido su representación hegemónica. En este sentido, sostengo que a partir de esta nueva configuración reparatoria la integralidad como paradigma de la reparación adquiere su significación cabal. De esta manera, esta nueva configuración trajo aparejado un cambio en relación a las representaciones del daño a reparar mediante las prácticas reparatorias, tal como será analizado en el capítulo siete.

Ahora bien, se ha dicho que la reapertura de los juicios marcó el primer paso en este camino cuyo hito inicial se ha presentado en los párrafos precedentes. Sin embargo, fue la desaparición de Jorge Julio López el acontecimiento que volvió indispensable colocar en el centro de las prácticas reparatorias la importancia de atender en todos los planos las consecuencias actuales del genocidio. Fue entonces que en el marco de las acciones producidas tras la desaparición de López surgió el "Plan Nacional de Acompañamiento y asistencia integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado" (PNA). El objetivo central de esta práctica que puede ser categorizada como una práctica de rehabilitación fue la implementación de una red nacional que estableciera un espacio de confiabilidad necesario para la asistencia y la protección a querellantes y testigos de violaciones de derechos humanos, desde el cual fuera posible acompañar a quienes debían prestar su declaración en el marco de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad (Res. SDH 003/07).

Al calor de las crecientes demandas de acompañamiento que arrojaban los juicios, fue creado en 2009 el "Centro de Asistencia a víctimas de terrorismo de Estado Dr. Fernando Ulloa", bajo la órbita de la SDH. La función esencial del Centro fue la asistencia a las víctimas desde una perspectiva integral que contemplara la contención psicológica, orientación y derivación en función de las demandas que se detecten como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos (Res. 1271/2009). Para el cumplimiento de esta función, era necesario

construir una red de profesionales de salud mental que abarcara todo el territorio nacional y que comprometiera el sistema público de salud en su funcionamiento, tarea que también fue asumida desde el Centro. En línea con la argumentación presentada, esta práctica estaba dirigida especialmente a aquellas víctimas que tuvieran que comparecer en los juicios por delitos de lesa humanidad, lo que permite inferir que la importancia de brindar asistencia psicosocial a las víctimas de los crímenes de Estado sólo emergió con el avance del proceso judicial. Como se verá en el próximo apartado, esta emergencia también generó desplazamientos en cuanto a la implementación de las prácticas indemnizatorias.

Vale mencionar que tal como sucedió en el subperíodo precedente, en esta etapa las prácticas de restitución también versaron en torno a la problemática de apropiación de niños, tal como demuestran una serie de medidas dirigidas a enmarcar las tareas desarrolladas por el BNDG. Junto con la creación del Archivo Nacional de Datos Genéticos dentro de su órbita (ley 26.548), fue creado el Grupo Especial de Asistencia Judicial (Res. 1229/2009), a cargo exclusivamente de aquellas tareas que vinculaban el BNDG con el ámbito judicial. Si bien desde su conformación el BNDG había sido concebido como auxiliar de la justicia, esta autonomización de las responsabilidades asociadas a la esfera jurídica obedece sin dudas a la centralidad creciente que adquirió durante esta etapa la escena judicial en materia de prácticas reparatorias.

Para finalizar, la última práctica de restitución relevada durante este período fue instrumentada mediante Res. 679/09, la cual estableció la creación de la "*Unidad de regularizacion documental de las victimas de violaciones de los derechos humanos en el marco del accionar del terrorismo de estado*". Si bien entre sus objetivos cuenta la regulación de la documentación personal de las víctimas de apropiación o sustitución de identidad, el universo de destinatarios de esta práctica se expande para incluir entre otros a las personas beneficiarias de las leyes indemnizatorias, lo que demuestra la imbricación que los distintos tipos de prácticas reparatorias presentaron en este período.

Capítulo 4

Las prácticas indemnizatorias de los crímenes de Estado en Argentina

En el capítulo previo se ha presentado una periodización exhaustiva de la multiplicidad de medidas tendientes a la reparación implementadas entre 1983 y 2015, a partir de la cual se postuló la existencia de tres constelaciones reparatorias hegemónicas. La configuración particular en cada uno de los tres períodos se caracterizó por la primacía de diversas representaciones acerca de la reparación, que se construyeron a su vez sobre la base del contrapunto particular entre las prácticas de juzgamiento y prácticas indemnizatorias al interior de cada uno de ellos. En este contexto, fueron situadas las prácticas indemnizatorias en el marco general que las contiene, lo que ha permitido identificar los principales desplazamientos que las caracterizaron, al igual que las transformaciones que las mismas contribuyeron a construir.

Considerando la relevancia otorgada a las prácticas indemnizatorias al interior del universo de prácticas reparatorias, este capítulo persigue dos objetivos. En primer lugar, se propone abordar su devenir y desarrollo histórico en el transcurso del tiempo, a modo de desdoblamiento de la periodización presentada en el capítulo precedente. En segunda instancia, con el propósito de profundizar en su comprensión, este desarrollo estará acompañado por la presentación de un conjunto de datos construidos a fin de dar cuenta de las tendencias generales acerca del comportamiento de las prácticas indemnizatorias a lo largo del período analizado.

Para comenzar, la relevancia de las prácticas indemnizatorias obedece a dos motivos. El primero de ellos se vincula con el hecho de que considerando la multiplicidad de prácticas reparatorias de los crímenes de Estado, el término reparaciones ha sido utilizado para referir exclusivamente a las indemnizaciones, denominadas institucionalmente como “Leyes Reparatorias”, simbolización que otorga una jerarquía específica a las prácticas indemnizatorias respecto del resto de las medidas de reparación. En segundo lugar, el espacio significativo que ocuparon las prácticas indemnizatorias se vincula con que las mismas presentaron un crecimiento sostenido durante todo el período analizado.

No obstante este lugar relevante en la construcción de los modos de concebir la reparación durante todo el período posdictadura, las prácticas indemnizatorias han sido escasamente abordadas desde los campos de estudios vinculados a las temáticas que atraviesan esta

investigación. Al menos dos elementos han contribuido a la instalación de esta ausencia en torno a las denominadas *indemnizaciones*.

El primero de ellos se relaciona con las propias controversias suscitadas en torno a las reparaciones económicas. En el próximo capítulo se profundizará en la fundamentación que permite postular que estas controversias tienen su origen en las significaciones negativas atribuidas al dinero en tanto herramienta de la reparación. Como consecuencia, las discusiones en torno a las prácticas indemnizatorias permanecieron en el ámbito privado de las víctimas y no trascendieron más allá de las fronteras de los organismos de derechos humanos, quienes en su mayoría evitaron dar a conocer su posicionamiento a favor de las indemnizaciones, quedando así la escena pública reservada a las manifestaciones de repudio a las mismas por parte de algunas organizaciones en particular. En este punto, al día de la fecha continúa pendiente un debate profundo que involucre al conjunto social acerca de las implicancias de las indemnizaciones como modo hegemónico de concebir la reparación.

El segundo elemento que ha contribuido a que esta temática no haya sido materia de análisis se refiere a la falta de información pública acerca de su implementación. Durante los años en los cuales se llevó a cabo esta investigación, los múltiples intentos por acceder a datos oficiales que permitan profundizar el conocimiento en torno a las leyes reparatorias han resultado infructuosos. Entre las consecuencias que acarrea esta ausencia de datos, hay una que reviste una importancia central. Me refiero a que si bien es posible postular que las prácticas indemnizatorias crecieron permanentemente desde su surgimiento a la luz de la sanción sucesiva de instrumentos que ampliaron el universo de beneficiarios contemplados bajo su órbita, la posibilidad de constatar el alcance efectivo de las mismas tropezaba pronto con la falta de información disponible sobre su implementación.

Durante los años iniciales de vigencia de las leyes reparatorias fueron publicados algunos informes que daban cuenta de los primeros resultados alcanzados por la entonces novedosa modalidad reparatoria. Sin embargo, hacia el año 1999, con el traspaso de la Subsecretaría de Derechos Humnos y Sociales del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta información dejó de ser difundida. Ello fue así debido a que se consideró que el principio de publicidad de los actos de gobierno que tiene por objetivo garantizar el derecho a la información pública, vulneraba el derecho a la protección de datos personales, en los casos de ser conocidos datos sensibles de los beneficiarios. Ante esta situación, el Estado ha omitido brindar

información relativa a la implementación de las leyes reparatorias. Este silencio ha provocado suspicacias en torno al monto y el destino de las reparaciones económicas, así como cuál ha sido efectivamente el alcance de las mismas en cuanto al universo de víctimas beneficiadas. La expresión peyorativa del "curro de los derechos humanos" para referir entre otras iniciativas estatales al universo de las leyes reparatorias acuñada por Mauricio Macri algunos meses antes de ser electo presidente es sin dudas la manifestación más extrema de estas suspicacias, en el marco de las disputas por Memoria, Verdad y Justicia que en el capítulo anterior se caracterizaron como una versión *recargada* de los dos demonios, y que se articularon con una avanzada de los discursos relativizadores del proceso genocida.

En este marco, la decisión de avanzar con el estudio de las prácticas indemnizatorias abrazó los elementos mencionados como los dos grandes desafíos que han signado el camino recorrido. Por lo tanto, esta investigación se encuentra atravesada fundamentalmente por la dificultad que supone abordar el terreno particularmente espinoso para la reflexión que han configurado las prácticas indemnizatorias, objeto de polémicas tanto para quienes resultaron beneficiarios de las mismas como para sus detractores. Desde este punto de partida, espero poder iluminar estas controversias, a partir de aportar algunos elementos que contribuyan a desentrañar los motivos que hacen que pese a que las indemnizaciones se vienen implementando ininterrumpidamente desde 1983, todavía hoy resulte difícil hablar sobre las reparaciones económicas. Este propósito es el que guía la argumentación a presentar en los próximos capítulos, dedicados a analizar las representaciones que subyacen a las prácticas indemnizatorias, en relación a cómo se repara, cuál es el daño que se proponen reparar, y quiénes son los sujetos-víctimas de la reparación.

En cuanto a la otra dificultad señalada acerca de la inaccesibilidad de datos oficiales acerca de la implementación de las leyes reparatorias, esta investigación asumió en principio el riesgo de la falta de información precisa para una reconstrucción empírica lo suficientemente sólida para el análisis de las prácticas indemnizatorias. Sin embargo, esta dificultad pudo sortearse parcialmente a partir de una resolución emitida en el año 2017 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en cuya órbita se sitúa la autoridad de aplicación de las leyes reparatorias. La Providencia N° PV-2017-02350769-APN-MJ emitida por la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispuso la publicación de la parte dispositiva de todos los actos administrativos dictados por el titular de la cartera de Justicia desde su conformación como tal en el año 1999. Si bien la información recabada a partir de esta

disposición no permite suplir cabalmente la ausencia de datos oficiales, ello hizo posible la construcción de una base de datos que aporta carnadura empírica a la evolución histórica de las prácticas indemnizatorias durante el período abarcado. El acceso al listado de resoluciones emanadas del área en la cual tramitan las leyes reparatorias habilita la realización de algunas estimaciones que enriquecen el desarrollo del presente capítulo, en la medida en que permiten observar las tendencias generales de la evolución de las diversas prácticas indemnizatorias a partir de fines del año 1999, en el cual como se ha mencionado, dejaron de conocerse estadísticas oficiales acerca de su implementación. [128]

Partiendo de considerar que esta reconstrucción implica un aporte valioso para la comprensión de las prácticas indemnizatorias, es necesario realizar algunas advertencias metodológicas para abordar la base de datos construida. En primer lugar, importa considerar que debido a la divergencia de criterios entre las resoluciones publicadas durante el período 2000-2015 y la información pública acerca de la implementación de las leyes reparatorias de los años previos, no fue posible el armado de una serie histórica completa para el período analizado en esta tesis. Esto es así debido a que mientras que la información disponible en relación a las leyes reparatorias anteriores al año 2000 refieren al universo de requerimientos realizados por los beneficiarios hacia el Estado, las tendencias que pudieron reconstruirse para el período 2000-2015 tienen como unidad de análisis las resoluciones con las cuales se da por finalizada la tramitación de las leyes reparatorias.

En este sentido, importa aclarar que cada una de estas resoluciones firmadas no es equivalente al dictamen que corresponde a un pedido de reparación económica. El circuito administrativo de las mismas comienza con la caratulación de un expediente ante la llegada de cada nueva solicitud,

[128] A partir de la disposición referida, en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue publicado un resumen de las resoluciones firmadas por su titular. Listado disponible en: https://cdn.jus.gov.ar/clientes/proregi/resoluciones/ [consultado el 30/11/2021]. La información consignada en esa base de datos incluye: fecha y número de protocolo de la resolución, funcionario firmante, resumen y temas. Uno de los "temas" consignado refiere a "Leyes Reparatorias", y fue a partir de ese recorte que se ha construido la base de datos analizada en el presente capítulo.
Por otra parte, debe considerarse que la información listada en la consulta pública de resoluciones no está guiada por ningún criterio de construcción de bases de datos, sino que su creación tuvo por objetivo poner a disposición pública lo actuado por el organismo de gobierno. En este sentido, los únicos criterios de ordenamiento de la casi inabarcable cantidad de disposiciones listadas corresponden al orden cronológico y a su categorización temática, que ha resultado clave para identificar las resoluciones relativas a las leyes reparatorias que aquí se analizan.
Asimismo, durante el período 2000-2015 que abarca el listado, distintas administraciones de gobierno y dotaciones de empleados han participado de su construcción, privilegiando consignar algunos datos en detrimento de otros en distintos momentos, de acuerdo a criterios diferenciales de cada uno de los agentes estatales involucrados en esta construcción ad hoc.

expediente que contiene el análisis individual de cada caso que se presenta para el cobro de la indemnización. Sin embargo, las resoluciones pueden contener ya sea lo dispuesto a partir de un único expediente o bien incluir un conjunto de varios expedientes. A su vez, la información acerca de la cantidad de expedientes que corresponden a cada resolución no siempre se encuentra consignada en el listado de resoluciones.

En síntesis, si bien los dos conjuntos de datos recabados aportan elementos que permiten conocer un panorama general acerca de las prácticas indemnizatorias, ambos lo hacen desde distintos puntos de partida. Mientras que en un primer momento fueron contabilizados los pedidos de reparación económica desde el punto de vista de las víctimas que los solicitaban, posteriormente la información pasó a estar centrada en la acción del Estado respecto a estos pedidos, haciendo foco en las respuestas otorgadas a esas demandas. Asimismo, de lo antedicho se desprende que tampoco se respetó la lógica individualizada con la que se consignaron los datos durante los años iniciales, dada la unificación de casos realizada en base a las resoluciones emitidas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, a continuación se presentarán algunos datos generales acerca del comportamiento de las prácticas indemnizatorias desde la perspectiva de su implementación, que permitan enmarcar el cuadro general del proceso histórico de su construcción, al cual estarán abocadas los apartados siguientes del presente capítulo. El aporte principal que se desprende de esta reconstrucción es proporcionar una mirada de conjunto hacia las prácticas indemnizatorias que otorga solidez a la afirmación acerca de su ampliación permanente a lo largo del período estudiado. Si la argumentación presentada hasta aquí no da lugar a dudas acerca de que las mismas permanecieron vigentes y expansivas debido a la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios producto de la sanción de nuevas leyes reparatorias, una mirada hacia la evolución histórica de las resoluciones permite aseverar que en términos cuantitativos, a partir del año 2000 se han ido incrementando la cantidad de disposiciones referidas a las prácticas indemnizatorias.

En cuanto al período previo, la primera información publicada por el Ministerio del Interior entonces responsable de las leyes reparatorias refiere a la ley 24.043/91. Hasta el año 1999 se sabe que se presentaron 12.672 personas a reclamar el beneficio dispuesto por la ley dirigida a la reparación de los ex detenidos. De las mismas, 830 casos se denegaron por no encuadrarse en la normativa, aproximadamente un 6.6% del total. Asimismo, el Estado informaba haber abonado hasta el momento más de 700 millones de pesos/dólares en concepto de beneficio previsto por la

mencionada ley.[129] El primer decreto de pago de leyes reparatorias fue fechado en marzo de 1995, habiendo transcurrido más de tres años desde la sanción de la ley que lo establecía.

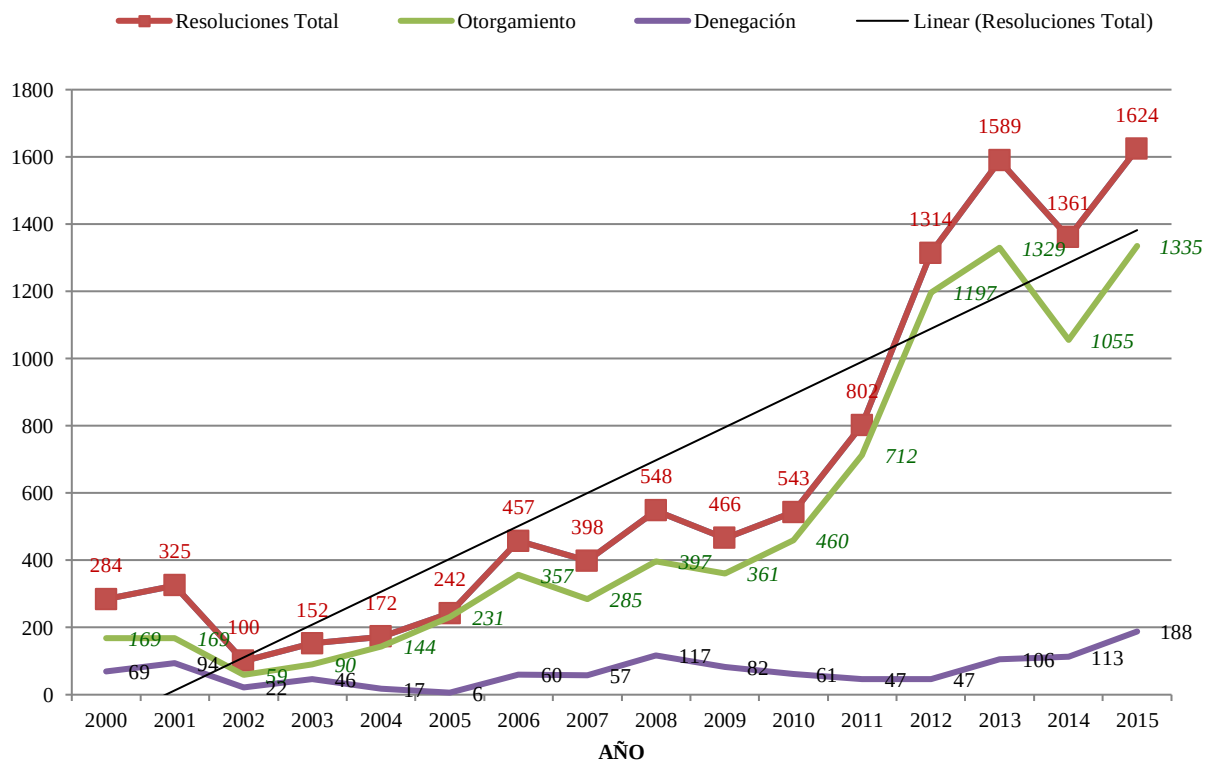
En relación a la ley 24.411/94, el mismo informe daba cuenta que hacia fines del año 1999 se habían caratulado un total de 6.947 expedientes, de los cuales 1.291 correspondían a solicitudes por personas fallecidas y el resto, por desapariciones forzadas. Se estimaba en 3000 millones de pesos/dólares el presupuesto requerido para hacer frente al pago de estas indemnizaciones, repartidos en varios ejercicios presupuestarios.

Hacia fines de 1999, la competencia de las reparaciones económicas fue traspasada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La publicación de las resoluciones emitidas entre los años 2000 y 2015 en materia de leyes reparatorias permitió la reconstrucción de una síntesis de su evolución histórica, tal como puede observarse a continuación:

[129] La información difundida acerca del dinero presupuestado para el pago de las indemnizaciones fue expresada en términos de pesos/dólares debido a la vigencia de la convertibilidad de la moneda local durante el período de tiempo contemplado en el informe. Asimismo, interesa destacar que el monto corresponde al carácter nominal de las indemnizaciones, en la medida que el pago de las mismas se realizaba en bonos de consolidación de deuda, aspecto sobre el cual se profundizará en el próximo capítulo, abocado al análisis del dinero como herramienta de la reparación.

Gráfico 1.

Resoluciones emitidas sobre Leyes Reparatorias e indemnizaciones otorgadas y denegadas por año



Fuente: elaboración propia en base a información disponible SDH

De la información contenida en el Gráfico 1 se desprenden algunas cuestiones relevantes que permiten obtener un panorama general respecto de las prácticas indemnizatorias, cuya evolución se ha mostrado a partir de tres líneas de evolución histórica.

La primera de estas líneas (en color rojo) ilustra la evolución del total de resoluciones firmadas, cuya sumatoria asicende a 10.377. Como puede observarse, las mismas dibujan una curva ascendente, lo que da cuenta de una tendencia creciente en la resolución de los pedidos de reparación económica, que comienza en 284 resoluciones emitidas en el año 2000 para ascender a un total de 1.624 en el año 2015. La construcción de este dato resulta crucial en tanto el interés de esta investigación ha estado dirigido a desentrañar lo que el Estado *hace* y *no hace* en relación a la reparación, en este caso, específicamente vinculado a las indemnizaciones. A la hora de realizar una lectura de este dato es preciso considerar a la luz de las advertencias metodológicas realizadas, que la cantidad de casos a los cuales se dio respuesta mediante estas disposiciones es

mayor a este número, debido a que en muchas ocasiones, estas resoluciones corresponden a una multiplicidad de expedientes resueltos a través de la firma de una disposición única. [130]

Si bien el total de resoluciones firmadas da cuenta efectivamente de la magnitud del movimiento al interior del Estado, así como del despliegue de recursos destinados a brindar respuesta a los pedidos de reparación económica, estas no corresponden únicamente a resoluciones afirmativas en relación a los requerimientos presentados. Profundizando en este sentido, con la excepción de un conjunto menor de resoluciones que no pudieron ser categorizadas debido a la información insuficiente, las mismas pueden dividirse en tres categorías: a) aquellas que otorgan el beneficio económico requerido; b) aquellas que deniegan el otorgamiento del beneficio; c) aquellas que corresponden a rectificaciones de resoluciones previamente emitidas, entre las cuales cuentan correcciones de datos consignados erroneamente o bien agregados de datos faltantes.

Siguiendo esta categorización, las otras dos líneas de evolución histórica presentadas en el Gráfico 1 corresponden a las resoluciones de otorgamiento (en color verde) así como de denegación (en color azul) de las reparaciones económicas. Como puede observarse, de las 10.377 resoluciones emitidas, 8.350 disposiciones dispusieron el otorgamiento de la indemnización solicitada, mientras que 1.132 corresponden a resoluciones negativas. El número restante se divide entre aquellas que se expiden acerca de rectificaciones y las que no incluyen información que permita contemplarlas en las categorías construidas (808 y 47 resoluciones, respectivamente).

La primera conclusión que se desprende de los números expuestos es que mayoritariamente, el Estado resuelve otorgar la reparación económica a quienes la solicitan, tal como indica el 81% del total de requerimientos cuyo trámite llega a su fin. Por el contrario, en casi un 11% de los casos se resuelve denegar la solicitud recibida. Pese a la contundencia de este dato, es preciso señalar que este porcentaje de resoluciones negativas resulta significativo, principalmente si se considera que de acuerdo a entrevistas realizadas a informantes clave que cumplen funciones al interior de la autoridad de aplicación de las leyes reparatorias, suelen existir reparos que dilatan la

[130] Debido a la diversidad de formas en las cuales los datos han sido consignados a lo largo del período analizado, no es posible realizar una estimación más precisa acerca del número de beneficiarios alcanzados por las resoluciones disponibles. Sin embargo, interesa destacar que al menos 630 del total corresponden a resoluciones en las cuales se han contemplado más de un expediente. Incluso cuando en términos porcentuales este número podría no parecer significativo (poco más del 6% del total), entre ellos se ha constatado que algunas resoluciones pueden contener lo dispuesto en hasta 20 solicitudes de reparación económica. Considerando por lo tanto la fragmentación y el subregistro que caracterizan los datos analizados, es posible inferir que la cantidad total de sujetos víctimas alcanzados por las indemnizaciones podría alcanzar números muy superiores al número total de resoluciones emitidas.

denegación de las indemnizaciones cuando no es posible acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el acceso a la reparación pecuniaria.

La instancia de conformación de la solicitud de la indemnización es para los sujetos víctimas una situación difícil de transitar, debido a que las mismas pueden implicar una reactualización del sufrimiento producido por los crímenes que se intenta reparar, lo que no parece ser ajeno a la institución que recibe estas solicitudes. Es por eso que la denegación del beneficio económico aparece como el último recurso a la mano de quienes se ocupan de su tramitación, quienes optan por mantener abierto el expediente a la espera de recabar alguna información que habilite una respuesta afirmativa para el pedido. En este marco, el porcentaje de 11% de resoluciones correspondientes a denegaciones dista de ser un dato menor.

Otro aspecto que se destaca de los datos presentados es que las curvas que expresan tanto el total de resoluciones emitidas como las relativas a resoluciones de otorgamiento, presentan una tendencia creciente de similares características. Ambas líneas de evolución comparten un descenso notorio en el año 2002, el cual recuperando la argumentación del capítulo previo, puede vincularse con la crisis del año 2001 y la consecuente cesación de pagos que redujo al mínimo la actividad estatal, afectando por consiguiente las disposiciones referidas a la liquidación de las indemnizaciones. A partir de allí, las resoluciones retoman el crecimiento con variaciones menores hasta el año 2009, año en que se observa un pico pronunciado en ambos conjuntos de disposiciones. Por su parte, la curva dibujada por las resoluciones denegatorias acompaña la tendencia general hasta el año 2009, donde se aparta de la misma para mantenerse en valores relativamente estables, sin sumarse al pico ascendente que se observa en las otras dos líneas de evolución. Esta observación indica por lo tanto que a partir del año 2009, el salto que se observa en las resoluciones obedece principalmente al comportamiento de las indemnizaciones otorgadas, que adquieren protagonismo ante la disminución relativa de las negativas a los pedidos de reparación económica.

Un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de ponderar estos datos refiere al tiempo de tramitación de las leyes reparatorias. De acuerdo a la información recabada, desde que la solicitud es ingresada al circuito administrativo, existe una demora mínima del orden de los tres años hasta que la misma finaliza con la resolución del caso, que puede extenderse hasta llegar a seis años de demora. Por lo tanto, el pico observado durante el año 2009 está determinado por las denuncias ingresadas al menos tres años antes al circuito de las leyes reparatorias. En este

sentido, puede inferirse que ello obedece a los desplazamientos en la configuración reparatoria producida a partir de la reapertura de las causas contra los responsables de los crímenes de Estado, que ha puesto en marcha el período caracterizado en el capítulo previo como tendiente a la integralidad de la reparación.

Presentados hasta aquí algunos datos generales que permiten un primer acercamiento al universo bajo análisis, a continuación se abordará el recorrido histórico de las prácticas indemnizatorias, construido en diálogo con la periodización de prácticas reparatorias presentada en el capítulo anterior. Como se viene sosteniendo, en el transcurso de este proceso, y atravesadas por las disputas en torno a cuál es el daño a reparar, y quiénes son los sujetos-víctimas a los que les corresponde, se fue cimentando el universo de prácticas indemnizatorias mediante las cuales el Estado se ha propuesto expresamente la reparación de los crímenes perpetrados en el marco del genocidio. Esta presentación permitirá dar cuenta del modo en que cada práctica indemnizatoria se construye sobre lo previamente establecido, al calor de las demandas emergentes que van moldeando el corpus reparatorio durante todo el período posdictadura.

1. El nacimiento de las prácticas indemnizatorias y el fin de la transición

Recuperando la argumentación del capítulo precedente, la primera etapa de la periodización de prácticas reparatorias que se abrió con la llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín se extendió hasta la entrada en escena de la primera práctica indemnizatoria del período democrático. La ley 23.466/86 marcó el inicio de una nueva manera de concebir el tratamiento de los crímenes producidos en el marco del genocidio, la cual signó el modo en que el Estado se ha propuesto su reparación desde entonces hasta el final del período analizado en esta investigación.

Esta medida recogía de algún modo una de las recomendaciones del Informe Final de la CONADEP que instaba al dictado de las normas necesarias para paliar "los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas" (CONADEP, 2006, p. 477). Con este objetivo, la ley establecía una pensión para los familiares de personas desaparecidas, más específicamente para sus cónyuges e hijos menores de 21 años, así como para los progenitores y hermanos de los desaparecidos que acreditaran depender económicamente de la víctima, quienes podrían acceder al cobro de una pensión equivalente a una jubilación mínima

y a la cobertura de salud correspondiente a los jubilados y pensionados. [131] A su vez, este instrumento definía por primera vez en la legislación reparatoria la desaparición forzada, como la privación de la libertad de la víctima seguida de su desaparición, o el alojamiento en lugares clandestinos de detención o la privación bajo cualquier forma del derecho a la jurisdicción. [132]

La ley 23.466/86 pretendía subsanar el desamparo en que habían quedado las familias de los desaparecidos, ante la ausencia del sostén económico del núcleo familiar. Esta situación era muy extendida considerando que un gran porcentaje de las víctimas eran obreros fabriles y empleados, así como personas jóvenes, casi todas con hijos pequeños al momento de su desaparición. Si bien como señaló Guembe (2006), durante el transcurso de la dictadura los organismos de derechos humanos habían prestado ayuda económica a las víctimas, esta ayuda comenzó a dificultarse ante la crisis económica que afectó al país entrada la democracia. Mediante el otorgamiento de la pensión, el Estado cumplía con su obligación de brindar ayuda a las familias que habían sido desgarradas con el secuestro y posterior desaparición de uno o varios de sus miembros.

En esta línea, uno de los aspectos que destacaba el proyecto de ley era que esta medida permitiría no supeditar el otorgamiento de una pensión a la realización del juicio por ausencia y presunción de fallecimiento, que hasta el momento constituía una condición necesaria para que los familiares de las víctimas pudieran acceder al beneficio previsional. Poco antes de su salida del gobierno, el PRN había dejado sin efecto la ley de facto 22.068/79, mediante la cual se establecía que aquellas personas cuya desaparición hubiera sido denunciada a partir del 6 de noviembre de 1974 podrían declararse presuntamente fallecidas. Esta norma, promulgada en la cima de las denuncias internacionales por las atrocidades cometidas por los militares, pretendía resolver jurídicamente la ausencia de las personas desaparecidas, ya que al asumirse fallecidas habilitaba a que sus familiares pudieran disponer de sus bienes o realizar la tramitación de una pensión. Esta ley implicaba un reconocimiento acerca del destino final de los desaparecidos, lo que permite pensar que fue la responsabilidad respecto de estos crímenes lo que se buscaba evadir al momento de su derogación.

[131] El tratamiento parlamentario de esta ley comenzó en septiembre de 1984, y en sus inicios fue presentada como una ley tendiente a la "equiparación previsional de personas desaparecidas con jubilados".

[132] Vale mencionar que para el momento de sanción de esta ley, el debate en torno a la obligación del Estado de reparar económicamente a las víctimas de la dictadura ya estaba instalado al interior de los organismos, y había sido incluido en proyectos de legislación interna sobre la desaparición forzada. Para profundizar en el contenido de los mismos, ver Grupo de Iniciativa (1987).

Sin embargo, esta derogación tuvo un doble efecto. Si por un lado evitaba en esas circunstancias excepcionales la solicitud de declaración de fallecimiento a los familiares de las víctimas, quienes necesitaran hacerlo debían optar por la vía judicial, mucho más engorrosa que el trámite establecido por la ley de facto. En este marco, la ley 23.466/86 se proponía evitar la realización del juicio por ausencia y presunción de fallecimiento para poder ejercer el derecho a la pensión.

Por otro lado, el debate parlamentario fue escenario de las disputas en torno a la denominada teoría de los dos demonios como prisma de lectura del conflicto atravesado. En 1984, el senador de La Rúa propuso extender los alcances de la ley a "todos los casos de quienes fueron víctimas de actos de violencia, incluyendo quienes sufrieron ataques subversivos", en pos de alcanzar la concordia nacional. Esta concepción podía leerse también en los fundamentos del proyecto de ley orginal, que hacía mención a la necesidad de castigar a los culpables "de tanta violencia, de todo signo, desatada en los últimos años de nuestra historia". Resulta sugerente que dos años despúes, en el informe de comisión presentado al momento de sanción de la ley 23.466, la referencia a la "violencia de todo signo" fue eliminada de los fundamentos, como un indicador de cierta pérdida de legitimidad que el sintagma dos demonios comenzaba a presentar en la sociedad argentina.

Si bien esta ley no enfrentó oposición parlamentaria, en el debate desarrollado en ambas cámaras se insistió en el hecho de que los beneficios económicos no reemplazaban el accionar de la justicia, haciendose presente por primera vez el dilema que signaría los debates en torno a todas las prácticas indemnizatorias de allí en adelante: el temor de las víctimas a que el Estado otorgara dinero a cambio de discontinuar el proceso de justicia. El inminente avance de la impunidad por sobre las primeras prácticas de juzgamiento que signaron el clima en el que esta medida fue discutida dejaba ver que esta intepretación distaba de ser infundada. En este sentido, la ley fue presentada como parte de las medidas tendientes a subsanar las secuelas de destrucción y muerte producidas por el terrorismo de Estado, siendo expresamente mencionado que las soluciones económicas previstas no podían resolver el daño producido y que correspondía a la justicia impartir castigo a los responsables de los crímenes perpetrados contra la sociedad argentina. A estas declaraciones subyace una aparente dicotomía entre la reparación entendida o bien como el juicio y castigo a los culpables, o bien como una reparación económica, la cual acompañó el debate en torno de la reparación desde sus inicios hasta el día de hoy. [133]

[133] A mediados de 1986, los incipientes debates en torno a las reparaciones de carácter económico se sumaron a las diferencias políticas preexistentes y propiciaron la escición de las Madres de Plaza de Mayo. El organismo, que había sido creado en 1977 principalmente en torno de la búsqueda de sus hijos desaparecidos, se dividió en la Asociación

La única modificación relevante acerca de las definiciones consagradas en esta ley desde su sanción se vincula con la ampliación de su universo de beneficiarios. La ley 26.267/08 agregó entre los familiares del desaparecido a quienes correspondía percibir la pensión a los hijos mayores de 21 años con incapacidad para el trabajo, situación que ya se encontraba contemplada para el caso de sus progenitores y hermanos. Esta modificación tardía obedeció al hecho de que esta situación no formó parte de las preocupaciones atendidas por esta medida hasta tanto los hijos de desaparecidos entonces niños a quienes la ley consideraba como beneficiarios cumplieran la mayoría de edad.

Pese a que se considera que esta práctica indemnizatoria abrió las puertas a un modo de representación de la reparación vinculada con el otorgamiento de dinero por parte del Estado hacia las víctimas, resulta sugerente que la misma no accedió al corpus reparatorio consagrado con la denominación de "Leyes Reparatorias", cuyo origen refiere a la sanción de la ley 24.043/91 dirigida a la reparación de los presos políticos. Consecuentemente, los datos presentados al inicio del capítulo no contemplan información relativa a la implementación de la ley 23.466/86. Una hipótesis acerca de esta invisibilización se vincula con el hecho de que la misma se hace efectiva mediante el otorgamiento de una pensión, y no de una indemnización como ocurre en la mayoría de las prácticas indemnizatorias.

Además de las implicancias que se desprenden de la distinción entre indemnización y pensión como herramientas diferenciales de la reparación -sobre las cuales se profundizará en el capítulo 5-, esto conlleva que ambos beneficios sean competencia de organismos diferentes al interior del Estado. Mientras que las "Leyes Reparatorias" se ubican bajo la órbita del área de Derechos Humanos, las pensiones tramitan bajo la órbita de la institución encargada de administrar la seguridad social. [134] En este sentido, puede pensarse que las pensiones se encuentran asociadas a las representaciones propias del universo de la seguridad social, el cual se orienta a la asistencia de las poblaciones vulnerables y no a la reparación de los daños perpetrados por el propio Estado, contribuyendo así a la exclusión señalada. Pese a esta invisibilización, esta práctica

---

Madres de Plaza de Mayo (AMPM) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (MPMLF). Desde sus orígenes, la AMPM liderada por Hebe de Bonafini constituyó el organismo más crítico a las prácticas indemnizatorias y al igual que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) manifestaron un tajante rechazo a todo tipo de política de reparación económica. Para profundizar en torno a los orígenes de MPM, las tensiones que produjeron su escición y las diferencias que caracterizan a las dos agrupaciones de madres, ver: Gorini (2006, 2008), Morales (2017).

[134] En el caso de la pensión establecida por la ley 23.466/86, su tramitación debía realizarse en un principio en el Ministerio de Salud y Acción Social, hasta su traspaso al ente conformado para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el año 1991.

indemnizatoria inauguró la modalidad pecuniaria de la reparación y dio por cerrado el primer período de prácticas reparatorias caracterizado por su impronta transicional.

2. La consolidación de las prácticas indemnizatorias en el marco de la impunidad

El segundo período de prácticas reparatorias se caracterizó por la impunidad como variante de las prácticas de juzgamiento y la consolidación de las prácticas indemnizatorias como manera hegemónica de abordar la reparación de los crímenes de Estado. En este apartado se desarrollarán los elementos sobre los cuales se fundamenta la consolidación de la reparación económica.

Para comenzar, las prácticas indemnizatorias se inscribieron en el universo de representaciones asociadas a la pacificación nacional, en línea con los sentidos hegemónicos promovidos por las políticas de memoria durante este período. Una evidencia de ello se ubica en el ámbito de su implementación, enmarcada en el "Programa de memoria y reparación histórica", del cual dependían las unidades ejecutoras de las leyes nacionales dictadas en el marco reparatorio. Entre los objetivos de este programa contaban "la reparación a las victimas de la violencia institucional durante la represión ilegal, la consolidación de una doctrina reparatoria como forma de justicia y la promoción de políticas de pacificación nacional y de resguardo de la memoria". La contribución a la pacificación nacional era mencionada expresamente entre los propósitos a los que apuntaban las prácticas indemnizatorias. Entendida la paz social como la máxima aspiración a conseguir, era preciso crear las condiciones que la hicieran posible. Entre ellas, la reparación económica fue concebida entonces como forma de justicia alternativa a la "juridización del enfrentamiento argentino propiciada por el anterior gobierno [que] había resultado inviable y había quedado diluida en las leyes de punto final y obediencia debida" (Pierini, 1999, p. 73).

En este marco, pese a que pronto fueron subsumidas bajo esta perspectiva desde la cual el Estado promovía la reconciliación, el puntapié inicial que dio origen a la conformación del cuerpo de prácticas indemnizatorias que comenzaron a implementarse durante este período no obedeció a una iniciativa estatal sino a un reclamo de las propias víctimas, promoviendo una serie de disputas al calor de las cuales se originó el corpus reparatorio.

2.a) Antecedentes e inicios de las *indemnizaciones*

El puntapié inicial que dio origen a las prácticas indemnizatorias que conformaron el corpus principal de las leyes reparatorias estuvo dado por la presentación realizada por un grupo de

víctimas ante la CIDH, que reclamaban por el derecho a la justicia dada la imposibilidad de continuar con el proceso de juzgamiento. En la resolución del caso, la CIDH declaró que tanto la ley de punto final como la ley de obediencia debida, al igual que los decretos de indulto, eran incompatibles con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de allí recomendaba entre otros puntos, "que el Gobierno de Argentina otorgue a los peticionarios una justa compensación por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar" (CIDH, 1992). Esta resolución abonaba la interpretación que contraponía el dinero a la justicia, en la medida en que las víctimas elevaron su petición en busca de justicia y a cambio, consiguieron que se reconozca su derecho a obtener dinero por los daños sufridos.

Paralelamente, desde la recuperación democrática algunas personas que habían estado detenidas a disposición del PEN en virtud del estado de sitio durante la dictadura habían comenzado a reclamar al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios en la órbita del derecho civil. Si bien algunos tribunales domésticos habían hecho lugar a estas demandas, en la mayoría de los casos los reclamos fueron desestimados por considerarse que la acción civil se encontraba prescripta, vencido el plazo de dos años que establece la legislación argentina. Las apelaciones de estos últimos casos que llegaron a la Corte Suprema habían sido resueltas desfavorablemente, generando una situación de inequidad entre quienes percibían las indemnizaciones y aquellas cuya solicitud era rechazada, a partir de lo cual desde febrero de 1989 las víctimas habían comenzado a realizar presentaciones ante la CIDH.

El gobierno de Alfonsín había desestimado la recomendación de arribar a una solución amistosa propuesta por la CIDH en su intervención a favor de las víctimas (CIDH, 1993), pero esta posición negativa cambió con la llegada de Carlos Menem a la presidencia. El presidente entrante -quien había estado detenido durante el gobierno militar- manifestó su acuerdo con la postura de los peticionarios que reclamaban por los daños y perjuicios ante la Corte Interamericana. En una primera aproximación a esta situación, en abril de 1990 dictó entonces el decreto n° 798 mediante el cual se constituía una Comisión para la elaboración de un proyecto de ley que brindara una solución de equidad a los reclamos presentados ante la CIDH. [135]

[135] Dicho decreto expresó "que para una adecuada elaboración del aludido proyecto de ley, parece conveniente constituir una Comisión integrada por representantes de los Organismos competentes de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y de una entidad no gubernamental dedicada a la defensa de los Derechos Humanos". La inclusión de un representante de los organismos de derechos humanos en la conformación de la

Para entonces ya había comenzado a darse en los organismos el debate en torno a la obligación estatal de reparar económicamente a las víctimas del genocidio. Especialmente al interior de aquellos colectivos que nucleaban a los familiares directos de las víctimas, estas reflexiones suscitaron controversias muy fuertes acerca de la evaluación de las políticas indemnizatorias. Así, a quienes sostenían que las reparaciones constituían demandas legítimas de las víctimas se oponían quienes se resistían a aceptarlas por concebir que ello implicaba "cambiar" la vida de los desaparecidos por una suma de dinero. Estas posiciones divergentes delinearon la matriz de relaciones de poder en torno a las prácticas indemnizatorias, la cual quedaría conformada por el Estado, las víctimas directas del genocidio y los organismos de derechos humanos. A partir de los modos en que estos actores se fueron posicionando en torno a la cuestión de la reparación se esbozarían las principales acciones a adoptar, pero también definirían los límites del universo de víctimas al cual estaban dirigidas estas medidas y los recursos a emplear para llevarlas adelante, entre otros aspectos de importancia.

El citado Decreto 798/90 fue presentado ante la CIDH como muestra de la intención del gobierno de avanzar en la compensación que las víctimas reclamaban, decisión que fue bien recibida por las partes. Ante las dificultades que encontró el gobierno para su tratamiento en el Congreso, y considerando que la demora exponía al estado argentino a una sanción internacional por parte de la CIDH, en el mes de enero de 1991 el PEN promulgó un decreto mediante el cual brindaría una solución a los problemas planteados, con anterioridad a la fecha prevista para la audiencia en la cual debía dar cuenta de lo actuado.

El decreto 70/91 establecía como beneficiarios a todas las víctimas de detenciones arbitrarias con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, que habiendo iniciado juicios no hubieran obtenido sentencia favorable debido al vencimiento del plazo de la prescripción. Lo novedoso consistía en que consideraba la fecha de retorno de la democracia para el inicio de dicho plazo, y no a partir de la fecha de la detención tal como interpretaban las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se fundaba en el reconocimiento de que sólo una vez finalizada la dictadura militar se cumplían las condiciones de seguridad que permitían la presentación de denuncias judiciales.

El decreto otorgaba a quienes tuvieran causa judicial por daños y perjuicios en trámite la opción de acogerse a los beneficios del decreto o bien aguardar la resolución mediante sentencia judicial

---

Comisión deja entrever la centralidad que este actor había ganado en la discusión pública respecto de las iniciativas de reparación de crímenes cometidos durante la dictadura militar.

al finalizar el juicio. El beneficio a otorgar consistía en el equivalente a la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la máxima categoría del escalafón para el personal civil de la APN por cada día que duró la detención. Asimismo, contemplaba incrementos para los casos en los cuales las personas hubieran sufrido lesiones gravísimas o fallecido durante el tiempo de su detención, en cuyo caso los derechos otorgados podrían ser ejercidos por los causahabientes de las víctimas. La indemnización prevista por este instrumento fue aceptada por quienes habían interpuesto su demanda ante la CIDH, con lo cual se daba por concluido el proceso de solución amistosa a entera satisfacción de las partes y de la Comisión. Menos de un año después, la disposición establecida en el decreto adquirió fuerza de ley bajo el número 24.043/91.

2.b) La conformación del cuerpo de prácticas indemnizatorias

En el período de consolidación de las prácticas indemnizatorias fueron construidos los cimientos sobre los cuales se erigió el corpus reparatorio de todo el período posdictadura, de la mano de la ley 24.043/91 y la ley 24.411/94. En ellas cristalizó el núcleo elemental de representaciones acerca de cuál es el daño a reparar y a quién le corresponde acceder a esta reparación en tanto víctimas que sufrieron dicho daño, las cuales con ampliaciones y modificatorias se mantuvieron vigentes durante todo el período analizado en esta tesis.

- Prácticas indemnizatorias dirigidas a los ex detenidos

Entre los propósitos de la ley 24.043/91 tal como se expresaba en los fundamentos del proyecto, se encontraba la pretensión de reparar el daño causado a los ex detenidos que hubieran sufrido detenciones arbitrarias con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. La ley consideraba entre ellos a quienes durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del PEN por acto emanado de éste, o bien hubieran sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares. Esta mención expresa a la vigencia del estado de sitio llevó a que su decreto reglamentario nº 1023/92 estableciera el 6 de noviembre de 1974 como fecha de inicio de las acciones que esta ley pretendía reparar.

De acuerdo al análisis presentado en el apartado anterior, la motivación central del decreto 70/91 en tanto principal antecedente de esta ley, había sido subsanar la situación de desigualdad entre las víctimas cuyos reclamos habían sido resueltos desfavorablemente vía judicial respecto de aquellos que habían sido acogidos por los tribunales. El primer desplazamiento que puede

observarse en los fundamentos de la ley 24.043/91 reside entonces en comprender que el daño a reparar está configurado por la circunstancia de la detención arbitraria, independientemente del reclamo judicial al que este hecho haya podido dar lugar.

En este punto, al definir el objeto de esta ley en términos de la reparación de la detención arbitraria, esta práctica dio lugar a múltiples interpretaciones, que versaron en torno a cuál era el alcance que correspondía otorgar a esta detención. Si bien un análisis pormenorizado de las mismas se presentará en el capítulo 6, interesa mencionar que la controversia más significativa a la que debio responder esta ley en el ámbito de su implementación se vinculaba con el interrogante acerca de si estaban incluidos en esta caracterización los secuestros de quienes habiendo estado detenidos de manera clandestina no alcanzaban el estatus jurídico de presos políticos.

En apretada síntesis, al determinarse que el espíritu de esta ley se vinculaba con la tutela del derecho a la libertad, quienes habían sido secuestrados, alojados en centros clandestinos de detención y posteriormente liberados fueron enmarcados en la esfera de esta práctica indemnizatoria. Lo mismo sucedió con las personas detenidas a disposición de áreas militares y conscriptos sometidos a Consejo de Guerra, así como hijos nacidos durante el cautiverio de sus madres beneficiarias de esta ley, quienes pese a no encontrarse contemplados en el alcance de la ley pudieron acceder a la indemnización prevista por la misma mediante la intepretación extensiva realizada por parte de su autoridad de aplicación.

Por otra parte, uno de los debates más relevantes que surgieron durante el tratamiento de esta ley estuvo vinculado con la posición de quienes sin oponerse a su sanción, puntualizaban en que los beneficios impartidos por la misma debían hacerse extensivos a las víctimas de desaparición forzada. Comenzaba a configurarse lo que en el capítulo seis se denominará como una jerarquización construida a la luz de una gradiente de víctimas de acuerdo a la cual los desaparecidos serían considerados como víctimas por antonomasia del proceso genocida.

Entre los defensores del proyecto de ley durante el debate parlamentario, vale la pena detenerse en las expresiones del autor del proyecto, quien señalaba en primer lugar que “el hecho de que algunos detenidos hayan iniciado juicio y se les prorrogara por decreto el tiempo de prescripción significa una injusticia para con muchos otros detenidos que por miedo o por vivir en el interior o por otras circunstancias no tuvieron acceso a ese beneficio”. Con la intervención citada queda claro que la ley buscaba establecer igualdad entre todos aquellos que habían sufrido

persecuciones y detenciones y no atender la situación particular de quienes habían iniciado juicios. Por otro lado, las críticas de sus detractores calificaron al proyecto de "antijurídico" ya sea por tomar en consideración todos los casos de manera indiscriminada, o bien por avanzar sobre casos que ya habían obtenido resolución judicial, atacando la "cosa juzgada".

Finalmente, la ley 24.043/91 estableció al igual que el decreto 70/91 una indemnización para quienes hubieran estado detenidos en virtud del estado de sitio a disposición del PEN, incluyendo además a aquellos detenidos por decisiones emanadas de tribunales militares, ya sea que hubieran iniciado o no juicios por daños y perjuicios. Establecía también que no podrían acogerse al beneficio quienes ya hubieran percibido una indemnización por estos mismos hechos. Asimismo, la ley mantenía el cómputo del beneficio propuesto por el mencionado decreto al igual que los incrementos para los casos de muerte o lesiones gravísimas. En este sentido, cabe destacar que el decreto reglamentario 1023/92 establecía que la indemnización podía ser percibida por los derechohabientes de las víctimas que se encontraran fallecidas, o ausentes con presunción de fallecimiento de acuerdo al régimen de la ley n° 14.394/54, mediante la cual se permitía declarar de este modo a las personas cuyo paradero se ignora durante más de seis meses. Como ha sido señalado, esta cuestión fue objeto de profundos debates que llevarían pocos años después a la sanción de la "Ley de Ausencia por Desaparición Forzada".

Por otra parte, durante el tratamiento en la cámara de senadores se realizó un agregado al proyecto que habilitaba que el pago de los beneficios previstos se hiciera efectivo mediante bonos de consolidación de deuda pública. En tanto algunos legisladores manifestaron su oposición a esta modificación, este resultaría un aspecto controversial durante el debate parlamentario. Pero sobre todo, este punto constituiría uno de los ejes nodales de crítica de los organismos de derechos humanos a las políticas reparatorias que a partir de ese momento adoptaron este modo de implementar los pagos correspondientes a las indemnizaciones. En tanto los bonos retribuían distintos montos de dinero dependiendo del momento en que los mismos fueran canjeados por sus tenedores, este medio generaba una situación de desigualdad entre las víctimas. No obstante, esta no fue la única de las situaciones diferenciales generadas por las normas tendientes a la reparación de los ex detenidos.

En la misma línea, el decreto 993/91 había creado el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), reencasillando a los agentes de la APN y con ello modificando la remuneración mensual asignada a su máximo escalafón, que tal como se ha mencionado,

constituía la base para el cálculo de las indemnizaciones a otorgar. Esta diferencia en los montos había provocado la presentación de recursos de apelación ante el estado por parte de quienes ya habían recibido la liquidación del beneficio previsto en el decreto 70/91 que exigían una actualización en los montos.

En estas circunstancias, era previsible que la situación se replicara en los casos que se encontraban a la espera de una resolución favorable para el cobro de la indemnización establecida por la ley 24.043. Fue dictada entonces la resolución conjunta Nº 15/94 del Ministerio del Interior y Nº 352/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que adecuaba los beneficios previstos en la ley reparatoria al nuevo ordenamiento escalafonario de la APN. En los considerandos se mencionaba entre las motivaciones de la resolución el intento de impedir una contribución sin precedentes a la "llamada industria de los juicios contra el Estado". A su vez, se aludía a que la demora derivada de esa situación "implicaría un costo político que compromete el formidable esfuerzo puesto por el Gobierno nacional para concretar políticas de reparación del daño producido por las detenciones ilegales en el pasado". En línea con lo anterior, la resolución del Ministerio del Interior n° 1768/94 hacía extensiva la medida de adecuación a los beneficiarios del decreto 70/91.

Una última situación de desigualdad que fue necesario subsanar mediante el dictado de nuevas normas que se agregaron al cuerpo de políticas reparatorias fue la relativa a los casos de aquellas personas que habían ganado las demandas por daños y perjuicios iniciadas al estado por su detención clandestina, pero que habían percibido un monto menor al que correspondía de acuerdo al decreto 70/91 y la ley 24.043/91. El decreto 1313/94 se proponía saldar esta diferencia estableciendo una ampliación de carácter excepcional a la ley de reparación para ex detenidos.

- Prácticas indemnizatorias dirigidas a los desaparecidos y asesinados

Si la reparación económica a los presos políticos prevista por la ley analizada debió superar obstáculos tanto administrativos como políticos antes de hacerse efectivo su cumplimiento, mucho más profundos fueron los debates que giraron en torno a la ley que estableció una reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y a los asesinados por los militares, sancionada a fines de 1994. Sin embargo, estas disputas no se vieron trasladadas al ámbito parlamentario, toda vez que en los diarios de sesiones destinadas al tratamiento de la ley en cuestión no se observan polémicas de relevancia. Puede sostenerse que esta situación fue

producto del aplazamiento de muchas de las discusiones centrales contenidas en esta norma, que llevarían a la sanción en 1997 de la ley conocida como la "ley parche", sobre la que se profundizará más adelante.

Es necesario detenerse en la complejidad del fenómeno de la desaparición forzada de personas para comprender el tenor de lo que estaba en juego en la sanción de esta ley. La discusión en torno a la reparación económica de la desaparición forzada en el marco de la impunidad imperante, permitía una lectura que implicaba una claudicación respecto a la búsqueda de verdad y justicia. En este sentido, la ley 24.321/94 de Ausencia por Desaparación Forzada fue un modo de establecer que la incertidumbre acerca del destino de los desaparecidos continuaba abierta, y operó como condición de posibilidad para avanzar en sus prácticas indemnizatorias.

En línea con lo antedicho, el decreto reglamentario 403/1995 de la ley 24.411/94 contemplaba la declaración de ausencia por desaparición forzada como medio de prueba de la situación que la ley se proponía reparar. Sin embargo, ello no impidió que la acreditación de la desaparición forzada fuera un punto problemático de la ley. Pese a que se establecieron criterios amplios para demostrar la desaparición forzada, la ley exigía la presentación de algún elemento probatorio producido en forma contemporánea a la desaparición, sin contemplar que el terror en que las prácticas represivas habían sumido al conjunto de la sociedad había impedido en muchos casos que se hicieran las denuncias formales requeridas para acceder a los beneficios de la ley reparatoria.

Finalmente, la ley definió como sus beneficiarios a las personas que se encontraran en situación de desaparición forzada al momento de su promulgación o bien hubieran fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83. [136] Como puede observarse, fue omitido deliberadamente el inicio del período en el que la desaparición o asesinato debía haber ocurrido, debido a que estas prácticas habían comenzado con anterioridad a la instauración del golpe de Estado en 1976 y el establecimiento de una fecha inicial daría lugar a debates de difícil resolución. El beneficio a percibir quedó establecido en el equivalente a la remuneración mensual de los agentes del máximo nivel en el escalafón del personal de la APN, multiplicado por el coeficiente 100. Tal

[136] Cabe subrayar que las víctimas de desaparición forzada que hubieran aparecido al momento de la sanción de la ley quedaron excluidas del alcance de la misma. En la práctica, estos casos fueron incluidos entre los beneficiarios de la ley 24.043, dirigida a quienes sufrieron detenciones arbitrarias. En el capítulo seis serán analizadas las implicancias relativas a las representaciones en torno a las víctimas que subyace a esta categorización.

como había sucedido con la ley 24.043/91, el pago del beneficio estipulado por la ley 24.411/94 se realizó enteramente en bonos de consolidación de deuda pública, un punto que recibió idénticas objeciones que las señaladas para el caso anterior.

Luego de ocho meses de espera, el decreto reglamentario 403/95 originó nuevos interrogantes en las familias afectadas, y dio lugar a reclamos por parte de algunos organismos que consideraban que el mismo contenía disposiciones contrarias al espíritu con el cual se habían sancionado las medidas reparatorias alcanzadas por la reglamentación. Los reclamos se dirigieron en cuatro direcciones. [137]

En primer lugar, se reclamaba que no hubiera reconocimiento judicial de muerte desde el fuero civil con respecto a los desaparecidos, inquietud surgida del artículo 6° del decreto reglamentario, que habilitaba a interpretar la necesidad de realizar una declaratoria de herederos –con la consecuente declaración de muerte que ésta implicaba- para la acreditación del vínculo de quienes se presentaban a tramitar la indemnización. [138]

En segundo lugar, importaba que el beneficio fuera considerado una indemnización y no un bien hereditario. Era necesario que no hubiera dudas respecto de que la indemnización correspondía a las víctimas de la represión, y los legitimados por derecho propio concurrían en su nombre, como representantes o mandatarios, mas no como herederos. Por una parte, la indemnización podía alcanzar a personas que no tenían vocación hereditaria de acuerdo al Código Civil, como por ejemplo a las uniones matrimoniales de hecho entre los beneficiarios. Pero sobre todo, esto despejaba cualquier duda respecto de la necesidad de establecer los herederos mediante juicio sucesorio, que como se ha visto resultaba un aspecto clave para la comprensión de las controversias resultantes de la aplicación de la ley 24.411/94.

En tercer lugar, se exigía que el ámbito de gestión fuera administrativo y no judicial. El temor de que la vía judicial se convirtiera en regla y no excepción para la resolución de los litigios que

[137] Para profundizar en los reclamos reseñados ver los documentos: "A los legisladores que presentaron el proyecto de la ley 24.411", Familiares, octubre de 1995; y "Comunicado de prensa: cuestionando el decreto 403/95 que reglamenta la Ley 24.411 y exhortando a los familiares de desaparecidos a realizar el trámite de ausencia por desaparición forzada", Familiares, octubre de 1995, ambos disponibles en Memoria Abierta.

[138] El texto del artículo 6° mencionaba que el carácter de beneficiario podía acreditarse o bien mediante la declaratoria de herederos, o bien mediante información sumaria en sede judicial en los términos del artículo 322 del Código Procesal, en referencia a "casos en que no se dispusiera de otro medio legal para poner termino inmediatamente a un estado de incertidumbre, de falta de certeza respecto de algun derecho". Esta inclusión dejaba a la interpretación del juez la elección de la declaratoria de herederos como medio legal adecuado para acreditar el vínculo.

pudieran surgir entre los peticionantes motivó esta preocupación, pese a que el Ministerio del Interior era por entonces la autoridad de aplicación de la ley.

Finalmente, el cuarto aspecto en torno al cual giraron los reclamos tenía que ver con que los trámites relativos a las leyes 24.321 y 24.411 fueran rápidos y sencillos. Si bien se disponía que el trámite de la ley debía ser "sumarísimo", la propia reglamentación creaba obstáculos que lo impedían. Por empezar, se estipulaba un plazo de 360 días hábiles administrativos para resolver la procedencia del beneficio una vez que fuera aportada toda la documentación requerida. Figurando entre esos requisitos la constancia de ausencia por desaparición forzada, a este plazo debía sumarse el tiempo que demoraba su tramitación, lo que añadía alrededor de un año a los tiempos de demora para acceder al cobro. Otro de los impedimentos para el otorgamiento del beneficio tenía que ver con el requerimiento de informes sobre antecedentes del desaparecido ante la Policía Federal Argentina, aspecto sumamente controversial en la medida en que colocaba a los familiares en una situación de vulnerabilidad al momento de solicitar información a las fuerzas de seguridad implicadas en la situación que la ley se proponía reparar.

A la luz de lo expuesto hasta aquí, puede aprehenderse la enorme complejidad que la problemática de la reparación supuso para el Estado argentino desde sus inicios, en la medida en que la propia normativa reparatoria daba lugar a nuevas situaciones a subsanar. Desde sus orígenes, numerosas dificultades que fueron surgiendo al calor de la aplicación de las leyes que configuraron prácticas indemnizatorias fueron resueltas mediante interpretaciones amplias de su articulado así como por dictámenes de su autoridad de aplicación. No obstante, al interior de la trama de relaciones conformada en torno a la cuestión de la reparación se fueron promoviendo nuevas prácticas con la intención de dar respuesta a estas demandas emergentes. [139]

Este es el caso de la ley 24.823/97, también conocida como la "ley parche", impulsada con la intención de clarificar algunos aspectos que resultaban fundamentales para la implementación de

[139] Entre las prácticas emergentes de la ley 24.411/94, se destaca en primer lugar, la creación del Área "Legajo Busqueda Verdad" (1995), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a raíz de la presentación de familiares de desaparecidos que requerían o aportaban información relacionada con el caso y no habían realizado gestiones previas ante organismos oficiales. La significativa cantidad de requerimientos puso de manifiesto la necesidad de contribuir a la dilucidación de los hechos, permitiendo el inicio de una investigación que posibilitaba la incorporación de los datos confirmados al registro histórico, y si correspondiere, al circuito de las leyes reparatorias. En la misma línea, en 1999 fue creado el "Registro especial de fallecidos (REdeF)", que originaba la formación de legajos individuales para cada caso de muerte acontecida durante el período dicatatorial, y eventualmente posibilitaba el otorgamiento de indemnización a sus familiares. El relevamiento de los casos en que estaba acreditada la muerte de disidentes políticos, gremiales y estudiantiles aduciendo a la "lucha antisubversiva" no implicaba necesariamente que estas víctimas tuvieran que reclamar la indemnización, en tanto el RedeF tenía por objetivo principal la recuperación de la memoria histórica.

la ley 24.411/94 pero que habían sido dejados por fuera de su texto original. Si bien los organismos de derechos humanos habían participado de las discusiones previas a su tratamiento en el recinto, algunos de ellos dejaron asentada su disconformidad con el texto consensuado, considerando que éste incluía "situaciones incompatibles con su lucha" y solicitando en su lugar la derogación total de su decreto reglamentario, tal como se evidenció en la Inserción solicitada en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. [140]

El punto de partida para las modificaciones establecidas por la "ley parche" se vinculó con la consideración expresa de la indemnización como un bien propio del desaparecido o fallecido. Al otorgarle este carácter específico, se propuso superar los problemas que había generado al interior de las familias, que en la práctica eran quienes tramitaban el cobro estipulado en la ley. En esta línea, la ley se propuso aclarar algunos aspetos relacionados con el modo en que este bien particular debía ser distribuido entre los causahabientes de los beneficiarios: en primer lugar, estableció que las uniones de hecho serían reconocidas en los casos en que hubiera descendencia, y que en caso de concurrencia de cónyuge y quienes hubieran probado unión de hecho durante al menos dos años, ambos compartirían la parte correspondiente al cónyuge; en segundo lugar, otorgó a los hijos de los beneficiarios que hubieran sido dados en adopción plena derecho para la percepción de la indemnización.

Otro de las controversias que la ley se proponía resolver se relacionaba con la necesidad de iniciar juicios sucesorios para poder cobrar. Para ello, le fue otorgado al juez actuante en la causa de ausencia por desaparición forzada -en los términos de la ley 24.321/94- la potestad de dictar una *declaración de causahabientes* al sólo efecto de la percepción del beneficio. Asimismo, se consideró punible la declaración de fallecimiento del desaparecido o asesinado, haciendo expresa la voluntad de que la mencionada declaración de causahabientes no fuera asimilada bajo ningún concepto a una declaratoria de herederos.

Por último, se estableció que el pago de la indemnización prevista liberaba al Estado de la responsabilidad que nacía de la ley 24.411, y que aquellos que hubieran recibido la reparación pecuniaria quedarían subrogando al Estado en caso de que con posterioridad, nuevos herederos reclamaran el beneficio. Sólo quedarían exceptuados de esta subrogación los casos en que se presentaran hijos que hubieran ignorado su condición de tales al momento de efectuarse el pago.

[140] Los organismos firmantes de la inserción en la que se manifiesta la disidencia respecto del proyecto bajo tratamiento fueron MPMLF, Asociación Pro- Naciones Unidas de Argentina (ANUA), SERPAJ Y Mujeres por la Paz, el Desarrollo y la Igualdad (MPDI).

Llamativamente, el párrafo referido a esta excepción fue vetado al momento de la promulgación de la ley, invocando una inadecuación relativa a los derechos y obligaciones de los herederos de acuerdo al Código Civil. De esta manera, volvía a rasgarse el tejido de esta práctica reparatoria, dejando abierto el camino para que nuevos pesares recaigan sobre las ya desmembradas familias de los asesinados y desaparecidos.

La modalidad reparatoria hegemónica que durante este período se configuró en base al contrapunto establecido entre dinero y justicia comenzó a desarticularse como tal con el desvanecimiento de las prácticas de juzgamiento en su opción por la impunidad. Este resquebrajamiento comenzó con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida en 1998, y se materializó con la sanción acerca de su inconstitucionalidad en el año 2003. Este fue el primer paso en el camino de la reapertura del proceso de juzgamiento contra los genocidas, que daría lugar a una nueva constelación reparatoria denominada como tendiente a la integralidad. En el próximo apartado, se profundizará sobre el comportamiento de las prácticas indemnizatorias al interior del marco de la reparación integral.

3. Las prácticas indemnizatorias en el marco de la reparación integral

El desbloqueo de los procesos penales contra los responsables de los crímenes de Estado inauguró un último período de prácticas reparatorias, que encontró en la magnitud y trascendencia de las prácticas de juzgamiento su característica más relevante. Debido al lugar que estas habían ocupado en las demandas de reparación hacia el Estado por parte de las víctimas, el hecho de que el juicio y castigo comenzara a hacerse realidad tras años de lucha inclaudicable produjo un efecto multiplicador al interior de las prácticas reparatorias. En este marco, la configuración caracterizada como tendiente a la integralidad de la reparación implicó una expansión creciente del conjunto de prácticas reparatorias cuyas particularidades fueron expuestas en el capítulo previo.

En este sentido, si las prácticas indemnizatorias fueron protagonistas de un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período analizado en esta tesis, esta última etapa no constituye una excepción. Las indemnizaciones receptaron la configuración general del período tendiente a la integralidad no sólo debido a su tendencia expansiva, sino también por el hecho de que muchas de las representaciones que las caracterizaron sufrieron transformaciones en estos años, producto

de haber sido alcanzadas por los desplazamientos que trajeron los juicios al terreno de la reparación, tal como se profundizará en los próximos capítulos.

La principal continuidad a señalar respecto de los períodos previos es que los beneficios establecidos en las leyes 24.043/91 y 24.411/94 –entendidos como los principales instrumentos reparatorios del período democrático- se mantuvieron vigentes durante estos años, en virtud de un conjunto de sucesivas extensiones de los plazos para el acogimiento de las mencionadas leyes reparatorias. [141] Finalmente, la ley 27.143/15 dispuso que la solicitud de los beneficios establecidos en las leyes 24.043 y 24.411 no tenga plazo de caducidad, atento a la imprescriptibilidad de los crímenes que las mismas pretenden reparar.

Durante este extenso período no sólo se mantuvieron las medidas previamente implementadas, sino que se produjo una profundización de las prácticas indemnizatorias mediante dos vías. [142] Por un lado, se produjo la ampliación de su universo de destinatarios, con el objetivo de incluir beneficiarios hasta entonces no contemplados en las mismas, ampliación instrumentada por la mal llamada "Ley de Hijos" primero (ley 25.914/04), y la conocida como "ley Dovena" después (ley 26.564/09). Por el otro, se estableció una nueva forma de hacer efectiva la reparación pecuniaria como parte de las denominadas "Leyes Reparatorias", mediante la conformación de un régimen reparatorio de pensiones graciables destinadas a ex presos políticos (ley 26.913/13). Este apartado estará dedicado a analizar cada una de estas prácticas indemnizatorias, situándolas al interior de la configuración reparatoria del período.

3.a) La "Ley de Hijos"

El 12 de marzo de 2004, Néstor Kirchner anunció en un acto en la Casa Rosada el envío del proyecto de ley de reparación para los hijos de los desaparecidos y asesinados en el marco del genocidio, la primera práctica indemnizatoria impulsada por el kirchnerismo en el gobierno. La iniciativa provino de un grupo de hijos de desaparecidos que colaboraban con las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes reclamaban la inclusión en el universo de víctimas reconocido por las leyes reparatorias a los niños que habían nacido o permanecido secuestrados en cautiverio, y aquéllos que habían estado desaparecidos hasta la recuperación de su identidad (Goyochea et al.,

[141] Así lo establecieron las leyes 25.814/03, 25.985/04, 26.178/06 y 26.521/09.

[142] La profundización de las prácticas indemnizatorias durante este período tuvo su correlato institucional en la creación de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, creada mediante Decreto 1755/08 bajo la órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, al interior de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos.

2011). La respuesta a esta demanda fue la presentación del proyecto que poco después, sin mediar debate parlamentario de relevancia, adquirió fuerza de ley bajo el número 25.914/04. [143]

Hasta entonces, las prácticas reparatorias habían contemplado a los hijos en función del vínculo de sangre que los unía con sus padres víctimas de desaparición y/o asesinato. Tal es el caso de la ley 24.411/94, que había establecido que los hijos podían percibir la indemnización prevista en representación de sus padres, quienes eran los beneficiarios de la misma. Algo similar había ocurrido con la pensión producto de la ley 23.466/86, dirigida a toda persona que dependiera económicamente de los desaparecidos, alcanzando así a sus hijos menores de edad, entre otros familiares a su cargo. Con estos antecedentes, fue la sanción de la ley bajo análisis la primera en considerar la situación específica de los hijos en tanto tales.

Entre las situaciones a las que esta medida se proponía dar respuesta, debe destacarse la de los hijos de desaparecidos que hubieran sido víctimas de apropiación. En los casos en que la indemnización correspondiente a sus padres ya hubiera sido cobrada por otros familiares al momento de su restitución, la posibilidad de que estos hijos tuvieran acceso al beneficio dependía de la voluntad de las familias. Ello debido a que producto del veto que había recaído sobre la "ley parche" anteriormente analizado, el Estado consideraba cumplida su obligación una vez pagada la reparación económica prevista en la ley 24.411/94. La ley 25.914/04 tuvo entre sus principales objetivos subsanar esta dificultad, al considerar los hijos apropiados como víctimas y distinguirlos de este modo de los beneficiarios de la ley 24.411/94.

La ley 25.914/04 tuvo por objeto establecer un beneficio para quienes hubieran estado detenidos *en relación a* sus padres detenidos y/o desaparecidos por razones políticas, o bien hubieran nacido durante el cautiverio de sus madres. En este sentido, uno de los aspectos controversiales de la ley se vinculó con la interpretación del significado de la detención "en relación" a los padres. Tal como señala Surraco (2013) en su exhaustivo análisis de la ley bajo estudio, pese a que desde el discurso de presentación de esta ley, la misma fue denominada coloquialmente como "ley de hijos", una lectura de su propio texto deja ver que no son todos los hijos de desaparecidos los destinatarios del beneficio que la ley otorga. Por el contrario, la ley crea una categoría restrictiva que alcanza únicamente a los "niños detenidos en relación a sus padres" y a quienes

[143] Durante el acto de presentación del proyecto de ley, Néstor Kirchner manifestó que la intención que guiaba esa medida reparatoria era la de tender a esos hijos una mano, "como si llegara la mano del padre, de la madre de ellos" (Kirchner, 2007). En línea con su adscripción identitaria como parte de "la generación diezmada" en la década de los 70, en esta oportunidad el entonces presidente se presentaba como una suerte de "padrino" de los hijos de aquellos compañeros desaparecidos.

“hayan sido víctimas de sustitución de identidad”. Al mismo tiempo, esta categoría no está exenta de ambigüedad, toda vez que referir en estos términos a los hijos de desaparecidos haría pensar erróneamente que todos los hijos acompañaron a sus padres en su cautiverio, o bien fueron víctimas de sustitución de identidad, lo que tampoco sucedió.

Esta situación, sumada a que la ley no fue acompañada por una fundamentación escrita ni por un decreto reglamentario, llevó a que la resolución de estos aspectos problemáticos fueran definidos en la práctica mediante dictámenes administrativos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos en tanto autoridad de aplicación de la ley. Ante la falta de definiciones precisas, quienes llevaban adelante la implementación de la ley se esforzaban por “hacer entrar” a la mayor cantidad de ‘hijos’ en la ley” aprovechando la ambigüedad de su redacción como una respuesta a las miles de solicitudes presentadas (Surraco, 2013, p. 36).

En este sentido, un señalamiento a considerar es que esta práctica indemnizatoria produce una invisibilización de una parte del universo de víctimas, en la medida que no todos los hijos de desaparecidos “entran” en las definiciones de la ley de hijos. La heterogeneidad de situaciones relativas a los hijos de desaparecidos no aparece contemplada en el texto de la ley, brindando de hecho un reconocimiento a algunos hijos, excluyendo a otros, y por lo tanto, invisibilizando su condición de víctimas. Este es el motivo por el cual la efectiva implementación de esta ley condujo en la práctica a resolver las controversias suscitadas mediante una interpretación que permitiera alcanzar a un universo mayor de hijos de desaparecidos que aquellos expresamente reconocidos por la ley.

El beneficio establecido por la ley 25.914/04 consistía en el pago por única vez de una suma equivalente a veinte veces la remuneración mensual de los agentes del escalafón superior de la APN. Excepto en aquellos casos en los cuales los beneficiarios hubieran sido víctimas de sustitución de identidad, a quienes correspondía una indemnización más elevada equivalente a la fijada por la ley 24.411/94, de lo cual se infiere una homologación entre la sustitución de identidad y la desaparición forzada contemplada en la ley de referencia. Por otra parte, un rasgo distintivo en cuanto al modo de implementación de los pagos previstos por esta ley es que se planteó que los mismos fueran realizados en efectivo, lo que permitió dejar al margen las discusiones en torno a la pertinencia de involucrar bonos de deuda pública en el pago de las reparaciones económicas. Finalmente, al igual que en el caso de la ley 24.043/91, se establecía un aumento en la indemnización en los casos en que las víctimas hubieran sufrido lesiones graves o

gravísimas, o hubieran fallecido, del 50%, 70% y 100% respectivamente. En el capítulo siete será profundizado el análisis en torno a las implicancias de estos incrementos en función de la gravedad del daño sufrido en las representaciones en torno del daño a reparar que subyacen a estas prácticas indemnizatorias.

3.b) Algunas consideraciones acerca de la reparación económica del exilio

La violencia estatal desplegada en el marco del genocidio produjo entre sus consecuencias un exilio que destaca por su contundencia numérica, su extensión en el tiempo, y por haber asumido la forma de diáspora, en tanto dispersó argentinos por todos los continentes (Jensen, 2011). No obstante, la problemática del exilio forzoso no formó parte de los instrumentos reparatorios que tuvieron lugar durante el período analizado en esta tesis. Este vacío legislativo se fue zanjando en la esfera de la implementación de las leyes reparatorias, en la búsqueda por brindar respuestas al creciente número de solicitudes de beneficios concernientes a al "exilio forzado". [144]

Ante esta ausencia de precisiones, la SDH emitió la Res. 4/2005 admitiendo la necesidad de unificar los criterios en relación a esta problemática, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial existente así como la experiencia recogida en la tramitación de las indemnizaciones. En este sentido, fueron considerados precedentes judiciales que establecían para el exilio una aplicación analógica de la ley 24.043/91. Consecuentemente, el daño producido por el exilio forzoso se equiparó a la detención clandestina, en concordancia con la doctrina establecida por la CSJN en esta materia. [145]

Con el correr del tiempo, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) fue presentando posicionamientos divergentes, hasta que en 2014 puso en duda el criterio que venía siendo utilizado para considerar el exilio entre los alcances de la ley 24.043/91. Ante esta situación, concluyó que era necesario un proceso judicial de conocimiento completo para cada uno de los casos relativos a esta temática, que culmine con un fallo dictado en consecuencia. Hacia el final del período analizado en esta tesis, ninguno de los expedientes en trámite vinculados a la

[144] Si bien no se cuentan con datos oficiales relativos al período analizado en esta tesis, un relevamiento realizado durante el año 2016 por parte del Ministerio de Justicia dio cuenta de la existencia de aproximadamente 5800 expedientes administrativos en trámite por "exilio forzado" al interior de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la SDH (Res. 670/2016).

[145] El postulado que indicaba que la detención era equiparable al ostracismo, y que el lapso transcurrido en el exilio por aquellas personas perseguidas ilegalmente debía recibir un tratamiento análogo a la detención clandestina en materia de prácticas indemnizatorias, fue establecido en la sentencia de la Causa "Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ M° del Interior -resol. M.J.D.H. 221/00 (expte. 443.459/98)".

reparación del exilio había llegado a atravesar la etapa de "debate y prueba" que propiciara la PTN, y por el contrario, en su mayoría de ellos continuaron recibiendo la aplicación análoga de la ley 24.043. [146] No obstante, la cuestión de fondo se mantuvo irresuelta, en tanto no se ha tratado en el Congreso ninguna iniciativa reparatoria que permita contemplar la situación del exilio como una problemática particular al interior del universo de consecuencias que produjo el genocidio en la sociedad argentina.

3.c) La ampliación del alcance de las prácticas indemnizatorias dirigidas a los presos políticos

Conocida como la "ley Dovena" en alusión al diputado que presentó el proyecto de ley para su tratamiento en el recinto, en diciembre de 2009 fue sancionada la primera ley considerada como una práctica indemnizatoria que tuvo lugar durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La ley 26.564/09 proponía la inclusión entre los beneficiarios de las leyes 24.043 y 24.411 a aquellas personas que hubieran estado detenidas o hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. No obstante, lejos de significar una mera ampliación del régimen reparatorio existente, esta práctica indemnizatoria puso en juego dos aspectos relevantes sobre los cuales el mismo se había construido. En primer lugar, abrió la discusión en torno a quiénes habían sido las víctimas de la dictadura; en segunda instancia, desplazó el eje temporal que había ordenado las representaciones de los crímenes cometidos por el Estado en el conjunto de prácticas indemnizatorias implementadas hasta entonces. [147]

En este sentido, la ley 26.564/09 se presentó durante el debate parlamentario como un instrumento dirigido a reparar a las víctimas de los bombardeos de 1955, en referencia al inicio del período conocido como la "resistencia peronista". [148] Vale recordar que hasta el momento, la mayoría de las prácticas indmenizatorias no habían determinado la fecha de inicio de los

[146] De acuerdo al Informe citado en la Res. 670/2016, desde el año 2013 a agosto de 2016 en materia de procesos judiciales por exilio forzoso, se han dictado 350 sentencias que imponen la aplicación analógica de la ley 24.043 a casos de exilio forzoso, contra 53 sentencias dictadas en sentido opuesto.

[147] Si bien las implicancias de la ampliación del universo de víctimas promovida por esta ley serán profundizadas en el capítulo siete, en este apartado serán presentados los aspectos más controversiales en torno a esta ampliación que signaron el momento de su formulación.

[148] El 16 de junio de 1955, aviones de la Armada Argentina bombardearon la Plaza de Mayo con el objetivo de asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón, dejando un saldo de más de 300 asesinados y 700 heridos. Este hito fue un antecedente directo del golpe de Estado que tres meses después derrocaría al peronismo en el gobierno instaurando la autodenominada Revolución Libertadora, y dando inicio a 17 años de proscripción en el que se gestaría el período conocido como "la resistencia peronista".

crímenes que se pretendían reparar, y se habían limitado a establecer el 10 de diciembre de 1983 como su fecha límite, demarcada por la recuperación de la democracia. La única excepción en este sentido había estado dada por la ley 24.043/91, cuya temporalidad había sido delimitada con el establecimiento del estado de sitio en 1974.

Al proponer ampliar la periodización hacia atrás, la ley 26.564/09 propuso una interpretación del pasado en tanto continuum represivo que transcurrió entre 1955 y 1983, sin distinciones entre los regimenes autoritarios y democráticos que se sucedieron durante esos años. Ello implicó una novedad en la clave de lectura que hasta el momento había opuesto dictadura a democracia como marco de referencia en el que se situaban los crímenes de Estado que debían ser reparados, a la vez que zanjó de algún modo la controversia en torno a la perpetración de delitos durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Esta modificación de la temporalidad concerniente a las prácticas indemnizatorias que instituyó la ley bajo análisis fue señalada como parte de un proceso de reinterpretación del pasado que propició el kirchnerismo en el gobierno, que aquí se ha conceptualizado como una impronta refundacional. El aspecto central en torno al cual se ordenaba esta relectura del pasado era el establecimiento de los sucesos de 1955 como el origen del denominado "terrorismo de Estado" (Balé, 2016).

En cuanto a la discusión vinculada a quiénes son las víctimas de la reparación, esta periodización también llevaba implícito un señalamiento del movimiento peronista como blanco principal del accionar represivo del Estado. El desagregado que establece a quiénes está dirigida la ampliación contenida en esta práctica indemnizatoria así lo evidencia, al hacer referencia a las víctimas del accionar de los rebeldes en los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955, y a los militares que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza. En ambos casos, las víctimas se encuentran definidas por su adscripción o lealtad al peronismo. Finalmente, esta práctica indemnizatoria incluye entre sus destinatarios a un amplio conjunto de víctimas comprendidas por quienes durante ese período hubieran estado detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la justicia o por los Consejos de guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4.161/55 (de prohibición de propaganda peronista), el Plan Conintes, o un conjunto de leyes de defensa enfocadas en garantizar la seguridad interna en clave contrainsurgente sancionadas entre 1974 y 1978.

Profundamente imbricadas entre sí, las discusiones en torno a la temporalidad y la definición de víctimas subyacentes a esta ley se hicieron presentes en su debate parlamentario. A grandes rasgos, durante el mismo pueden identificarse dos posicionamientos en torno al establecimiento de una fecha de corte –en este caso, el 16 de junio de 1955- para el inicio de las acciones represivas que constituían el objeto de la práctica indemnizatoria en discusión.

Por un lado, quienes se pronunciaron en contra de la periodización propuesta, recuperaron un dictamen de minoría que había sido emitido por la Cámara de Diputados en ocasión de debatir el mismo proyecto durante el año 2006. El mismo consideraba que el establecimiento de una fecha límite concretaba una situación de exclusión, al establecer un criterio de selección respecto de víctimas. Profundizando en este sentido, fue señalado que la lucha por la democracia y la libertad había contenido a hombres y mujeres de diversos signos políticos, y que por lo tanto sería incorrecto hacer un reconocimiento basado exclusivamente en el origen de la militancia o el momento en el que se produjo la represión. En un sentido similar, se mencionó la importancia de incluir a los militantes radicales en la larga historia de represión y muerte que se pretendía subsanar, mencionando que si fuera necesario establecer una fecha límite para las iniciativas reparatorias, correspondería que esta se remontara al año 1930, en relación al golpe perpetrado contra Hipólito Yrigoyen. En síntesis, los posicionamientos opuestos al proyecto de ley en debate no rechazaban de plano la indemnización prevista en el mismo, sino que pedían que se mantuviera la referencia al año 1983 como única limitación temporal, para liberar la fecha hacia atrás y de esta manera respetar el espíritu inclusivo de la ley. Asimismo, sostenían la importancia de considerar las "víctimas no peronistas" al momento de ampliar el alcance de las prácticas indemnizatorias dirigidas a los presos políticos.

Por otra parte, las intervenciones de quienes apoyaban la iniciativa del partido de gobierno reivindicaron el proyecto de ley como un reconocimiento al honor, el orgullo y la militancia de la resistencia peronista, e incluso propusieron que la misma fuera concebida como un acto de reparación no dirigido hacia las víctimas, sino a "los héroes y mártires del campo nacional y popular". Esta caracterización puede ser leída como un indicador de las transformaciones en torno a las representaciones de las víctimas de la reparación que trajo aparejado el desarrollo de los juicios por los crímenes de Estado. Estos desplazamientos implicaron una distancia respecto de la representación de las "víctimas inocentes" propia de la narrativa humanitaria, para hacer lugar a sus experiencias de militancia política, encuadradas en una amplia diversidad de

organizaciones sociales. En este marco, la narrativa subyacente a la ley en debate reservaba un espacio diferencial a quienes habían formado parte de la "gesta histórica" de la resistencia peronista.

3.d) El establecimiento de un "régimen reparatorio" para los ex presos políticos

La última práctica indemnizatoria del período estudiado en esta tesis corresponde a la ley 26.913, sancionada en diciembre de 2013 y reglamentada algunos meses después mediante decreto 1.058/14. Casi treinta años habían transcurrido desde que el otorgamiento de otra pensión había inaugurado una larga era en la cual la reparación económica se fue afianzando como modo de dar respuesta a los crímenes de Estado, en ocasión de la promulgación de la ley 23.466/86. En estas páginas se ha desarrollado el derrotero de esta larga era, en cuyo trayecto las indemnizaciones dirigidas a distintos universos de víctimas crecieron sostenidamente.

Vale señalar que a diferencia de aquella primera pensión implementada en 1986, la pensión establecida mediante la ley 26.913/13 sí se encuentra incluida institucionalmente dentro del corpus consagrado por las "Leyes Reparatorias". Esta distinción da cuenta del modo en que las diversas prácticas indemnizatorias analizadas a lo largo de este capítulo fueron recogiendo las representaciones construidas por sus antecedentes, y se montaron sobre ellas para construir sus universos de significación. Otra de las diferencias que pueden establecerse entre ambas pensiones es que mientras que la primera práctica indemnizatoria del período había establecido una pensión para los familiares de personas desaparecidas, consideradas por ese entonces el blanco principal de la represión, las representaciones que subyacen a la pensión establecida por ley 26.913/13 dejan entrever cómo a lo largo de los años se fueron complejizando las definiciones en torno a quiénes fueron las víctimas de los crímenes de Estado.

En este sentido, el objetivo perseguido por la ley en cuestión fue la reparación de los ex presos políticos mediante el otorgamiento de una pensión graciable. Para llevarlo a cabo, esta ley se montó sobre instrumentos reparatorios previos implementados con el mismo fin. Tal es así, que fueron considerados beneficiarios de esta ley por situación probada a quienes hubieran sido alcanzados previamente por las leyes 24.043/91 y 25.914/04, sus ampliatorias y complementarias. En esta misma línea, al concebirse la pensión graciable como independiente de cualquier otra reparación económica, se habilitó expresamente a que toda persona que hubiera cobrado una indemnización producto de la legislación mencionada, pudiera aplicar para el cobro de la

asignación mensual estipulada en el presente régimen reparatorio. No obstante, aquellas personas beneficiarias de una prestación similar emanada de las mismas situaciones, se consideraron excluidas del mismo, pudiendo optar por una entre distintas pensiones a percibir.

Por otra parte, si bien esta ley recogió las definiciones que sirvieron como antecedentes, en este caso la concepción de "prisión por motivos políticos" presentó una acepción más amplia, al considerar de esta manera a toda persona que hasta el 10 de diciembre de 1983 hubiera sido privada de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuezas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo por causas políticas, gremiales o estudiantiles. También mencionó entre los destinatarios de la pensión a las personas privadas de su libertad en condición de civiles bajo la vigencia de la DSN, aspecto que hasta entonces había permanecido implícito en la legislación reparatoria. Finalmente, la concepción ampliada de "presos políticos" fue completada con la inclusión de quienes hubieran permanecido detenidos bajo el régimen de "detenidos especiales" violatorio de los derechos humanos, en virtud de la legislación antisubversiva.

En cuanto a los aspectos formales que involucró esta práctica reparatoria, vale mencionar que el circuito administrativo al que dio lugar su implementación presupuso la intervención de la ANSES en coordinación con la SDH en tanto órgano de aplicación de la misma, en lo concerniente a la liquidación y el pago de las pensiones graciables. En caso de fallecimiento del titular, la ley estableció que la pensión graciable podía ser percibida por su cónyuge, concubino, hijos menores de edad o bien incapacitados para el trabajo. [149]

Otra de las disputas que atravesaron las definiciones contenidas en esta ley durante su tratamiento parlamentario tuvo que ver con la fecha de inicio de los delitos a reparar. A raíz de una incongruencia relativa a las fechas consignadas en el proyecto, se abordó la disyuntiva entre indicar como fecha inicial el 24 de marzo de 1976 o por el contrario, el 6 de noviembre de 1974. [150] Finalmente, tras un caluroso debate al respecto, y algunas idas y vueltas del proyecto entre ambas cámaras, se resolvió fijar como fecha límite el 10 de diciembre de 1983, en línea con la mayoría de las leyes reparatorias previamente sancionadas.

[149] El monto correspondiente a la pensión fue establecido como el equivalente a la remuneración mensual asignada a un empleado público en unla Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente del Escalafón para el personal del SINEP.

[150] Al momento del debate en la Cámara de Senadores, se observó que mientras que el proyecto remitido por la Cámara de Diputados indicaba como fecha inicial el 24 de marzo de 1976, el texto bajo tratamiento de acuerdo al Diario de Sesiones refería a la fecha 6 de noviembre de 1974. Dada la imposibilidad de dilucidar si se trataba de un error o de una adulteración voluntaria, el proyecto fue devuelto a la Cámara de origen para aclarar este punto controversial, lo que generó que las fechas señaladas fueran puestas en discusión.

Por último, interesa mencionar que se preveía que el proyecto de ley que establecía la pensión para ex detenidos fuera debatido en la misma sesión que un resarcimiento económico para las personas fallecidas como consecuencia del ataque perpetrado al Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa, el cual había formado parte de la "Operación Primicia", bautismo de fuego de la Organización Montoneros el 5 de octubre de 1975. Ante la imposibilidad de tratar el primero, fue resuelto posponer este último para que ambos proyectos fueran debatidos de manera conjunta. Esta situación fue considerada por algunos senadores como una demostración de que el prisma de los dos demonios permanecía vigente como modo de interpretación del conflicto social de los años 70, en tanto abonaba la equiparación de la violencia estatal y la violencia insurgente. Siguiendo a Feierstein (2018), es posible vincular estas controversias con la versión *recargada* de la teoría de los dos demonios, de acuerdo a la cual la igualación de las violencias tiene por objetivo la visibilización de las "víctimas de la violencia insurgente" y su responsabilización respecto del proceso represivo, a diferencia de la versión original que se proponía centralmente la exculpación del conjunto social y el señalamiento de la responsabilidad del Estado.

En la medida que las prácticas reparatorias continuaron siendo objeto de debate en la sociedad argentina luego del año 2015, resulta inapropiado hablar de un *cierre* del proceso social que gira en torno de las reparaciones a los crímenes de Estado. No obstante, el análisis presentado hasta aquí permite señalar que el devenir de las prácticas indemnizatorias que en 1986 nació de la mano del otorgamiento de una pensión, se fue ampliando y consolidando mediante sucesivas indemnizaciones hasta llegar en 2015 a esta segunda pensión que aquí se aborda, en la que se encuentran contenidas algunas discusiones centrales que a lo largo de todos estos años se fueron dando en torno a cuáles son los daños que se deben reparar, quiénes son las víctimas a las que corresponde esta reparación, e incluso cuál es el instrumento más adecuado para llevarla a cabo. Antes de avanzar en la dirección planteada por estos interrogantes en los próximos capítulos, se presentarán a continuación algunos datos que permiten observar el comportamiento de cada una de las prácticas indemnizatorias analizadas, desde la esfera de la implementación de las leyes reparatorias.

4. La implementación de las "Leyes Reparatorias": un panorama de las prácticas indemnizatorias

Habiendo analizado en el capítulo anterior las distintas constelaciones reparatorias en cuyo seno se ubican las prácticas indemnizatorias, en el transcurso de este capítulo se ha profundizado en las características que presentan cada una de ellas al interior de la configuración que las contiene. Recuperando lo expuesto hasta aquí, para finalizar este capítulo se presentarán un conjunto de datos construidos con la doble intención de por un lado, conocer el alcance concreto de cada una de las leyes reparatorias estudiadas; a su vez, se busca establecer vinculaciones relacionales entre las distintas prácticas indemnizatorias que permitan dar cuenta de su influencia recíproca al interior del universo de las reparaciones económicas.

Como podrá observarse, se contempla exclusivamente información referida a las prácticas indemnizatorias que se desprenden de la aplicación de las leyes 24.043/91, 24.411/94 y 25.914/04, dirigidas a la reparación de los ex detenidos, los desaparecidos y los hijos, respectivamente. Mientras que la exclusión de las pensiones establecidas en las leyes 23.466/86 y 26.913/13 obedece a que las mismas no tramitan en la autoridad de aplicación de las "Leyes Reparatorias" sino en el organismo encargado de administrar la seguridad social, las resoluciones vinculadas a la ley 26.564/09 –la "ley Dovena"- fueron consignadas refiriendo a la ley madre de la cual la misma constituye una ampliación (es decir, la ley 24.043/91 o 24.411/94 según corresponda).

En principio, debe mencionarse que la evolución de las diposiciones emanadas de instituciones estatales como las que se presentan a continuación se encuentra atravesada por dos elementos que inciden en sus desplazamientos. El primer elemento –que vale mencionar que ha aparecido como fundamental en los relatos de cada uno de los informantes clave entrevistados a lo largo de la investigación- refiere a las decisiones políticas del gobierno de turno, que en el marco de las correlaciones de fuerza que se han ido caracterizando a lo largo del capítulo, van moldeando el camino a seguir por los expedientes que tramitan al interior de cada área del Estado, como es el caso del área encargada de la firma de expedientes relativos a leyes reparatorias bajo análisis.

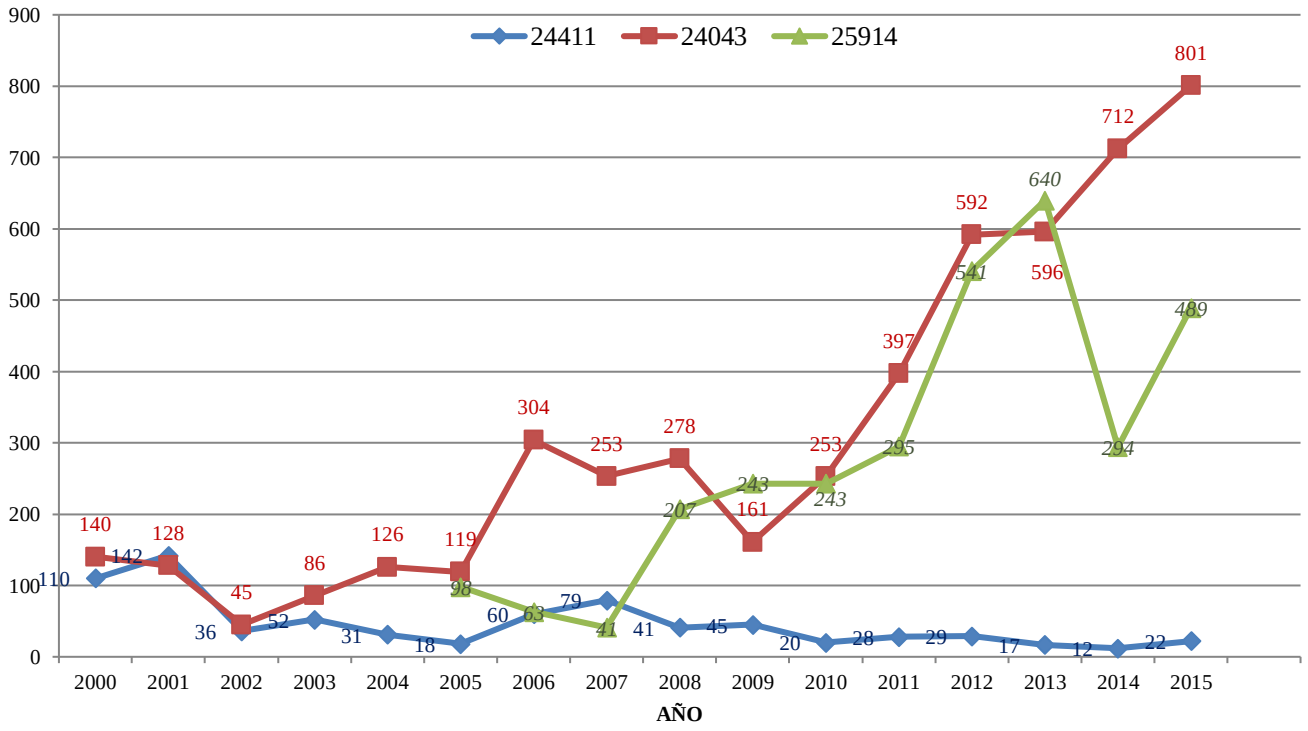
El segundo elemento, que guarda relación con el anterior, refiere a la disponibilidad de partidas presupuestarias que permitan afrontar los gastos emanados de las resoluciones que otorgan las indemnizaciones. En este punto, es importante tener en cuenta que en rigor, la ley 25.914/04 es la única entre las leyes analizadas que dispone que sus pagos sean realizados en efectivo, mientras que las demás leyes se liquidan mediante la emisión de bonos de deuda pública. Si bien en cada caso el circuito del dinero presenta particularidades, los gastos que demanda su cumplimiento

deben ser contemplados en el esquema presupuestario del Estado, más allá de las diversas modalidades en que los pagos se realicen.

Estas consideraciones no pueden soslayarse al momento de abordar los datos que dan cuenta de un proceso que tiene lugar en el ámbito de la implementación de las leyes reparatorias. Sin embargo, se intentará iluminar los desplazamientos de las prácticas indemnizatorias de acuerdo a su propio desarrollo a lo largo del período que esta tesis estudia a partir de la información contenida en el Gráfico 2:

Grafico 2.

Resoluciones emitidas por ley 24.043/91; ley 24.411/94 y ley 25.914/04 por año



Fuente: elaboración propia en base a datos disponibles SDH

Una mirada global hacia los datos graficados permite advertir que la ley 24.411/94 es la que presentó una evolución más estable del conjunto, manteniéndose en valores más bajos y con menores variaciones a lo largo del período, llegando a totalizar 742 resoluciones entre 2000 y 2015. Los picos más altos se observan en los años iniciales -2000 (110) y 2001(142)- a partir de

los cuales la curva descendió levemente para mantenerse pareja a lo largo del tiempo. Hacia los años 2006 (60) y 2007 (79) se observa nuevamente una oscilación ascendente, que en términos cuantitativos representa aproximadamente un 50% respecto de las resoluciones emitidas en su pico máximo.

En cuanto a las curvas dibujadas por la evolución de las leyes 24.043/91 y 25.914/04, en términos globales presentan números más elevados en cantidades totales -4.991 y 3.154, respectivamente-, a la vez que sus tendencias son más variables que las que se observaban en la ley 24.411. [151] Por su incidencia cuantitativa, puede afirmarse que estas son las que marcan el rumbo de la evolución general de las resoluciones de leyes reparatorias.

Comenzando con una lectura individual de cada una de ellas, se observa que la ley 24.043/91 presenta en general una tendencia ascendente, aunque decrece en dos oportunidades. Un primer descenso corresponde a 2002, en el cual toca su valor mínimo con 45 resoluciones, acompañando la tendencia general hacia la baja que se observa en el Gráfico 1. A partir de entonces, se observa un crecimiento hasta el año 2006, en el cual nuevamente la curva marca un breve período descendente que se extiende hasta 2009, en correspondencia con los movimientos oscilantes que caracterizaron la evolución de conjunto durante estos años. A partir de 2009, se recupera el crecimiento de manera ininterrumpida hasta alcanzar su pico máximo en el año 2015 con 801 disposiciones emitidas.

Por otra parte, en cuanto a las resoluciones referidas a la ley 25.914/04, las mismas se inician en 2005, y tras un leve descenso hacia 2007 en el que llega a su valor más bajo con 41 resoluciones, su evolución se mantiene creciente hasta el año 2013, en el que se observa su pico más alto con 640 disposiciones firmadas. Posteriormente, un año después se produce una caída abrupta tras la cual la curva vuelve a crecer, pero sin lograr recuperar los niveles previamente alcanzados.

[151] Para el cálculo total de resoluciones consignadas en las curvas de evolución de las leyes 24.043 y 25.914, se restaron del total de disposiciones emitidas aquellas correspondientes exclusivamente al pago de lesiones estipulado en dichas leyes. Si bien este aspecto será profundizado en el capítulo siete al analizar las representaciones del daño a reparar, por el momento vale recordar que estas dos leyes estipulan el pago de un incremento indemnizatorio en los casos en los cuales los beneficiarios acrediten la existencia de lesiones graves o gravísimas producidas a partir de la experiencia represiva, que puede solicitarse con posterioridad al otorgamiento de la indemnización prevista en dichos instrumentos. Producto de ello, a partir del año 2010 se identificaron un conjunto significativo de resoluciones abocadas a dictaminar acerca de la pertinencia del pago de estas lesiones, en particular bajo la órbita de la ley 25.914. Dado que estas resoluciones pueden considerarse un desdoblamiento de la resolución principal que establece el otorgamiento de la indemnización, se ha optado por restarlas del total con el objetivo de precisar la evolución de la ley bajo análisis.

Con las particularidades mencionadas, propongo complementar las líneas de tendencia que dibujan las leyes 24.043 y 25.914 con la curva total de resoluciones contenida en el Gráfico 1, dado que su observación conjunta permite una lectura más precisa de los datos. Desde esta perspectiva, se advierte que si bien en términos generales ambas leyes desagregadas acompañan la evolución de la curva dibujada por el total de resoluciones, los movimientos de ascenso y descenso que la caracterizan se presentan en ambos casos en sentido inverso. Mientras que el ascenso de las resoluciones correspondientes a la ley "de presos" 24.043 en 2006 puede leerse en complemento del pico mínimo de la ley "de hijos" 25.914 en 2007, lo contrario ocurre en el año 2009, en el cual la primera toca su valor más bajo a la vez que la segunda se posiciona en alza. Asimismo, el movimiento opuesto más llamativo se observa en el período 2013-2015, en el cual la ley 24.043 aumenta significativamente mientras que se desploman los valores de la ley 25.914.

Más allá de la existencia de unidades ejecutoras encargadas de cada ley en particular, la tramitación de ambas leyes se lleva a cabo por una misma dependencia estatal, por lo que estas tendencias opuestas pueden obedecer a las prioridades cambiantes que se van fijando como objetivos de la gestión en cada uno de los momentos. Partiendo de este supuesto, es posible realizar algunas inferencias a partir de los datos presentados. Nuevamente, el punto de partida para estas interpretaciones se remonta al Gráfico 1, que permitió demostrar que una vez que se puso en crisis la hegemonía de la configuración reparatoria que combinaba dinero con impunidad, las prácticas indemnizatorias presentaron un despliegue significativo al calor de la profundización de las prácticas de juzgamiento, que se verifica mediante el crecimiento sostenido de las resoluciones en materia de leyes reparatorias en el período 2003-2015.

En esta línea argumental, es posible realizar una lectura de los datos en relación con los elementos que se desprenden de la periodización de prácticas reparatorias presentada en el capítulo previo. Desde esta perspectiva, el ascenso que se observa en las resoluciones correspondientes a la ley 24.043 en el año 2006 puede vincularse con el posicionamiento a favor de las políticas de derechos humanos en acompañamiento a la reapertura de los juicios, en el marco de la configuración reparatoria tendiente a la integralidad. En este sentido, cabe interpretar ese salto como un relanzamiento de la política de reparación económica tras un período de estancamiento que se venía presentando desde el año 2000.

A su vez, se observa que para entonces, los "ex detenidos" pasaron a ocupar un lugar privilegiado en relación a los "hijos", de acuerdo a los comportamientos disímiles que presentaron las leyes de

las que ambos son beneficiarios. Esta prioridad puede vincularse con el rol protagónico que asumieron los ex detenidos en su carácter de víctimas testigos en el marco de los juicios, lo que brindó impulso a este reconocimiento estatal también en la esfera de las prácticas indemnizatorias, tal como se profundizará en el capítulo dedicado a analizar las representaciones de los sujetos de la reparación.

Por otra parte, otro conjunto de consideraciones emergen al ponderar la demora mínima del orden de los 3 años que presenta el circuito de las leyes reparatorias. En este sentido, la suba que presentaron las resoluciones relativas a la ley de hijos entre los años 2007 y 2009 pueden deberse a que para entonces comenzaron a ser resueltos los expedientes que habían ingresado al momento en que esa ley comenzó a implementarse, tras su sanción en 2004. Algo similar puede inferirse en relación a la suba referida a las resoluciones correspondientes a la ley 24.043 a partir de 2009, vinculada a los requerimientos de reparación económica que ingresaron una vez puestos en marcha los juicios en 2006. Asimismo, la sanción de la ley "Dovena" en 2009 y su incidencia en el total de resoluciones consignadas bajo el paraguas de la ley dirigida a los ex detenidos puede explicar el ascenso que presenta a partir de 2013.

Una última cuestión que se destaca a partir de los datos analizados refiere a la suba pronunciada en las resoluciones referidas a la ley 24.043 a partir de 2013. Vale recordar que ese año fue sancionada la ley 26.913 que establecía el otorgamiento de una pensión para los ex presos políticos, y que alcanzaba a todos aquellos que tuvieran por probado su carácter de beneficiarios de la ley 24.043. Puede pensarse que la resolución de los expedientes que permitieran acceder al cobro de la pensión a los ex detenidos fue de consideración prioritaria y que por lo tanto, los esfuerzos de la administración se dirigieron a dar respuesta a esta situación.

Con el panorama general que se ha construido en este capítulo acerca de las múltiples prácticas indemnizatorias implementadas, así como un mapa de las tendencias que presentó su evolución a lo largo del tiempo, los capítulos que siguen estarán dedicados al estudio de las representaciones que subyacen al conjunto de leyes analizadas. En el capítulo próximo, este recorrido comienza abordando las representaciones acerca del dinero como herramienta de la reparación, aspecto que unifica al conjunto de prácticas indemnizatorias y que ha dado lugar a disputas significativas al interior del universo de las reparaciones económicas.

Capítulo 5

El dinero como instrumento de la reparación en las prácticas indemnizatorias

Los desarrollos teóricos de Karl Marx y Georg Simmel han construido los cimientos sobre los cuales el dinero como hecho social se ha posicionado como un objeto privilegiado para el análisis sociológico durante el siglo XIX. A la luz de las transformaciones sociales producidas por la revolución industrial, el dinero fue considerado tempranamente como expresión de la esencia de la naciente sociedad moderna. Ante la generalización del dinero como medio de intercambio, la sociología clásica vio en este instrumento el emblema de la racionalización de todos los ámbitos de la vida promovida por el *desencantamiento del mundo*. Desde entonces, la transformación de las relaciones personales en vínculos instrumentales fue señalada como una de las consecuencias aparejadas por la expansión inevitable del poder del dinero. [152] [153]

Años más tarde, esta visión abstracta e impersonal del dinero en tanto regulador de las transacciones económicas comenzó a ser cuestionada desde el campo de la sociología del dinero. Partiendo de postular el carácter no neutral del dinero, esta perspectiva colocó el acento en los múltiples usos y significaciones atribuidas al dinero al interior de redes de relaciones y contextos heterogéneos. De este modo, el interés por "el valor" asociado al dinero que había regido las indagaciones clásicas fue cediendo ante los diversos "valores" simbólicos que el mismo adquiere en distintos escenarios y circulaciones (Stark, 2009) . [154]

La sociología del dinero se distanció de la teoría clásica remarcando el carácter utilitarista así como los efectos devastadores sobre las relaciones sociales que el dinero producía de acuerdo a sus planteos. Sin embargo, le otorgó un lugar central en la construcción de los modos en los que los hombres se relacionan entre sí, en la medida que atraviesa todos los ámbitos de la vida en

[152] La llamada perspectiva de la sociología clásica sobre el dinero tiene sus orígenes en las obras de Marx (2011, 2019), Simmel (1977) y Weber (1971). Desde entonces, el dinero como medio de intercambio de mercado ha sido objeto privilegiado de la indagación sociológica, tal como lo demuestran las obras de Parsons (1964), Giddens (1999) y Habermas (2010), entre otros.

[153] Si bien Marx y Simmel confluyen en los puntos nodales de la teoría clásica del dinero, es el propio Simmel quien sienta distancia con algunos presupuestos fundamentales de la obra de Marx en la introducción de su *Filosofía del dinero*: "Desde una perspectiva metodológica, podemos formular nuestra intención primaria del modo siguiente: echar los cimientos en el edificio del materialismo histórico de forma tal que se mantenga el valor explicativo de la importancia de la vida económica en la causación de la cultura espiritual y, al mismo tiempo, se reconozca a las formas económicas como resultado de valoraciones y corrientes más profundas, de presupuestos psicológicos y hasta metafísicas" (Simmel, 1977, p. 12).

[154] Los aportes de Zelizer (2011) son considerados fundantes de la perspectiva de la sociología del dinero. Para una revisión de esta tradición disciplinar puede consultarse Luzzi & Sánchez (2020).

sociedad. Sus desarrollos estuvieron dirigidos a poner de relieve el carácter plural del dinero, dando cuenta de sus modos de circulación y las prácticas en las que se encuentra inmerso, en escenarios diversos que desbordan el ámbito del mercado.

Cualquiera sea el enfoque desde el cual se aborde su análisis, el poder conferido al dinero en la configuración de las relaciones sociales no ha pasado inadvertido. Compartiendo el supuesto de esta relevancia, este capítulo tiene por objetivo abordar las representaciones en torno al dinero en tanto instrumento de la reparación al interior del conjunto de relaciones sociales en que se insertan las prácticas indemnizatorias. En las páginas que siguen, quiero proponer una mirada que aporte elementos para comprender la trama compleja que teje el dinero en la problemática específica de las prácticas reparatorias de los crímenes de Estado.

La tesis sobre la que se fundamenta el desarrollo a presentar es que el dinero no es un objeto como cualquier otro, sino que es la expresión de un modo particular en el cual los seres humanos se relacionan. En un determinado estadio del desarrollo histórico de las fuerzas productivas, esta relación social expresada en la forma dinero se transforma en el vínculo social predominante, permeando todos los órdenes de la vida social. Como en toda sociedad capitalista, en la sociedad en que se sitúan las prácticas que aquí se analizan, el dinero representa el vínculo social fundamental, opera como un lazo capaz de vincular las más diversas actividades de los hombres. En este sentido, colocar el dinero en el centro del análisis proporciona sin dudas un lente privilegiado para la comprensión de las prácticas reparatorias, dada la centralidad que este instrumento ocupa en la sociedad en que vivimos.

Hasta el momento, esta vinculación entre el dinero y la reparación de los crímenes de Estado en el caso argentino ha sido analizada desde una perspectiva heredera de los desarrollos de la sociología del dinero, desde la cual se propuso considerar el dinero asociado a las reparaciones como un "*dinero maldito*". En tanto antecedente significativo de la problemática bajo estudio, el recorrido de este capítulo comenzará con la presentación de este abordaje, centrado en las consecuencias subjetivas que produce el dinero de las indemnizaciones en quienes las perciben.

Considerando estos estudios previos, propongo una lectura alternativa de esta problemática, cuya hipótesis principal sostiene que las tensiones suscitadas entre la lógica de la reparación y la lógica del dinero pueden entenderse a la luz de las contradicciones propias de la forma mercancía. En el apartado 2 se abordarán algunas consideraciones acerca del dinero que permitan sustentar

teóricamente este postulado, a partir del desarrollo de la forma dinero a la luz de la dialéctica de la mercancía.

Desde la perspectiva adoptada, es posible afirmar que las miradas sobre el dinero en cuanto a su carácter "destructor" y "productor" de relaciones sociales no son necesariamente dos posiciones antagónicas. Mientras que la presencia del dinero refuerza determinados vínculos, ello sucede en detrimento de otros; mientras que algunos de estos vínculos son afines a la forma dinero, hay otros que por el contrario, suscitan tensiones. Considerar ambos aspectos de manera inescindible, como dos caras de una misma moneda, resulta adecuado al momento de preguntarnos por sus implicancias para la comprensión de la reparación.

Con este objetivo, se ha establecido una distinción entre lo que se denominan las representaciones *negativas* y las representaciones *positivas* del dinero, a las cuales estarán dedicadas los apartados 3 y 4, respectivamente. Lejos de proponer una valoración respecto de las mismas, las representaciones consideradas negativas son aquellas que se fundamentan en lo que el dinero tiene el poder de destruir, mientras que las representaciones positivas ponen el acento en el poder creador del dinero, en lo que este elemento construye –o tiene la potencialidad de construir- al interior de la sociedad en la que se sitúa esta interrogación. Por último, en el apartado 5 se abordarán las formas del dinero adoptado para el pago de las indemnizaciones, situando el análisis en la esfera de la implementación de las prácticas indemnizatorias.

A diferencia de las representaciones acerca del daño y de las víctimas que se abordan en otros capítulos de esta tesis, aquellas que hacen al dinero no emergen de la lectura y análisis de la propia legislación repararatoria. Por el contrario, el dinero como instrumento de la reparación es la esencia común a todas las prácticas indemnizatorias, y con la salvedad de las formas que adopta el dinero que serán analizadas en el punto 5, se presenta sin matices como su principal supuesto subyacente. Por este motivo, en este capítulo se ha optado por acompañar el análisis del dinero con algunas declaraciones realizadas por organismos de derechos humanos que permitan ilustrar la complejidad que emerge en torno al dinero. Asimismo, la consideración de las manifestaciones públicas realizadas por los organismos para el análisis dialoga con una visión del Estado no monolítico y en cuya construcción intervienen las prácticas realizadas por múltiples actores sociales.

1. Acerca del "dinero maldito"

Las investigaciones de Tello (2003), López (2012), Surraco (2013) y Luzzi (2015) han planteado un modo sugerente de abordar la vinculación entre el dinero y las reparaciones económicas. Situados en la intersección entre la sociología y la antropología económicas, privilegian el carácter plural y flexible del dinero para proponer que el dinero involucrado en las indemnizaciones corresponde a la noción de un *dinero maldito.* En oposición a una concepción objetiva e impersonal del dinero, estos autores consideran que mediante el proceso de *marcado del dinero*, éste puede ser investido de diversos significados y usos sociales.

Estos estudios recuperan la conceptualización de Zelizer (2011) según la cual el proceso de *marcado del dinero* no se circunscribe a la esfera del mercado, sino que del mismo participan estructuras culturales y sociales que determinan los modos en que los sujetos definen y utilizan el dinero. En este sentido, lejos de existir un dinero único y generalizado, existen múltiples clases de dinero, impregnados de distintos significados morales y afectivos. La variable con mayor peso en este proceso de marcado es el origen del dinero: quién lo otorga, cómo se obtiene ese dinero, resulta determinante al momento de su distinción.

En capítulos previos se ha insistido en que el dinero de las llamadas indemnizaciones es recibido por los sujetos beneficiarios de las leyes reparatorias a manera de compensación por los daños ocasionados por los crímenes de Estado. El asesinato, la desaparición forzada, la prisión por motivos políticos, la tortura, marcan el origen del dinero involucrado en las prácticas indemnizatorias. A este marcado de origen se añaden las representaciones negativas del dinero que se analizarán a continuación y que contribuyen a hacer del mismo un dinero cargado con el peso del horror y de la muerte. En este punto, también la perspectiva psicoanalítica recoge la noción de *dinero maldito* para dar cuenta del modo en que estas valoraciones negativas imposibilitan la creación de un marco simbólico capaz de recubrir la literalidad mortífera que este dinero representa, tornándolo difícil de cobrar en términos subjetivos y ocasionando un enorme dolor psíquico en las víctimas (Rousseaux, 2017). [155]

Las tensiones que este dinero controvertido y difícil de aceptar generan en las víctimas son entendidas como producto del choque de dos universos de sentidos diametralmente diferentes. Por un lado, la trama de significación inscripta en la condición de víctimas de los crímenes de la dictadura, un mundo de sentidos asociados a los proyectos de militancia de los años setenta y a la

[155] Las particularidades del dispositivo burocrático a cargo de la implementación de las políticas reparatorias forman parte de las condiciones de posibilidad para la construcción de este marco simbólico que haga tolerable la aceptación de este dinero. Volveré sobre algunas de estas características en el apartado 5 de este capítulo.

lucha por los derechos humanos. Por el otro, el universo del dinero en tanto equivalente general de las mercancías, expresión más acabada del sistema capitalista de producción.

En este encuentro forzado que las prácticas indemnizatorias promueven entre dos universos de valores opuestos, el dinero es una fuente de profundas controversias que requiere un trabajo de elaboración para poder ser aceptado por parte de los beneficiarios. Dicha elaboración consiste en la transformación del dinero "impuro" en un dinero que no *queme las manos*, mediante un acto que haga posible la purificación de esa maldición inscripta en este dinero sucio. Este proceso se salda en la esfera de la circulación del dinero recibido como pago de las reparaciones; es decir, en el destino que las víctimas le dan a ese *dinero maldito*. [156]

En esta línea, las investigaciones citadas analizan los efectos que este dinero produce en la experiencia de quienes lo reciben, y en particular, cuáles serían las maneras en las que este dinero puede ser resignificado como algo propio y utilizable. Coinciden en que esta transformación fue posible allí donde el dinero pudo reinstalarse en un universo de moralidades militantes, en la medida en que fue destinado por ejemplo a proyectos comunitarios, a emprendimientos sociales, o a cualquier tipo de actividades que constituyeran sinónimos de "continuar la lucha de los desaparecidos". Postulan que una situación intermedia en cuanto a esta resignificación tuvo lugar en los casos en que se le otorgó al dinero de las prácticas indemnizatorias carácter de herencia, y se utilizó como medio para acceder a la vivienda propia o a brindar ayuda económica a sus familias. Finalmente, en los casos en que esta elaboración no pudo realizarse, el dinero continuó "quemando", y como consecuencia fue gastado rápidamente de manera considerada superflua, o destinado a bienes y servicos innecesarios con el único fin de evitar la incomodidad que generaba su posesión.

Si bien resulta pertinente la reposición de los resultados de las investigaciones reseñadas con las cuales se comparte el tema de estudio, no profundizaré aquí sobre las consecuencias que este *dinero maldito* produce en los sujetos que lo perciben, tal como se proponen los estudios

[156] Desde una perspectiva antropológica, este proceso es concebido en términos de *ritualización*, en la medida en que determinadas conductas otorgan una connotación a un objeto específico en un contexto particular. En este caso, algunos de los usos a los que se destina el dinero obtenido mediante las indemnizaciones podrían "lavar la suciedad" con la que el dinero viene marcado y a la vez otorgarle un nuevo significado (Surraco, 2013). En la misma línea, este proceso se conceptualizó como un desplazamiento de "la moral del dinero" hacia la "moral del don", capaz de resituar la circulación de dones en el ámbito de lo familiar y por fuera del intercambio de mercado. Este abordaje, heredero de los desarrollos de Mauss, afirma que el intercambio en la esfera familiar se caracteriza por la reciprocidad generalizada, a la cual subyace un esquema basado en "dar, recibir y devolver" que involucra obligaciones y valores morales (López, 2012; Tello, 2003)

referidos desde la denominada perspectiva del actor. [157] Desde el enfoque adoptado en esta tesis, quiero postular que la objetividad del dinero involucrado en las prácticas indemnizatorias se vincula con el hecho de que quien otorga la reparación es el Estado, y de este modo, independientemente de las valoraciones subjetivas que el dinero pueda adquirir para cada individuo, construye una representación hegemónica que trasciende la esfera individual.

En este sentido, y dado que es precisamente la especificidad de esta construcción la que busco desentrañar, quisiera distanciarme de la idea de que la reparación en dinero de los crímenes de Estado implica haber dejado entrar al dinero en un ámbito que le resulta inapropiado. Considero que para comprender el modo particular de reparación que llevan a cabo las prácticas indemnizatorias no es necesario volcar el análisis hacia los múltiples significados sociales del dinero, sino que por el contrario, esta problemática puede abordarse en el propio terreno de la forma objetiva del valor. La apuesta por una lectura de las implicancias del dinero asociado a la reparación como expresión de la dialéctica del dinero permitirá asimismo enmarcar la discusión en un campo que trascienda su significación moral, para comprender las tensiones entre la lógica de la reparación y la lógica del dinero como una contradicción inherente a la sociedad capitalista, al interior de la cual las prácticas indemnizatorias se han posicionado como el modo más extendido de reparar los crímenes cometidos durante la última dictadura.

2. Algunas consideraciones preliminares acerca del dinero

El punto de partida para el recorrido propuesto lleva al planteo de la siguiente pregunta: *¿Qué significa que el dinero expresa la relación social fundamental en nuestra sociedad?*

Dado que esta investigación aborda una problemática que involucra a la sociedad en su conjunto, y que su campo problemático se construye a partir de una indagación hacia el Estado, es preciso analizar el dinero considerando su caracterización hegemónica al interior de la sociedad capitalista en la que las prácticas indemnizatorias se sitúan. A riesgo de caer en una simplificación, comenzaré con una breve conceptualización de algunos elementos centrales en torno al dinero tal como este se presenta en las sociedades capitalistas sobre los cuales se irá desplegando el análisis que se presentará a lo largo del capítulo.

[157] Para profundizar en la perspetiva del actor, desde la cual se otorga un lugar central y explicativo a las significaciones subjetivas que los individuos construyen en el ámbito de sus prácticas cotidianas, ver Guber (2004).

Pese a que el intercambio ha existido en formaciones económicas precapitalistas, el modo particular que adopta la relación de cambio en el capitalismo lo coloca en el lugar de columna vertebral sobre la cual descansa el conjunto de relaciones sociales en toda sociedad capitalista. En pocas palabras, la relación de cambio es aquella que establecen unos y otros hombres como poseedores de mercancías, allí donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo humano. La relación de cambio hace posible la vinculación entre los productores y consumidores que de lo contrario se encontrarían aislados, y permite que tengan lugar no sólo la producción y el consumo, sino inclusive el proceso de acumulación. El dinero cumple un rol fundamental en el desarrollo de estas relaciones sociales, que lejos de ser naturales, son producidas históricamente y corresponden al modo capitalista de producción.

En las sociedades burguesas, los productos de los trabajos privados de los hombres son realizados de manera autónoma y recíprocamente independiente. Por un lado, estos trabajos están orientados hacia la realización de cosas útiles, es decir a la producción de cosas, de objetos que puedan satisfacer necesidades humanas de diversos tipos. Esta utilidad, dada por las cualidades y características propias de cada cosa particular, es la que hace de ella un valor de uso.

Sobre la base de estos trabajos útiles cualitativamente diferentes, en determinados estadios de desarrollo de la producción tiene lugar una división social del trabajo, que se manifiesta en la diversificación así como en la diferenciación de estos múltiples valores de uso. En estas condiciones, los productos del trabajo no sólo importan por su utilidad sino también por la capacidad que tienen de ser cambiados por otros productos en el mercado. Esta capacidad hace que los mismos sean portadores materiales del valor de cambio, lo que otorga a ese producto la dualidad característica de toda mercancía: la de ser al mismo tiempo valor de uso y valor.

En este sentido, para que un objeto se transforme en mercancía es necesario no sólo que sea útil, sino que satisfaga una necesidad social, en la medida en que sea pasible de ser transferido a través del intercambio para quien lo requiera en función de su valor de uso. Para que esta transferencia se pueda producir, es necesario establecer en qué medida, en qué proporción dos mercancías distintas -entendidas como valores de uso que satisfacen necesidades diferenciales- pueden ser intercambiadas entre sí. En este punto es donde las particularidades contenidas en

cada una de las mercancías deben abstraerse, para poder ser reducidas a aquello que tienen en común: el ser productos del trabajo humano. [158]

Tal como Marx ha demostrado, el valor de cambio de las mercancías está determinado por la cantidad de trabajo contenido en ella, más específicamente por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción; "en cuanto valores, todas las mercancías son, únicamente, determinada medida de tiempo de trabajo solidificado" (2011, p. 49). Esta medida es la que permite reducir los diferentes valores de uso contenidos en las mercancías a un aspecto en común que hace posible su intercambio en el mercado. Es allí donde se da la relación de valor más simple, la que existe entre dos mercancías heterogéneas que a su vez, representan los dos polos de la expresión del valor: por un lado, la forma relativa de valor; y por el otro, la forma de equivalente.

Sólo al entrar en relación entre sí es que se pone de relieve el carácter de valor de las mercancías, es decir, se pone de manifiesto que el valor es una cualidad relacional. Mientras que el valor de una mercancía se expresa *relativamente* en otra mercancía, esta última no expresa su propio valor, sino que en tanto forma de equivalente se reduce a expresar el valor de otra mercancía, se convierte en espejo de su valor. En otras palabras, la forma de equivalente que adopta una mercancía es la forma en que la misma es directamente intercambiable por una mercancía de otra clase. La expresión del valor de una mercancía cualquiera en dinero constituye por otra parte su *forma de precio*, su valor nominal, su valor monetario. [159]

Si tal como se viene caracterizando, la relación de cambio puede ocurrir entre dos mercancías, la misma no se limita al intercambio entre dos mercancías únicamente, sino que alcanza al *mundo de las mercancías*. Los múltiples trabajos contenidos en variadas y diversas mercancías particulares entran en relación en tanto concreciones materiales de trabajo humano abstracto. Esta relación alcanza una forma unitaria de manifestación bajo la forma general de valor cuando una sola mercancía expresa los valores de todas las demás. En estas condiciones, esta única y misma

[158] Marx lo define como "…una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma" (2011, p. 47).

[159] "El valor (el real valor de cambio) de todas las mercancías (incluso el trabajo) está determinado por sus costos de producción, en otros términos, por el tiempo de trabajo requerido pura su producción. El precio es este valor de cambio expresado en dinero" (Marx, 2019, p. 61).

especie de mercancías que representa los valores de todas las demás adquiere el carácter de equivalente general de las mercancías. [160]

La forma de equivalente general expresa por lo tanto el valor de todas las demás mercancías, es una forma de valor en general y en este sentido podría potencialmente ser adoptada por cualquier mercancía en particular. Sin embargo, es la forma dinero la que históricamente ha devenido equivalente general en el modo de producción capitalista, en palabras de Simmel, cima y culminación más pura del concepto del valor económico (1977, p. 78). Por consiguiente, ninguna otra mercancía con excepción del dinero cumple la función social específica de equivalente general para el conjunto de las mercancías. En tanto equivalente general, el dinero adquiere la función específica de ser *medida de valores.*

No obstante, esta no es la única función que se le encuentra reservada al dinero, toda vez que en tanto mediador en el proceso de circulación oficia también de instrumento o *medio de circulación*. En apretada síntesis, el proceso de circulación es el flujo constante y extendido en el que tiene lugar el intercambio de mercancías, un movimiento infinito de compras y ventas en el que toda la sociedad se encuentra involucrada. La compra y la venta deben entenderse a su vez como dos momentos esenciales de la circulación, dos metamorfosis contrapuestas y complementarias a través de las cuales el dinero y la mercancía circulan en sentido opuesto. [161]

Mirando específicamente al interior de este proceso, la compra-venta consta de dos fases: intercambio de la mercancía por dinero -venta-, y su reconversión de dinero en mercancía –compra-. En este proceso, la mercancía cambia de manos al encontrar en el mercado un comprador dispuesto a pagar por ella: este es el salto mortal en el que *se realiza* como mercancía, el acto en el cual se transforma efectivamente en mercancía. Para poder arrojarse a este salto mortal, debe producirse un *desdoblamiento* de la mercancía: junto a su corporeidad natural se presenta su precio en dinero, como algo externo a ella, como algo autónomo. Desde esta concepción,

[160] "La forma de valor relativa general vigente en el mundo de las mercancías confiere a la mercancía equivalente segregada por él, el carácter de equivalente general. Su propia forma natural es la figura de valor común a ese mundo, o sea, intercambiable directamente por todas las demás mercancías. Su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano" (Marx, 2011, p. 82).

[161] "Para la circulación son necesarias ante todo dos cosas: primero, el supuesto de las mercancías en cuanto precios; segundo, no actos de cambio aislados, sino un circuito de cambios, una totalidad de ellos, en flujo constante, y extendidos en mayor o en menor medida a toda el área de la sociedad; un sistema de actos de cambio" (Marx, 2019, p. 120).

> la forma de dinero no es más que el reflejo, adherido a la mercancía, de las relaciones entre todas las demás mercancías (…) la forma del dinero es exterior a la cosa misma, y por tanto mera forma de manifestación de relaciones humanas ocultas detrás de ella (Marx, 2011, pp. 110-111).

Esta autonomización del dinero respecto de la mercancía es el germen del cual brotará el fetichismo de la mercancía. En tanto forma acabada del mundo de las mercancías, el dinero contribuye a mantener ocultas las relaciones sociales que las mismas encarnan y que cristalizan en la forma de equivalente general.

En este punto de la argumentación, queda claro que el dinero no es un objeto como cualquier otro. El dinero es un producto necesario del proceso de intercambio, y en tanto medida del valor de las mercancías permite la equiparación de los diversos productos del trabajo y la transformación de estos valores de uso en mercancías. Asimismo, bajo la forma de *equivalente general o social*, el dinero es la expresión del valor que corresponde como se ha dicho al mundo de las mercancías en su conjunto: todas las mercancías pueden medir sus valores colectivamente a través suyo. [162]

Pero además, en tanto medio de circulación el dinero se presenta como un nexo natural, objetivo entre las mercancías; esta propiedad es la primera forma en la que aquello que es producto de las interacciones entre los hombres aparece frente a ellos como algo que les ajeno, que se encuentra por fuera y por encima de ellos. Esta especificidad es la piedra de toque a partir de la cual es posible analizar cuáles son las características e implicancias del tipo de relación social que el dinero contribuye a construir en el marco de las prácticas indemnizatorias. Tal como será desarrollado en apartados subsiguientes, postularé que esta relación social cobra la forma de una relación de ajenización respecto del daño ocasionado por los crímenes de Estado que las indemnizaciones se proponen reparar.

En capítulos precedentes se han caracterizado las prácticas indemnizatorias como aquellas que consideran el dinero como el instrumento mediante el cual se efectiviza la reparación de los crímenes cometidos durante la última dictadura. De manera suscinta, en estas líneas fue conceptualizado el dinero como la forma en la que todas las mercancías se miden recíprocamente,

[162] "Las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero. A la inversa. Por ser todas las mercancías, en cuanto valores, *trabajo humano objetivado*, y por tanto conmensurables en sí y para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor, esto es, en dinero. En cuanto medida de valor, el dinero es la *forma de manifestación necesaria* de la medida del valor *inmanente* a las mercancías: el tiempo de trabajo" (Marx, 2011, p. 115).

se igualan, se comparan; así como el instrumento que hace posible el proceso de circulación de las mercancías. A su vez, la relación de cambio fue considerada como la relación social fundamental en toda sociedad capitalista como la que esta tesis aborda.

Desde este punto de partida se propone abordar las prácticas indemnizatorias a la luz de las implicancias específicas que emergen del análisis de la forma dinero entendido como instrumento tendiente a la reparación. A continuación, los próximos apartados estarán dedicados a considerar las representaciones negativas y las representaciones positivas que se construyen en torno del dinero, con el objetivo de aportar una mirada hacia la comprensión cabal de esta problemática.

3. Representaciones "negativas" del dinero: el daño a reparar como mercancía

La consideración acerca de que el daño producido por los crímenes de Estado es pasible de ser reparado mediante el otorgamiento de una suma de dinero es el fundamento principal que subyace a las prácticas indemnizatorias, a la vez que su aspecto más controversial.

Un claro indicador de estas controversias se observa en los debates acerca de la legitimidad de las "Leyes Reparatorias" que tuvieron lugar durante los años 90 y que llevaron a profundizar desacuerdos preexistentes entre algunos organismos de derechos humanos. Tal como se ha mencionado en el capítulo anterior, esta discusión había sido planteada por primera vez en ocasión de la sanción de la ley 23.466/86, en un escenario signado por la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura, en el cual la diferencias en torno a qué actitud debía ser adoptada por parte de las víctimas y sus familiares ante la posibilidad de recibir dinero por parte del Estado como modo de reparación propició una escición al interior de algunos organismos de derechos humanos. [163]

Los organismos adoptaron distintas posiciones respecto de las indemnizaciones. La mayoría de ellos (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos) no asumieron públicamente una postura a favor de las reparaciones

163 Tal como se ha mencionado en el capítulo anterior, el principal cuestionamiento que atravesó los debates acerca de la primera práctica indemnizatoria se relacionaba con la declaración de fallecimiento de los desaparecidos a la que estaban obligados sus familiares para poder acceder a la pensión que otorgaba la ley 23.466/86, dado que aún no había sido sancionada la ley de ausencia por desaparición forzada: "¿Por qué no vamos a la Marcha del 16 de mayo? […] Porque la reparación económica es el punto final. El ofrecimiento de una pensión a los familiares de los detenidos-desaparecidos es un viejo proyecto que se arrastra desde la época de la dictadura. […] De esta forma, pretenden "comprar" a los familiares de los desaparecidos para que acepten una muerte que sólo puede beneficiar a los asesinos (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 1986a).

económicas, y consideraron que su tramitación era una decisión de carácter personal. [164] La Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), en cambio, expresaron un enérgico repudio cristalizado en consignas como *"la sangre derramada no será negociada"* o *"el que cobra la reparación económica se prostituye"*. [165]

El rechazo de estos organismos a las políticas reparatorias fue expresado principalmente en el órgano de prensa de la *Asociación Madres de Plaza de Mayo*, en un debate instalado a partir de un documento firmado por la AEDD que circuló entre 1997 y 1999. A su vez, el diálogo entre los diversos posicionamientos mencionados cobró visibilidad pública en el Diario Página 12, en donde fueron publicadas columnas escritas por Hebe de Bonafini y Marta Dillon en las cuales ambas expusieron sus argumentaciones en disputa. Allí, a la columna titulada "*La vida sólo vale vida*" en la que Bonafini se explayaba en su crítica a las leyes reparatorias, Dillon respondía en "*Tenemos derecho a ese dinero*" con una explicación de las razones que conducían a su aceptación, así como una crítica a la sanción moral por parte de la AMPM frente a quienes optaban por cobrar las indemnizaciones. [166]

Como se ha señalado anteriormente, algunos trabajos enmarcados en el campo de la antropología económica y la sociología del dinero han estudiado las motivaciones subjetivas de estas manifestaciones de repudio (López, 2012; Luzzi, 2015; Tello, 2003). Con estos análisis como antecedentes, considero que abordar las prácticas indemnizatorias a partir del análisis en torno a las representaciones del dinero desde la perspectiva adoptada en esta tesis puede proporcionar elementos novedosos para comprender las críticas generadas por las reparaciones económicas. ¿Cuál es la representación que está en la base de todas estas manifestaciones de repudio frente a

[164] En esta línea puede leerse el siguiente comunicado de prensa: "Ante la sanción de la ley 24.321 de ausencia por desaparición forzada y la reciente aprobación del proyecto de reparación económica, Familiares queremos dejar sentada nuestra posición al respecto. […] La ley 24.321 da legalidad jurídica a la figura del desaparecido y soluciona las situaciones legales planteadas por su desaparición física […] Por ello aconsejamos a los familiares de desaparecidos hacer el tramite para legalizar la desaparición de sus seres queridos. En cuanto al proyecto de reparación, nuestro Código Civil señala la obligación de reparar económicamente y mide en dinero, no la vida, sino las consecuencias o el valor del prejuicio sufrido […] Más alla de la reparación económica, que no menospreciamos, y *de la decisión estrictamente personal de su reclamo*, resaltamos la importancia del reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la aplicacion de la represión sistematica y sus consecuencias." (*Comunicado de prensa*, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, 1994).

[165] Ilustraciones de banderas que llevan inscriptas estas consignas pueden encontrarse en el periódico de Madres de Plaza de Mayo (enero-febrero de 1999, p. 20-21). Entre las acciones producidas por el férreo rechazo manifestado ante las leyes reparatorias debe destacarse la decisión adoptada en el XXXIII Encuentro Nacional de excluir de la Asociación a aquellos miembros que optaran por acogerse al régimen reparatorio (Asociación Madres de Plaza de Mayo, 1997, p. 21).

[166] "*La polémica de las reparaciones*" (Página 12, 13/12/1998)

las prácticas reparatorias? ¿Qué es lo que hace esta reparación tan ilegítima, tan repudiada, tan criticada?

Considero que lo que subyace a las representaciones negativas en torno a la reparación en dinero es la transformación del daño a reparar en mercancía, o más específicamente, la convicción de su imposibilidad. Para que sea posible su ingreso al circuito de las prácticas indemnizatorias, el daño a reparar debe ser *transformado en mercancía*; y es precisamente esta transformación el aspecto sobre el cual se montan las representaciones negativas del dinero. A continuación, se problematizan tres supuestos fundamentales sobre los cuales descansa esta transformación: a. la asignación de un precio en dinero a aquello que se intenta reparar en tanto objeto de la práctica reparatoria; b. el supuesto de su intercambiabilidad en el mercado, en tanto bien reproducible; c. la invisibilización de las particularidades del daño a reparar al igualarse a todas las mercancías en su reducción al equivalente general.

3.a) "No aceptamos que se le ponga precio a la vida"

Se ha visto que una de las propiedades del dinero es su capacidad de expresar el valor de toda mercancía mediante la *forma de precio*. En este sentido, en la medida en que las prácticas indemnizatorias establecen un monto de dinero para la reparación de los daños contemplados en la legislación reparatoria, ello habilita a interpretar que lo que se encuentra implícito en esta operación no es otra cosa que la asignación de un precio al daño que se pretende reparar. [167] La consigna *"No aceptamos que se le ponga precio a la vida",* incluida entre los principios proclamados por la AMPM demuestra cabalmente las implicancias de esta consideración:

> Nuestros hijos nos enseñaron el valor que tiene la vida. Ellos la pusieron al servicio de todos los oprimidos, de los que sufren injusticias. Las Madres de Plaza de Mayo rechazamos la reparación económica y decimos que la vida sólo vale vida. Que la vida sólo vale algo cuando la ponemos al servicio del otro. *La vida de un ser humano no puede valer dinero, y mucho menos la vida de un revolucionario*. Lo que hay que reparar con justicia no se puede reparar con dinero. Los radicales y menemistas que perdonaron a

[167] Los trabajos referenciados que abordan la reparación desde una perspectiva afín a la sociología del dinero, consideran que el rechazo a la asignación de un precio al daño que las prácticas indemnizatorias pretenden reparar se fundamenta en el hecho de que el precio como instrumento de los intercambios en la economía mercantil "arruina" los intercambios simbólicos, propios de la "economía de las cosas que no tienen precio" (Bourdieu, 1997). En la misma línea pueden leerse los aportes de la perspectiva de las valuaciones monetarias que plantean que el fenómeno de atribución de valor involucra una serie de evaluaciones que para las personas revisten diversos significados morales y simbólicos, y que no se circunscriben a la fijación de precios (Beckert & Aspers, 2011; Wilkis, 2018).

> los asesinos, ahora quieren tapar sus crímenes con dinero. *Nadie le va a poner precio a la vida de nuestros hijos*. Las Madres de Plaza de Mayo seguiremos afirmando que los que cobran las reparaciones económicas venden la sangre de sus hijos. [168]

En primer lugar, se observa en estas líneas el establecimiento de una igualación entre el valor y el precio del daño que se pretende reparar: en la medida en que las prácticas indemnizatorias "ponen un precio a la vida", ello implicaría la asignación de un determinado valor a esa vida. Sin embargo, desde la perspectiva adoptada, el valor y el precio no son idénticos ni son una misma cosa.

Por empezar, si bien el valor de toda mercancía está determinado por el trabajo contenido en ella, este valor no expresa nunca su valor *real* sino que es un valor social: un promedio, una abstracción que tiene como base a la cifra media de tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía en un determinado período. A su vez, el precio es el valor de cambio expresado en dinero, valor expresado en precio monetario, pero que es siempre inferior o superior a su valor real. [169] Es justamente esta diferencia entre valor real y valor de cambio lo que crea la necesidad de que los valores entendidos como precios se midan a través del dinero, dada la imposibilidad de ser medidos directamente a través del tiempo de trabajo.

Esta incongruencia cuantitativa no debe entenderse como un defecto de esta forma precio, sino por el contrario, es esta divergencia en relación al valor la que la hace adecuada para el cumplimiento de su función específica. Pero a esta incongruencia cuantitativa debe agregarse la posibilidad de una contradicción cualitativa,

> …de tal modo que, aunque el dinero sólo sea la forma de valor que revisten las mercancías, el precio deje de ser en general la expresión del valor. Cosas que en si y para si no son mercancías, como por ejemplo la conciencia, el honor, etc., pueden ser puestas en venta por sus poseedores, adoptando así, merced a su precio, la forma mercantil. *Es posible, pues, que una cosa tenga precio sin tener valor*. La expresión en dinero deviene aquí imaginaria, como en ciertas magnitudes matemáticas. Por otra parte, la forma imaginaria del precio –como por ejemplo el precio de la tierra no cultivada, que no tiene

---

[168] "*No aceptamos que se le ponga precio a la vida"*, recuperado de https://madres.org/index.php/consignas/. [consultado el 05/12/2021] Las cursivas me pertenecen.

[169] "El precio se distingue por lo tanto del valor no sólo como lo que es nominal se distingue de lo real; (…) sino por este motivo: que el segundo se presenta como la ley de los movimientos recorridos por el primero. Sin embargo, ellos son constantemente distintos y nunca coinciden o sólo lo hacen de modo accidental y por excepción. El precio de las mercancías es constantemente inferior o superior a su valor, y el mismo valor de las mercancías existe solamente en el up and down [ascenso y descenso] de los precios de las mercancías". (Marx, 2019, p. 62)

> valor alguno porque en ella no se ha objetivado ningún trabajo humano- puede contener una efectiva relación de valor o una relación derivada de esta (Marx, 2011, p. 125).

La igualación entre valor y precio que se desprende de la lectura de las citadas consignas contra las prácticas indemnizatorias puede entenderse como una confirmación del supuesto con el cual se dio inicio a estas reflexiones: el hecho de que al presentarse el dinero como instrumento de la reparación, el daño a reparar se ubica en el lugar de mercancía. Por lo tanto, todas las contradicciones propias de la forma mercancía se expresan de una manera particular en el análisis del daño a reparar mediante las prácticas indemnizatorias.

Esta concepción en torno a la reparación económica puede leerse claramente en el siguiente documento de la AEDD (1997):

> Esta política integra a las víctimas del genocidio al circuito del capital; les fija un valor de cambio, establecido en alguna instancia de la administración estatal y, de esta manera, las incluye en la categoría de mercancía.

Desde esta perspectiva, no sólo el daño que se proponen reparar las prácticas reparatorias adquiere el estatus de mercancía, sino que incluso el proceso genocida puede ser comprendido en esta clave:

> Lamentablemente, lo que el Estado más que reconocer recibe con beneplácito, es que el genocidio pueda tener un precio: tantos dineros por tantos desaparecidos en el álbum familiar.

Estas apreciaciones dejan entrever una mirada crítica que no se circunscribe a las políticas reparatorias sino que por el contrario, está dirigida contra una característica específica de la sociedad burguesa. Me refiero a aquella que convierte a la institución del mercado en el principio fundamental de la sociedad, y aplica sus principios a todas las relaciones sociales, inclusive aquellas que no serían asimilables a una racionalidad económica. En este sentido, la "mercantilización de todo" presume que el mercado funciona como una guía apropiada —una ética— para todas las facetas de la acción humana (Harvey, 2007).

Al interior de la sociedad capitalista por ende, la generalización de la forma económica aparece como principio de inteligibilidad que permea los modos de existencia social en su conjunto, las relaciones sociales y la forma en que los sujetos se relacionan consigo mismos y con el mundo que los rodea. Así entendido, ni los crímenes perpetrados ni las prácticas reparatorias quedarían

por fuera de este proceso de mercantilización, del cual la asignación de un precio en dinero al daño entendido como mercancía constituye una evidencia. [170]

Otro aspecto en relación a las representaciones construidas en torno a la asignación de un precio al daño a reparar se vincula con lo que puede definirse como una relación de exterioridad que la forma precio adquiere en relación a la mercancía. Se ha visto que en el precio, el valor de la mercancía se expresa como una cantidad determinada de dinero, se traduce en dinero. Para que sea posible esta traducción, la mercancía ha perdido ya sus cualidades específicas al adoptar la forma de equivalente, y por ello puede establecer la relación de cambio.

En la forma precio, el dinero ha sido puesto como el valor de cambio autónomo, se encuentra separado de las mercancías;

> Dado que el dinero posee una existencia autónoma exterior a las mercancías, el precio de la mercancía se presenta como una relación *externa* de los valores de cambio o mercancías con el dinero: la mercancía no es precio (…); la mercancía es valor de cambio, pero tiene un precio. El valor de cambio está directamente unido a ella (…). Ahora en cambio, en el precio, la mercancía por un lado se relaciona con el dinero como algo que es externo a ella, y por el otro lado, también ella es puesta idealmente en tanto el dinero posee una realidad distinta de la suya. El precio es una propiedad de la mercancía, una determinación en la que ella es *representada* como dinero. El precio ya no es un carácter determinado inmediato, sino un carácter determinado reflejo de la mercancía. Junto al dinero real existe ahora la mercancía, como dinero puesto idealmente. (Marx, 2019, pp. 122-123)

En este sentido, al asignar un precio en dinero al daño a reparar, las prácticas indemnizatorias se hacen eco de esta relación de exterioridad que se establece entre toda mercancía respecto de su precio. Junto al daño a reparar se presenta su precio en dinero, como "dinero puesto idealmente", dinero que se presenta ante el daño como algo exterior, autónomo, y por lo tanto ajeno. Considero que esta exterioridad entre la mercancía y su precio forma parte de la construcción de la ajenización que -tal como se ha mencionado en el capítulo 1- las prácticas indemnizatorias construyen respecto del daño producido por los crímenes de Estado, sobre lo que se profundizará más adelante en el análisis de las representaciones positivas del dinero.

[170] En trabajos previos se ha postulado que la mercantilización del conjunto de las relaciones sociales como especificidad del neoliberalismo permite articularlo al patrón identitario que se quiso imponer en Argentina mediante la perpetracion de prácticas sociales genocidas (Schneider y Tonelli, 2016). En la misma línea se ha identificado una afinidad electiva entre las políticas reparatorias y los efectos ideológicos producidos por el neoliberalismo (Schneider, 2020).

3.b) "El que cobra la reparación económica se prostituye"

Un segundo conjunto de argumentos que han constituido blanco de críticas en relación al dinero como instrumento de la reparación puede encontrarse en el supuesto de intercambiabilidad que subyace al daño a reparar entendido como mercancía. El ser intercambiable es una de las propiedades característica de toda mercancía, la cual descansa en su conversión a valor de cambio atendiendo a su sustancia común, el de ser productos del trabajo humano. [171]

A simple vista puede advertirse que una primera cuestión a tener en cuenta para el caso que estamos analizando, es que el daño a reparar no cumple con este requisito de ser un bien reproducible. La desaparición forzada, el asesinato, la prisión –por mencionar algunos de los daños más extendidos- difícilmente puedan ser consideradas como el producto de la actividad transformadora del hombre en tanto trabajo. Desde este punto de vista, no habría más que decir que efectivamente, no es posible considerar que el daño a reparar pueda tornarse una mercancía intercambiable. Sin embargo, asumida la transformación del daño a reparar en mercancía, la cuestión del intercambio requiere ser problematizada a la luz del caso que aquí se analiza.

En este sentido, dado que toda práctica indemnizatoria da lugar a una transacción en la cual las víctimas reciben dinero por parte del Estado, en términos del intercambio vale hacerse la pregunta: ¿Dinero *a cambio de qué?* ¿Cuáles son los extremos en el intercambio que proponen las prácticas indemnizatorias?

Tal como se ha visto, la relación de cambio paradigmática está constituida por dos polos, en los cuales de un lado se ubica una mercancía y del otro, una determinada cantidad de dinero. Si la mercancía en cuestión es el daño a reparar, y el dinero el instrumento mediante el cual se hace efectiva la reparación, es posible inferir que la transacción fundamental de acuerdo a las prácticas indemnizatorias es el intercambio entre dinero y daño a reparar. En la medida en que el daño a reparar es entendido como la vida de las víctimas -ya sea que se trate de desaparecidos, asesinados o inclusive en tanto tiempo de vida que ha transcurrido en prisión para el caso de ex detenidos-, las prácticas indemnizatorias son concebidas como un aparente intercambio entre la vida de las víctimas y una suma determinada de dinero. Volviendo a la pregunta inicial entonces,

[171] La noción de intercambio como fenómeno circunscripto al ámbito del mercado ha sido problematizada desde la antropología, considerando que "lo que se intercambia no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en las que el mercado ocupa sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y permanente" (Mauss, 1979: 160).

el dinero sería otorgado por el Estado –y por ende, recibido por quienes se acogieran al régimen indemnizatorio- *a cambio de* la vida de las víctimas de los crímenes de Estado.

La siguiente declaración ejemplifica el modo en que este intercambio se constituye en objeto de repudio y configura uno de los núcleos fundamentales entre las representaciones negativas del dinero asociado a la reparación:

> Cuando llegó la "democracia" de la mano de los militares, se nos ofreció cadáveres, una pensión y algún monumento. Después de muchas reuniones, la inmensa mayoría de las Madres de Plaza de Mayo decidimos rechazar todos estos ofrecimientos. (…) Hoy afirmamos que "el que cobra la reparación económica se prostituye". Porque cobra de la misma mano que perdonó a los asesinos de nuestros hijos. Cobrar de los mismos políticos que golpearon la puerta de los cuarteles es prostituirse (…) Jamás recibimos ni recibiremos dentro de los partidos políticos dinero o de los sindicatos cómplices de la represión. Reafirmamos que nuestros hijos jamás van a morir mientras haya jóvenes que sientan que la vida es el valor máximo de todo revolucionario, que la sangre no se vende, y, como decía Camilo Torres: "Ser revolucionario y amar la vida es no venderse jamás a cambio de gratificaciones, promesas y prebendas". [172]

El "intercambio imposible" que las prácticas reparatorias parecen proponer entre dinero y vida es asociado en estas líneas a la idea de prostitución. En una primera aproximación, esta afirmación podría relacionarse con el hecho de que la transacción en cuestión implique ponerle un precio, poner a la venta un bien o un producto cuyas características no serían asimilables a la grilla económica: ya sea el cuerpo, el sexo en el caso de la prostitución, como la vida de las víctimas para las prácticas indemnizatorias. Sin embargo, la asociación del dinero a la prostitución no debe buscarse en la particularidad del daño a reparar entendido como mercancía, sino en la posibilidad de intercambio generalizado que encarna el dinero en su forma de equivalente:

> La cambiabilidad de todos los productos, actividades y relaciones por un tercer elemento, por *algo que sea una cosa* que pueda a su vez ser cambiada *indistintamente* por todo, es decir, el desarrollo de los valores de cambio (y de las relaciones monetarias), se identifica con la venalidad y corrupción generales. La prostitución general se presenta como una fase necesaria del carácter social de las disposiciones, capacidades, habilidades y actividades personales. En términos más corteses se dice: la relación universal de utilidad

[172] "*La polémica de las reparaciones*" (Página 12, 13/12/1998)

> y de utilizabilidad. La equiparación de lo heterogéneo: así, magníficamente, caracteriza Shakespeare la naturaleza del dinero [173] (Marx, 2019, p. 90).

La vinculación entre la prostitución y las reparaciones económicas que ha cobrado forma de consigna política de la mano de la AMPM, no parece estar vacía de contenido. Por el contrario, se desprende de uno de los nudos problemáticos que surgen de la transformación del daño a reparar en mercancía sobre la cual se construyen las representaciones negativas del dinero como instrumento de la reparación. Por el hecho de poder ser cambiadas indistintamente por dinero, todas las mercancías se prostituyen de manera generalizada: en el mercado ponen en venta aquello que tienen de útil, su valor de uso, recibiendo a cambio su precio en dinero. Esta particularidad está en la naturaleza propia de la mercancía, tal como se desprende de la siguiente caracterización:

> Niveladora y cínica desde la cuna, [la mercancía] está siempre pronta para intercambiar no sólo el alma sino también el cuerpo por cualquier otra mercancía (Marx, 2011, p. 104).

Esta predisposición al intercambio generalizado que presenta la mercancía y que encuentra en el dinero su expresión más acabada es lo que lleva a su identificación con la esencia de la prostitución. En línea con esta concepción, Simmel señala la prostitución como el caso más patente en el cual el ser humano adquiere el carácter de "mero medio" en relación con las dos partes que intervienen. La indiferencia y degradación recíproca, así como el rechazo a toda relación que trascienda el momento en el cual el placer comprado se paga con dinero se equiparan con el equivalente en dinero en tanto no vincula a nada, se encuentra siempre a disposición y también siempre resulta bien recibido (Simmel, 1977, p. 466).

Esta desproporción en los extremos del intercambio concebida en analogía con la prostitución, no alcanza exclusivamente a la relación de cambio aparente entre dinero y vida. La otra "transacción imposible" en torno a la cual se construyen representaciones negativas del dinero asociadas al intercambio es aquella que se establece entre el dinero y la justicia. Sin dudas el contexto de impunidad en el que fueron sancionadas las principales leyes reparatorias le otorga fuerza a esta interpretación, momento en el cual las "indemnizaciones" surgen como la principal política estatal de reparación hacia las víctimas una vez clausurada la posibilidad de enjuiciar a los genocidas, tal como es expresado en la siguiente declaración:

[173] Las implicancias de "la equiparación de lo heterogéneo" que produce el dinero serán desarrolladas en el próximo apartado.

> Diferentes gobiernos constitucionales nos han dicho, con leyes y decretos, "no les puedo dar justicia" (no se puede porque se desordena la casa o porque los muchachos son nuestros muchachos), "les puedo dar dinero". Así, cada billete guardado o donado supone la aceptación de esa dicotomía excluyente: justicia o dinero. Con él, sin duda, podrán hacerse muchas cosas, lo que no podrá lograrse es borrar la impronta de esa abdicación, ya que con el dinero se aceptan también las condiciones en que ese beneficio se otorga, más allá de la voluntad individual de los solicitantes (AEDD, 1997).

En esta misma línea, también es posible encontrar elementos que abonen esta apreciación en la normativa que establece la relación que corresponde entre la justicia civil y la justicia penal. En términos generales, el Código Civil indica que no ha de dictarse condena en la esfera de la justicia civil –es decir, en lo relativo a la indemnización de daños provenientes de delitos- hasta tanto el responsable del delito en cuestión sea condenado en un juicio penal. [174] En este sentido, el hecho de que las leyes reparatorias hayan sido promulgadas en el marco de un proceso de juzgamiento paralizado habilita a interpretar que la transacción implícita en la reparación económica es el otorgamiento de dinero *a cambio de* justicia, en tanto de acuerdo a la normativa, la justicia penal debería ser impartida con anterioridad a la justicia civil.

Junto al cambio de dinero por vida, aparece un segundo intercambio imposible que se encuentra implícito en esta relación particular que aquí se analiza: aquel cuyos extremos lo configuran el dinero por un lado, y la justicia por el otro. Resulta llamativo por lo tanto, que pese a que las leyes reparatorias se encuentran inscriptas en el ámbito de la justicia civil, las prácticas reparatorias que las mismas producen no se asocian a la justicia sino que aparecen asociadas al extremo opuesto, al polo del dinero:

> Este Estado, se separa de los diferentes regímenes gubernamentales en cuanto a las coyunturas y metodologías políticas, pero se identifica con ellos en cuanto sostén burocrático de los intereses de la burguesía, no busca hacer justicia. *No la justicia íntegra que reclamamos* (…) Creemos que no todo puede canjearse, ni por dinero ni por un equivalente a aquello que pretende ser intercambiado. No todo, porque algunos bienes no tienen igual, ni siquiera entre si, por ejemplo la vida, la tierra, la cultura, la libertad.

[174] El viejo artículo 1101 del Código Civil establece: "Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal". En igual sentido, su equivalente artículo 1775 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, expresa "Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal".

> Afirmamos que las reparaciones, así planteadas, esto es, con impunidad, nos involucran en una negociación (AEDD, 1997).

En este sentido, las prácticas indemnizatorias fuertemente vinculadas al dinero aparecen contrarias a la "justicia íntegra", la cual estaría constituida por la posibilidad de avanzar en el juzgamiento de los responsables de los crímenes. Dinero y justicia se enfrentan en una dicotomía excluyente, como dos extremos irreconciliables en esta relación de cambio en la que las prácticas reparatorias en tanto dinero se intercambian por la verdadera justicia, aquella que emana de los juicios penales.

3.c) "La vida sólo vale vida"

La tercera y última propiedad característica de la forma mercancía que entra en tensión con el análisis del daño a reparar es aquella que en el apartado anterior aparecía esbozada como "la equiparación de lo heterogeneo". Efectivamente, es parte de la naturaleza del dinero subsumir bajo su forma de equivalente general lo que tienen de propio las mercancías en tanto valores de uso, para que sea posible su cambiabilidad indiscriminada y generalizada. En este movimiento, al transformarse en mercancías, todos los productos, actividades y relaciones *pierden* sus cualidades naturales, y abandonan su esencia, su identidad para adquirir la forma de dinero. De acuerdo a esta caracterización, el dinero se presenta como "el más temible destructor de las formas", reduciendo todas las determinaciones cualitativas a las cuantitativas y haciendo así "una violencia a los valores personales que elimina su esencia" (Simmel, 1977, p. 534).

Esta pérdida de particularidad que conlleva la reducción de toda mercancía a la forma de equivalente general alcanza a los daños ocasionados por los crímenes de Estado cuando estos ingresan en la lógica de las prácticas indemnizatorias. El dinero "trueca toda cualidad contra cualquiera cualidad o cualquier objeto, incluso contradictorio con aquélla; hermana los polos más contrarios y obliga al abrazo de lo contradictorio" (Marx, 1962, p. 108). La desaparición forzada, el cautiverio clandestino, todo el sufrimiento que ha producido el terror sistemático parece intentar desvanecerse bajo la forma dinero, cuando todo aquello que los define como tales *es cancelado* en la forma de equivalente.

Esta desestimación de las cualidades naturales del daño a reparar como mercancía forma parte de las representaciones negativas del dinero asociado a la reparación, en su intento por equiparar, por igualar, aquello que resulta heterogéneo por definición:

> Cuando una madre viene y me pregunta por qué decimos que no a la reparación económica yo le contesto: ¿Qué te vas a poder comprar con ese dinero? ¿Te vas a poder llevar un bocado a la boca sabiendo que lo compraste con el dinero que te dan porque asesinaron a tu hijo? ¿Y si no es comida, un pulóver? Ese pulóver te va a pesar tanto como una chapa de acero o una montaña de ladrillos. Te va a pesar tanto como la muerte. [175]

Tal como ilustra la cita precedente, el dinero produce un borramiento del sentido de la muerte de los seres queridos, al equipararse por intermedio de su equivalente a una prenda de vestir, a un plato de comida, a cualquier producto que pudiera comprarse en el mercado. Detrás de esta equiparación –que bien podría ser concebido como un modo de banalización- se impugna la invisibilización de lo que tienen de único, de singular, aquellos daños que se intentan reparar mediante las prácticas indemnizatorias. En la proclama "la vida sólo vale vida" que titula este apartado se sintetiza esta apuesta por jerarquizar aquello que no tiene precio, aquello que no es en absoluto fungible y cuya particularidad debe ser señalada. [176]

En el mismo sentido, esta invisibilización del daño se vincula con la pérdida de identidad que se le exige a toda mercancía para que sea posible la expresión de su valor mediante la forma precio, tal como se mencionó anteriormente. Esta equiparación de lo heterogéneo constituye otra evidencia de la relación de exterioridad que adquiere el dinero respecto de la mercancía, toda vez que

> en sus cualidades naturales la mercancía no es siempre intercambiable ni tampoco intercambiable con cualquier otra mercancía; no lo es en su natural identidad consigo misma, sino que es puesta como no igual a sí misma, como valor de cambio. Debemos ante todo convertirla en sí misma como valor de cambio, para luego comparar este valor de cambio con otros e intercambiarlo (Marx, 2019, p. 67).

En definitiva, es el desdoblamiento de la mercancía entre lo que constituye su *natural identidad por un lado*, y lo *no igual a sí misma por el otro*, lo que se encuentra en la base de la relación de

[175] Declaraciones de Hebe de Bonafini (1986b).

[176] En el capítulo titulado *"El equivalente monetario de los valores personales",* Simmel analizó la evolución del llamado "rescate de la sangre" que en la antigüedad implicaba una compensación económica a cambio de la renuncia a la venganza de la muerte de un miembro de la tribu o familia en la antigüedad. La fijación del precio de la sangre, realizado con el fin de preservar la paz social, suponía que la totalidad del ser humano podía compensarse con dinero, y al mismo tiempo le otorgaba al hombre un valor objetivo, expresable en dinero, independiente de toda distinción personal y subjetiva. Con la diferenciación progresiva de los seres humanos y la indiferenciación creciente del dinero, los conceptos del dinero y del ser humano en sus respectivas evoluciones se van distanciando hasta hacer imposible la expiación de la muerte por medio del dinero, tal como ocurre con el dinero de las prácticas indemnizatorias (Simmel, 1977, pp. 437-457).

exterioridad sobre la que sostengo que se configura una ajenización hacia el daño a reparar mediante las prácticas indemnizatorias. [177]

En el análisis desarrollado hasta aquí, se ha visto que la transformación del daño a reparar en mercancía subyacente a las prácticas indemnizatorias configura el centro de las representaciones negativas del dinero asociado a la reparación de los crímenes de Estado. No obstante, concebir el dinero como "el dios entre las mercancías", la forma acabada del mundo de las mercancías, permite vislumbrar que las controversias acerca de las indemnizaciones conviven con una dimensión constructiva del dinero. Esta dimensión es la que se abordará a continuación, a partir de lo que he denominado las representaciones positivas del dinero.

4. Representaciones "positivas"del dinero: el dinero como comunidad

Los posicionamientos públicos asociados a las representaciones "negativas" del dinero, si bien no han sido dominantes en el sentido de que fueron sostenidos por tan sólo una parte minoritaria al interior de los organismos de derechos humanos, contribuyeron a la instalación de ciertos reparos para manifestar acuerdo respecto de las indemnizaciones como modo de llevar adelante la reparación. Prueba de ello es la casi inexistencia de voces que se alzaron públicamente a favor de las mismas, tal como quedó evidenciado en el transcurso de las tareas de relevamiento realizadas en el marco de esta investigación. Este apartado tiene por objetivo enfrentarse a esta ausencia, poniendo de relieve las representaciones postivas del dinero, mediante una argumentación construida sobre un postulado central: que la representación positiva del dinero asociado a las prácticas indemnizatorias no sólo se corresponde con su dimensión creadora, al focalizar en las implicancias de lo que el dinero habilita a construir, sino que otorga a este tipo particular de práctica reparatoria una jerarquía específica al interior de la sociedad de intercambio en la que tienen lugar.

Situar históricamente esta particularidad del dinero implica que la misma no debe considerarse universal, sino por el contrario, es producto del desarrollo de la vida social de los hombres en un tiempo y lugar determinado. En las sociedades capitalistas con una extendida división social del

[177] Esta relación de exterioridad del dinero respecto de las mercancías también es advertida por Simmel, al señalar que "todas las demás cosas poseen un contenido determinado y, en consecuencia, un valor; en el dinero, por el contrario, su contenido reside en que vale, es el valer solidificado como sustancia, el valer de las cosas sin las cosas mismas. Precisamente por ser la sublimación de la relatividad de las cosas, parece como si el dinero fuera independiente de ellas, algo así como las normas de la realidad no están supeditadas a la misma relatividad que domina la realidad y eso no a pesar de, sino precisamente porque su contenido son las relaciones entre las cosas elevadas a una vida, significación y permanencia autónomas" (Simmel, 1977, p. 106).

trabajo, el dinero adquiere un significado muy distinto que en aquellas comunidades tradicionales en las cuales la producción se desarrolla sobre la base de relaciones de dependencia personales de tipo familiar o tribal. En las sociedades burguesas, las últimas se disuelven al calor de la transformación progresiva de todos los productos y las actividades a valores de cambio, hasta alcanzar el predominio de la relación de cambio, caracterizada por la dependencia mutua de individuos que son a la vez recíprocamente indiferentes.

En estas circunstancias, en las cuales el intercambio de productos y actividades es ineludible para garantizar el acceso a los medios de vida, la independencia entre los hombres se combina con su dependencia respecto de las cosas. El dinero en tanto valor de cambio generalizado constituye su nexo social y expresa el poder que cada quien ejerce sobre las actividades y productos sociales: "su poder social, así como su nexo con la sociedad, [el individuo] lo lleva consigo en el bolsillo" (Marx, 2019, p. 84). Disgregadas las relaciones interpersonales que daban forma a la comunidad en las sociedades tradicionales, el dinero en las sociedades de cambio ocupó ese lugar vacante: el dinero es él mismo la comunidad. [178]

Desde una mirada sociogenética, la fuerza de la comunidad tradicional -basada en vínculos naturales de consanguinidad o en relaciones de señorío-servidumbre- es inversamente proporcional a la fuerza del dinero, capaz de crear una conexión material entre los hombres. [179] De allí la identificación del dinero con la destrucción de un tipo de relación social propia de una fase precedente del desarrollo de las fuerzas productivas, a la que corresponde también un determinado tipo de individualidad. Por este motivo, las prácticas indemnizatorias no sólo son afines a la construcción de un nexo social particular sino que también contribuyen al desarrollo de un tipo particular de individuo, correspondiente a una organización determinada de la sociedad. [180]

---

[178] Al concebir la sociedad como el producto de la acción recíproca entre los hombres, y al dinero como la acción recíproca más pura, Simmel se hace eco de esta concepción del dinero como comunidad, afirmando que el dinero expresa la relación del hombre con el mundo, entretejiendo todo lo concreto y singular en una construcción de sentido suprasingular que origina la realidad (Simmel, 1977, p. 118).

[179] En este sentido, la universalización del dinero en el desarrollo histórico de las fuerzas de producción tiene lugar a la par de la disolución de la comunidad tradicional: "Cuanto menor es la fuerza social del medio de cambio, cuanto más está ligado todavía a la naturaleza del producto inmediato del trabajo y a las necesidades de aquellos que intercambian, tanto mayor debe ser la fuerza de la comunidad que vincula a los individuos, la relación patriarcal, la comunidad antigua, el feudalismo y la corporación". (Marx, 2019, p. 85) .

[180] Simmel comparte esta visión según la cual la economía monetaria reconfigura las relaciones recíprocas entre los hombres, transformando los grupos propios de la economía natural en sociedades modernas caracterizadas por la individualización y la ampliación, proceso caracterizado como el pasaje de una existencia dentro de "comunidades vitales" hacia la participación en "comunidades fragmentarias" (Figueiro, 2013).

No debe perderse de vista por lo tanto, que el poder trascendental del dinero, lo que lo convierte en un ser omnipotente y todopoderoso reside en su carácter de vínculo social; es ésa su "fuerza verdaderamente creadora", tal como se desprende del siguiente pasaje de los *Manuscritos económico filosóficos*:

> El dinero, en cuanto posee la cualidad de poder comprarlo todo, de apropiarse todos los objetos, es el objeto, en el sentido eminente de la palabra. El carácter universal de su cualidad es la omnipotencia de su ser; se trata, por tanto, de un ser todopoderoso... el dinero es el alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los medios de vida del hombre. Y lo que sirve de mediador de mi vida, me sirve también de mediador de la existencia de los otros hombres. Es para mí el otro hombre (Marx, 1962, p. 105).

En este sentido, esta "fuerza verdaderamente creadora" es la que jerarquiza las prácticas indemnizatorias respecto de otras prácticas reparatorias con las cuales coexisten en la sociedad argentina posgenocida. Allí donde no existe un elemento más poderoso, y este instrumento me permite obtener todo aquello que deseo y necesito para vivir, y a la vez me conecta con todos los demás hombres y con la comunidad a la que pertenezco, ¿No es acaso el dinero una demostración de la importancia que adquiere la reparación?

Es interesante en este punto recuperar la distinción que realiza Zelizer entre las prestaciones en efectivo de las prestaciones en especies en relación al marcado del dinero de la beneficiencia a principios del siglo XX. En un comienzo, las prestaciones en efectivo fueron consideradas como un tipo de asistencia peligrosa, ya que brindaban a los pobres la posibilidad de gastar ese dinero de manera discrecional –y a los ojos de la sociedad de beneficencia, de manera dispendiosa-. Sin embargo, pronto se hizo evidente que las prestaciones en especies colocaban a los pobres en una situación de dependencia y anulaban su autonomía, en la medida en que impedían la elección de los bienes y servicios a consumir por parte de sus familias, al contrario de la asistencia en dinero que promovía su independencia y la confianza en sí mismas (Zelizer, 2011).

Desde esta perspectiva, se abren un conjunto de preguntas en torno a las implicancias de la entrega de dinero como instrumento de la reparación a contrapunto de otro tipo de prestaciones por parte del Estado tendientes al mismo fin. ¿Puede el dinero en tanto equivalente general revestir un significado asociado a la construcción de autonomía por quienes lo reciben, en la medida en que brinda la posibilidad de elegir en qué gastarlo? En caso de una respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿Cómo podría caracterizarse esta autonomía que el dinero contribuye

a construir? ¿En qué circunstancias podría acompañarse el modo en que el dinero de la reparación es puesto en circulación sin que esto implique una supervisión por parte del Estado?

En la misma línea, asumiendo que el dinero es *él mismo* la comunidad, el dinero de las prácticas indemnizatorias puede ser pensado como un instrumento de reconocimiento hacia las víctimas de aquel lugar significativo que ocupaban en la comunidad, y que les fue arrebatado mediante los crímenes que se pretende reparar. Si estos crímenes tuvieron por objetivo desterrar de la comunidad a aquellos sujetos cuyos modos de habitar en ella fueran contrarios al modelo identitario que se pretendía imponer, las prácticas indemnizatorias bien pueden considerarse como un modo de volver a anudar a las víctimas a esa comunidad. De esta manera, el dinero de las indemnizaciones vendría a operar como un pasaporte que les permite a las víctimas volver a formar parte de la comunidad de la cual otrora fueron expulsadas.

Ahora bien, ¿Cuáles son las características que adquiere la comunidad que nuclea el dinero? O en la línea de los interrogantes planteados en esta tesis, ¿Cuál es la relación social que el dinero contribuye a construir?

El fetichismo del dinero, cuyo enigma no es otro que el que encierra el fetichismo de la mercancía, alumbra el camino que lleva a responder estas preguntas. Allí donde la forma mercancía es la forma universal del producto del trabajo, las relaciones entre los hombres como poseedores de mercancías se convierte en la relación social dominante. Recuperando el desarrollo expuesto en el apartado 2, el dinero aparece ante los hombres como un nexo natural y objetivo entre las mercancías; lo que es el resultado de la interacción de los individuos se les presenta como algo independiente, al tiempo que encarna un poder social que les es ajeno y se sitúa por encima de ellos. En palabras de Marx,

> es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías –la forma de dinero- la que vela de hecho, en vez de revelar, el carácter social las relaciones sociales entre los trabajadores individuales (2011, pp. 92-93).

En tanto encarnación del valor de cambio, el dinero presupone la reificación del vínculo social, en la medida en que presenta ante los hombres las relaciones entre ellos como una relación entre cosas. Lo que son relaciones sociales aparecen "como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas" (Marx, 2011, p. 89). El dinero me relaciona con el otro y con los otros en tanto cosas, al mismo tiempo que configura mi individualidad, transforma lo que yo soy en lo que puedo comprar. El dinero asociado a la reparación en las prácticas

indemnizatorias está signado por esta caracterización, y es por ello que sobre el mismo se construye lo que he llamado una relación de ajenización.

Esta ajenización tiene lugar en dos niveles que si bien están íntimamente relacionados, es posible distinguir analíticamente. En primer lugar, el dinero de las prácticas indemnizatorias aparece como algo externo y ajeno a los daños producidos por los crímenes de Estado. En este nivel particular, la relación de ajenización dificulta la apropiación de lo sucedido por parte de las víctimas que reciben este modo particular de reparación. Las tensiones señaladas al analizar las representaciones negativas del dinero son manifestaciones de esta relación, que se expresan en las incomodidades de los beneficiarios de las leyes reparatorias al recibir este *dinero maldito*. En la misma línea, cabe mencionar que el hecho de que los daños que se pretenden reparar se conciban como ajenos a los hombres es lo que hace de estos daños algo enajenable, algo plausible de intercambio, eje central de otro de los aspectos controversiales analizados previamente.

A su vez, el dinero como instrumento de la reparación se enlaza con la construcción de relaciones sociales de ajenidad en un segundo nivel, vinculado al modo específico en que los individuos conforman comunidad en las sociedades en las cuales se llevan a cabo las prácticas indemnizatorias. Expresada en el dinero, la comunidad se presenta al individuo como una abstracción, una mera cosa externa a sí mismo de la cual no se reconocen como parte; no como su estar relacionados entre sí, sino como su estar subordinados a relaciones que subsisten independientemente de ellos. Enajenados frente a sí mismos y frente a los demás, la ajenidad es el nexo que crean los hombres entre sí, a la cual corresponde a su vez un determinado tipo de individualidad. [181]

Profundizando en el tipo particular de individualidad que configura el dinero, puede agregarse que éste puede producir un efecto disolvente sobre un individuo, tal como lo tuvo en las comunidades tradicionales. Pero esta disolución trae aparejada su integración a una sociedad, una comunidad de la que este individuo es parte, "sabiéndolo y queriéndolo, o no" (Marx, 2019, p. 158). Aquello que en el apartado 1 se conceptualizó como el choque de dos universos de significación entre la moral del dinero y la moral militante o revolucionaria de quienes accedían

[181] La relación de ajenización como el tipo de relación social que construye el dinero se halla también en la conceptualización de Simmel, al señalar que "la mera relación pecuniaria vincula al individuo estrechamente con el grupo en su calidad de abstracción, por así decirlo, y ello porque el dinero es el representante de las fuerzas abstractas del grupo, con lo que en las relaciones del ser humano con los otros hombres éste sólo repite aquella que, gracias al dinero, tiene con las cosas" (1977, p. 360) Más específicamente, "el dinero (…) crea relaciones entre los seres humanos pero deja a las personas fuera de ellas" (1977, p. 363).

al cobro de las reparaciones, puede leerse a la luz de este desarrollo como una expresión de la contradicción inherente al fetichismo del dinero.

En el capítulo uno, la ajenización fue señalada como uno de los modos de reconfiguración de las relaciones sociales en sociedades que han atravesado procesos genocidas; una ajenización respecto el aniquilamiento perpetrado como también de aquello que el genocidio se proponía destruir. El hecho de que en la sociedad argentina el dinero haya devenido el instrumento de la reparación más extendido, tanto por su alcance como por su permanencia en el tiempo, con la ajenidad que el mismo supone y las implicancias en términos de construcción de comunidad que se han desarrollado en estas líneas, deja en claro que las prácticas indemnizatorias tienen mucho para decir en torno a la sociedad posgenocida. El dinero lleva implícito un modo particular de ser y estar en el mundo que se vincula con lo que Daniel Feierstein ha denominado la realización simbólica del genocidio, en tanto expresa una reestructuración producida por las prácticas sociales genocida de las relaciones sociales en los planos material y simbólico, tanto a nivel colectivo e individual, tal como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo.

5. El dinero en la esfera de la implementación de las Leyes Reparatorias

Para terminar el análisis del dinero como instrumento de la reparación quiero mencionar dos cuestiones relativas al momento de la implementación de la legislación reparatoria que resultan relevantes para comprender las representaciones en torno de las prácticas indemnizatorias, en la medida en que forman parte del marco simbólico para la construcción de los múltiples sentidos que revisten las reparaciones. Me refiero a las distintas formas que adquiere el dinero en el pago de las reparaciones, y que considero que pueden contribuir a distintos modos de apropiación del mismo por parte de los beneficiarios de las Leyes Reparatorias. A continuación, desarrollaré en primer lugar las implicancias del pago de las reparaciones mediante bonos; seguidamente, se establecerán algunas distinciones entre la indemnización y la pensión como dos formas de percibir el dinero de las reparaciones.

5. a) Los bonos como forma de dinero

Desde sus inicios, la normativa relativa a las indemnizaciones habilitó el pago de los beneficios previstos en las Leyes Reparatorias mediante bonos de consolidación de deuda pública. En consonancia con las representaciones negativas asociadas al dinero, este punto constituyó uno de

los ejes nodales de crítica de los organismos de derechos humanos a las políticas reparatorias, que irían cobrando fuerza con el transcurrir de los años, al hacerse evidentes los puntos débiles de esta implementación.

Entre los argumentos principales esgrimidos por los organismos, señalaban que los bonos no constituían un medio de pago sino un título de crédito dirigido a refinanciar deudas del estado contraídas de manera lícita con sus proveedores, y que esta situación no se ajustaba a la de los desaparecidos y asesinados que nunca habían sido proveedores del Estado y cuya reparación devino de actos ilícitos cometidos durante la dictadura. Por otro lado, repudiaban la situación de desigualdad que este medio de pago generaba entre las víctimas, toda vez que los bonos retribuían distintos montos de dinero dependiendo del momento en que los mismos fueran canjeados por sus tenedores. [182] Esta heterogeneidad en el monto percibido fue muy extendida, debido a que ante los largos plazos establecidos para el vencimiento de los bonos, muchos beneficiarios optaron por venderlos en la bolsa de valores con el fin de acceder al dinero de las reparaciones. [183]

Este contexto colocó a las víctimas en una disyuntiva entre dos opciones. Por un lado, podían esperar largos años para efectivizar el cobro, con las consecuencias que esa espera podía traer aparejada tanto en términos subjetivos -si se considera la necesidad de desprenderse lo antes posible de un *dinero controvertido*- como en términos materiales – principalmente, en los casos en los que se habían acogido al régimen reparatorio impulsados por necesidades económicas. La otra alternativa los colocaba en una situación de dependencia respecto de los dictados de la bolsa de valores y los obligaba a someterse a sus fluctuaciones, que determinarían finalmente el monto a percibir. En estos casos además, el lenguaje del mercado financiero podía resultar incomprensible para muchas de las víctimas, que se vieron obligadas a acudir a agentes de bolsa que pudieran asesorarlos en la realización de la transacción. Como puede observarse, que el pago fuera realizado en bonos en lugar de en efectivo no pasaba desapercibido; a las contradicciones

[182] Los bonos de consolidación de deuda pública consisten en documentos – "títulos de deuda"- mediante los cuales el Estado reconoce la existencia de una deuda que se compromete a saldar, y que sus tenedores pueden canjear por dinero. Los bonos tienen un valor nominal –en este caso, correspondiente al monto previsto por las indemnizaciones para cada beneficiario- y a su vez devengan un interés. El canje por dinero puede realizarse en cualquier momento en el mercado cambiario al precio de su cotización bursátil, o bien al momento de su vencimiento por el valor nominal.

[183] Para ejemplificar este punto vale considerar que los primeros bonos de consolidación de deuda emitidos para el pago establecido por la Ley 24411 – Bonos Proveedores Serie II- fueron autorizados en 1997 mediante Decreto PEN 726 y vencían a 16 años de plazo.

que el dinero traía consigo se añadían nuevas tensiones producto de esta forma particular de dinero.

El supuesto que permite abordar el análisis de los bonos como una forma de dinero indica que la modificación del instrumento de la circulación no conlleva una transformación de la relación social sobre la cual reposa la forma dinero en sus condiciones esenciales. La relación entre el dinero y sus diversas formas –moneda metálica, papel moneda, moneda de crédito- se le planteó a Marx en su análisis de las medidas tomadas por el Banco de Francia en 1855 para evitar la disminución progresiva de su reserva en dinero, el cual lo llevó a concluir que

> las distintas formas del dinero pueden tambien corresponder mejor a la produccion social en los distintos niveles; una puede eliminar inconvenientes para los cuales otra no está madura; pero mientras ellas sigan siendo forma del dinero y mientras el dinero permanezca como una relacion de produccion esencial, ninguna puede suprimir las contradicciones inherentes en relación al dinero (Marx, 2019, p. 46).

En igual sentido, Simmel señalaba que

> el carácter acomodaticio del dinero, como muchas otras de sus notas esenciales en general, encuentra su expresión más pura y más intensa en la Bolsa, en la cual ha cristalizado la economía monetaria como un fenómeno autónomo, igual que la organización política lo ha hecho en el Estado (Simmel, 1977, p. 393).

El pago de las reparaciones en bonos resolvió por lo tanto la imposibilidad del Estado de hacer frente a esa obligación contraída con las víctimas con dinero en efectivo, pero en ningún sentido suprimió las contradicciones propias del dinero asociadas a la reparación. Por el contrario, esas tensiones adquirieron un tamiz particular y fueron objeto de renovadas críticas. En esta línea, en el documento titulado "*Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Aportes al último informe del Grupo*" (1996), al exponer sus críticas respecto de las consecuencias producidas por la reglamentación de la ley 24.411/94, los organismos de derechos humanos señalaban:

> Solo una cosa es equivalente cuando existe igualdad en el valor. El valor real no es equivalente al valor nominal. No hay equivalencia si el valor de plaza de los bonos queda sujeto a las políticas de ajuste y los vaivenes del mercado. [184] [185]

[184] El documento fue suscripto por Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres Línea Fundadora y Servicio de Paz y Justicia .

De acuerdo a esta apreciación, la equivalencia es sinónimo de igualdad, igualdad que se ve afectada porque aunque todas las víctimas se encuentran "igualmente desparecidas y/o asesinadas", algunas podrían cobrar tres veces más que otras, si sus condiciones les permiten aguardar al vencimiento de los bonos. Pero además, esta afirmación permite una lectura a la luz de las particularidades de la forma precio, asociando este último al valor de plaza de los bonos, y su valor nominal al valor de la reparación, tal como se ha establecido a partir de la legislación reparatoria, respetando la equivalencia entre los daños considerados equiparables.

Debe subrayarse que aquello que ahora se está considerando como el valor de la reparación – el monto de dinero correspondiente a determinado daño, de acuerdo a la normativa-, en el desarrollo expuesto en el apartado 3.b al analizar las implicancias de la forma precio en las representaciones negativas de la reparación, era considerada ya una abstracción del valor real –inasible por cierto - de esta mercancía tan particular, configurada por los daños que las prácticas indemnizatorias pretenden reparar. Así, la asignación de un valor y consiguientemente un precio a la reparación, que constituía uno de los principales blancos de controversias en relación a las indemnizaciones, se ha convertido en un nuevo punto de partida para la construcción de un todavía mayor nivel de abstracción en relación a los daños, y con ello se ha dado un paso más en la dirección de la ajenización respecto de los crímenes de Estado por parte de las víctimas. Al interior de este universo conformado por los daños a reparar concebidos como mercancía, los bonos conservaron las propiedades y prestaron los servicios del dinero; no sólo no prescindieron de las contradicciones esenciales del dinero, sino que por el contrario, las profundizaron.

5.b) Indemnización vs. Pensión

Estrictamente, la acción de indemnizar corresponde a un pago que se realiza a una persona por un daño o perjuicio que se le ha causado en la esfera del derecho civil en cuyos bordes se insertan las prácticas indemnizatorias. Con este concepto se ha hecho referencia a lo largo de este capítulo a todas las medidas implementadas por el Estado en las cuales el dinero es considerado el instrumento de la reparación. En ocasiones se ha empleado el término *indemnizaciones* como su sinónimo, recogiendo la categoría con la que se refieren a las "Leyes Reparatorias" tanto sus

[185] Ante la cesación de pagos establecida por el Estado argentino tras la crisis del año 2001, el rol de las políticas de ajuste y los vaivenes de mercado en la determinación del valor de los bonos alcanzó su máxima expresión al establecerse la suspensión y el diferimiento de pagos para los tenedores de bonos de consolidación de deuda. En este contexto, los beneficiarios de las Leyes Reparatorias quedaron excluidos de dicho diferimiento mediante RES MECON 73/2002 para el caso de la ley 24.411 y mediante RES MECON 158/2003 para la ley 24.043.

beneficiarios como los funcionarios y empleados administrativos encargados de llevar adelante su implementación.

En este último apartado, quiero introducir una distinción entre la indemnización y la pensión en cuanto a las formas de hacer efectiva la transferencia de dinero asociada a la reparación. En tanto el pago de la indemnización consiste en un único monto de dinero que se desembolsa o bien en una sola cuota, o bien en una cantidad limitada de cuotas preestablecidas, la pensión es una asignación de carácter mensual que se perpetúa en el tiempo. En este sentido, la principal diferencia entre ambos tipos de prestaciones se observa en el hecho de que la indemnización es un beneficio de carácter extraordinario, mientras que la pensión se caracteriza por su regularidad.

Al interior del conjunto de prácticas indemnizatorias analizadas, las promovidas mediante las leyes 23.466/86 y 26.913/13 son las únicas dos que establecen el otorgamiento de una pensión para sus beneficiarios. La ley 23.466/86, que involucró por primera vez dinero en la esfera de reparación de los crímenes de la dictadura, cuenta entre las medidas asociadas a la transición democrática, mientras que la ley 26.913/13 se sancionó después de muchos años de implementación de medidas reparatorias, en un momento en el cual la reparación intentaba ser concebida desde el prisma de la *integralidad*. En este sentido, los distintos momentos históricos en que se situaron estas leyes configuraron significados diferenciales para cada una, tal como ha sido mencionado en el capítulo anterior.

Otro de los aspectos que distingue a ambas pensiones y que se considera relevante en cuanto a las representaciones construidas en torno a las mismas es la nominación de *pensión graciable* para el caso de la asignación correspondiente a la ley 26.913/13. Si bien en las dos pensiones que aquí se analizan se trata de pensiones no contributivas -es decir, aquellas que no requieren de aportes para su otorgamiento-, sólo la prestación producto de la ley 26.913/13 corresponde a una pensión graciable, que alcanza "aquellas personas víctimas de atentados o atropellos provocados por razones políticas, gremiales o actos derivados o conexos a ellas, o sus deudos", como en este caso, pero también está reservada para personas que hayan prestado a la Nación servicios de carácter extraordinario, como ser servicios militares o civiles en guerras internacionales o en funciones específicas para reparticiones estatales, entre otros (Ley 13.337). En este sentido, a diferencia de la pensión otorgada mediante ley 23.466/86, que colocaba a sus beneficiarios un lugar al interior del universo de quienes recibían previsiones asistenciales, la pensión graciable

producto de la ley 26.913/13 le otorga a sus destinatarios carácter expreso de reconocimiento, lo que permite asociar ese dinero a una categoría de ingreso honorable.

No obstante las diferencias señaladas, es posible hacer de ambas pensiones una lectura común en oposición a las indemnizaciones, atendiendo a la característica de regularidad con la que se realiza el desembolso de dinero en este tipo de asignación. A diferencia de las indemnizaciones que ascienden a montos elevados de dinero que las víctimas reciben por única vez –y que como se ha visto, se asemeja a la situación de recibir una herencia-, el dinero de las pensiones consiste en una cantidad menor de dinero que se transfiere a los beneficiarios con regularidad mensual. [186] En este sentido, la percepción de una pensión no equivale a un "beneficio extraordinario", sino que por el contrario, es asimilable al salario de un trabajador.

En los dos casos que aquí se estudian, es precisamente el equivalente al salario de los trabajadores el monto que se toma como referencia para el cálculo del dinero que corresponde a las pensiones. [187] Si se considera el salario como el precio de la mercancía fuerza de trabajo, la analogía propuesta entre la pensión y el salario abona una de las hipótesis centrales que estructuraron este capítulo. Sin pretender asimilar el daño a reparar a la fuerza de trabajo, el hecho de que ambos reciban en tanto mercancías un tratamiento afín, refuerza la hipótesis de que el daño es colocado en el lugar de mercancía en las prácticas indemnizatorias.

Más allá de compartir este supuesto con las prácticas indemnizatorias en conjunto, el componente de regularidad en el caso de la pensión plantea una particularidad que vale destacar. Me refiero a que en el caso del pago por única vez, la temporalidad en la que se desarrolla esta práctica se encuentra acotada en el tiempo. Como se ha visto, este aspecto se complejiza en aquellos casos en que el pago se realiza mediante bonos, que llevan a diferir el momento de hacer efectiva la indemnización. Sin embargo, el vencimiento del bono o bien el canje de los mismos por dinero en el mercado financiero, marcan el fin de la práctica indemnizatoria. Claro que ello no anula los efectos que estas prácticas pueden seguir produciendo en las subjetividades de quienes reciben

[186] En este punto, quiero dejar planteada la pregunta acerca de si el efecto disolvente que una gran cantidad de dinero puede tener sobre un individuo es similar al que tiene el dinero bajo la forma del salario, cuya respuesta no puede determinarse en el marco de los interrogantes planteados en este capítulo pero que sin dudas abre un conjunto de preguntas necesarias para abordar en investigaciones futuras.

[187] La ley 23.466/86 en su artículo 3° establece que "el beneficio otorgado será del setenta y cinco por ciento (75 %) del salario mínimo vital y móvil; en el caso de discapacitados el beneficio será igual al salario mínimo vital y móvil", mientras que en el artículo 5° de la Ley 26.913/13 puede leerse que "el beneficio que establece la presente ley será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo -Agrupamiento General- del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público -SINEP- en los términos que establezca la autoridad de aplicación".

este dinero, pero de algún modo puede identificarse un lapso temporal, un principio y un fin para esta práctica indemnizatoria.

Cuando el dinero adopta la forma de una pensión, este aspecto se presenta de un modo diferente. Mes a mes, al percibir este dinero, se vuelven a poner en funcionamiento los engranajes de esta práctica indemnizatoria, sobre la cual se puede reconocer un momento de inicio, pero no así de culminación. Esta permanencia en el tiempo encierra una potencialidad: la de mantener abierto, de no dar por cerrado un posible proceso de elaboración. En la medida en que este proceso no está predeterminado, este puede contribuir a mantener abierta una herida o por el contrario, a desplegar un proceso de apropiación de la experiencia atravesada. Las características que puede adquirir este proceso son cambiantes y dependen de múltiples factores, pero mientras el proceso siga su curso, representa una posibilidad.

En la misma línea, a la luz de la periodización propuesta en el capítulo anterior, se observa que las mayores controversias suscitadas por las prácticas indemnizatorias al interior del movimiento de derechos humanos, no refirieron a la legislación asociada al establecimiento de pensiones, sino por el contrario, objetaron mayoritariamente las indemnizaciones en un único pago. Puede pensarse que esto se relaciona con que estas últimas implicaban una vuelta la página, un cierre que dejara el genocidio en el pasado. Por el contrario, mientras las víctimas sigan percibiendo las pensiones, sus formas de elaboración continúan situadas en el tiempo presente.

En este punto, vale mencionar que las pensiones sí fueron objeto de crítica por parte de los detractores de las políticas de memoria y derechos humanos implementadas durante los gobiernos "kirchneristas", en el marco de la polarización caracterizada mediante la metáfora de "la grieta" presentada en el capítulo 3. [188] Entre los cuestionamientos que circularon socialmente en torno de las pensiones a los ex detenidos, se destacan aquellos que parten de considerar las mismas no ya como un salario, tal como se ha postulado a lo largo de este capítulo, sino por el contrario, con "planes sociales". En este sentido, las pensiones son criticadas por considerar problemático que sus beneficiarios obtengan dinero sin necesidad de una contraprestación en trabajo. En cierto modo, la perspectiva propuesta permite rebatir este argumento, por un lado, aduciendo que sí existe una contraprestación, aunque en este caso, se trata del daño sufrido por los crímenes

[188] Estas críticas encontraron eco en editoriales publicadas en medios de comunicación afines a estos sectores, como por ejemplo: "*De la revolución a una pensión de por vida*" (Diario La Nación, 21/11/2013), disponible en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/de-la-revolucion-a-una-pension-de-por-vida-nid1640095/; "*Pensión vitalicia para Kunkel, Zannini y compañía*" (Diario Clarín, 29/11/2013), disponible en: https://www.clarin.com/politica/Pension-vitalicia-Kunkel-Zannini-compania_0_Bkafo2ZjDQl.html.

perpetrados y no de fuerza de trabajo; lo que podría dar lugar a interpretar que a esta crítica contra las pensiones subyace una falta de reconocimiento respecto de la experiencia represiva atravesada por parte de las víctimas.

A lo largo de este capítulo, se han analizado las representaciones negativas y positivas que subyacen al dinero como herramienta de la reparación, que permitieron profundizar en la comprensión acerca de lo que el dinero simultáneamente destruye y construye a la hora de llevar adelante la reparación del genocidio en Argentina. En la medida en que durante todo el período que esta investigación aborda se mantuvo la hegemonía del dinero como instrumento de las prácticas indemnizatorias, los elementos analizados se articularon durante este tiempo con la construcción de diversas representaciones hegemónicas acerca de la reparación. Durante los años en los cuales la representación que contrapuso dinero y justicia resultaba dominante en el marco de la impunidad, las críticas a la reparación mediante dinero se alzaron por parte de los propios beneficiarios, quienes se dieron a la tarea de luchar por construir una representación de las reparaciones económicas como repudiable y contraria a la idea de una "verdadera" justicia.

Años más tarde, con la reapertura del proceso de juzgamiento, las indemnizaciones no sólo se mantuvieron vigentes, sino que no perdieron su carácter dominante al interior del conjunto de prácticas reparatorias. Sin embargo, en el marco de la perspectiva de la integralidad, las manifestaciones de rechazo a las mismas que tuvieron lugar con mayor fuerza en la esfera pública no provinieron ya de las propias víctimas, sino de parte de los opositores al gobierno que las implementaba. Si bien los organismos de derechos humanos que protagonizaron las críticas a las reparaciones económicas durante los años 90 mantuvieron su postura de rechazo hacia las mismas, lo cierto es que estos posicionamientos adquirieron un carácter mucho más subalterno una vez que los juicios se pusieron en marcha. Desde entonces, la identificación de buena parte de los organismos con las políticas públicas del kirchnerismo en el gobierno, llevó a un silenciamiento relativo de las posturas que criticaban el dinero como instrumento de la reparación, y con ello, la modalidad predominante desde la cual el Estado se proponía la reparación del genocidio.

Los desplazamientos que la reapertura de los juicios produjo en el conjunto de las representaciones asociadas a la reparación no sólo alcanzaron al modo de concebir el dinero como su herramienta, sino que se hicieron mucho más evidentes en los terrenos que serán

analizados en los próximos capítulos. A continuación, se abordarán las representaciones de los sujetos-víctimas de la reparación, para finalizar en el último capítulo de la tesis con el análisis de las representaciones en torno al daño a reparar.

Capítulo 6

Las representaciones sobre los sujetos de la reparación y la configuración del universo de víctimas

Este capítulo se estructura en torno a la pregunta acerca de quiénes son los sujetos a quienes están dirigidas las prácticas indemnizatorias, es decir, *a quién se repara* – o más precisamente, a quién o a quiénes se pretende reparar- mediante la implementación de las mismas. Esta indagación parte de considerar que en las definiciones que subyacen a la legislación reparatoria en torno del sujeto de la reparación, se ponen en juego un conjunto de significaciones acerca del proceso represivo atravesado que contribuyen a la construcción de determinadas representaciones sobre qué fue lo que ocurrió, a quiénes afectó, y quiénes requieren por lo tanto ser contemplados en el universo de prácticas tendientes a la reparación.

Situadas en el ámbito del aparato de Estado jurídico político, las prácticas indemnizatorias recogen del campo del derecho los marcos que delimitan el modo en que se conciben los sujetos de la reparación. En una primera aproximación, el lenguaje de la legislación en el ámbito del derecho civil en que se inscriben denomina a los sujetos de la reparación como "beneficiarios", término que alude a aquellas personas que reciben la transferencia de un bien, en este caso referido a las indemnizaciones previstas en las leyes de reparación económica. De acuerdo al derecho positivo, el carácter de beneficiario no es intrínseco al sujeto, sino que emerge de la constatación de la existencia de un daño, ante el cual se configura una relación entre dos sujetos: por un lado, el responsable de haber producido dicho daño, y por el otro, la víctima que lo ha sufrido.

En el caso que aquí se analiza, he insistido lo suficiente en que es el Estado el que debe ubicarse en el polo del responsable del daño perpetrado. El objetivo de este capítulo es abordar el otro polo de esta relación: el de las víctimas consideradas sujetos de la reparación en las prácticas indemnizatorias.

Como punto de partida para este análisis, es necesario señalar que en el marco de la consolidación de la *perspectiva de las víctimas* como paradigma para abordar la reparación de los crímenes de Estado, la categoría víctima se ha instalado como una suerte de universal antropológico para la representación de las experiencias de violencia estatal. No obstante, esta palabra no refiere a un concepto unívoco, sino que se trata de un vocablo polisémico que adquiere

significados diversos en el marco de cada proceso histórico concreto en el cual se configura como tal. Ello implica que la consideración de un sujeto como víctima no es nunca el resultado de la aplicación automática de criterios jurídicos o administrativos, sino que por el contrario, forma parte de un proceso social en el cual se construye, discute y define el alcance y los límites de la categoría de víctima.

Desde las ciencias sociales se ha señalado que la identificación de un sujeto como víctima conlleva un proceso de clasificación social que simultáneamente reconoce algunos sufrimientos y excluye otros, que quedan por fuera de su esfera de acción. De esta manera, la categoría víctima produce una "jerarquización" de acuerdo a la cual se construye socialmente una "escala" diferencial de daños ocasionados por el proceso represivo (B. Canelo & Guglielmucci, 2005; Guglielmucci, 2017; Lastra, 2019; Surraco, 2013; Vecchioli, 2001). En tanto expresión de esta operación de jerarquización, y en diálogo con los abordajes que postulan la importancia diferencial de las clasificaciones estatales y el poder simbólico que encierran sus denominaciones (Bourdieu, 2014; García Villegas, 2014), en este capítulo propongo abordar el proceso mediante el cual el Estado construye un determinado modo de concebir a las víctimas que se institucionaliza en las prácticas indemnizatorias, así como las implicancias que acarrea esta construcción.

Recuperando la argumentación presentada en el capítulo dos, las prácticas indemnizatorias se ubican entre las prácticas reparatorias dirigidas a las víctimas directas, entendidas como aquellas cuya implementación se presenta de manera individualizada y se orientan al sujeto particular que ha sido dañado por los crímenes de Estado, y que se diferencian de aquellas prácticas dirigidas al conjunto social que no distinguen el sujeto particular a quien se encuentran destinadas. La consideración de la naturaleza individualizada de los sujetos de la reparación condice con la categoría de sujeto propia de la ideología jurídica, que se corresponde con la persona individual que se vincula con la sociedad entendida a su vez como un conjunto de sujetos libres e iguales en reciprocidad de derechos y obligaciones. Desde esta perspectiva, y asumiendo que las prácticas indemnizatorias se inscriben en el ámbito de la realización material de una ideología, postularé que la categoría de víctima ejerce una *interpelación ideológica* sobre los sujetos incluidos entre sus beneficiarios. Esta conceptualización será presentada en el apartado uno.

Desde este punto de partida, se abordará la construcción de una jerarquía de sujetos de la reparación que en el caso argentino ha sido el resultado de dos principios clasificatorios que operaron sobre el universo de víctimas.

El primero de estos principios parte de la construcción del desaparecido como figura prototípica, que ordena el conjunto de víctimas a partir de distinguir entre quiénes se consideran incluidos en esta categoría, y quienes por el contrario, se ubican por fuera de los límites de esta definición. Este ordenamiento remite en última instancia a la línea que separa la vida de la muerte, y con ello, a la diferencia entre quienes fueron aniquilados y quienes sobrevivieron al exterminio. La figura de la desaparición forzada plantea una tensión particular en torno a esta distinción, sobre la cual se ha abierto un campo de disputas que recorre las constelaciones del universo de sujetos de la reparación.

Esta jerarquización primaria se articula con un segundo principio configurador del universo de víctimas, que refiere al grado de contacto que han tenido con el sistema represivo. Si bien se ha mencionado que las prácticas indemnizatorias están dirigidas a las víctimas directas, en tanto sujetos de carácter individualizado que han sufrido un daño producto de los crímenes de Estado, a partir de esta operación clasificatoria pueden distinguirse dos niveles al interior de esta categoría.

Un primer nivel alude exclusivamente a quienes atravesaron el sistema concentracionario; para estas víctimas se reservará en este capítulo la denominación de "víctimas directas". A ellas están destinadas las principales prácticas indemnizatorias del período bajo estudio. Un segundo nivel alcanza a quienes han sido afectados por la desaparición de otro sujeto-víctima: se trata de los familiares, los causahabientes, los hijos de los desaparecidos; a ellos se propone denominar como "víctimas mediatas". Tanto en la literatura especializada como en el propio campo de los derechos humanos en que se inscriben las prácticas indemnizatorias, esta última concepción de víctimas mediatas suele ser considerada bajo la denominación de víctimas directas. Ello da cuenta de que las operaciones clasificatorias del universo de víctimas son arena de disputas y se encuentran en permanente redefinición.

A partir de la consideración de ambos niveles de determinación, este capítulo se organiza en torno del principio rector que ha producido una jerarquización de las víctimas directas por sobre las víctimas mediatas. A su vez, postula que la centralidad del desaparecido estructuró las representaciones de los sujetos de la reparación al interior de ambos conjuntos de víctimas, que serán abordadas en los apartados dos y tres respectivamente.

En el apartado dos se profundizará en la configuración del ordenamiento relativo a las víctimas directas, a partir de las disputas en torno a los límites de la ausencia que encarna el desaparecido así como los de su figura opuesta, la cual obedece a una concepción ampliada de aparición. Esta concepción ampliada de aparición es una reformulación del "uso amplio" de la categoría de supervivencia propuesta por el historiador González Tizón (2018). De acuerdo a esta distinción, una concepción restringida del término denomina exclusivamente a las experiencias de aquellas personas que salieron con vida de los centros clandestinos de detención, mientras que en su concepción ampliada involucra a otras experiencias de supervivencia de la dictadura como a los presos en las cárceles legales, militantes exiliados, entre otros, y que en su formulación más extrema podría llegar a incluir al conjunto de la sociedad que estuvo expuesta al ejercicio de la violencia estatal. Esta categoría no refiere a una situación única, sino una heterogeneidad de situaciones que contiene a aquellos que no desaparecieron, pero que sufrieron en carne propia las prácticas represivas desplegadas durante el genocidio.

A partir de esta contraposición entra la desaparición y la concepción ampliada de aparición, el universo de víctimas directas presentó dos configuraciones a lo largo del tiempo. En un primer momento, el principal corpus reparatorio cristalizado en las leyes 24.043/91 y 24.411/94 produjo tres movimientos: mientras que la figura del desaparecido se configuró como víctima "evidente", las víctimas cuya situación corresponde a una aparición en sentido amplio fueron consideradas víctimas "poco evidentes", dando lugar en su interior a una disputa en torno a las representaciones asociadas al "ex detenido". Situada en una delgada línea divisoria entre unas y otras, la figura del "ex detenido desaparecido" permaneció invisibilizada. Un segundo momento surgió de la mano de la ley "Dovena" 26.564/09, a partir de la cual el desaparecido es desplazado de su condición estructurante del universo de víctimas, produciéndose una reunificación de los sujetos víctimas en torno al accionar represivo del Estado.

Seguidamente, en el apartado tres abordaré el proceso de constitución del conjunto de víctimas "mediatas", al interior del cual los familiares de los desaparecidos se configuraron como sujetos de la reparación. Para finalizar, el apartado cuatro analizará las operaciones que recayeron sobre los hijos de los desaparecidos, e hicieron de los mismos un universo heterogéneo que contempla víctimas directas así como víctimas mediatas a quienes correspondía el otorgamiento de una reparación económica.

1. Acerca de la interpelación ideológica de la categoría de víctima

De acuerdo a la argumentación presentada hasta aquí, las víctimas no existen *como tales*, sino que adquieren existencia mediante el reconocimiento de los sujetos concretos en tanto víctimas. El concepto de interpelación ideológica acuñado por Louis Althusser resulta un aporte significativo para profundizar en la comprensión de este proceso, dado que permite vincular la dimensión ideológica de las prácticas indemnizatorias con la constitución de la categoría de víctima, atendiendo a las implicancias en el terreno de la subjetividad que involucra la institución de esta categoría.

Para comenzar este recorrido, vale señalar que

> la ideología "actúa" o "funciona" de tal modo que "recluta" sujetos entre los individuos (los recluta a todos), o "transforma" a los individuos en sujetos (los transforma a todos) por medio de esta operación muy precisa que llamamos interpelación (Althusser, 2005, p. 52).

En este sentido, este acto de interpelación implica que en la definición de la categoría de víctima, las prácticas indemnizatorias intervienen en la conformación de la subjetividad de los individuos concretos: dado que la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología, esta interpelación no sólo transforma a los individuos en víctimas, sino que simultáneamente, *los hace* sujetos. Desde este punto de vista, la condición de víctima es por lo tanto constitutiva de la subjetividad de quienes son alcanzados por esta denominación.

Entre las consideraciones que se desprenden de este postulado, se destaca que esta función de reconocimiento que ejerce la ideología se produce conjuntamente con su contraria: la de desconocimiento (Althusser, 2005, p. 52). Mediante la consagración de un universo de víctimas que se plasman en la legislación reparatoria, algunos individuos son reconocidos como tales y en el mismo acto, algunos otros quedan excluidos de esta nominación. Como resultado de esta operación de reconocimiento/desconocimiento, los sujetos de la reparación se convierten por lo tanto en *sujetos-víctimas*.

Junto con la función de reconocimiento –que siempre se presenta con su par contrario-, otro de los efectos ideológicos que produce la categoría de víctima se observa en el modo en que la misma se presenta como una "evidencia". En relación a la categoría de sujeto, así refiere Althusser este efecto ideológico por excelencia:

> Como todas las evidencias, incluso aquellas por las cuales una palabra "designa una cosa" o "posee una significación" (incluyendo por lo tanto las evidencias de la "transparencia" del lenguaje"), esta "evidencia" de que ustedes y yo somos sujetos –y el que esto no constituya

> un problema- es un efecto ideológico, el efecto ideológico elemental. En efecto, es propio de la ideología imponer (sin parecerlo, dado que son "evidencias") las evidencias como evidencias que no podemos dejar de reconocer, y ante las cuales tenemos la inevitable y natural reacción de exclamar (…): ¡Es evidente! ¡Eso es! ¡Es muy cierto! (Althusser, 2005, p. 53) .

Esta conceptualización es sugerente para pensar la categoría de víctima. Los desaparecidos que se ubican en la cima de la jerarquía social de víctimas se manifiestan como evidentes, mientras que a la hora de abordar el conjunto restante de víctimas, las evidencias parecen comenzar a resquebrajarse: sus límites se vuelven difusos, se admiten cuestionamientos, son necesarias las interpretaciones. En esta línea argumental, una de las hipótesis que atraviesan este capítulo es que existe un efecto ideológico en el modo en que los dos principios clasificatorios del universo de víctimas –la centralidad del desaparecido y la jerarquización de las víctimas directas- cristalizan en las prácticas indemnizatorias.

Se trata de una doble operación que presenta de manera simultánea la "evidencia" de que los desaparecidos son víctimas, conjuntamente con su contracara: la invisibilización de la figura del sobreviviente como víctima. Una operación estructuralmente análoga se verifica en el caso de la llamada "ley de hijos", que presenta como evidente una categorización restrictiva acerca de quiénes son los hijos reconocidos como víctimas y quienes por lo el contrario, son desconocidos en su condición de tales pese a los lazos de sangre que los unen con los desaparecidos.

Otro elemento que ha atravesado la operación de clasificación de las víctimas y que la perspectiva de la interpelación ideológica permite iluminar es el que refiere a su politización. Es preciso realizar un pequeño rodeo para dar cuenta de esta vinculación, que permitirá a su vez introducir un elemento que permea la construcción de las representaciones de los sujetos de la reparación.

La caracterización de las víctimas durante el período de transición democrática estuvo atravesada por la discusión en torno a la inocencia de las víctimas. En el marco de la narrativa humanitaria imperante en ese entonces, la construcción de la figura de la "víctima inocente" –asentada en su despolitización y al costo de cercenar las experiencias de militancia previas al aniquilamiento- se contrapuso a la noción de "víctimas culpables" –identificadas en aquellos individuos y grupalidades que habían hecho una opción por la militancia revolucionaria (Crenzel, 2008; Da Silva Catela, 2001; Franco, 2012; Vezzetti, 2002). Si bien en el período que esta tesis analiza esta configuración fue sufriendo transformaciones que habilitaron cierta politización de las

identidades de las víctimas, la pregnancia de la oposición entre "víctimas inocentes" y "víctimas culpables" se mantuvo vigente en las múltiples disputas que configuraron una jerarquía social de víctimas del genocidio en Argentina.

En este marco, la categoría de víctima ha encontrado resistencias por parte de algunos de los propios afectados, que han considerado que esta noción remite a una condición pasiva, que deja en la sombra la praxis política de los sujetos que se consideran a sí mismos como protagonistas del conflicto (Cueto Rúa, 2010; Guglielmucci, 2017; Surraco, 2013). Subyace a este planteo una distinción entre una concepción de víctima que refiere a un sujeto que ha sido victimizado en una situación particular, y aquella que define a la víctima como un estado permanente del individuo. En cierto sentido, la interpelación ideológica que ejerce la categoría de víctima puede asociarse con esta última acepción, en la medida en que al postular que la condición de víctima produce efectos en la subjetividad de los sujetos interpelados en tanto tales, vuelve inescindible la condición de sujeto de la condición de víctima.

Desde este punto de partida, el rechazo al reconocimiento en tanto víctima puede interpretarse como un rechazo a la caracterización identitaria en tanto sujeto pasivo respecto de la violencia estatal, falto de voluntad para la transformación política. La resistencia a ser nombrados por el Estado como víctimas da cuenta del efecto ideológico que produce el Estado cuando mediante su operación clasificatoria, transforma al sujeto en aquello que nombra. La denominación de víctimas en este caso, trae consigo un conjunto de representaciones con las cuales un conjunto de sujetos que sufrieron la violencia estatal se niegan a ser identificados.

Finalmente, en la medida en que las prácticas indemnizatorias refieren a prácticas realizadas desde el Estado, se considera que el alcance de la interpelación ideológica se extiende a todos los sujetos que conforman la sociedad en la cual estas tienen lugar. No obstante, los efectos de esta interpelación son diferenciales al ser ejercida ya sea sobre los propios sujetos-víctimas, o bien sobre quienes pujan por ser considerados dentro de esta categoría, e incluso sobre quienes permanecen aparentemente ajenos a las disputas en torno a la construcción de esta definición. Si bien las prácticas indemnizatorias no están destinadas en concreto a todos los individuos que constituyen la sociedad posgenocida, la ideología que subyace a las mismas produce también sobre ellos su interpelación.

Esto es así en tanto a decir de Althusser, lo que parece suceder fuera de la ideología, sucede en realidad en la ideología: la ideología no tiene afuera, y por lo tanto, alcanza a todos aquellos

sujetos que conforman el conjunto social. De allí se desprende que las prácticas reparatorias intervienen –con distinta fuerza, y en distintos niveles- en la constitución como sujetos de todos aquellos que forman parte de la sociedad posgenocida en la que las mismas se sitúan.

2. La centralidad del desaparecido en las representaciones de las víctimas "directas"

Desde que la reparación económica comenzó a ser discutida en la escena pública, la desaparición forzada se configuró como el daño emblemático que los crímenes de Estado habían producido, trayendo aparejado por lo tanto la exigencia de su reparación. Este hecho no resulta llamativo, dado que si bien la desaparición forzada no fue inaugurada durante el genocidio argentino, fue este el acontecimiento a partir del cual se acuñó el término *detenido-desaparecido*, y al nombrarlo, creó un modo de concebir este fenómeno que se convertirá en la vara para medir toda experiencia de desaparición forzada de personas de allí en adelante (Gatti, 2011).

Una mirada hacia las leyes 24.043/91 y 24.411/94 en tanto principal corpus reparatorio del período que esta tesis analiza permite afirmar que las representaciones acerca de las víctimas se construyeron en torno a la figura del desaparecido. De acuerdo a estos instrumentos, la constelación de víctimas se ordenó de acuerdo a una categorización excluyente que opuso a los desaparecidos del restante conjunto de víctimas directas que sobrevivieron al terror desplegado sobre sus cuerpos, habiendo atravesado una multiplicidad de experiencias represivas. A partir de este núcleo central se fue construyendo un universo creciente de víctimas, que con el correr del tiempo fue incorporando otros sujetos en la nómina de beneficiarios de la legislación reparatoria, sin por ello desplazar la centralidad de aquellas víctimas a quienes se destinaron las primeras políticas de reparación económica.

A partir de estas prácticas indemnizatorias iniciales, se ha ido construyendo una jerarquía de víctimas que dio cuerpo a una gradiente de daños, entre los cuales el "daño más grave" lo constituía la desaparición forzada de personas, cuya reparación cristalizaría en la ley 24.411/94. En el otro extremo de esta gradiente se ubicaron las víctimas cuya situación obedece a una concepción ampliada de aparición. Con la ley 24.043/91 como punto de partida, la concepción ampliada de aparición que inicialmente refería a las víctimas de detenciones arbitrarias se ha ido reformulando con el correr del tiempo a la luz de la implementación de las prácticas indemnizatorias. En el marco de las disputas por hegemonizar esta categoría, se ha identificado una tendencia hacia la expansión de los límites de esta figura, que llegó a su punto más álgido

con la ley "Dovena" 26.564/09. A partir de entonces, esta inflación trajo consigo una dilución del desaparecido como eje estructurador del universo de víctimas, que pasaron a estar reunificadas en torno a la violencia ejercida por el Estado contra ellas.

2.a) Víctimas directas "evidentes": los desaparecidos como sujetos de la reparación

La constitución de los desaparecidos como sujetos centrales de la reparación forma parte de las "evidencias" construidas en torno al proceso genocida desplegado en Argentina desde los inicios de la transición democrática, tal como fuera consagrado en el Prólogo del Informe *Nunca Más*:

> En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra -¡triste privilegio argentino!- que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo (CONADEP, 2006, pp. 12-13).

Desde entonces, fue emergiendo y consolidándose la figura del desaparecido como la víctima por excelencia, al calor del proceso de invención social de la categoría de detenido-desaparecido, así como la construcción de un campo social alrededor de ella socialmente denso, e institucionalmente robusto y duradero (Gatti, 2017, p. 16). Es en este campo que se inscribe la ley 24.411/94, en un universo de sentidos en el cual la figura de los desaparecidos como sujetos-víctimas se ha construido en torno a concepciones tales como las víctimas "puras", "integrales" o las "hipervíctimas" (Acuña et al., 1995; Da Silva Catela, 2001; Vecchioli, 2001; Vezzetti, 2002). Asimismo, la representación del desaparecido en tanto víctima "integral" presentó puntos de contacto con la noción de "víctimas inocentes" referida en el apartado anterior, en la medida en que la "pureza" de las víctimas desaparecidas se reforzaba al vincularse con una concepción de víctima "no comprometida" con acciones violentas.

Esta representación de una víctima "integral" que encarna la figura del desaparecido es una categoría relacional, dado que se constituye como tal en oposición a su contrario: aquellos que habiendo vivido la experiencia límite del campo de concentración, *han vuelto* de allí y pueden por lo tanto, dar testimonio de esa experiencia. Esta concepción es heredera de los desarrollos que a propósito del nazismo han postulado la existencia de una brecha entre por un lado, aquellos que han sido exterminados, "testigos integrales" que habiendo experimentado cabalmente el horror, no pueden testimoniar sobre lo sucedido al interior del campo; y de otro lado, aquellos que se han "salvado" y por consiguiente, tienen el deber de dar su testimonio (Agamben, 1998; Levi, 1987).

En este marco, al momento de sancionarse la ley de reparación para la desaparición forzada, se contaba con dos antecedentes significativos. El primero era la ley 23.466/86, que otorgaba una pensión para los familiares de desaparecidos que dependieran de ellos económicamente al momento de su desaparición. En este instrumento, fue así definida la desaparición forzada:

> A los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada, bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción (Ley 23.466, art. 1).

Esta fue la definición adoptada desde entonces por la legislación tendiente a la reparación de la desaparición forzada. [189]

El segundo antecedente, constituía más precisamente una condición de posibilidad para la ley 24.411/94: se trató de la ley de Ausencia por Desaparición Forzada, que introdujo la categoría de "ausente por desaparición forzada" en el ordenamiento jurídico argentino. Esta normativa reconoce la ausencia por desaparición forzada como una condición que asume el sujeto desaparecido se plasma en este instrumento reparatorio. Algunos años después, esta concepción fue reforzada cuando la "ley parche" estableció que la indemnización en cuestión tiene el carácter de bien propio del desaparecido, y que si bien debe ser otorgada a sus familiares en tanto su ausencia permanezca, es al desaparecido al que le pertenece. Desde esta perspectiva, la desaparición se representa como una ausencia con atributos: el desaparecido conserva los elementos inherentes a sí mismo, que no se le niegan ni le son despojados pese a asumir su carácter de ausente.

Esta representación cobra sentido a la luz de un conjunto de conceptualizaciones acerca de la desaparición forzada elaboradas a partir de la conformación de un campo de estudios sobre este fenómeno, constituido en política de estado durante la última dictadura militar en Argentina. Al interior de este campo, diversas perspectivas han aportado a su comprensión en tanto proceso

[189] Los instumentos jurídicos del derecho internacional que legislan sobre la desaparición forzada de personas son posteriores a la sanción de estas leyes nacionales. Si bien el proceso de construcción jurídica de esta categoría cuenta en sus orígenes con iniciativas tales como la constitución de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) en 1981, y la convocatoria del primer Día Internacional del Desaparecido, en 1983, recién en 1998 el Estatuto de Roma codificó la figura de la desaparición forzada entre los crímenes de lesa humanidad. Años después, en 2006, Naciones Unidas definió la desaparición como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley", mediante la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

social que produjo efectos subjetivos y sociales en la sociedad atravesada por el genocidio (Calveiro, 1998; Crenzel, 2008; Da Silva Catela, 2001; Feierstein, 2017; Gatti, 2011; Izaguirre, 1994; Maneiro, 2005; Vega Martínez, 1999). A los fines de esta argumentación, se destaca la perspectiva que concibe la desaparición forzada como un fenómeno que puede ser pensado no exclusivamente desde el par desaparición/eliminación, el cual prioriza la vinculación entre desaparición y aniquilamiento, sino que contempla la emergencia del par desaparición/aparición como otro de los nodos constitutivos de la tecnología de poder genocida (Lampasona, 2013). De esta manera, la desaparición produce conjuntamente la ausencia del desaparecido y la presencia del sobreviviente.

Con sus particularidades, las diversas perspectivas reseñadas coinciden en señalar que la desaparición forzada implica un quiebre en la concepción occidental de muerte, al romper los marcos sociales básicos para su evocación. Pero además, postulan que el daño que produce la desaparición forzada trasciende los cuerpos desaparecidos, para involucrar en su seno la trama de relaciones sociales que esos cuerpos encarnaban. [190] No obstante, es posible afirmar que la representación de la desaparición forzada como una ausencia con atributos permite situar este fenómeno en la frontera entre la vida y la muerte, característica que atañe a la desaparición, dando así cuenta de su complejidad para ser asimilado al lenguaje jurídico de las leyes bajo estudio.

Dicho lo anterior, hay sin embargo dos elementos que tensionan esta representación, y homologan la desaparición con la muerte, y le quitan ese matiz que la enriquece.

El primer elemento es la consideración conjunta de la desaparición forzada y el asesinato en la misma ley 24.411/94. Si bien la reparación a la desaparición ha recibido la mayor atención por tratarse justamente del daño emblemático producido por el genocidio, todas las consideraciones que alcanzan a la misma se homologan a la situación de "toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983". En este movimiento, se produce un

[190] En este sentido, Vega Martínez definió la desparición forzada como "un proceso que involucra en su seno una trama de relaciones sociales, de fuerzas sociales en pugna, de enfrentamientos que se materializan en violencia sobre el cuerpo de una forma original (…) [Relaciones sociales que] se rompen sobre cada uno de los cuerpos que han desaparecido, pero también sobre los cuerpos de los sobrevivientes (…) En la medida en que el individuo tiene una inserción social propia de una historia que lo precede y lo postcede, consideramos que esta vulnerabilidad y ruptura también embargó al colectivo (1999, pp. 160-161)". Desde esta perspectiva, la desaparición forzada es un fenómeno que no se agota en el cuerpo del desaparecido, sino que alcanza al conjunto social y a la trama de relaciones sociales al interior de una sociedad determinada..

cierto borramiento de la singularidad de la desaparición frente a la muerte, reducidas ambas a su carácter de ausencia. Esta singularidad reside en la especificidad de la desaparición forzada como una técnica constituiva de las prácticas sociales genocidas, entre cuyas funciones pueden señalarse la negación u ocultamiento público así como la eliminación de las pruebas del aniquilamiento, así como los efectos peculiares en los modos de destrucción de la identidad del grupo victimizado (Feierstein, 2017).

El segundo elemento se vincula con el hecho de que aquellas personas que hubieran sufrido la desaparición forzada pero que hubieran aparecido con posterioridad, fueron expresamente excluidas del alcance de esta ley. De acuerdo a esto último, la representación de la desaparición como una ausencia con atributos convive con otra que concibe a la desaparición forzada en su acepción eliminación. Esta concepción remite a la determinación en última instancia asentada en la distinción entre la vida y la muerte de la que parten las representaciones de las víctimas, a partir de la cual los desaparecidos integran el conjunto de víctimas que no sobrevivieron.

A partir de la homologación del desaparecido a la figura del asesinado y la exclusión de aquellos individuos que hubieran aparecido tras haber atravesado la experiencia de desaparición temporal de la órbita de la ley 24.411/94, es posible concluir que la representación que subyace a la práctica indemnizatoria dirigida a los desaparecidos vincula esta figura con el aniquilamiento y se encuentra anclada en el par desaparición/eliminación.

2.b) Víctimas directas "no tan evidentes": los "ex detenidos" como sujetos de la reparación

En la génesis de la construcción del corpus de prácticas indemnizatorias, la figura de la desaparición forzada funcionó como una frontera dentro de las representaciones de los sujetos de la reparación, que colocó de un lado a los desaparecidos, y del otro a un conjunto de víctimas directas que tras haber atravesado la experiencia represiva sobrevivieron llevando en sus cuerpos las marcas de la violencia estatal. Sobre la base de esta distinción, mientras que la representación del desaparecido como sujeto-víctima resultaba "evidente", la ley 24.043/91 configuró una figura "no tan evidente" como sujeto de la reparación.

Originalmente, el beneficio a otorgar por esta ley estaba dirigido a: 1) las personas que durante la vigencia del estado de sitio hayan sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por decisión de éste; 2) quienes siendo civiles, hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.

A partir de las expresiones de los actores sociales involucrados en el proceso de formulación de lo que sería la ley 24.043/91, esta pasó a conocerse como la "ley de presos", y apareció en los debates parlamentarios junto con otras expresiones más recurrentes con las que se hace referencia a las víctimas, como las de "detenidos arbitrarios" y "ex detenidos privados de su libertad". Ello abrió un campo de disputas en torno a cómo concebir los sujetos de la reparación a quienes estaba dirigida esta práctica indemnizatoria, que es posible analizar a partir de la distinción entre "víctimas de detenciones arbitrarias" y "presos políticos". Si bien esta distinción puede parecer una sutileza característica del lenguaje jurídico, admite sin embargo una interpretación sugerente.

Nuevamente, es necesario realizar un rodeo para profundizar primero en las implicancias de la figura de las detenciones arbitrarias, para volver posteriormente a analizar esta distinción. Vale entonces formular la siguiente pregunta: *¿De qué hablamos cuando hablamos de detenciones arbitrarias? ¿Cuál es el alcance y cuáles las implicancias de esta arbitrariedad?*

En una primera aproximación a estos señalamientos, la ley 24.043/91 refiere a la detención en cárceles del sistema penitenciario, detención que se considera arbitraria en el marco del ordenamiento normativo constituido por el gobierno militar. Si bien esta referencia a las detenciones arbitrarias impugna el acto de detención que produjo el encarcelamiento, no parece implicar un reproche al propio ordenamiento jurídico al interior del cual esas detenciones fueron admitidas. Desde esta perspectiva, las detenciones producidas a partir del establecimiento del estado de sitio, como aquellas dictaminadas por tribunales militares no obedecen a una situación de ilegalidad en sentido estricto, sino que se ubican en los límites del aparato represivo legal de la última dictadura.

Este andamiaje institucional para la lucha antisubversiva había comenzado a construirse con anterioridad al golpe de estado, y comprendía una batería de instrumentos cuya piedra angular fue la ley 20.840/74 de "Seguridad Nacional". [191] Poco después fue establecido el estado de sitio en todo el territorio nacional mediante el decreto 1368/74, en cuyos considerandos expresaba entre

[191] La ley de Seguridad Nacional fue presentada públicamente como un instrumento orientado a "erradicar definitivamente la subversión en el país dentro de los marcos de la ley". En su artículo 1º, la ley reprimía mediante la imposición de prisión todo intento de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional. El adoctrinamiento, el proselitisimo, la apología del delito, la edición, distribución y difusión de materiales impresos, el uso de insignias, quedaban comprendidos en esta caracterización. El derecho de huelga y la libertad de prensa y opinión también se vieron cercenados por esta normativa. Para profundizar en las particularidades que adquirió la lógica político-represiva centrada en la eliminación del enemigo interno entre los años 1973 y 1976, ver Franco (2012).

sus propósitos la necesidad de "erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista aleve y criminal contra la Nación".

El *estado de sitio* está consagrado en el artículo 23 de la Constitución argentina, que establece que sólo puede declararse en términos territoriales y temporales restringidos, y ante circunstancias de conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro la Constitución y las autoridades. Durante su vigencia, el presidente no puede condenar ni aplicar penas; su poder se limita a arrestar o trasladar a las personas, si no prefiriesen hacer uso del derecho para salir del país. Debido a la restricción de las garantías individuales que supone, el estado de sitio puede ser considerado como el único instrumento de emergencia de carácter constitucional, en la medida en que habilita la suspensión total o parcial del Estado de derecho en casos considerados como amenazas al orden interno (Franco & Iglesias, 2015).

El estado de sitio declarado en 1974 por la presidenta María Estela Martínez de Perón al que hace referencia la legislación reparatoria bajo análisis se mantuvo vigente en virtud de diversas prórrogas hasta el 28 de octubre de 1983. A partir de su implantación, se estima que diez mil presos políticos -en su mayoría miembros de partidos políticos de izquierda, organizaciones revolucionarias, sindicales y estudiantiles- poblaron las cárceles de "máxima seguridad" emplazadas en todo el país. [192] Según datos oficiales, a lo largo de este período, 8.625 personas fueron puestas a disposición del PEN, de las cuales 5.182 fueron detenidas luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 (CONADEP, 2006, p. 412). Dada esta caracterización, las detenciones producidas en el marco del estado de sitio son consideradas arbitrarias, en la medida en que resultaron verdaderas condenas sin causa debido a su larga duración en el tiempo, a la vez que les fue vedada a las víctimas la opción de salida del país.

En cuanto a las detenciones producidas por órdenes dictadas por tribunales militares, estas también se ubican en la difusa frontera entre las prácticas institucionales legales y la faz clandestina de la represión. Es preciso aclarar que dichos tribunales militares –tambien denominados como Consejos de Guerra- forman parte del sistema de justicia militar, y entre sus prerrogativas contempla la extensión de la jurisdicción militar al ámbito civil en situaciones de fuerte conflictividad social, en las que resulte apremiante la contención de la población civil mediante la aplicación de medidas de carácter excepcional. Sin embargo, lejos de constituir una

[192] Para profundizar en las particularidades de las experiencias de la prisión política durante el genocidio, ver: Guglielmucci (2007), Garaño,(2010), D´Antonio (2016b), entre otros.

excepción, la actuación de los tribunales castrenses para el juzgamiento de la población civil se transformó en regla tras el golpe de Estado de 1976. Encuadrados en la construcción de un nuevo ordenamiento jurídico promovido por el gobierno de facto, estos desempeñaron un papel decisivo en el proceso de judicialización de la represión y se convirtieron en cuerpos extrajudiciales concentrados en acusar y juzgar a civiles por medio de la figura del delito político. Según datos oficiales, la cifra de procesados por la justicia militar asciende a 800 personas, procesos que en su mayoría tuvieron lugar entre los años 1976 y 1978 y cuya condena promedio fue de 16 años (D'Antonio, 2016b). [193]

En este marco, las sentencias libradas por los Consejos de Guerra son consideradas ilegítimas en la medida en que emanaron de juicios cuya instrumentación se sitúa en la confluencia entre la faz pública y la faz clandestina del Estado terrorista. Estos juicios paródicos dieron lugar a una diversidad de prácticas ilegítimas que permitían el "blanqueo" de los secuestrados recluidos en centros clandestinos y su legalización en el sistema penitenciario, otorgando una aparente legalidad al cautiverio, pero garantizando a su vez su continuidad. Al mencionar la existencia de una multiplicidad de prácticas, me refiero a que el "blanqueo" de las detenciones clandestinas en el que intervinieron los tribunales militares adoptó diversas formas y no se presentó de manera unívoca: el circuito que vinculaba el cautiverio en centros clandestinos de detención, el sometimiento a los consejos de guerra, la "legalización" de los detenidos, la puesta a disposición del PEN, la detención en cárceles del sistema penitenciario, no se presentó en una única dirección. Por el contrario, muchas fueron las variantes utilizadas para otorgar atisbos de legalidad a las detenciones clandestinas.

Finalizado este rodeo, es posible afirmar que a la distinción entre las "detenciones arbitrarias" y los "presos políticos" subyace una caracterización diferencial del proceso represivo. Mientras que en el primer caso no se impugna el orden jurídico constituido por el gobierno militar sino el acto de detención que produjo el encarcelamiento, la denominación de presos políticos conlleva un

[193] Tal como señala D´Antonio (2016b), desde los años ciencuenta puede observarse una tendencia tanto por parte de gobiernos militares como constitucionales a la utilización de instrumentos de la justicia militar para la persecución de delitos políticos, aunque con competencias limitadas y circunscriptos a determinados episodios de alza en la lucha de clases. A partir del golpe de 1976, esta tendencia se profundizó al asignarse formalmente a la justicia militar la persecución y sanción de los delitos contra la seguridad del Estado. En este sentido, el decreto ley 21.264/76 promovía condenas extraordinarias para quienes "incitaren a la violencia y/o alterasen el orden público", y reclusión perpetua o pena de muerte para quien "mediante incendio, explosión u otro medio análogo creare un peligro común para personas y bienes".

repudio a la pretendida legalidad del régimen dictatorial que llevó tras las rejas a diez mil individuos tras haber institucionalizado la normativa que lo habilitara para ello.

Este repudio se vincula con otra de las disputas que subyacen a las representaciones de los ex detenidos, acerca de la condición de inocencia de las víctimas. La figura de los presos políticos discute con la noción de víctima pasiva, colocando el acento en la actividad política que llevaba a cabo el sujeto y que lo hizo blanco de la represión. En la misma línea, la constitución de estos sujetos víctimas los ubica en el terreno de las "víctimas culpables", de aquellas que *algo habían hecho* para merecer el castigo de la cárcel. Las siguientes declaraciones de quien fuera la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación al momento de sanción de la ley bajo estudio resultan iluminadoras en este sentido:

> La primera reparación se la diseña a los ex presos, estábamos en la línea de reivindicar a los ex combatientes porque quien estuvo preso no era el inocente que decían los fiscales, los Strassera, habian sido los responsables de una accion que nosotros entendíamos que había sido una acción justa, de resistencia a la dictadura pero fundamentalmente buscabamos dignificarlos, se los seguía llamando terroristas, subversivos, y nosotros los reivindicamos al decir: "ustedes fueron injustamente privados de libertad, y el estado va a reparar ese daño que les ocasionó" (Pierini, 2003).

Estas representaciones asociadas a los presos políticos como sujetos de la reparación tensionan los marcos interpretativos con los cuales el Estado había interpelado a las víctimas del proceso genocida, y es por ello que se considera que los mismos se configuran como "víctimas no evidentes". Asimismo, esto condice con su dificultad por erigirse como voces legítimas en el reclamo por verdad y justicia durante los años posteriores a la recuperación democrática (Guglielmucci, 2007). [194]

Debido a esto, pese a que la disputa en torno a la figura de los "presos políticos" estuvo presente desde los primeros momentos en que esta ley comenzó a discutirse públicamente, esta no logró institucionalizarse como tal: esto sucedería recién en el año 2013, ocasión del establecimiento de un "régimen reparatorio para presos políticos". Sin embargo, muchos fueron los pasos en el camino hacia esta institucionalización de la reparación para las "víctimas culpables". En el marco

[194] Siguiendo a Guglielmucci (2007), en la Argentina posdictadura fue notoria la ausencia de la voz de los presos políticos, en el espacio público – posiblemente a falta de una organización pública que los nucleara en tanto tales- con excepción de algunas obras testimoniales de relevancia (Feijóo, 1992; Vallejos, 1989; C. Zamorano, 1984). En el campo académico, la tendencia hacia la invisibilización de este fenómeno comenzó a revertirse en los últimos años, en los cuales se constituyeron como objeto de estudio de múltiples indagaciones desde las ciencias sociales (D'Antonio, 2012, 2016a; Garaño, 2010; Garaño & Pertot, 2007; Guglielmucci, 2007).

de la ley 24.043/91, su ampliatoria ley 24.906/97 sancionada con el objetivo de disponer el diferimento del plazo previsto para su acogimiento, se introdujo sin mediar debate un artículo que amplió el alcance de la reparación pecuniaria a aquellas personas que cumplieran con los requisitos estipulados en la norma "aunque hubiesen tenido proceso o condena judicial". Esta consideración es relevante dado que por un lado, avanzó en cuestionar el funcionamiento de la justicia ordinaria durante el período dictatorial, y a la vez, produjo un corrimiento en relación a la "inocencia" como requisito para acceder a la categoría de sujeto-víctima.

Finalmente, otro de los puntos controversiales que ha contribuido a hacer de los presos políticos una "víctima no tan evidente", puede vincularse con el hecho de que su cautiverio no estuvo situado al interior de los centros clandestinos de detención, y en este sentido, en una primera aproximación parece presentar una relación de exterioridad respecto del dispositivo específico del proceso genocida. No obstante, a la luz del funcionamiento conjunto de las faces legal y clandestina del aparato represivo del Estado durante la dictadura, este elemento merece ser puesto en cuestión.

La figura de la detención arbitraria permite iluminar la existencia de un circuito represivo con fluidos vasos comunicantes entre la esfera clandestina y la esfera legal, producto del desdoblamiento del aparato represivo de Estado. Pero en el mismo movimiento, oscurece otras prácticas que estando también vinculadas a las víctimas de detenciones ilegítimas, resulta más difícil de ubicar en el terreno de las detenciones arbitrarias. Más precisamente, se trata de los secuestros que arrojaron a las víctimas a los centros clandestinos de detención, pero cuyo destino final no fue la desaparición sino la sobrevida y posterior liberación.

La implementación de esta ley tropezó pronto con esta dificultad: cómo dar respuesta a las solicitudes de quienes habían sufrido privaciones de la libertad pero cuyas detenciones no cumplían con ningún atisbo de legalidad. La solución hallada fue ampliar la concepción de detención arbitraria por vía de interpretación, entendiendo que la misma podía referirse a la figura de la *privación ilegítima de la libertad*. En pocas palabras, este delito consiste en privar a alguien de su libertad personal, y tiene lugar cuando se impide la libertad de movimiento a un sujeto con permanencia en el tiempo, mediante el uso de violencia y/o amenazas. A partir de esta consideración, una cantidad de situaciones que no estaban contempladas en la normativa pudieron ser ubicadas bajo su alcance, entre ellas, las detenciones en sitios clandestinos de detención, pero también los casos de personas detenidas a disposición de áreas militares sin haber

sido sometidas a consejos de guerra; conscriptos sometidos a consejos de guerra, e hijos nacidos durante el cautiverio de sus madres beneficiarias de la ley 24.043/91 (Pierini, 1999).

Vale mencionar que durante el debate parlamentario que precedió a la sanción de esta ley, la privación ilegítima de la libertad ya había sido colocada en el centro de la discusión en torno al daño que este instrumento se proponía reparar. Esto llevó a que pocos años más tarde, la CSJN convalidara esta interpretación, aduciendo que el espíritu de la ley fue "hacer justicia a todos aquellos que sufrieron una detención ilegal". [195] Esta convalidación tuvo su correlato en la disposición de ley 24.906/97, mediante la que se estableció que las prácticas indemnizatorias allí definidas alcanzaban a quienes siendo civiles, hubiesen estado "a disposición de autoridades militares", categorización que permitía incorporar en su rango de aplicación a los casos de ex detenidos desaparecidos.

Desde esta perspectiva, las detenciones arbitrarias fueron interpretadas en el marco de la privación de la libertad: una privación de la libertad cuya motivación fue política y que se caracterizó como arbitraria, en la medida en que los instrumentos y procedimientos que llevaron a ella no cumplen con las garantías individuales que presupone la justicia ordinaria. En consonancia con la centralidad otorgada a la privación de libertad, las situaciones de arresto domiciliario así como de libertad vigilada fueron consideradas expresamente como extensiones de la medida de detención a cuya reparación se encuentra abocada la ley bajo análisis.

Entre las consecuencias que se desprenden de esta interpretación, se destaca la inclusión en el alcance de esta ley de las víctimas de secuestros que fueron liberadas tras permanecer detenidas en centros clandestinos de detención pudieron ser incluidas en el alcance de esta ley. Si bien esto habilitó a los ex detenidos desaparecidos a acceder a la reparación económica, esta incorporación se produjo de la mano de una invisibilización de la especificidad de su condición de víctima. A continuación, abordaré este proceso de invisibilización de la que fueron objeto los *sobrevivientes*.

2.c) Víctimas directas invisibilizadas: los ex detenidos desaparecidos

A diferencia de los ex detenidos, que desde las primeras prácticas indemnizatorias fueron considerados como sujetos de la reparación, ninguna de las leyes analizadas en esta tesis

[195] En el año 1997, la CSJN se pronunció en el caso "Noro", en donde concluyó que la finalidad de la ley 24.043, fue la de otorgar una compensación económica a personas privadas del derecho constitucional a la libertad, dando importancia al menoscabo efectivo a la libertad, independientemente de la expresión formal que hubiera revestido el acto de autoridad. En línea con esta interpretación, durante el año 2000, la Corte extendió esta interpretación al lapso de tiempo en que la víctima permaneció fuera del país, ampliando la plataforma fáctica de la ley a la reparación del exilio (Vocos Conesa, 2013).

menciona expresamente a la figura de los ex detenidos desaparecidos como sus beneficiarios. Se considera que este vacío respecto a los modos de denominación de los ex detenidos desaparecidos los coloca en una situación que podría definirse como de *limbo* en cuanto a su identidad al interior del universo de víctimas.

Esta invisibilización se concibe como la contracara de la "evidencia" construida en torno a los desaparecidos como víctimas emblemáticas del genocidio, asentada en la representación de la desaparición en términos de aniquilamiento. Tal como vengo sosteniendo, conjuntamente con el par desaparición-eliminación, la dinámica de la desaparición forzada como tecnología del poder genocida involucró la producción de liberaciones de aquellos sujetos que habiendo permanecido desaparecidos durante un lapso de tiempo, fueron liberados con vida de los sitios clandestinos de detención. Como consecuencia de esta modalidad que vincula la desaparición con su proceso inverso, el de la *aparición*, se produjo la emergencia de una nueva condición de sujeto-víctima: la del ex detenido desaparecido o el *sobreviviente* (Lampasona, 2013).

Si ante la contundencia representada por los desaparecidos como víctimas emblemáticas, los ex detenidos se constituyeron como víctimas "poco evidentes" del proceso represivo, mucho más controversial fue el espacio que ocuparon los ex detenidos desaparecidos en el universo de sujetos de la reparación. En tiempos de hegemonía del paradigma de los dos demonios, estas controversias fueron producto de una doble sospecha que recaía sobre los sobrevivientes.

Por un lado, los alcanzaba la sospecha por su conducta tras haber caído en manos de la maquinaria desaparecedora de los centros clandestinos: los sobrevivientes habían estado allí, habían sufrido en sus propios cuerpos la experiencia concentracionaria, pero habían vuelto con vida del horror. Esta bifurcación con respecto al destino de los sobrevivientes en relación con los desaparecidos dejó deslizar la pregunta acerca del *por qué de sus liberaciones*, dejando caer sobre sus espaldas el estigma de la traición, producido por la sospecha de haber prestado su colaboración a los represores a cambio de la posibilidad de sobrevivir (Longoni, 2007). Pero además, los sobrevivientes cargaban con la sospecha que instalaba la pregunta del *por qué de su secuestro*, que recaía implícitamente sobre aquellas personas consideradas subversivas de acuerdo a la acusación que los perpetradores construían sobre el blanco de la persecución. [196] En otras palabras, los sobrevivientes *algo habrían hecho* para ser secuestrados, y una vez

[196] El delincuente subversivo como modalidad particular que asumió la figura del enemigo interno en el caso argentino ha sido profusamente analizada. Para profundizar en estos análisis, ver: Feierstein (2007), Franco (2012), Jemio (2013), Peries (2009), entre otros.

secuestrados, *algo más habrían hecho* para salvarse de la desaparición a la que habían sido destinados. En estas condiciones, el sobreviviente *aparece* tras su cautiverio en una sociedad que "quiere entender por qué esta vivo y el no puede explicarlo" (Calveiro, 1998, p. 160). Debieron entonces enfrentar acusaciones por parte de algunos sectores de las organizaciones populares a las que habían pertenecido, así como de los organismos de derechos humanos dentro y fuera del país. A su vez, el mensaje que traían los sobrevivientes desde los campos de concentración tampoco resultaba sencillo de escuchar: ellos eran "los salvados" que anunciaban que muchos de los desaparecidos no volverían a aparecer con vida, tal como reclamaban sus familiares. [197]

Pese a haber sido colocados en este lugar de incomodidad, fueron algunos de los propios sobrevivientes quienes recogieron estas acusaciones, y se dieron a la tarea de elaborar una respuesta ante las mismas. Como puntapié de estas elaboraciones, destacaron que quienes debían dar explicaciones no eran los sobrevivientes, que no habían sido responsables ni culpables de la experiencia atravesada, sino los represores que habían llevado adelante el aniquilamiento (AEDD, 1995; Calveiro, 1998; Daleo, 2001). Desde ese punto de partida, algunos sobrevivientes complejizaron los interrogantes basados en los mencionados *por qué* –por qué su secuestro, y por qué su liberación- , añadiendo un conjunto de reflexiones en torno del *para qué*. Y así planteada la pregunta, pudieron concluir que los sobrevivientes habían sido secuestrados primero, y liberados después, con el objetivo de diseminar el terror más allá de las fronteras de los centros clandestinos:

> Si el eje de la política represiva fue el terror a inocularse en toda la sociedad argentina, y si ese terror (secuestro, tortura, desaparición) se practicó en la clandestinidad, ¿Quién podría contarlo (e inocularlo) en cada habitante del país? Evidentemente, no los Scilingos, cuyo rol en ese momento era hacer y no contar. El relato del horror, según el plan represivo, debía quedar en boca de un puñado de sobrevivientes, que enteraran a la sociedad de lo que les sucedía a las personas que, de pronto, dejaban de ir al trabajo, al colegio, a su propia casa. Por supuesto, el plan preveía un relato del horror aterrorizado y aterrorizante. Desde su punto de vista, el liberado era un ser destruido por la experiencia soportada, que relataría y sostendría en el tiempo –con sus palabras o con su locura, con su mutismo o su

[197] El denominado "*proceso de aparición*" de los sobrevivientes en la sociedad posgenocida ha sido abordado desde diversos enfoques en el campo de las ciencias sociales, fundamentalmente desde la perspectiva de los propios sujetos de esa experiencia y atendiendo a la construcción de identidades en torno a la figura del "sobreviviente". Para profundizar, ver: Canelo & Guglielmucci (2005), Lampasona (2017, 2020a, 2020b), Rama (2017), entre otros.

> desesperación, con su ruina física o su delirio de perseguido– el horror reservado a los disidentes (AEDD, 1995).

Desde esta perspectiva, los ex detenidos desaparecidos fueron una pieza clave de la maquinaria genocida, dado que habiendo sido ellos mismos sujetos de desaparición, fueron liberados como una muestra viviente del horror que podía recaer potencialmente sobre cualquier individuo que no se ajustara a los cánones de la occidentalidad cristiana pregonada por los represores.

Este espacio social reservado para los sobrevivientes se complejizó cuando su palabra, portadora de un mensaje de difícil escucha, fue requerida en el ámbito de las prácticas reparatorias emblemáticas de la transición, en las denuncias abiertas ante la CONADEP primero, y el Juicio a las Juntas después. A partir de entonces, comenzó a tomar forma la interpelación hacia los sobrevivientes en su condición de *testigos*. [198] Debido a la clandestinidad característica de la represión, y la negativa de los perpetradores a brindar información sobre los crímenes cometidos, la voz de los testimoniantes fue decisiva para conocer lo sucedido al interior del circuito concentracionario, identificar a los represores y reconstruir las trayectorias de las víctimas. [199] Ello añadió a las sospechas que cargaban los sobrevivientes, el peso del *deber de memoria*, conceptualización herededada de la experiencia del nazismo que refiere al compromiso de testimoniar que debe asumirse con aquellos que no sobrevivieron al proceso de exterminio (Bettelheim, 1973; Levi, 2006).

No obstante esta relevancia, el espació que ocuparon los sobrevivientes distó enormemente de la centralidad asignada a los desaparecidos, a raíz de lo cual postulo que los ex detenidos desaparecidos fueron invisibilizados como sujetos víctimas de la reparación durante el período estudiado.

El primero de los movimientos involucrados en este proceso de invisibilización refiere a su homologación con los ex detenidos, a partir de la interpretación ampliada de la ley 24.043/91 que se produjo en la esfera de su implementación. Tal como se ha visto, en los años que siguieron a su sanción, esta ley fue incluyendo progresivamente dentro de su alcance distintas situaciones que no habían sido contempladas en su redacción orginal, y en consecuencia, los ex detenidos

[198] El rol del sobreviviente en tanto testigo y el espacio privilegiado que ocupa su testimonio en el proceso de elaboración del genocidio en el caso argentino, ha sido previamente analizado en Crocco, Schneider & Silveyra (2017).

[199] El término "testimoniante" es utilizado por algunos sobrevivientes, quienes se resisten a la interpelación en tanto "testigos", en la medida en que consideran que ello remite al posicionamiento de un observador externo. Por el contrario, el "testimoniante" se constituye en sujeto activo del brindar testimonio, lo que implica involucrarse en aquello que debe ser relatado.

desaparecidos pasaron a formar parte del universo de víctimas asociadas a la "ley de presos". [200] De esta manera, los sobrevivientes vieron enaltecida su posición de ex detenidos en el mismo movimiento en que su condición de desaparecido fue borroneada: al ser interpelados en tanto "ex detenidos", su condición de víctima fue asociada al hecho de haber sufrido una detención, más no fueron reconocidos como sujetos de desaparición, y por lo tanto, su propia desaparición permaneció inobservada. En el mismo sentido, pocos años después, en la ya mencionada ley ampliatoria 24.906/97, el conjunto de víctimas de la ley 24.043/91 quedó consagrada como aquellas personas que habían estado "a disposición de autoridades militares", denominación que dejaba expresamente a los sobrevivientes dentro del alcance de la misma, pero que no impidió que su condición de ex desaparecidos continúe en la sombra.

Un segundo movimiento que abonó esta invisibilización de la que fueron objeto los sobrevivientes, se produjo bajo la forma de una indistinción al interior de un universo misceláneo de víctimas que se cristalizó a partir de la ley "Dovena" 26.564, sancionada en el año 2009.

Esta ley fue formulada en un contexto en el cual la figura del sobreviviente comenzaba a delinear nuevos contornos al calor del avance del proceso de juzgamiento, a partir del cual comenzaron a ser interpelados de manera preponderante en tanto testigos, tal como se desprende de un conjunto de prácticas reparatorias que no se agotan en el ámbito de las indemnizaciones, y que han sido presentadas en el capítulo 3. A modo de ejemplo, la creación en el año 2006 del *Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado* es una cabal muestra de esta interpelación.

En el mismo proceso se inscribe el "Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigo en el marco de procesos judiciales" (2011)[201], que si bien no contempla las prácticas

[200] Así como los ex detenidos desaparecidos fueron progresivamente incluidos en las prácticas indemnizatorias en tanto sujetos de la reparación, algunas víctimas no lograron reconocimiento en la legislación reparatoria pese a sus demandas por ser incluidas como tales. El caso más paradigmático entre estos es el de las víctimas de exilio forzoso, muchas de las que fueron beneficiadas en la práctica y por vía de interpretación por la aplicación analógica de la ley 24.043, producto de un largo derrotero judicial. Sin embargo, durante todo el período analizado en esta tesis, se mantuvo el vacío legislativo en relación a la situación del exilio, y por consiguiente, los exiliados estuvieron ausentes de las representaciones en torno a los sujetos de la reparación. Como consecuencia, pese a que muchas víctimas de exilio accedieron a la reparación pecuniaria, este acceso no se encuentra de ningún modo garantizado sino que por el contrario, en ocasiones fue objeto de fallos judiciales desfavorables que pusieron en cuestión su condición de sujetos a reparar. En este escenario, tampoco se lograron acuerdos que permitieran avanzar en una solución legislativa para quienes sufrieron de exilio forzado, negando de esta manera su condición de víctimas, y manteniendo abierta esta disputa más allá del período analizado en esta investigación.

[201] El mencionado Protocolo fue elaborado por un equipo conformado por profesionales del Centro Ulloa y el juzgado de instrucción de la Megacausa ESMA, impulsado por el juzgamiento a los responsables de los crímenes cometidos en dicho centro clandestino.

indemnizatorias directamente en el ámbito de su actuación, permite dar cuenta de los procesos que tuvieron lugar al interior del Estado en vinculación a la reparación, y que fueron significativas en el proceso de construcción de representaciones acerca de las víctimas que aquí se analizan. Este protocolo produjo dos inversiones teóricas que signaron las representaciones de las víctimas en el marco de los juicios por los crímenes de Estado (Rousseaux, 2017). En primer lugar, se produjo la inversión del concepto penal de "testigo-víctima" por el de "víctima-testigo", priorizando el rol de víctima frente a la condición de testigo observador de los hechos bajo juzgamiento. En consonancia, se hizo hincapié en garantizar las condiciones para que los testigos que habían estado involucrados personalmente en los hechos por los cuales eran llamados a declarar, pudieran brindar sus testimonios en un marco de respeto y dignidad hacia sí mismos. En segundo lugar, el "deber de declarar" asociado al deber de memoria que le cabe a todo testigo, fue reemplazado por la noción de "derecho de declarar": de esta manera, se buscó desplazar la carga que podía significar el acto de dar testimonio para los sobrevivientes, buscando situar estas declaraciones en el marco del reconocimiento a ser escuchados.

No obstante estos desplazamientos significativos que alcanzaron a la figura de los sobrevivientes, las representaciones que subyacen a la ley "Dovena" produjeron una ampliación tal de la noción de víctima que generó la invisibilización del ex detenido desaparecido mediante su igualación con los sujetos víctimas de otras experiencias represivas, manteniendo inobservada su especificidad en el marco del proceso genocida. Los desplazamientos en torno a las representaciones de los sobrevivientes en el marco de la ley "Dovena" deben situarse en un marco más amplio, en el cual se produjo un cambio en la matriz que hasta entonces había ordenado el universo de víctimas. Al análisis de estas transformaciones estará dedicado el próximo apartado.

2.d) Transformaciones en la configuración del universo de víctimas a partir de la ley "Dovena"

A partir de la ley "Dovena", el ordenamiento del universo de víctimas directas comenzó a presentar tensiones respecto de la centralidad de la figura del desaparecido, y pasó a configurarse alrededor de la unidad de la acción represiva del Estado. En esta sección se analizarán los desplazamientos cristalizados en esta práctica indemnizatoria que permiten construir esta

aseveración, partiendo de una mirada hacia el propio texto de la ley que permita comenzar a desagregar sus elementos:

> ART. 1º — Inclúyase en los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias a aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas en las mismas.
>
> ART. 2º — Inclúyase (…) a las víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a alguna de las fuerzas.
>
> ART. 3º — Inclúyase (…) a los militares en actividad que por no aceptar incorporarse a la rebelión contra el gobierno constitucional fueron víctimas de difamación, marginación y/o baja de la fuerza.
>
> ART. 4º — Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1º, a quienes hubieran estado en dicho período, detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Decreto 4161/55, o el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), y/o las Leyes 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886.
>
> ART. 5º — Inclúyase en los beneficios indicados en el artículo 1º, a quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser definida como detención de carácter político.

Esta ley fue planteada en el ámbito parlamentario como una medida tendiente a la reparación de los vejámenes sufridos durante la "resistencia peronista", produciendo así una categorización excluyente desde lo discursivo. Sin embargo, del extenso articulado en el cual se listan las situaciones alcanzadas por la misma se desprende por el contrario una extensión de la noción de sujeto-víctima, producida mediante la expansión de las fronteras temporales y conceptuales de esta denominación, y al costo de la pérdida de su especificidad.

En este sentido, la ley "Dovena" propuso un desplazamiento temporal que situó el inicio del período en que tuvieron lugar los hechos plausibles de reparación en los acontecimientos del 16 junio de 1955, considerado el inicio de la "resistencia peronista" en alusión a la fecha del bombardeo a Plaza de Mayo cuyo objetivo fuera el asesinato de Juan Domingo Perón. En línea

con esta caracterización, a esta práctica indemnizatoria subyace una representación privilegiada en cuanto a las víctimas consideradas parte del peronismo, dada la referencia explícita a quienes participaron de la gesta de la "resistencia peronista" –las víctimas de los levantamientos de 1955 a quienes alude el artículo 2º-, así como a los militares que se negaron a sublevarse contra el gobierno constitucional -a quienes refiere el artículo 3º-. No obstante, los restantes artículos comprenden un conjunto de víctimas que no es posible circunscribir al peronismo, de lo que se desprende que la adscripción a este movimiento aparece como un elemento privilegiado pero no excluyente. En este marco, la inclusión de un amplio abanico de normas tendientes a la persecución de actividades subversivas en una diversidad de manifestaciones parece involucrar a todas aquellas personas que se opusieron y resistieron en variadas formas al poder autoritario encarnado principal más no únicamente por gobiernos dictatoriales, a la luz de la temporalidad referida.

Se vislumbra por lo tanto que el elemento común a esta vasta multiplicidad de situaciones es la agencia política de las víctimas, aspecto que nuclea la diversidad de experiencias contempladas en el espectro de esta ley. De esta manera, emerge una representación de las víctimas que deja de estar centrada en el daño que sufrieron, para poner el acento en sus identidades previas a la persecución de la que fueron objeto. En consecuencia, se observa un desplazamiento hacia la reparación de las "víctimas culpables", en tanto sujetos que encarnaban diversas experiencias de militancia y que de acuerdo a la narrativa de los dos demonios, habían sido responsables de engrosar las filas de los subversivos a perseguir por el régimen militar.

Este giro en las representaciones de las víctimas que hace observables las identidades que no habían encontrado lugar en la legislación reparatoria hasta entonces, se vincula con la reapertura de las causas judiciales contra los responsables del genocidio, previa a la sanción de la ley "Dovena". La misma cristalizó un conjunto de representaciones en torno a las víctimas vinculado con el despliegue de la integralidad como prisma para abordar la reparación de los crímenes de Estado. En la medida en que las prácticas de juzgamiento se convirtieron en terreno privilegiado para la escucha de aquellos relatos que habían permanecido silenciados durante años, posibilitaron un reconocimiento a la experiencia atravesada por las víctimas previo al aniquilamiento. Esto permitió la entrada en escena de la militancia de las víctimas en el ámbito de las prácticas indemnizatorias, así como cierta reivindicación de su opción por la participación política.

Otra cuestión a destacar que se desprende del articulado de la ley "Dovena" es que la multiplicidad de situaciones contempladas bajo el amplio paraguas que abre este instrumento reparatorio trajo aparejada la unificación del continuum de daños que hasta entonces se había presentado bajo la forma de una gradiente que iba de la desaparición forzada en su extremo "más grave", hasta las detenciones arbitrarias. Como consecuencia, a la ley "Dovena" subyace una representación de las víctimas que reunifica aquello que hasta entonces había intentado ser diferenciado, en torno a la unidad de la acción represiva del Estado frente al universo de víctimas. En primer lugar, ello produce un borramiento de la frontera que hasta entonces había distinguido al desaparecido del restante conjunto de víctimas directas, mediante la igualación de las víctimas contempladas en las leyes 24.043/91 y 24.411/94 consideradas como la base del corpus reparatorio analizado en esta investigación. En este marco, recuperando lo mencionado en el apartado anterior, no sólo los sobrevivientes aparecen invisibilizados; incluso los desaparecidos ceden su lugar de víctimas emblemáticas, al quedar incluidos al interior de una heterogeneidad que incluye indistintamente a los desaparecidos, los asesinados y las víctimas de detenciones de carácter político.

Por otra parte, la noción ampliada de aparición que subyace a la ley 26.564/09 es llevada casi hasta sus límites, engrosando esta representación considerablemente. Si hasta entonces, esta concepción había estado centrada en el marco de las detenciones arbitrarias, la ley "Dovena" incorporó a este universo un conjunto de experiencias represivas vinculadas con diversos modos de detención por motivos políticos, tal como se desprende de sus articulos 4º y 5º.

Fruto del continuum de daños que esta práctica indemnizatoria se propone reparar, la representación de la desaparición deja de verse vinculada estrictamente con la eliminación, tal como ocurría en el marco de ley 24.411/94. Por el contrario, la misma da lugar a una representación de este fenómeno en su vertiente desaparición-aparición, de acuerdo a la cual la desaparición no sólo produce la ausencia del desaparecido, sino que también produce la presencia de todos aquellos que han sobrevivido tras sufrir una "desaparición temporal" (Lampasona, 2013). Pese a que la figura del "sobreviviente" está ausente de la formulación de esta ley y es en este sentido que se considera que la misma contribuye a la invisibilización de este universo de víctimas, se observa una articulación entre las experiencias de detención política y de desaparición forzada que habilita esta interpretación, en tanto no son presentadas a partir de una oposición sino bajo la forma de una continuidad.

A la luz de lo expuesto hasta aquí, es posible dar cuenta de una dilución de la especificidad de la violencia estatal tal como fue desplegada durante el proceso genocida. La extensión del lapso temporal propuesto en esta práctica indemnizatoria quiebra incluso la distinción entre democracia y dictadura, a partir de la consideración de un continuum represivo entre 1955 y 1983.

Sin embargo, este aspecto admite también una interpretación complementaria. Al fechar el inicio del período indemnizable en 1955, esta práctica indemnizatoria reconoce una continuidad en el proceso iniciado desde entonces y hasta finalizada la dictadura militar. A primera vista, hay elementos que permiten afirmar que se refiere al proceso de la resistencia peronista. Pero dado que las víctimas contempladas no se agotan en el peronismo, ello habilita a considerar que lo que esta ley reconoce es la existencia de un conflicto social en ascenso desde entonces, en cuyo marco el campo popular –representado de manera privilegiada pero no excluyente por el movimiento peronista - se configuró en tanto blanco a perseguir primero, y en fracción social a aniquilar después, deviniendo así en sujeto víctima que merece por lo tanto una reparación.

Con este acumulado en la construcción de representaciones acerca de las víctimas, hacia fines del año 2013 se sancionó el denominado "*Régimen reparatorio para ex presos políticos de la República Argentina*", cuyo rasgo distintivo fue haber institucionalizado la denominación de "presos políticos" para referir al conjunto de víctimas que se corresponde con la concepción ampliada de aparición, así detalladas en su articulado:

> Establécese una pensión graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:
>
> a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043, sus ampliaciones y complementarias;
>
> b) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional;
>
> c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto

> o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de "detenidos especiales", violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente.

De lo anterior se desprende que esta práctica indemnizatoria engloba a todas aquellas víctimas que fueron privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas represivas por motivos políticos, gremiales o estudiantiles, lo que permite la inclusión de una vasta multiplicidad de sujetos víctimas al interior de sus fronteras.

Tal como ocurría con la ley 24.043/91, esta ley otorga centralidad a la privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, de acuerdo a la denominación del régimen reparatorio, este universo de víctimas se coloca bajo la denominación de "presos políticos". De este modo, la última ley sancionada en el período bajo estudio termina de cristalizar institucionalmente una disputa que se había abierto en ocasión del nacimiento de una de las primeras prácticas indemnizatorias, sobre la cual se montó la reparación a las víctimas directas que no habían sido aniquiladas, definidas inicialmente en los términos de las detenciones arbitrarias. La representación de las víctimas en tanto presos políticos a la que adscribe la ley de pensión para los ex detenidos habilita en este sentido la reparación de las "víctimas culpables", en la medida en que pone de relieve las experiencias de participación política de las víctimas y las aleja de la noción de víctimas pasivas o apolíticas.

En este marco, esta ley comparte con la ley "Dovena" la ampliación de la concepción de víctima como resultado de la consideración de quienes fueron perseguidos en virtud de la legislación antisubversiva, a lo que añade como novedad la consideración de la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional como marco al interior del cual se perpetraron los delitos cuyas víctimas se consideran amparadas bajo este régimen reparatorio. Por el contrario, se diferencia de la norma referida en su intento por circunscribir la temporalidad de la reparación a las prácticas genocidas que tuvieron lugar en la década del setenta, estableciendo en este punto una distancia respecto de la "resistencia peronista" como identidad política privilegiada en tanto sujeto de la reparación.

La representación de las "víctimas culpables" como sujetos de la reparación se ve fortalecida en el tratamiento conjunto que se dio en el ámbito legislativo al proyecto de ley que establecía la pensión para ex detenidos y a la indemnización dirigida a las personas fallecidas en el marco de la "Operación Primicia", en la cual la Organización Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa, en el año 1975. De esta manera, tal como se ha mencionardo en el capítulo 3, se advierte aquí el prisma de los dos demonios como marco

explicativo para la interpretación del conflicto social durante la década del 70, en lo que Feierstein (2018) denominó su versión *recargada*, y que como se ha mencionado, intenta una equiparación entre las víctimas del genocidio y las víctimas de la violencia insurgente, a la que subyace una propuesta de relegitimación de la violencia represiva contra la "violencia terrorista". Desde esta perspectiva, si las "víctimas culpables" de haber elegido la militancia política pudieron ser reivindicadas como sujetos víctimas de la reparación, se observa que la militancia de las organizaciones insurgentes continúa presentando tensiones que abonan una representación de las mismas en tanto victimarios, ocultando así su condición de víctima de la violencia estatal.

Finalmente, otro elemento novedoso sobresaliente que surge del análisis de la ley 26.913 refiere al hecho de que la misma estableció el otorgamiento de una pensión, y no de una indemnización para los sujetos de la reparación. Como se ha analizado en el capítulo previo, a diferencia de las indemnizaciones que son percibidas por única vez, las pensiones mantienen siempre activa la interpelación: se actualiza mes a mes mientras la pensión llegue a las manos del sujeto víctima; siempre está siendo, en gerundio, en tiempo presente.

Hasta aquí, he analizado las representaciones acerca de las víctimas que subyacen a las prácticas indemnizatorias situadas al interior del universo de las víctimas directas. Entre ellas, resta abordar el análisis de las representaciones construidas en torno a la figura de los hijos de desaparecidos, en los casos en los cuales estos han vivido personalmente la experiencia del cautiverio clandestino. Sin embargo, esta situación no se extiende a la totalidad de los hijos de desaparecidos. A raíz de ello, lejos de presentarse de manera unívoca, las representaciones acerca de los hijos en tanto sujetos de la reparación han presentado contornos imprecisos en las prácticas indemnizatorias, que pueden colocarse en un espacio que limita tanto con el universo de víctimas directas como de víctimas mediatas, y que amerita ser analizado en profundidad, lo que constituye el objetivo del apartado cuarto de este capítulo. Antes de abordar esta tarea, a continuación analizaré las representaciones acerca de las víctimas mediatas como sujetos de la reparación, las cuales adquieren la forma de una reparación para los familiares de los desaparecidos.

3. Víctimas mediatas: los familiares de los desaparecidos como sujetos de la reparación

Al inicio de este capítulo se ha mencionado que la figura del desaparecido ordenó tanto las representaciones de las víctimas directas como las relativas a las víctimas "mediatas". En este

último caso sin embargo, este ordenamiento se produjo bajo la forma de una mediación: es decir, las víctimas pasaron a concebirse en tanto tales debido a la ausencia de sus familiares desaparecidos.

Para dar cuenta de la matriz en la cual se inscribieron estas representaciones, debe considerarse que en el caso argentino, la familia fue concebida como espacio privilegiado para la confrontación política tanto por los perpetradores como por las víctimas de las prácticas represivas. En primer lugar, la dictadura militar había hecho de la familia su interlocutor privilegiado: ante el caos imperante, la familia en tanto "célula básica" de la nación era convocada a velar por la seguridad y la paz del hogar y por consiguiente, de la sociedad en su conjunto. [202]

Ante el recrudecimiento de la represión durante el período dictatorial, fueron los familiares de las víctimas quienes impulsaron la búsqueda del paradero de los desaparecidos, tarea al calor de la cual se fueron constituyendo los organismos de derechos humanos considerados como organismos de "afectados", los cuales se diferenciaban de aquellos organismos de conformación previa a la dictadura por la vinculación de sus integrantes con las víctimas mediante lazos familiares. La consideración de estas agrupaciones como "organismos de afectados" da cuenta de que la centralidad que los militares otorgaban a la institución familiar era compartida por quienes se consideraban afectados directamente debido a su condición de familiares de las víctimas. En este sentido, el discurso que colocaba a la familia como unidad natural de la organización social fue espejado por el movimiento de derechos humanos, lo que contribuyó asimismo a la construcción de los familiares como únicas voces autorizadas para la denuncia de los crímenes cometidos.

Prueba de ello es que durante 1976 se conformó la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; en abril de 1977 comenzaron las reuniones de quienes conformarían las Madres de Plaza de Mayo; ese mismo año, en el mes de noviembre, fue creada la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. En este marco, la centralidad de los familiares de las víctimas en la denuncia de las violaciones de derechos humanos dio lugar al "familismo" como criterio de atribución de legitmidad de la palabra en el espacio público (Jelin, 2010).

Estas representaciones en torno de los familiares como sujetos de la reparación permearon las prácticas indemnizatorias, en el marco de quienes denomino víctimas mediatas, en cuanto no

[202] Para profundizar en las vinculaciones establecidas entre familia y dictadura, ver Filc (1997).

atravesaron personalmente la experiencia concentracionaria, sino que forman parte del universo de víctimas por haber sufrido la ausencia de sus familiares, producto de su desaparición. Al análisis de las particularidades que presentan estas representaciones en torno a los familiares como víctimas –que no permanecieron invariables, sino que presentaron desplazamientos en el transcurso del tiempo- estará dedicado el presente apartado.

Un primer señalamiento en este sentido que se desprende de lo anterior, es que los familiares no se constituyeron como víctimas en tanto tales, sino que aparecieron en la escena reparatoria ante la falta de quienes se consideraron los *verdaderos* beneficiarios de la medida tendiente a la reparación. Dada la ausencia forzada de las víctimas por motivo de su desaparición o asesinato, son sus familiares quienes por legítimo derecho se presentan en su nombre a reclamar por la indemnización. Las representaciones acerca de las víctimas que subyacen a las prácticas reparatorias dirigidas a los familiares refuerzan la hipótesis que atraviesa la argumentacion presentada en este capítulo, acerca de la evidencia construida en torno a los desaparecidos como víctimas emblemáticas del genocidio y por consiguiente, sujetos privilegiados de la reparación.

La relevancia que adquirió la figura de los familiares como víctimas en la posdictadura se manifestó en primer lugar, en el hecho de que la primera práctica indemnizatoria, con la cual se inauguró la modalidad reparatoria a través del dinero, delimitó a sus beneficiarios por su vínculo familiar con el desaparecido. Se trató de la ley 23.466/86, cuya particularidad fue la de ser la única práctica indemnizatoria del período analizado en esta tesis que se encuentra dirigida expresamente a los familiares de los desaparecidos en un sentido amplio, entre quienes contemplaba a aquellas personas que acreditaran:

> Art. 1: a) Ser menor de 21 años de edad; b) La desaparición forzada de uno o ambos progenitores;
>
> Art. 2: (…) los siguientes familiares del desaparecido, a cargo del mismo al momento de la desaparición o que lo hubieren estado al momento de sancionarse la presente: a) El cónyuge en concurrencia con los hijos menores si los hubiere; b) Los progenitores y/o hermanos incapacitados para el trabajo y que no desempeñaren actividad lucrativa alguna ni gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; c) Los hermanos menores de edad, huérfanos de padre y madre que hubieren convivido con el mismo en forma habitual antes de la desaparición.

En estas definiciones resulta clara la referencia a los familiares de los desaparecidos como víctimas hacia quienes estaba dirigida esta práctica indemnizatoria, cuyo objetivo fue reparar la

situación de desamparo en la que habían quedado las familias de cuyo seno los perpetradores habían arrebatado el sostén económico principal. En esta medida puede observarse la importancia asignada al núcleo familiar en la organización de la vida social de sus integrantes; núcleo que lejos de ser preservado por quienes se arrogaban la tarea de preservar la paz del hogar, se consideraba agredido mediante la desaparición de quien garantizaba su subsistencia, promoviendo de este modo su desintegración.

Con la excepción de la ley tendiente a la reparación de los hijos de desaparecidos, los familiares contemplados en la ley 23.466/86 no volvieron a ser considerados sujetos de la reparación por ninguna otra de las leyes reparatorias sancionadas con posterioridad. Desde entonces, los familiares sólo fueron considerados sujetos de la reparación en representación de las víctimas; ya sea por tratarse de desaparecidos o asesinados, o bien de ex detenidos fallecidos con posterioridad a la perpetración de los delitos que se pretende reparar. En estos casos, se destaca que fueron los propios familiares quienes reclamaron que las indemnizaciones fueran consideradas un bien propio del desaparecido o fallecido, y que ellos sólo resultaban beneficiarios de las mismas dada su condición de *causahabiente*.

Esta concepción subyace a la ley 24.411/94, y fue señalado expresamente a partir de su modificatoria "ley parche" 24.823/97, la cual tuvo entre sus objetivos precisar el alcance y las implicancias de la figura del causahabiente. En este sentido, junto con la aclaración acerca de la indemnización como bien propio del ausente, la "ley parche" prestó especial atención a los modos de constitución de las familias de las personas desaparecidas, legislando a favor de la inclusión del núcleo familiar que podía distanciarse del modelo de familia tradicional. En este sentido, si bien estableció en primer lugar, que la distribución de la indemnización debía hacerse de acuerdo al orden de prelación establecido en el Código Civil -de acuerdo al cual eran considerados causahabientes sus descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes hasta el cuarto grado-, explicitó algunas situaciones que no estaban contempladas en este ordenamiento normativo. Esto llevó a la explicitación de que los derechos de los cónyuges serían extendidos a las uniones de hecho que hubieran tenido lugar durante al menos dos años anteriores a la desaparición o al fallecimiento, así como a los casos en los cuales hubiera descendencia ya sea reconocida por el desaparecido o fallecido, o bien estuviera probada la filiación judicialmente. Por último, estableció una excepción a la legislación vigente en materia de adopción, al considerar que los hijos que como consecuencia de la desaparición forzada o muerte de uno o

ambos padres hubieran sido dados en adopción plena, tendrían derecho a percibir la indemnización en cuestión.

De lo antedicho se desprende que esta ley intentó construir un marco legal que pudiera contemplar los modos de constitución de las familias de los desaparecidos, que en muchos casos se diferenciaban de las familias tradicionales. En los primeros años de implementación de la ley dirigida a la reparación de los desaparecidos, se hizo evidente que las uniones de hecho predominaban en sus familias, presumiblemente debido a la clandestinidad que la persecución había impuesto a la vida de muchos desaparecidos previo su secuestro. Asimismo, las particularidades de los casos de niños que habían sido ingresados en el circuito que los llevaría a sus familias adoptivas sin el consentimiento de sus padres fue considerado como una situación excepcional a la cual la ley debía brindar respuesta.

De esta manera, la representación acerca de la familia que subyace a esta práctica indemnizatoria presenta cierta distancia respecto de una concepción de familia en términos tradicionales, abriendo la posibilidad de que los grupos familiares tal como fueron conformados en la experiencia vital de las propias víctimas pudieran ser acogidas en la constelación reparatoria. En este marco sin embargo, el límite impuesto a esta apertura estuvo dado por la primacía de los lazos de sangre sobre los cuales se fundamentaba una noción legítima de familia que tanto el Estado como los familiares de las víctimas parecían compartir. Si bien excede los marcos de esta indagación profundizar en este sentido, a partir de lo anterior es posible dejar planteada la pregunta acerca de cuáles fueron las representaciones de la familia construidas al interior de los grupos victimizados, y cuál era el peso asignado a los lazos de sangre en relación a otro tipo de lazos –por ejemplo, lazos comunitarios- en los modos de conformación de sus núcleos familiares.

Al interior de estas familias, los hijos de los desaparecidos han merecido especial atención. En una primera aproximación, los hijos se han configurado en tanto víctimas emblemáticas, a todas luces "evidentes" dada la incuestionable condición de inocencia que le cabe a un niño, evidencia que a su vez se acrecienta en los casos en los cuales estos hijos son bebés recién nacidos, o incluso niños muy pequeños, víctimas del delito de apropiación de menores. A su vez, debe considerarse que la figura de los niños en tanto víctimas de los crímenes de Estado ocupó un espacio significativo en la lucha por memoria, verdad y justicia. Ello por una parte, debido a que la búsqueda de los niños nacidos en cautiverio tras el secuestro de sus madres se convirtió en una de las demandas más potentes del movimiento de derechos humanos; por otro lado, porque en

tiempos de impunidad, el delito de apropiación de menores -del cual los hijos resultaban las víctimas- fue de los pocos respecto de los cuales se mantuvo abierta la posibilidad de juzgamiento, contribuyendo a la consolidación de una representación acerca de esta práctica genocida como la más inadmisible y brutal dentro del repertorio de la represión. No obstante, pese a estas evidencias, se ha mencionado que las representaciones en torno a la figura de los hijos en tanto sujetos-víctimas de la reparación no fueron homogéneas sino que presentaron una diversidad de matices sobre los cuales es preciso detenerse. A esta tarea estará dedicado el próximo apartado.

4. Los hijos como sujetos víctimas de la reparación

En un primer acercamiento, no hay discusiones en torno a que los "hijos" formaron parte de las víctimas emblemáticas de los crímenes de Estado, dado que la angelización que le cabía a las víctimas inocentes encontraba en la figura de los niños indefensos una representación de innegable afinidad. Sin embargo, el análisis de las prácticas indemnizatorias ha permitido constatar la construcción de una jerarquía social de víctimas hijos al interior de este universo. Esta jerarquía ubicó en su cúspide a los hijos víctimas de apropiación y sustitución de identidad; a continuación, se ubican los hijos que podrían considerarse víctimas directas en la medida en que atravesaron personalmente la experiencia concentracionaria, siendo detenidos *en relación a* sus padres; por último, se contemplan las situaciones de aquellos hijos que estando vinculados con los desaparecidos por lazos de sangre, son interpelados en su carácter de víctimas mediatas, en la medida en que su condición de víctima refiere a la ausencia de sus padres.

Desde esta perspectiva, los hijos comparten una situación que es común a todos ellos: "la orfandad de padre y/o madre por causa del accionar genocida del Estado" (Goyochea et al., 2011, p. 3). Sin embargo, las prácticas indemnizatorias mediante las cuales se intentó reparar esa condición, la figura de los hijos distó de construirse en torno a esa unicidad.

Tal como se ha mencionado en el apartado precedente, los hijos de desaparecidos fueron destinatarios de la primera práctica indemnizatoria del período -la pensión otorgada mediante ley 23.466/86-, conjuntamente con otros causahabientes de sus padres desaparecidos. El daño a reparar mediante la misma fue la ausencia de este padre o madre, ante la cual en la mayoría de los casos, los niños fueron criados a cargo de alguna otra persona del grupo familiar. Como consecuencia, eran estos familiares a cargo del niño quienes recibían de parte del Estado el dinero

correspondiente a la pensión destinada a los hijos como una ayuda económica destinada a solventar los gastos que demandaba su crianza. Ello explica que la ley estableciera que la pensión caducaba al cumplir los hijos la mayoría de edad; a su vez, mediante la ampliatoria ley 26.267/08, se dispuso que el beneficio sería mantenido pasado ese tiempo en los casos en que los hijos se encontraran en situación de incapacidad para el trabajo. Un espacio similar ocuparon en el caso de la ley 24.411/94, en la cual pese a no configurarse en tanto sujetos de la reparación, fueron alcanzados por la indemnización prevista en tanto causahabientes de sus padres desaparecidos o fallecidos.

La "ley parche" 24.823/97 dedicó especial atención a la situación de los hijos de desaparecidos. Por un lado, establecía que el pago de las indemnizaciones a los causahabientes liberaba al Estado de su responsabilidad en aquellos casos en que otros familiares con igual o mejor derecho se presentaran a cobrar con posterioridad. Ello implicaba en concreto, que eran las familias de los desaparecidos sobre quienes recaía el peso de resolver esos conflictos, dado que el Estado consideraba cumplida su obligación al respecto.

No obstante, esta situación no aplicaba en caso de que quienes se presentaran fueran hijos que hubieran ignorado su condición de tales, al momento de efectuarse el pago. Este señalamiento apuntaba especialmente a la reparación económica de los hijos apropiados, quienes claramente no podían reclamar la reparación pecuniaria que les correspondía en tanto desconocieran su identidad. Sin embargo, de acuerdo a la redacción original de la "ley parche", si estos hijos lograban ser restituidos, estos podrían interponer su reclamo y cobrar la indemnización sin necesidad de recurrir contra sus familias de origen. Llamativamente, este artículo fue vetado poco después de la sanción de la ley, dejando esta disputa abierta para ser resuelta en la esfera privada de cada familia en particular. De esta manera se produjo un retroceso a lo que mediante la "ley parche" puede interpretarse como un intento por reconocer la situación singular de los hijos apropiados al interior de las familias de los desaparecidos.

Sin dudas, la práctica indemnizatoria más significativa para analizar las representaciones acerca de los hijos como sujetos de la reparación llegó con la ley 25.914/04, que fue la primera en considerar a los hijos de desaparecidos como sujetos de la reparación. Una de las preguntas que surgen a partir de esta emergencia es por qué si los hijos de desaparecidos fueron considerados desde tiempos dictatoriales víctimas emblemáticas –en particular, en la representación de niños apropiados- pasaron tantos años hasta que un instrumento reparatorio los reconociera

expresamente como víctimas a las cuales correspondía otorgar una indemnización. Una posible respuesta puede vincularse con la polémica que pudiera surgir en relación a que siendo niños, estos no pudieran disponer legalmente del dinero otorgado mediante las indemnizaciones, pudiendo así generarse disputas en torno al manejo del dinero en las familias que los tuvieran a cargo.

Esta situación cambió con el correr del tiempo, dado que los niños crecieron y se convirtieron en adultos no sólo capaces ante la ley de gestionar su dinero, sino también de organizarse políticamente –lo que quedó demostrado en la conformación de la agrupación HIJOS en 1995 [203]- así como de alzar su propia voz en reclamo por sus derechos en tanto víctimas en la esfera pública. En este sentido, fueron los propios hijos quienes elevaron al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner su demanda por ampliar la categoría de víctimas que proponía el régimen reparatorio, para incluir los casos de niños que habían sido víctimas de detención así como de desaparición forzada, y que no estaban contemplados en las leyes 24.043/91 y 24.411/94 respectivamente. En lugar de modificar las leyes vigentes, fue enviado al Congreso un nuevo proyecto de ley, dirigido expresamente a la reparación de los hijos, creando de este modo un nuevo sujeto víctima al interior de las categorías preexistentes.

En su artículo 1°, así definió la ley 25.914/04 su población beneficiaria:

> Las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su situación judicial, podrán acogerse a los beneficios instituidos en la presente ley. Las personas que por alguna de las circunstancias establecidas en la presente, hayan sido víctimas de sustitución de identidad recibirán la reparación que esta ley determina.

Como puede observarse, los sujetos víctimas a quienes está destinada esta ley pueden distinguirse en dos extremos. Por un lado, a las personas que hubieran sido víctimas de sustitución de identidad, es decir, los niños apropiados; por otro lado, a las personas que hubiesen permanecido detenidos *en relación a sus padres*, entre quienes se contemplan aquellos niños que nacieron durante el cautiverio de sus madres.

[203] Para profundizar en la historia y modalidades de lucha del colectivo HIJOS, ver: Bonetto (2006), Bonaldi (2006).

Una primera cuestión que se desprende de aquí, es que las representaciones de los hijos en tanto sujetos de la reparación fueron construidas por analogía a las situaciones contempladas en las leyes precedentes. Al interior del universo de hijos, quienes fueron víctimas de sustitución de identidad ocuparon un lugar homolagable al asignado a los desaparecidos en la jerarquía de víctimas de los crímenes de Estado, mientras que los hijos que hubiesen permanecido detenidos se construyeron en espejo a la figura de los presos políticos en tanto víctimas.

Esta analogía produjo algunas consecuencias significativas, debido a algunos elementos de proximidad como de distancia respecto de sus antecesoras. Para comenzar, esta analogía operó como fundamentación de la determinación del monto de dinero a cobrar en cada caso. En este sentido, se estableció que a los hijos víctimas de sustitución de identidad les correspondía una indemnización equivalente a la fijada por la ley 24.411/94, mientras que a los casos restantes contemplados en el espectro de la ley se les pagó una suma equivalente a 20 veces la remuneración mensual del escalafón superior de la APN. Esta fue una fórmula similar a la utilizada en las indemnizaciones a los presos políticos, con la salvedad de que en lugar de asignar un determinado monto de dinero a cada día de detención, se utilizó un criterio de igualación para todos los hijos mediante un coeficiente único.

En cuanto a la homologación de las víctimas de sustitución de identidad con los desaparecidos, vale señalar que pese a la existencia de elementos que permiten postular esta analogía, hay un punto en el cual las representaciones que subyacen a ambas leyes presentan una divergencia. Mientras que los desaparecidos fueron representados estrictamente en su carácter de ausencia, en los casos de hijos apropiados víctimas de sustitución de identidad, se produce un movimiento respecto a ese modo de concebir la desaparición, dado que habiendo sido sujetos de desaparición forzada, estos hijos *aparecieron* tras la recuperación de su identidad. Es decir, se trata de una variante de la desaparición forzada que produce una presencia, modalidad que hasta entonces no había encontrado acogida en la constelación reparatoria.

Por otro lado, la homologación de los hijos detenidos en relación a sus padres con los presos políticos heredó muchas de las tensiones señaladas en el análisis de la ley 24.043/91, entre las que interesa destacar dos. Una de estas corresponde al modo de caracterización de las detenciones clandestinas, que ambas leyes enmarcan en la figura de detención a disposición del PEN o de tribunales militares, omitiendo de este modo que en la mayoría de las ocasiones se trató de secuestros llevados a cabo en condiciones de clandestinidad. La segunda tensión que comparten

ambos casos se refiere al establecimiento de un incremento indemnizatorio para aquellas víctimas que pudieran demostrar haber sufrido lesiones – que en el caso de los hijos, se amplió para contemplar no sólo las lesiones gravísimas como sucedía con los ex detenidos, sino también las lesiones consideradas graves- aspecto que será analizado en profundidad en el capítulo próximo.

En este marco, además de estos elementos preexistentes, hay un elemento en particular que surge con la propia "ley de hijos" y que resulta clave en la construcción de los distintos escalones en la jerarquía de hijos víctimas, más allá de la cúspide en la que son ubicados los hijos que crecieron con sus identidades cambiadas en el seno de familias apropiadoras. Se trata de la mención a los hijos "detenidos en relación a sus padres", y a las implicancias que se desprenden de este modo de construir a los sujetos de la reparación.

La idea de detención "en relación a sus padres" contribuyó a construir una representación de los niños como víctimas por extensión a la situación de sus padres, una suerte de daño subsidiario respecto de la experiencia que ellos protagonizaron. Si bien estos niños fueron efectivamente víctimas de la represión por estar a cargo de quienes fueron perseguidos por la dictadura militar, y en este marco sufrieron secuestros, detenciones ilegales y torturas, entre tantos otros vejámenes, esta práctica indemnizatoria no parece considerar como punto de partida la propia experiencia atravesada por los hijos. Por el contrario, el eje central parece ubicarse en el vínculo filiatorio que une al niño con sus padres detenidos o desaparecidos, y a partir de allí se avanza en la consideración de los hijos en tanto víctimas directas que llevan en sus cuerpos las marcas del circuito concentracionario. [204]

Así concebidos los hijos en tanto sujetos de la reparación, pronto se advierte que en rigor, esta práctica indemnizatoria no está dirigida al universo de "hijos de desaparecidos". Por el contrario, se circunscribe en particular a aquellos hijos que obedecen a la caracterización de víctimas directas, en tanto pasaron por los centros clandestinos, ya sea por haber sido ese su lugar de nacimiento como por haber sido llevados hasta allí en compañía de sus padres al momento de su detención. De esta manera, la representación de los hijos en tanto víctimas de la reparación está atravesada por un doble condicionamiento: la filiación respecto de sus padres por un lado, y a la vez, por la experiencia concentracionaria sufrida por sí mismos transcurrida durante la infancia.

[204] Es interesante señalar que en el terreno judicial se ha construido una representación afín, en la medida en que incluso cuando los niños fueron considerados víctimas emblemáticas, durante todo el período analizado en esta tesis no se han elevado a juicio casos de niños víctimas con excepción del delito de apropiación. La investigación en curso de Florencia Urosevich en relación a las prácticas represivas perpetradas sobre niños y niñas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo da cuenta de esta problemática.

Producto de esta categoría restrictiva, al igual que había sucedido al momento de la implementación de la ley dirigida a la reparación de los presos políticos, la autoridad de aplicación de la ley 25.914/04 comenzó a realizar interpretaciones ampliadas de la misma con el objetivo de alcanzar a un mayor número de beneficiarios. Es a partir de la "detención en relación a sus padres" que se abre la puerta a la flexibilización de la letra de esta práctica indemnizatoria.

Al mismo tiempo que esta caracterización aparece sobredeterminada por el vínculo, habilita la reflexión en torno a cuál es el significado de esta detención: "¿Con sus padres, en ocasión de la persecución de sus padres, a causa de la militancia de los padres?" (Goyochea et al., 2011, pp. 16-17). Más allá de esta imprecisión, se enuncia claramente que los hijos que se consideran sujetos de la reparación son aquellos que fueron detenidos en ocasión de la detención de sus padres. Emulando el recorrido de la ley 24.043/91, en la esfera de la implementación de la "ley de hijos" se fue construyendo una interpretación de esta detención en el marco de la tutela del derecho a la libertad. De esta manera, la privación ilegítima de la libertad de los hijos pasó a contemplar no sólo los casos en los cuales estos fueron llevados a centros clandestinos en circunstancias de la detención de sus padres, sino también otras modalidades en las cuales se había vulnerado su derecho a la libertad: así, el alcance de la ley fue ampliado para contener los casos de niños abandonados en espacios públicos, en sus propias casas, en los lugares en que se producían los secuestros de sus padres; al igual que los casos de niños que presenciaron dichos secuestros o inclusive asesinatos.

Pese a que esta interpretación amplió considerablemente el universo de casos amparados dentro de la ley 25.914/04, vale señalar que muchos hijos de desaparecidos continuaron quedando excluidos de sus definiciones. Como consecuencia, la "ley de hijos" sólo interpela a una determinada parte de los hijos de desaparecidos –aquellos que tuvieron algún nivel de contacto con el aparato represivo- y en el mismo acto, mantiene invisibilizadas una multiplicidad de situaciones atravesadas por quienes siendo también *hijos de*, no son reconocidos como tales de acuerdo a la práctica indemnizatoria bajo análisis:

> Hijos que sufrieron el cautiverio junto a sus padres; hijos que nacieron durante el cautiverio y fueron apropiados; niños que fueron institucionalizados como menores NN y luego recuperados por sus familiares; niños que no pudieron ser reconocidos pues nacieron durante la clandestinidad de la militancia de sus padres (y que debieron iniciar después juicios de filiación); niños que presenciaron el secuestro y/o asesinato de sus padres; niños que debieron huir de sus casas con su padre o su madre para resguardar su vida; niños que debieron

> exiliarse en otros países o provincias; niños que no presenciaron el secuestro o asesinato puesto que muchos militantes fueron secuestrados en la vía pública, en "citas"; niños que fueron asesinados durante los operativos; niños y adolescentes que sufrieron el cautiverio, la tortura y luego fueron asesinados; niños que fallecieron después de la desaparición y/o asesinato de sus padres (Goyochea et al., 2011, p. 22).

Desde esta perpsectiva, puede decirse como señalan los autores referidos, que la ley de hijos no es la ley de hijos. Tal como ocurre con otros universos de víctimas contemplados en las prácticas indemnizatorias, las representaciones que subyacen a esta ley construyen una jerarquía de víctimas al interior de los hijos. De este modo, producen un recorte que delimita sobre quiénes recae el llamado de la interpelación en tanto sujetos de la reparación, y quienes al no ser reconocidos en tanto tales, son colocados en una situación que podría definirse como de limbo en cuanto a su identidad al interior del universo de víctimas de los crímenes de Estado.

En el transcurso de este capítulo, se han analizado las representaciones de los sujetos de la reparación a quienes las prácticas indemnizatorias interpelan ideológicamente mediante la categoría de víctima, y que esta interpelación fue construyendo diversas jerarquías de víctimas en distintos niveles.

Una mirada de conjunto permite concluir que en todos los casos, las víctimas reconocidas como tales cumplen con al menos uno de los dos siguientes requisitos: por un lado, haber sufrido en sus propios cuerpos, o bien al interior de sus núcleos familiares, el accionar represivo de las fuerzas armadas; por el otro, haber estado en contacto con mayor o menor proximidad con el circuito de centros clandestinos de detención. Sin embargo, el lugar que ocuparon los sobrevivientes al interior de este universo tensiona esta caracterización, en la medida que incluso cuando reúnen ambos requisitos, su figura tiende a ser soslayada entre los sujetos de la reparación. Esta particularidad obedeció al hecho de que la propia figura del sobreviviente ha resultado compleja de asimilar al interior de los modos de comprensión hegemónicos de la experiencia represiva atravesada.

En tiempos de hegemonía de la teoría de los demonios, una doble sospecha recaía sobre las espaldas de los sobrevivientes: por un lado, la responsabilidad por sus propios secuestros, asociada a experiencias de militancia previas a la dictadura que habían sido calladas en aras de garantizar la inocencia de las víctimas; por el otro, la responsabilidad por haber sido liberados de los centros clandestinos de detención, bajo la sospecha de haber incurrido en traiciones o prestado

colaboración a los represores. En este marco, los sobrevivientes fueron una figura incómoda en la medida en que se convirtieron en mensajeros de lo sucedido al interior de los campos de concentración: habían vivido el horror del cautiverio, las torturas y las desapariciones, y habían vuelto de allí para contar esa experiencia cercana al infierno, que parecía haber abierto sucursales en infinitos rincones de nuestra tierra.

Junto con ello, los sobrevivientes se convirtieron ellos mismos en prueba viviente de dos procesos que producían perturbaciones en la sociedad posgenocida, que se encuentran íntimamente relacionados.

El primero de ellos se vincula con que encarnaban una historia previa a la dictadura, de la que ellos habían formado parte en una multiplicidad de formas, que los había hecho objeto de persecución, y que la dictadura se había propuesto aniquilar. Los sobrevivientes traían consigo las experiencias de determinados modos de ser y hacer en el mundo, de manera individual y colectiva, que habían querido ser borrados del horizonte de lo posible. Esas identidades previas producían perturbaciones dado que el terreno de la identidad había sido justamente lo que se había intentado transformar mediante el aniquilamiento y el terror. La disputa acerca de cuánto de esas identidades previas podían ser apropiadas como parte de sí misma por la sociedad posgenocida, y cúanto de ellas serían desconocidas, estuvo presente en la formulación de las prácticas indemnizatorias y pueden ser observadas al analizar sus representaciones, tarea que ha sido abordada en estas páginas.

Conjuntamente, el segundo proceso que la presencia de los sobrevivientes expresaba está relacionado con la permanencia y el alcance de las prácticas sociales genocidas en el conjunto social. Tras su cautiverio, los sobrevivientes reaparecieron en la sociedad –con todas las dificultades señaladas- como una parte integrante de la misma. Si la representación del desaparecido como víctima emblemática permitía situar la experiencia del aniquilamiento en el pasado, a la vez que considerar al conjunto social como ajeno a aquello que había ocurrido en el interior del circuito concentracionario, el sobreviviente recordaba con su sola presencia la actualidad y la capilaridad de la experiencia atravesada. Resultaba más difícil permanecer ajeno a un otro con el cual potencialmente se podía compartir un espacio de trabajo, un transporte público, una situación de esparcimiento; los sobrevivientes estaban *entre nosotros*, y nos revelaban que el genocidio había ocurrido entre nosotros también. Las representaciones analizadas en las prácticas indemnizatorias indican que el reconocimiento de los sobrevivientes

como víctimas fue parcial y tardío, evidenciando así las dificultades para la apropiación de esta experiencia como propia por parte del conjunto social.

Para finalizar, resta mencionar dos elementos que resultan comunes a todas las prácticas indemnizatorias analizadas, y que se consideran relevantes al momento de reflexionar en torno a las representaciones que las mismas contribuyen a construir en torno a la experiencia atravesada: se trata de la naturaleza individual y optativa con la cual se ha llevado a cabo su implementación.

En cuanto a su naturaleza individualizada, se ha mencionado que este es uno de los fundamentos sobre los cuales descansa la lógica del derecho civil en el que se inscriben las prácticas indemnizatorias, y en ese sentido, forma parte de las reglas del juego que las mismas heredaron del campo en el cual se conformaron. La naturaleza optativa de las mismas puede deberse a su vez con la factibilidad: ante la ausencia de un registro que contemple la totalidad de víctimas, resultó necesario que fueran las propias víctimas quienes se presentaran a solicitar ser incluidos entre los beneficiarios de las leyes reparatorias. Sin embargo, la conjunción de ambos elementos refuerza una interpelación ideológica con carácter fragmentario, en el cual la subjetividad de las víctimas resulta escindida de la dimensión social que la constituye. De esta manera, el sujeto de la reparación aparece atomizado, obturandose así la posibilidad de articular la reparación económica con las identidades colectivas que permanecen inobservadas en las representaciones de los sujetos de la reparación.

Las representaciones acerca de las víctimas analizadas hasta aquí, se articulan con un último conjunto de representaciones que subyacen a las prácticas indemnizatorias que se abordan en esta tesis: aquellas relativas al daño que las mismas se proponen reparar. Si bien la noción de daño resulta fundamental en toda medida reparatoria, a primera vista, esta no aparece más que en relación con determinados delitos perpetrados sobre las víctimas: la detención arbitraria, la desaparición forzada, el asesinato, la apropiación y sustitución de identidad, tal como ha quedado evidenciado a lo largo de este capítulo. Sin embargo, resulta indispensable despejar cuál es la representación del daño que subyace a estos delitos para iluminar la concepción de daño que se ubica en la base de las prácticas indemnizatorias. A esta tarea me abocaré en el próximo capítulo.

Capítulo 7

Las representaciones sobre el daño a reparar en las prácticas indemnizatorias

En este capítulo se aborda el interrogante en torno a *qué se repara* –o cuánto menos, que es lo *que se intenta reparar*- mediante las prácticas indemnizatorias, a partir de un análisis de las representaciones sobre el daño que subyacen a las leyes reparatorias relevadas. Así planteado, este interrogante encierra el corazón de toda práctica reparatoria, en la medida en que nace de una concepción de qué es lo que ha sido dañado por los crímenes de Estado y requiere por lo tanto de una reparación –en este caso, pecuniaria. En las páginas que siguen se presentará un recorrido por las respuestas que brindan las prácticas indemnizatorias ante la pregunta acerca de cómo se conciben los daños a reparar, y con ello, contribuyen a la construcción de determinadas representaciones acerca de lo sucedido en el marco del proceso genocida.

Autores clásicos de las ciencias sociales han abordado la pregunta acerca del daño producido por el quiebre del lazo social (Durkheim, 2004), así como por la ruptura del contrato social, en el cual la teoría política clásica ubica el origen del orden social (Hobbes, 2013; Locke, 2004; Rousseau, 2004). Desde la perspectiva propuesta en esta tesis, la caracterización de la experiencia argentina como un genocidio permite asimismo situar la pregunta por el daño en el terreno de la destrucción/transformación de los lazos sociales. Sin embargo, al analizar las representaciones del daño que permean a las prácticas indemnizatorias, pronto se advierte que las mismas no se construyen a partir de una caracterización global del proceso represivo –como es el caso del genocidio-; por el contrario, se presentan para el análisis como determinados delitos perpetrados sobre las víctimas, construyendo así una representación del daño en términos individuales que parece dejar por fuera su dimensión social.

Este hecho no es casual, en la medida en que de acuerdo a la conceptualización propuesta, las prácticas reparatorias en general, así como las prácticas indemnizatorias en particular, se sitúan en el terreno del aparato de Estado jurídico político, y en este sentido, es del ámbito del derecho del cual recogen la concepción de daño que les resulta propia. No obstante, dada la dificultad para enmarcar los daños producidos por los crímenes de Estado en este andamiaje particular, la noción de daño a reparar se fue complejizando para contemplar algunos elementos que a la vez que lo tensionan, permiten un acercamiento a la dimensión social del daño, que parece estar ausente de la perspectiva jurídica.

A modo de punto de partida para este recorrido, vale señalar que la obligación de no dañar puede considerarse un principio ancestral sobre el cual se organiza la convivencia en sociedad, y como tal, constituye uno de los fundamentos sobre los cuáles se erige todo ordenamiento jurídico. Es en este orden jurídico en donde cristalizan los modos en que al interior de cada sociedad, se construyen respuestas para afrontar las situaciones en las cuales el daño se produce.

Desde esta perspectiva, las denominadas reparaciones económicas se inscriben en la lógica de la justicia civil, más precisamente en la esfera del llamado *derecho de daños*, rama del derecho que regula la obligación de reparar los daños producidos por las personas cuando se comportan de manera contraria a la ley, ya sea voluntaria o involuntariamente. En este sentido, se entiende que la acción humana que infringe las normas que configuran el basamento de la comunidad, no sólo produce un daño sobre un otro, sino que daña a su vez a la comunidad toda, al quebrantar las reglas que la constituyen como tal. Paralelamente a la obligación de reparar el daño, surge entonces la noción de responsabilidad civil, que alcanza a quien hubiera ocasionado el daño, quien debe responder por su conducta.

Entre los supuestos que fundamentan esta concepción, se destaca el concepto de sujeto de derechos, noción ideológica de la categoría de sujeto propia de la ideología jurídica, que considera la persona individual como sujeto jurídico, vinculado a la comunidad conformada por otros sujetos que se conciben todos ellos como "libres e iguales", en reciprocidad de derechos y obligaciones. Desde esta perspectiva, la existencia de un daño es asociada con la ruptura de un contrato entre partes iguales que la reparación intentará restablecer. Esta particularidad a la que responde la lógica del derecho civil es una primera tensión que se observa en los casos de crímenes de Estado; asumiendo que dicha ruptura se produjo, resulta manifiesta la asimetría en la relación entre el Estado y el sujeto de derechos sobre el cual fuera perpetrado el daño.

En sus orígenes, la conformación de un ordenamiento jurídico y su consecuente noción de daño, supuso la sustracción de las acciones tendientes a la reparación de la esfera personal de un individuo, al interior de la cual la reparación de las lesiones infligidas se asociaba principalmente a la noción de venganza. Progresivamente, la noción de venganza fue siendo desplazada del centro de la escena, y la máxima del "ojo por ojo" que rezaba la Ley del Talión fue reemplazada por marcos reguladores de estas prácticas, en los cuales muy tempranamente apareció la

reparación pecuniaria como respuesta apropiada frente a los daños ocasionados. [205] En este sentido, desde la antigüedad el hombre ha admitido que un daño sufrido podía dar lugar a una reparación en dinero, y esta concepción fue trasladada a la estructura jurídico-política del Estado moderno.

El ordenamiento jurídico argentino se hace eco de esta concepción, en tanto el Código Civil define el daño de la siguiente manera:

> Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades (C.C., art. 1068).

Esta definición se acompaña estableciendo que el resarcimiento de daños implica la reposición de lo dañado a su estado anterior, y en los casos en que esto resultara imposible, obliga al otorgamiento de una indemnización que debe fijarse en dinero. Este señalamiento resulta relevante en la medida en que los daños producidos por los crímenes de Estado integran a las claras este universo de daños que no pueden restituirse al estado anterior a la comisión del delito, tal como fuera desarrollado con mayor profundidad en el capítulo dos. A su vez, de lo anterior se desprende que las leyes reparatorias constituyen una respuesta que el Estado argentino no puede evadir, ante la obligación de indemnizar a las víctimas de los crímenes que otrora cometió.

En el marco de estos señalamientos, el alcance de la reparación en dinero se ha ampliado históricamente de una noción referida exclusivamente al daño inferido a la persona física, para abarcar en su seno otras formas de ofensa, tales como el honor o la dignidad de la persona. Si bien se trata de diferentes tipos de bienes jurídicos que se intenta proteger, la esfera de influencia de la reparación de carácter económico abarca tanto los daños patrimoniales –entendidos como aquellos que repercuten tanto en la integridad física del sujeto como en sus bienes- como los daños extrapatrimoniales -entre los que cuentan aquellos concebidos como daños morales, daños psicológicos, daños al proyecto de vida y daños a la vida en relación, entre otros (García Mendieta, 1984; Sessarego, 1996; Siri, 2011). Estos diferentes tipos de daños se han conjugado de un modo particular para resignificar el daño jurídico en el terreno de los daños producidos por los crímenes de Estado.

En el caso argentino, se ha identificado un campo particularmente fértil para dar cuenta de esta resignificación: se trata de la reparación de las lesiones, una figura específica que alcanza a la

[205] Para profundizar en los antecedentes históricos que evidencian la existencia de respuestas jurídicas de carácter indemnizatorio para la reparación de los daños desde la Antigüedad, ver: García Mendieta (1984).

reparación de las víctimas que se corresponden con una concepción ampliada de aparición, beneficiarios de las leyes 24.043/91 y 25.914/04. Desde este punto de partida, el recorrido propuesto para este capítulo comienza en el apartado uno con el análisis de las representaciones del daño que subyacen a la reparación de las lesiones. Los desplazamientos allí identificados se consideran indicadores de los cambios en las representaciones del daño en el ámbito de las prácticas indemnizatorias en el cual las lesiones se inscriben. En el apartado dos se caracterizarán estos desplazamientos, los cuales indican un creciente predominio de la noción de daño psicológico entre las dimensiones que componen el daño jurídico, así como el posterior surgimiento de la noción de *daño subjetivo* en el seno de las representaciones del daño a reparar. Para finalizar, en el apartado tres se presentarán algunas consideraciones que surgen de la reflexión en torno de las relaciones sociales vulneradas entendidas como daño producido por los crímenes de Estado. Esta interpretación permite reinstalar la pregunta por el daño a reparar en el marco de la perspectiva que caracteriza el caso argentino como un genocidio reorganizador, de acuerdo al cual la experiencia represiva tuvo por objetivo la reconfiguración de los vínculos sociales.

1. La reparación de las lesiones y los desplazamientos en torno del daño a reparar

Las leyes 24.043/91 y 25.914/04, dirigidas a la reparación de los "ex detenidos" y los "hijos" respectivamente, establecieron el otorgamiento de un incremento en la indemnización a percibir en los casos en que las víctimas hubieran sufrido lesiones graves o gravísimas como consecuencia del daño presupuesto en la reparación económica. La incorporación de este elemento obedece a la conceptualización del daño propia del derecho civil, que tal como se ha señalado, requiere de su mensura, aspecto que resulta particularmente controversial en los casos de los crímenes de Estado.

Entre las particularidades que asume la mensura de los daños a reparar, se destaca que la ley 24.043/91 dispuso la asignación de un determinado monto de dinero por cada día que duró la detención arbitraria, lo que produjo una interpretación que asocia a mayor cantidad de días de detención, un mayor daño causado a las víctimas, y por lo tanto, un monto superior de dinero para llevar adelante la reparación. [206] En cuanto a la mensura de aquellos daños concebidos en

[206] La contabilización de los días de detención trajo aparejada en muchos casos, la dificultad en torno a la acreditación del lapso que había durado la detención. En este sentido, entre los medios de prueba para la acreditación de la detención arbitraria así como del lapso indemnizable, la ley requería la presentación del acto administrativo del

tanto lesiones, fue necesario construir un dispositivo específico capaz de llevar adelante la evaluación de las mismas: las *juntas de evaluación de daños*. En este marco, este apartado tiene por objetivo analizar las representaciones acerca del daño que se construyen en el terreno de las lesiones, atendiendo en especial a sus transformaciones al interior de este dispositivo particular.

La referencia a las lesiones en la legislación reparatoria remite a los artículos 90 y 91 del Código Penal, en los cuales se definen las lesiones graves y gravísimas respectivamente. [207] De acuerdo a los mismos, son consideradas *lesiones graves* aquellas que produjeron una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro; o pusieran en peligro la vida, o hubieran incapacitado temporalmente a la víctima para el trabajo. Por su parte, las *lesiones gravísimas* corresponden a aquellas que ocasionaron una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable; la inutilidad permanente para el trabajo, la disfunción crónica, así como la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir.

Estas lesiones graves o gravísimas según correspondan no constituyen el daño primario que las prácticas indemnizatorias pretenden reparar, sino que se trata de daños que se han producido en consecuencia de los hechos de violencia sufridos. Esto da lugar a una representación del daño producido por las lesiones como secundario o subsidiario frente a un daño principal que constituye el objeto de la indemnización. Esta concepción se ve reforzada por el hecho de que el incremento a percibir por estas lesiones forma parte de un segundo momento en el circuito de las leyes reparatorias, posterior a la constatación de la condición de víctima de los crímenes por los cuales se solicita la reparación. Es decir, que luego de acreditada la condición de víctima, esta es quien debe decidir si avanzar en el pedido de incremento por lesiones, o si por el contrario, es su elección no formar parte de este segundo momento de acreditación de daños sufridos. En igual

---

Poder Ejecutivo que hubiera decretado la medida o el arresto efectivo no dispuesto por orden de autoridad judicial competente, así como el acto que lo hubiera dejado sin efecto. El decreto reglamentario 1023/92 especificó que serían aceptados: a) Copia de la presentación del recurso de hábeas corpus y de la sentencia recaída en el mismo; b) informes o constancias emanadas de autoridad competente; c) Documentación obrante en el expediente judicial. Años más tarde, el decreto nº 205/97 dispuso la flexibilización de estos medios de prueba, estableciendo que en los casos en que la prueba producida resultara insuficiente, la detención podría acreditarse mediante declaración judicial.

[207] La ley 24.043/91 indica que en caso de haber sufrido *lesiones gravísimas*, el beneficio a percibir será de un 70% al que corresponde para quienes hubieran fallecido durante el lapso de tiempo que duró la detención arbitraria, teniendo en cuenta que el hecho de la muerte eleva la indemnización a una suma equivalente a la prevista para 5 años de vigencia de dicha detención. En el mismo sentido, la ley 25.914/04 establece un incremento del 50% y 70% en la indemnización de las víctimas que hubieran sufrido *lesiones graves o gravísimas*, respectivamente. Vale mencionar que ante la ausencia de reglamentación de la ley 25.914/04, esta práctica reparatoria *heredó* de su antecesora ley 24.043/91 el modo de creación y funcionamiento de las juntas de evaluación de daños. Por lo tanto, salvo que se mencione expresamente la existencia de algún elemento que las distinga, todas las consideraciones en torno a las juntas médicas que nacieron con la primera, pueden ser extrapolables al universo de la "ley de hijos". Estos señalamientos alcanzan también a la implementación de la ley 26.564/09, en tanto ampliatoria de la ley 24.043/91.

sentido, el cobro del beneficio previsto en la ley reparatoria no se pone en cuestionamiento al momento de evaluar la solicitud del incremento indemnizatorio en virtud de las lesiones graves o gravísimas.

Entre las características centrales que asumen estos daños –conceptualizados como lesiones-, se destaca que los mismos se ubican en el terreno de la salud –ya sea salud física o salud mental-, y en este sentido, la posibilidad de su reparación viene atada a la posibilidad de comprobar la disminución o pérdida de un conjunto de elementos que hacen al estado de salud de la víctima de los crímenes de Estado. Este hecho acarrea dos consecuencias de importancia.

En primer lugar, este señalamiento traslada la pregunta hacia el lugar que ocupa la salud de las víctimas al interior del universo reparatorio. He señalado que las prácticas de rehabilitación que contemplan la atención médica y psicológica a las víctimas, no formaron parte del repertorio de la reparación hasta entrado el año 2007. Consecuentemente, al momento de la formulación de los instrumentos que contemplan la necesidad de evaluación de daños físicos y psicológicos, la rehabilitación de las víctimas se encontraba ausente de los objetivos que perseguían las prácticas reparatorias. Ello implicó que inicialmente, el ámbito de las lesiones se situara exclusivamente en el terreno de la mensura de los daños perpetrados por los crímenes de Estado, en consonancia con el espíritu de las prácticas indemnizatorias. No obstante, la incorporación de las prácticas de rehabilitación al universo de la reparación a partir de la profundización de su integralidad hizo eco en el modo de concebir e implementar la evaluación de los daños, transformando este dispositivo y otorgandole tintes que pueden identificarse con la rehabilitación, tal como profundizaré más adelante en este apartado.

La segunda consecuencia que se desprende de la necesidad de constatación de los daños en salud porducidos por la violencia estatal, es que esta verificación no puede suceder de manera automática, sino que requiere de un saber experto, capaz de acreditar fehacientemente las lesiones sufridas por las víctimas y las consecuencias que estas acarrean en su estado de salud. [208] Para ello, la legislación reparatoria dispuso la creación de un dispositivo conformado por profesionales

[208] La reglamentación de la ley 24.043/91 estableció un conjunto de medios de prueba para la acreditación de las lesiones gravísimas contempladas en la misma. Entre ellos, la historia clínica del lugar de detención; la sentencia judicial que las haya tenido por acreditadas; la historia médica o clínica con fecha correspondiente al lapso del beneficio emanada por institución de salud oficial, y la realización de juntas médicas en hospitales públicos creadas con el fin específico de acreditar los daños sufridos por las víctimas de los crímenes de Estado. En la práctica, si bien algunas víctimas optaron por presentar la certificación proveniente de los hospitales en los cuales se atendían, la solicitud de realización de juntas médicas fue el medio de prueba por excelencia mediante el cual las víctimas accedieron a la acreditación necesaria para el otorgamiento del incremento por lesiones. El mismo criterio primó para la acreditación de las lesiones graves y gravísimas contempladas en la ley 25.914/09.

de salud, que se consideran capacitados para llevar a cabo esta tarea, el cual se conoce con el nombre de *junta médica de evaluación de daños.* A continuación se presentará la reconstrucción del modo de funcionamiento de este dispositivo, producida sobre la base del análisis de documentos y entrevistas realizadas a informantes clave, tarea que resulta fundamental para avanzar en el análisis de las representaciones del daño que se construyen en su seno.

1.a) Acerca de las juntas de evaluación de daños

En una primera caracterización de este dispositivo, puede observarse que las juntas médicas no se nominan en singular: no existe una única junta médica, ni tampoco presenta un funcionamiento permanente ni unificado. Por el contrario, se trata de una multiplicidad de juntas médicas, cuya realización tiene lugar cada vez que una víctima solicita el incremento previsto en las leyes reparatorias que así lo estipulan. Potencialmente, llevando esta caracterización al extremo, podrían existir tantas juntas médicas como víctimas soliciten ser evaluadas para la acreditación de lesiones. Sin embargo, con el correr del tiempo, la realización de juntas médicas ha tendido a evolucionar en el sentido de cierta unificación de sus criterios que permitan garantizar una base de funcionamiento común a todas ellas.

La primera de las leyes en contemplar la existencia de lesiones gravísimas entre los componentes que conforman el monto indemnizatorio a percibir fue la ley 24.043/91. Desde los inicios de su implementación, ello conllevó la celebración de convenios con hospitales nacionales por parte del Ministerio del Interior –en cuya órbita se situaba por entonces la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales-, con el objetivo de garantizar la conformación de las juntas médicas que pudieran brindar la certificación correspondiente a la evaluación de lesiones. Por ende, tanto la constitución como el modo de funcionamiento de estas juntas formaron parte de la autoridad de aplicación de las leyes reparatorias para con las víctimas que solicitaban la indemnización por daños físicos y psicológicos.

En este punto, interesa destacar que la vinculación entre el organismo estatal responsable de la implementación de las prácticas indemnizatorias –que fue cambiando su ubicación en el organigrama estatal- y el sistema público de salud presentó diversas formas institucionales en distintos períodos, pero fue una de las constantes que caracterizaron el funcionamiento de este dispositivo. Durante el período de tiempo que esta tesis analiza, esta vinculación institucional tomó centralmente la forma de diversos convenios entre instituciones de salud pública –

municipales, provinciales o nacionales- y el organismo a cargo de la implementación de las leyes reparatorias –el Ministerio del Interior primero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos después-. Adicionalmente, a partir del año 2011 fueron incorporados a esta red de salud el Ministerio de Salud de la Nación y la Cancillería, quienes en articulación con los Consulados tienen a su cargo la realización de evaluaciones de daños a residentes en el exterior. Estas evaluaciones se realizan vía videoconferencia, y su realización fue destrabada a partir de la aceptación de las testimoniales virtuales en el marco de los juicios contra los responsables del genocidio. Este punto evidencia otro aspecto en el cual las prácticas de juzgamiento y las prácticas indemnizatorias presentan una influencia recíproca. Previo a esta incorporación de las plataformas virtuales como medio de realización de las evaluaciones, sólo podían ser evaluadas las personas que pudieran presentarse personalmente en los establecimientos de salud en el territorio nacional.

Asimismo, este señalamiento es indicador de la imbricación entre las prácticas indemnizatorias y las prácticas de rehabilitación, vinculación que ya estaba planteada desde el momento en que las leyes reparatorias fueron sancionadas, pero en cuyo devenir se fue transformando, transformación que contribuyó a su vez a la construcción de representaciones diferenciales acerca del daño a reparar, que se irán desarrollando a continuación.

Volviendo entonces al funcionamiento de las juntas médicas, las mismas se ponían en marcha con el requerimiento de la víctima por ser evaluada. A partir de allí, se derivaba su solicitud a un establecimiento de salud –situado de ser posible, en las cercanías del domicilio del solicitante- en el cual debían reunirse al menos tres profesionales de la salud para la conformación de la junta médica que efectuara la evaluación de cada caso particular.

Una de las características que acompañó a estas juntas durante todo el período analizado en esta tesis, es que los médicos convocados a integrarlas no son parte de un dispositivo estable o permanente sino por el contrario, estos fluctúan al calor de los vaivenes que experimentan los planteles de profesionales de los servicios de salud en las instituciones públicas. En un sentido similar, las evaluaciones de daños producidos por crímenes de Estado se realizan de manera simultánea con el resto de sus tareas corrientes, que los profesionales deben cumplir en el marco de sus horarios y lugares de trabajo habituales. Como consecuencia, el proceso bajo análisis suele presentar demoras significativas, en la medida en que la disponibilidad de los servicios para la realización de tareas extraordinarias suele ser restringida, estando en el orden de los tres años el

mínimo de tiempo estipulado que transcurre para que la evaluación de daños requerida pueda llevarse a cabo. Pese a que como se viene anunciando, es posible identificar cambios significativos en algunos aspectos centrales en torno al funcionamiento de las juntas médicas, las particularidades señaladas se mantuvieron a lo largo del tiempo.

En este sentido, la creación del Centro Ulloa en el año 2009 se considera un punto de inflexión en las prácticas vinculadas al funcionamiento de las juntas médicas, y a su vez, en las representaciones del daño a reparar que subyacen a las prácticas indemnizatorias en las cuales estas se enmarcan. Un dato que abona esta hipótesis es que a partir del año 2010, y de manera mucho más significativa a partir del año 2011, comienzan a aparecer en los registros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la firma de resoluciones que dan cuenta del otorgamiento del incremento por lesiones a los beneficiarios de las leyes 24.043/91 y 25.914/04, situación que no se ha constatado con anterioridad. [209] La existencia de estas resoluciones abocadas específicamente al pago de la ampliación indemnizatoria, indica que el mismo no fue requerido en el momento de apertura del expediente, dando cuenta de una segunda instancia en la que fue solicitado el pago adicional por lesiones, toda vez que el circuito administrativo indica la emisión de un decreto de pago único para cada uno de los expedientes en trámite. [210] En principio, esto evidencia que algunas víctimas que no habían pedido inicialmente ser evaluadas para la constatación de daños, cambiaran su parecer, solicitando el desarchivo de su expediente. Sin intenciones de analizar las motivaciones individuales que sustentan la elección de cada una de las víctimas, se vuelve necesaria la pregunta por cuáles fueron los desplazamientos en las prácticas estatales que permitieron alojar una demanda que hasta el momento no había encontrado lugar al interior del Estado.

Y aquí, hay dos elementos que aparecen como relevantes en la construcción de una respuesta a esta pregunta.

Por un lado, el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas ocupa un lugar central tras el impulso a las prácticas de juzgamiento que se puso en marcha a partir del año 2006. Estos

[209] Esta situación fue registrada por primera vez en el año 2010, durante el cual las resoluciones abocadas al pago del incremento por lesiones correspondían al 2.03% del total de resoluciones firmadas, porcentaje que fue ascendiendo sostenidamente hasta alcanzar al 15.86% del total en el año 2015.

[210] Este criterio se vio modificado a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.913/13, que otorga una pensión graciable a las víctimas contempladas en las leyes 24.043/91 y 25.914/04, entre otras. Dado que la condición de beneficiario de las citadas leyes habilita el derecho a percibir dicha pensión, las autoridades optaron por sugerir la tramitación del incremento por lesiones en una instancia posterior, con el objetivo de agilizar el acceso al beneficio de la asignación mensual prevista.

daños que habían permanecido en la esfera privada de cada una de las víctimas, comienzan a tomar estado público una vez comenzados los procesos judiciales. En este marco, empieza a vislumbrarse la posibilidad de ofrecer una escucha hacia voces que habían estado silenciadas durante muchos años: comienzan a surgir en el propio seno del Estado, una multiplicidad de espacios no exentos de dificultades, en los cuales se hace lugar para las experiencias atravesadas por las víctimas desde una perspectiva anclada en el reconocimiento de lo vivido. En el marco de estas transformaciones, puede postularse que la posibilidad de exposición de ese sufrimiento en tanto objeto de observación y mensura al momento de las evaluaciones de daños puede cobrar un sentido diferente.

Y muy atado a lo anterior, la propia conformación del Centro fue consecuencia de haber identificado la necesidad de brindar a las víctimas un marco de contención psicológica, que se tornaba imperioso ante el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, y formalizó el trabajo que había empezado a delinearse años atrás, con la creación del *Programa* "*Consecuencias actuales del terrorismo de Estado"* primero, y con el *Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado* poco después, durante 2006. Pero sobre todo, fue a partir de la constitución del Centro Ulloa que comenzaron a desplegarse un conjunto de prácticas tendientes a inscribir la reparación de los daños contemplados en las prácticas indemnizatorias en una perspectiva integral, y es en esta tendencia donde pueden ubicarse las transformaciones acontecidas en las juntas de evaluación de daños.

En el próximo apartado, se presentarán las prácticas implementadas desde el Centro Ulloa vinculadas a las juntas médicas de evaluación de daños, las cuales contemplan la capacitación, el seguimiento y la supervisión del accionar de las juntas médicas. Estas prácticas permitirán iluminar la impronta que le fue otorgada a la tarea de evaluación de las lesiones, así como la consecuente resignificación del daño a reparar que configura el eje central de este proceso. Como se profundizará a continuación, parte fundamental de esta resignificación persiguió el propósito de desligar la evaluación de las lesiones del terreno de la revictimización, para inscribirlas en el ámbito del reconocimiento y la rehabilitación. Asimismo, esto implicó un desplazamiento hacia una concepción de acuerdo a la cual la subjetividad de la víctima pasó a ocupar un lugar central en esa configuración.

1.b) La intervención del Ulloa en las evaluaciones de daños

La intervención del Centro Ulloa en la materia bajo análisis emana de las funciones que le fueron encomendadas desde el momento de su conformación, entre las que cuentan la capacitación a los equipos de salud que integren las juntas médicas que se reúnan para la evaluación de las lesiones previstas en las leyes 24.043/91 y 25.914/04, así como la supervisión de su actuación. [211] A partir de entonces, y pese a las dificultades que implicaban la dispersión y discontinuidad de los profesionales que conformaban la red pública que ya se encontraba realizando las evaluaciones en todo el territorio nacional, la capacitación en salud mental y derechos humanos se constituyó en uno de los pilares de las tareas desarrolladas por el Ulloa. Su objetivo central fue brindar a los profesionales a cargo las herramientas que les permitieran abordar la singularidad de los daños a evaluar, para lo cual resultaba imprescindible la formación teórico-práctica para los equipos asistenciales. [212]

Un aspecto significativo acerca de la intervención del Centro Ulloa, es que la misma supuso el traspaso bajo su órbita de todas las prácticas involucradas en la tramitación de la evaluación de las lesiones, que hasta su entrada en escena, suponía la derivación hacia servicios psiquiátricos –para la evaluación de los daños psicológicos- y servicios médicos –para la constatación de daños físicos. Esto supuso no sólo un nuevo modo de abordar las evaluaciones en torno a los daños psíquicos, sino que alcanzó también a los daños físicos que requieren de constatación para acceder al incremento indemnizatorio. En este sentido, es posible plantear como hipótesis una creciente psicologización del daño a reparar, en la medida en que la centralización de las evaluaciones bajo la órbita del Ulloa supuso una mirada hacia los daños en perspectiva psicológica que contempló a los daños tanto físicos como psicológicos a evaluar.

Esta hipótesis se ve robustecida a la luz de la preocupación manifiesta por parte de la institución por los efectos que puede producir la implementación de la ley para las víctimas, en tanto

[211] En un principio, mediante Res. MinJus nº 621/11 se facultó al Centro Ulloa a "realizar por sí o a coordinar con efectores públicos la instrumentación de las Juntas Médicas requeridas para la evaluación de lesiones en los términos de las leyes 24.043/91 y 25.914/04. La Res. MinJus n° 1118/2014 modificó esta atribución, circunscribiendo la órbita de actuación del Centro Ulloa a la supervisión y capacitación de dichas Juntas.

[212] A partir de la creación del *Programa Consecuencias actuales del terrorismo de Estado*, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación bajo la dirección de Eduardo Duhalde (2003-2012) fueron elaborados una cantidad significativa de documentos institucionales a los fines de capacitar a los profesionales de la salud mental que cumplían funciones en las diversas tareas al interior de la SDH. Dado que estos cuadernillos fueron material central en la formación llevada a cabo por el Centro Ulloa dirigida a los profesionales a cargo de las evaluaciones de daños requeridas por la legislación reparatoria, su contenido forma parte de la reflexión que guía el análisis a presentar en estas páginas.

considera insoslayable el impacto de lo jurídico sobre la subjetividad, preocupación que se fundamenta de la siguiente manera:

> Toda vez que la letra de la ley toca la historia de un sujeto, las consecuencias se juegan en el cuerpo, porque la ley toca su verdad, su intimidad. Debemos saber que estos trámites ponen en marcha, reactualizan un trabajo de historización del sujeto, que al presentarse a dar testimonio de su condición de víctimas volverán a enfrentarse con estos episodios traumáticos. Lo reparatorio en estos casos no es en relación al pago con el que el Estado indemniza a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino en relación al acompañamiento que significa reconocer los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero, sobre todo habiéndose tomado ya en las diferentes instancias reconocidas por el Estado (SDH, 2006, p. 35).

Con esta preocupación como horizonte, comenzaron a construirse los lineamientos a seguir en la tarea de formación dirigida desde el Centro Ulloa. [213]

Vale mencionar que las modificaciones introducidas por la ley 26.657/10 de Salud Mental resultaron significativas para las tareas planteadas. Por un lado, a la luz de la nueva legislación fue reinterpretado el concepto de "incurabilidad" aludido en la definición de lesiones gravísimas del Código Penal, que pasó a incorporar nociones como la concepción multicausal de la salud, y la permanencia en el tiempo del daño ocasionado, en oposición al daño de por vida. Pero además, esta ley modificó la regulación general de las juntas médicas, promoviendo la creación de equipos interdisciplinarios para la atención en salud mental. Ello implicó que profesionales de las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, entre otras disciplinas, pasaran a formar parte de las juntas de evaluación de daños, hasta entonces conformados mayoritariamente por profesionales médicos.

Desde esta perspectiva, la premisa que atravesó las tareas de formación encaradas desde el Ulloa fue la importancia de situar las evaluaciones de daños en el marco de las prácticas reparatorias, y por lo tanto, la consideración de la propia evaluación como un instrumento que persigue la reparación se constituyó como el eje ético que sirvió de guía a este proceso. Con esta impronta, el trabajo coordinado por el Centro llevó a la conformación de alrededor de treinta y cinco equipos

[213] Un primer paso en este camino fue la realización de una *consulta a expertos* en torno a los procedimientos, criterios y métodos que permitieran interpretar y mensurar el daño en salud de acuerdo a los parámetros vigentes en derechos humanos Los expertos que participaron de la consulta fueron el Lic. Leonardo Gorbacz, la Lic. Alicia Stolkiner, y la Dra. Gabriela Stortone, profesionales de amplia y reconocida trayectoria en el campo de la salud mental y los derechos humanos.

dentro del sistema público de salud para la realización de juntas médicas de evaluación de daños, conformando una red federal de salud abocada a la tarea de evaluación de daños prevista por la legislación reparatoria. En este proceso de federalización de las tareas que le competen al Centro Ulloa, se han constituido delegaciones en algunas provincias, así como se ha impulsado el trabajo en articulación con los representantes provinciales del Consejo Federal de Derechos Humanos.

La capacitación que brinda el Centro Ulloa a los equipos interdisciplinarios que actúan en las distintas jurisdicciones consta de dos o tres encuentros iniciales –dependiendo de las particularidades y necesidades de cada uno de los equipos-, en los cuales se trabaja centralmente en la dimensión reparatoria que implica el encuentro de las víctimas con los agentes estatales, y la importancia de abordar la realización de las juntas médicas desde una perspectiva de derechos humanos. Pero además, las capacitaciones dirigidas a los equipos de salud también incluyen información acerca de aspectos técnicos y requerimientos administrativos de las evaluaciones de daños en el marco de la legislación reparatoria. Luego de esta capacitación inicial, el Centro Ulloa continúa realizando la supervisión y el seguimiento de la actuación de las juntas médicas, pudiendo disponer de capacitaciones adicionales para los profesionales de salud cuando la circunstancia lo amerite. [214]

En este sentido, la vinculación entre el Centro Ulloa y los equipos de salud no se agota en la capacitación en salud mental y derechos humanos. Una segunda práctica implementada a partir de que las juntas médicas pasaron a formar parte de sus atribuciones, tiene que ver con la unificación de los criterios que guían la realización de evaluaciones de daños. Con este propósito fue elaborada una *"Guía de pautas para la realización de Juntas Médicas",* que se considera un instrumento central en el camino de revertir la disgregación con la cual se habían realizado las evaluaciones anteriormente. Hasta entonces, la nota de derivación hacia los establecimientos de salud para la evaluación de las lesiones, venía acompañada de un breve punteo de preguntas que debían completarse con el objetivo de encuadrar la sintomatología de la víctima en el marco de los requerimientos de la ley.

[214] En este punto, debe mencionarse que la supervisión de lo actuado por las juntas médicas también forma parte de las atribuciones que le competen al Centro Ulloa. Esta supervisión contempla dos aspectos. Por un lado, refiere al pedido de ampliación y/o aclaración sobre el caso evaluado cuando este lo amerite, por parte de la autoridad de aplicación de la ley. Pero además, el circuito administrativo que sigue cada uno de los expedientes de leyes reparatorias en el cual tramitan los pedidos de incrementos por lesiones, requiere de la supervisión formal del Centro Ulloa, quien valida los informes realizados por las múltiples juntas médicas, previo al dictamen en el cual se otorga o rechaza la solicitud del incremento indemnizatorio por daños graves o gravísimos, según corresponda.

A partir de la intervención del Ulloa en el ámbito de las juntas médicas, el propósito de la guía de pautas fue establecer los lineamientos básicos para su realización. Entre ellos, la guía se expide acerca del requisito de inclusión de un profesional de la salud mental en el equipo interdisciplinario a cargo de la evaluación, da cuenta de la importancia del consentimiento informado del solicitante [215], y establece las características y el contenido que debe contemplar el informe escrito en donde sean vertidas las conclusiones a las que arribe la junta médica [216].

Entre los aspectos relevantes que se mencionan en la guía, se destaca la consideración de la entrevista como la herramienta apropiada para la realización de la evaluación. Profundizando en este instrumento, se hace hincapié en que la entrevista no debe incurrir en prácticas revictimizantes, mencionando expresamente la importancia de no realizar una indagación directa que obligue a la víctima a relatar escenas traumáticas que no se hubieran incluido de modo espontáneo en el desarrollo de la entrevista. En la misma línea, se sugiere la realización de entrevistas ampliatorias, en los casos en que durante un primer encuentro no sea posible evidenciar la existencia de los daños contemplados en la legislación. Finalmente, se precisan las dimensiones individuales, laborales y vinculares como aspectos a considerar durante el desarrollo de la entrevista, con el objetivo de ponderar el daño en salud producido por los crímenes de Estado. Este elemento apunta a las consecuencias que las lesiones acarrearon para el sujeto en el mundo de relaciones sociales que lo constituyen, y manifiesta la relevancia del daño subjetivo en la concepción de daño que permea las prácticas implementadas desde el Centro Ulloa.

Colocar a la entrevista en el lugar central de la evaluación implica otorgar reconocimiento a la palabra de la víctima: ya no son los exámenes médicos ni diagnósticos clínicos los que ocupan el lugar principal en la construcción de la prueba de los daños sufridos. Ese espacio está ocupado por la palabra de la víctima, lo que implica otorgarle un valor diferencial a su relato, un reconocimiento que toma la forma de un incremento indemnizatorio detrás del que se ubica el Estado dignificando su palabra, confiando en lo que esa palabra cuenta acerca de la experiencia atravesada.

[215] El consentimiento informado refiere a la declaración de voluntad de acuerdo a la ley de der1echos del paciente nº 26.529. La misma debe ser firmada por la persona a ser evaluada luego de recibir por parte de los profesionales intervinientes, información clara, precisa y adecuada con respecto al procedimiento en salud del cual va a participar.

[216] La inclusión de los aspectos formales a considerar en el informe de evaluación tuvo por objetivo evitar las demoras que implicaban la necesidad de corregir errores formales en las evaluaciones, y de esta manera, se intentó agilizar la incorporación de las mismas a los expedientes en trámite. .

Finalmente, esta guía de pautas también se expide en torno a cuál es el modo en que debe ser ponderado el daño por la junta médica constituida a tal fin, aspecto particularmente relevante para el interrogante en torno a las representaciones del daño que subyacen a las prácticas indemnizatorias que atraviesa este capítulo.

De acuerdo a este documento, se considera que en el contexto de los episodios de violencia vividos, la persona a evaluar puede haber sufrido o presentado sintomatología coincidente con el sufrimiento psíquico, entendiendo como tal aquellos padecimientos emocionales que han sido transitorios y han cursado sin dejar secuelas. El daño psíquico queda referido a una perturbación profunda del equilibrio emocional, que resulta duradera en el tiempo, que resulte incapacitante o afecte áreas vitales. A partir de allí, la distinción entre las lesiones graves y gravísimas viene dada porque en el caso de estas últimas, este daño no puede ser superado, ni aun contando con los apoyos o ajustes necesarios. Es decir, que en todos los casos, la existencia de un daño psíquico da cuenta de un sufrimiento emocional que afecta al sujeto de manera persistente, ocasionándole una disminución respecto a sus aptitudes previas a los hechos producidos por la violencia estatal. Vale mencionar que cuando este daño se haya producido durante la infancia –tal es el caso de los beneficiarios contemplados en la ley 25.914/04-, se sugiere dar por supuesto que el daño psíquico que presenta la persona a evaluar se deriva de los hechos probados en el expediente.

A raíz de las consideraciones vertidas en esta guía de pautas, se observa que el Centro Ulloa se propuso la construcción de un abordaje tendiente a la integralidad para la evaluación de las lesiones, la cual quitara peso a los elementos provenientes del campo de la psiquiatría –que asociaban el daño a nosologías tales como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo- para otorgar mayor relevancia a dimensiones tales como "el daño al proyecto de vida", en línea con su propósito de despatologizar el daño producido por los crímenes de Estado. [217]

La construcción de este andamiaje tendiente a orientar la práctica de quienes se desempeñan en las juntas médicas, conjuntamente con la supervisión de su actuación, se acompaña por último con el seguimiento individualizado del proceso que culmina con la evaluación de daños de cada una de las víctimas involucradas. Esta tarea de seguimiento se concibe por un lado, como una tarea de "agenda", en la cual los representantes del organismo se encargan de gestionar los turnos

[217] Entre los instrumentos que permitieron motorizar estas transformaciones, se destaca la incorporación del Protocolo de Estambul - Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, 2001)- en sustitución de los manuales de psiquiatría que hasta entonces servían de guía para la ponderación del daño por parte de las juntas médicas.

para las evaluaciones en los establecimientos que correspondan, así como resuelven la logística que garantice que la entrevista pueda tener lugar –aspecto que es principalmente relevante en el interior del país, en donde muchas veces los peticionantes deben realizar viajes de considerable distancia para acceder al servicio de salud capaz de realizar la evaluación correspondiente-. Pero sobre todo, este seguimiento implica una labor de acompañamiento hacia las víctimas, que se traduce en una trama de significaciones asociadas a la reparación que otorgan un sentido a la práctica reparatoria y que contribuyen a la construcción de representaciones acerca del daño que la misma pretende reparar.

En concreto, el acompañamiento implica la presencia de un representante del Estado durante el transcurrir del proceso de evaluación de daños, que comienza al momento en el que el Centro Ulloa recibe el requerimiento y culmina –por lo menos- cuando el expediente vuelve al circuito administrativo de las leyes reparatorias, una vez finalizado el proceso concerniente a la evaluación. Teniendo en cuenta que este período implica varios años de demora, la posibilidad para la víctima de referenciarse durante este tiempo con alguien que en tanto encarnación del propio Estado se encuentra disponible del otro lado del teléfono para brindar información, evacuar consultas, sugerir pasos a seguir, le otorga a este proceso un matiz peculiar.

Este matiz es precisamente el que permite situar esta práctica en un terreno lindante con las prácticas de rehabilitación, en la medida en que se propone brindar a las víctimas un marco psicoasistencial en el cual inscribir las prácticas indemnizatorias bajo análisis. Ello habilita un espacio de reconocimiento acerca de los hechos padecidos –que en este caso, adquieren la denominación de lesiones graves o gravísimas de acuerdo a la normativa-, reconocimiento que como se ha mencionado, nace del lugar en que se ubica la palabra de la víctima. Asimismo, en este caso la palabra de la víctima es un *decir con consecuencias*, en la medida en que ese testimonio motoriza el otorgamiento de dinero por parte del Estado, lo que pone en marcha un conjunto de representaciones –tanto negativas como positivas- asociadas al mismo, que he analizado en el capítulo cinco.

A partir de lo expuesto hasta aquí, en el ámbito de reparación de las lesiones se ha construido una nueva lógica para su evaluación, que implica un desplazamiento desde la *evaluación* de los daños hacia la *lectura* de los mismos.

En los márgenes del contexto de aplicación de la ley que obliga a cuantificar los daños producidos por los crímenes de Estado, se fue construyendo un modo particular de abordar esta

tarea que implica en primer lugar, un modo de acompañamiento que toma la forma de una vinculación individual, un sostenimiento del uno a uno, que atienda a la singularidad de cada víctima y a su caso particular, en oposición al tratamiento estandarizado que propone el derecho y la política pública por definición. Asimismo, esta mirada involucra una despatologización de las lesiones, que se distancia de una caracterización nosológica en el marco de categorías clínicas, para colocar en su lugar la experiencia de un sujeto atravesado por la violencia provocada por el Estado. En este contexto, a la vez que la lectura del sufrimiento atravesado permite su traducción al lenguaje de la cuantificación burocrática de la ley, habilita la emergencia de la subjetividad de la víctima como eje ordenador del daño a reparar mediante las prácticas indemnizatorias.

2. La emergencia del daño subjetivo como representación del daño a reparar

A la luz de la reconstrucción de las prácticas implementadas por el Centro Ulloa en el ámbito de las lesiones, puede concluirse que la tarea llevada a cabo por las juntas de evaluación de daños adquirió la forma de una tarea de traducción de los daños producidos por el genocidio al lenguaje de la administración del Estado. Este apartado tiene por objetivo desentrañar cuáles son las representaciones involucradas en esta tarea de traducción sobre la cual se fundamenta la concepción de daño a reparar en las prácticas indemnizatorias, de las cuales los movimientos identificados en el ámbito de las lesiones constituyen un indicador.

En la introducción de este capítulo se ha mencionado que esta tarea está anclada en la perspectiva jurídica, dado que las prácticas indemnizatorias se sitúan bajo la órbita del derecho civil. Sin embargo, esta noción jurídica se fue complejizando mediante la incorporación de enfoques complementarios que le permitieran llevar a cabo la mensura de los daños que requieren las indemnizaciones. Entre la multiplicidad de dimensiones que se conjugaron en esta resignificación, hay una que reviste especial importancia, en tanto se articula con la caracterización presentada en el marco de la reparación de las lesiones: se trata de la noción de *daño psicológico*.

La concepción de daño psicológico –que es una de las dimensiones contempladas en la noción de daño jurídico- estuvo presente desde el momento de formulación de las leyes reparatorias, pero no permaneció invariable sino que se fue modificando desde una concepción anclada exclusivamente en la perspectiva jurídica, hacia la incorporación de una mirada propia del campo psicosocial, que le permitiera alojar las particularidades de los daños producidos por los crímenes

de Estado. Este movimiento tuvo lugar al calor de la consolidación de la integralidad como perspectiva para abordar la reparación en el caso argentino, de acuerdo a la cual la reparación pasó a ser concebida como el resultado de una multiplicidad de medidas que en conjunto hacen posible la reparación. A partir de entonces, una concepción del daño que propongo denominar como *daño subjetivo* fue adquiriendo centralidad creciente al interior del universo de la reparación, alcanzando la concepción de daño que subyace a las prácticas indemnizatorias.

En términos históricos, la incorporación del daño psicológico como una dimensión del daño jurídico vino de la mano de la constitución de la psiquiatría como disciplina, y la introducción del saber psiquiátrico en el campo del derecho penal. [218] La psiquiatría estableció una concepción de daño asociado a una modificación patológica del aparato psíquico, producida como consecuencia de haber atravesado una situación traumática. Al colocar la noción de trauma en el centro del daño psicológico, este se construyó sobre una afinidad con la existencia de una patología, tal como evidencia la caracterización del daño psicológico en términos de un *trastorno por estrés postraumático (TEPT)*. Los primeros resgistros del TEPT datan del siglo XIX y estuvieron vinculados con experiencias de conflictos bélicos; desde entonces, esta categoría surgida desde la nosografía psiquiátrica se configuró como modelo interpretativo del conjunto de efectos que los actos de violencia producen en el funcionamiento psíquico (Madariaga, 2002).

En la delimitación conceptual del daño psicológico –también referido como daño psíquico- resultan relevantes los aportes del campo forense, ámbito en el cual los profesionales de la medicina y la psicología se desempeñan como auxiliares del proceso de administración de justicia. [219] El daño psicológico constituye una herramienta conceptual fundamental en la práctica pericial que le compete a esta disciplina, cuya definición más extendida lo concibe como

> Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución en las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que

[218] La conformación de un campo de saber-poder en el vértice en que confluyen la psiquiatría y el derecho ha sido objeto privilegiado de análisis de la vasta obra de Michel Foucault (Foucault, 2001, 2006, 2007). En diálogo con la perspectiva foucaultiana, el papel de la pericia psiquiátrica -en tanto técnica que pone en marcha el funcionamiento de un saber médico psiquiátrico sobre el cual se apoya la actuación de los jueces-, se articula con el modo de constitución y funcionamiento de las juntas médicas de evaluación del daño, en la medida en que la evaluación de las lesiones construye sobre la base de un saber experto, una verdad jurídica que habilita el pago de las indemnizaciones a las víctimas.

[219] Para profundizar en la conceptualización de daño psicológico desde la perspectiva forense, ver: Risso (2002), Castex (2005), Castelao (2011).

tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años) (Risso, 2002).

Desde esta perspectiva, la noción de daño psíquico se emparenta a la de una enfermedad mental, que irrumpe en la biografía del periciado de manera novedosa como producto de la situación traumática atravesada, a partir de la cual sobreviene una incapacidad que afecta áreas vitales del individuo. Esta incapacidad causada por la patología psíquica es la que configura el aspecto mensurable del daño psicológico, ya sea esta una incapacidad para desempeñar sus tareas habituales, para acceder al trabajo, para ganar dinero, entre otras. A partir de allí, numerosa jurisprudencia avanzó en precisar la definición de daño psicológico. Si bien esta noción no abandonó por completo su asociación con la existencia de una enfermedad o patología, su alcance se fue ampliando para incluir en su espectro la perturbación del equilibrio emocional, la alteración de la integración de la persona en el medio social, la disvalía en la vida interior del individuo, entre otros elementos. [220]

Para avanzar en la caracterización de las particularidades que presenta el daño psicológico al interior del daño jurídico, debe considerarse que a medida que el campo jurídico incorporó elementos provenientes de otros campos disciplinares para complejizar su concepción de daño, resultó necesaria una adecuación de los mismos a sus marcos de referencia. Por consiguiente, la concepción de daño psicológico que permea a las prácticas indemnizatorias es ya una traducción realizada al lenguaje jurídico de términos portadores de significados que provienen del campo de la salud mental.

Este proceso de traducción del lenguaje *psi* al lenguaje jurídico adquirió una particularidad en el caso argentino, escenario del nacimiento de un campo inédito en torno a la salud mental y los derechos humanos. Este campo se constituyó al calor de la lucha contra la dictadura militar y fue conformado por profesionales de la salud mental en articulación con los organismos de derechos humanos, que en tiempos de represión abierta y generalizada buscaron novedosas maneras de dar respuesta a los efectos psicosociales que la misma generaba. Esta tarea –que les valió a muchos de ellos su secuestro, tortura e incluso desaparición- los condujo a reflexionar en torno a la pertinencia de los conceptos y técnicas con los cuales la psicología proponía enfrentar las situaciones traumáticas, que en el caso de la violencia estatal distaban de ser experiencias individuales sino que se inscribían en un plano eminentemente social. Incluso la propia

[220] Para profundizar en el desarrollo de la doctrina jurisprudencial en torno al concepto de daño psicológico, ver: Satta (2012).

concepción de salud mental fue puesta en cuestión para referir a la situación de padecimiento psíquico de las personas afectadas, generandose nuevas conceptualizaciones para dar cuenta de fenómenos psicológicos hasta entonces desconocidos. [221]

En este marco, si bien una conceptualización del daño desde una perspectiva psicológica excede los límites de esta investigación, es necesario señalar que su rasgo distintivo es la consideración de los efectos en la subjetividad que pudieron haberse producido a partir de un acontecimiento traumático. Más precisamente, el daño psicológico

> es el que se considera tomando en cuenta la dimensión subjetiva de la víctima, en tanto afecta el despliegue de potencialidades y recursos tanto afectivos como emocionales, intelectuales, de relación, etc., únicos para cada sujeto ya que están en relación con la historia singular de cada uno (Guilis, 2007, p. 284).

Siguiendo esta definición, el campo jurídico se encuentra ante un reto complejo de sortear. Lejos de referir a un daño que recae sobre el individuo-sujeto de derecho que sustentaba la noción de daño jurídico, la noción de daño psicológico desde el propio campo de la salud mental en el cual se inscribe refiere a una desestructuración de orden subjetivo, a un quiebre en la trama psíquica del sujeto. La consideración de la dimensión subjetiva del daño implica que este daño está ligado a las carácterísticas personales de quien lo sufre; se vincula con la singularidad de la víctima, su contexto, su cultura, sus creencias; la afectación es absolutamente personal, propia e íntima, y el daño a reparar sólo puede ser interpretado a la luz de esa afectación.

Una de las dificultades por poner en diálogo estas concepciones reside en el hecho de que allí donde el campo jurídico construye generalidad, el campo *psi* coloca el acento en la subjetividad, introduciendo así una dimensión que el derecho excluye. Teniendo en cuenta estas particularidades, cualquier tipo de daño que entra en el terreno del daño jurídico, debe de todos modos adoptar sus reglas del juego. Y esto implica que debe poder mensurarse, ya que la cuantificación de las lesiones es requisito para que las mismas puedan ser reparadas, de acuerdo a las herramientas de las que dispone el derecho civil.

Si la consideración del daño psicológico debe siempre enfrentarse con esta dificultad, el hecho de que estas afectaciones sean producidas como consecuencia de la perpetración de crímenes de

[221] Para profundizar en las producciones del campo de salud mental y derechos humanos en Argentina que teorizaron acerca de la vinculación entre la violencia estatal y la práctica psicoanalítica, ver entre otros: Puget & Kaes (2006), Ulloa (1986), Martínez (1993), Kordon & Edelman (1986).

Estado añade algunas particularidades adicionales. Así expresaba esta tensión la propia autoridad de aplicación de las leyes reparatorias:

> El daño psíquico es una categoría propia del campo jurídico que intenta establecer una referencia para medir la magnitud de lo ocasionado en un sujeto traduciéndolo en "cantidad" de daño provocado. Desde el campo de la psicología sabemos que ese daño no es medible ni anticipable, y entonces no se trataría de imponer a las consecuencias del terrorismo de Estado una lectura nosológica, que denote una categoría clínica per se; lo cual significaría reforzar la condición de víctimas, que empuja a un lugar paralizante y sin salida. Sin embargo trabajamos en la intersección de discursos que se tocan y donde el reconocimiento de la categoría jurídica de "víctima" se convierte en el instrumento legal a través del cual el Estado se responsabiliza por las acciones cometidas contra esa persona. No debemos entonces confundir estas dimensiones, sino trabajar sobre ellas, apuntando a alojar la singular palabra de los sujetos en los dispositivos de atención psicológica. (SDH, 2006, p. 39)

En la búsqueda por superar esta tensión, la concepción de daño psicológico fue evolucionando, tal como se desprende del desarrollo presentado hasta aquí. Inicialmente anclado en una perspectiva juridica, se ha ido complejizando para incorporar enfoques complementarios y ha operado como una puerta de entrada que permite la consideración de la dimensión social del daño, tal como evidencia el análisis de las representaciones del daño que suybacen a la reparación de las lesiones. En este sentido, en la tensión que simultáneamente unifica y distancia las nociones de daño jurídico y daño psicológico, se ha identificado la emergencia de un tipo particular de daño que propongo denominar como daño subjetivo, el cual refiere a un modo distintivo de concebir el daño psicológico en aras de construir una representación del daño que ilumine la especificidad de la reparación de los crímenes de Estado.

En este sentido, la noción de *daño subjetivo* implica no sólo la consideración de la particularidad del sujeto que ha sufrido el daño que se intenta reparar, sino también la consideración de la dimensión social del daño, en tanto la subjetividad se construye siempre a partir de la vinculación entre individuo y sociedad. El individuo se transforma en sujeto en el marco de su interrelación con otros hombres así como con el mundo que lo rodea, y es en ese plano en el que se configura su subjetividad, a partir de diversos modos de apropiación de esa realidad que lo circunda y de la cual el mismo es parte. Desde esta perspectiva, el daño subjetivo se deriva de la noción de daño psicológico, en tanto se construye a partir de la misma. Sin embargo, implica una reformulación que la lleva a trascender el ámbito jurídico y le permite incorporar otras dimensiones a la

representación del daño a reparar. Adicionalmente, al hacer del sujeto el eje rector de las prácticas indemnizatorias, la concepción de daño subjetivo permite asir cabalmente su dimensión ideológica, dejando entrever la función que define a la ideología en tanto constitución de los individuos concretos en sujetos (Althusser, 2005, p. 52), en línea con el desarrollo presentado en el capítulo previo.

Entre las cuestiones a tener en cuenta para situar este movimiento en el que se ha situado la emergencia del daño subjetivo, se destaca que si bien las leyes reparatorias se sitúan en el ámbito del derecho civil, estas no han permanecido ajenas al régimen de derechos humanos que permeó la estructura normativa argentina en su conjunto. No se abordarán aquí las particularidades de este ordenamiento internacional, que ya fueron profundizadas en el capítulo dos de esta tesis. Sin embargo, es importante considerar que al calor de la impronta que trajo aparejada la perspectiva de la integralidad –en tanto punto más álgido del desarrollo del derecho a la reparación en la comunidad internacional-, la concepción de daño psicológico fue adquiriendo mayor fuerza en el abanico de las representaciones del daño que subyacen a las prácticas indemnizatorias. En este marco, la consideración del daño psicológico como una dimensión fundamental del daño jurídico responde al proceso de construcción de una mirada interdisciplinaria que se impuso como necesaria para el abordaje de los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos, y sobre la cual se amalgamaron las dimensiones involucradas en la integralidad de la reparación.

En el caso argentino, dos elementos resultaron decisivos en esta dirección. Se trata por un lado, de la emergencia de las prácticas reparatorias de rehabilitación, las cuales contemplan la atención médica y psicológica a las víctimas, y su incorporación tardía al repertorio de medidas tendientes a la reparación. A su vez, las prácticas de juzgamiento de la mano de la reapertura de los juicios contra los responsables de los crímenes de Estado, colocaron en el espacio público las experiencias de las propias víctimas, y llevaron a la necesidad de reformular las maneras de comprender cuáles eran los crímenes que debían condenarse, así como los daños que resultaba imperioso reparar. Estos desplazamientos permearon las representaciones del daño a reparar en las prácticas indemnizatorias, en tanto tal como ha quedado demostrado en la periodización presentada en el capítulo tres, las mismas no se construyen de manera aislada, sino que por el contrario, se embeben de las transformaciones que tienen lugar en el conjunto de la constelación reparatoria. Por ende, una configuración tendiente a la integralidad de la reparación fue terreno

fértil para que la concepción de daño subjetivo se imponga como una representación central en torno al daño a reparar en las prácticas indemnizatorias.

En este contexto, si bien la concepción jurídica del daño resulta insoslayable en tanto las prácticas indemnizatorias tienen lugar en el terreno jurídico, puede observarse que progresivamente, el daño psicológico fue adquiriendo en su seno mayor preponderancia, no sólo en relación al daño que las indemnizaciones se proponían reparar, sino incluso atendiendo a las consecuencias que la aplicación de las mismas podría provocar en la subjetividad de las víctimas, así como los efectos de la impunidad como respuesta ante los crímenes perpetrados. Sobre esta base se fue construyendo una concepción del daño que se ha propuesto nominar daño subjetivo, y que se distancia de la noción de daño psicológico propia del lenguaje jurídico en su preocupación por dar cuenta de la imposibilidad de mensurar los daños producidos por los crímenes de Estado. El daño subjetivo se erige sobre la tensión intrínseca que surge de la búsqueda de un modo de adecuar la singularidad de las consecuencias de la violencia estatal a los instrumentos jurídicos que habilitan sus prácticas reparatorias, que tal como se ha visto, requieren de cuantificación.

En este sentido, la particularidad del daño subjetivo reside en que la misma permite colocar en el centro de la noción de daño al propio sujeto que ha atravesado la experiencia represiva, considerando las consecuencias que han impactado en el terreno de su subjetividad como producto la violencia estatal. Al vincular el daño a reparar con el trastocamiento de la subjetividad, emerge una dimensión del daño que se encontraba ausente en las concepciones anteriormente reseñadas: la dimensión psicosocial, que surge de considerar al sujeto como producto de múltiples procesos tanto individuales como sociales que lo constituyen. Si bien la consideración del daño subjetivo supone un desafío para las prácticas indemnizatorias dada su inscripción en el ámbito jurídico, el mismo ha ido adquiriendo una relevancia creciente en las representaciones del daño a reparar analizadas en el caso argentino.

La preponderancia que adquirió el daño subjetivo se desprendió del análisis situado en el terreno de la reparación de las lesiones, no obstante su emergencia no se circunscribe a este ámbito en particular sino que se corresponde con los desplazamientos en las representaciones del daño a reparar que subyacen a las prácticas reparatorias en su conjunto. En este sentido, la representación de las víctimas como sujetos dotados de una voluntad transformadora que se plasma en un hacer militante a partir de la ley “Dovena” 26.564/09 puede ser considerada como una expresión de la irrupción del daño subjetivo, a partir de la cual la consideración del ser y el

hacer de las víctimas pasó a ocupar un lugar relevante en las representaciones del daño a reparar. La propia creación del Centro Ulloa en el marco de los desplazamientos producidos ante el avance de las prácticas de juzgamiento puede inscribirse en esta misma línea, a partir de la cual la subjetividad de las víctimas pasó a constituir el territorio específico en el cual se desarrollan las prácticas reparatorias.

3. El daño a reparar y las relaciones sociales vulneradas en el marco del genocidio

Al inicio de este capítulo se ha mencionado que las representaciones del daño a reparar en las prácticas indemnizatorias se construyen partiendo de una asociación de los mismos con determinados delitos: la desaparición forzada, el asesinato, la privación ilegítima de la libertad, son algunos de estos en torno de los cuales se ha configurado un universo de sujetos víctimas de la reparación que fue analizado en el capítulo anterior. Desde la perspectiva propuesta en esta tesis, la consideración de estos crímenes en el marco de un proceso represivo que se ha caracterizado como un genocidio reorganizador permite trascender esta representación del daño en tanto delitos aislados, para articular el interrogante en torno al daño con el proceso más amplio en el que se sitúa la reparación: en el terreno de las relaciones sociales.

La primera dificultad que plantea el abordaje de las relaciones sociales refiere a que en el seno de toda sociedad moderna conviven múltiples tipos de relaciones sociales que pueden variar de acuerdo a las características que presentan las grupalidades particulares a quienes vinculan. He intentado sortear esta dificultad al situar las prácticas reparatorias en el nivel de las relaciones sociales hegemónicas que cristalizan en la forma Estado, y que en el caso argentino, se corresponden con relaciones sociales asimétricas en el marco de una sociedad capitalista.

Sin embargo, la pregunta por la reparación de los vínculos sociales que fueron objeto de las prácticas sociales genocidas añade una complejidad adicional, en tanto requiere atender a la vinculación de aquellas relaciones sociales que fueron vulneradas mediante la violencia estatal, con la aspiración a una reconstrucción de un equilibrio social que puede corresponderse o no con aquel tipo de vínculo social que ha sido objeto del aniquilamiento. En este punto, no debe perderse de vista que las prácticas reparatorias en general, y las prácticas indemnizatorias en particular, son la expresión de un tipo de equilibrio social específico: el equilibrio al que aspira el Estado. Y en este sentido, una mirada hacia las características del ordenamiento normativo que encarna el Estado permite iluminar las relaciones sociales involucradas en el proceso reparatorio.

En primer lugar, el terreno jurídico político en el que se sitúan las prácticas indemnizatorias resulta apropiado para dar cuenta de las particularidades que adquiere cada orden normativo, en correspondencia con el tipo de vínculo social hegemónico al interior de la sociedad concreta en la que este se construye. Tal como se ha desarrollado en el capítulo uno, los tipos fundamentales de relaciones sociales que priman al interior de cada sociedad particular contribuyen a la construcción de determinados modos de respuesta ante la vulneración del lazo social, modos que serán diferenciales según predominen lazos sociales de tipo cooperativo o por el contrario, basados en la asimetría. Considerando que en el caso argentino, la perpetración del genocidio se propuso la clausura de los vínculos sociales de carácter autónomo y solidario, en las respuestas que la sociedad construye para la recomposición de ese vínculo pueden hallarse algunas pistas acerca de las relaciones sociales involucradas en este proceso de reconstrucción del equilibrio social al que aspira la reparación.

La perspectiva sociogenética aporta elementos que resultan relevantes para la interpretación de estas pistas, al identificar en la evolución histórica de los ordenamientos normativos un movimiento que va desde el predominio de una lógica retributiva de justicia hacia una lógica distributiva. En apretada síntesis, la justicia retributiva es el modo en que una sociedad en la cual prevalecen los vínculos sociales de carácter asimétrico, encuentra en la imposición de sanciones el medio adecuado para reestablecer el equilibrio producido por la ruptura del orden social. Mientras que en un primer estadio al interior de la lógica retributiva, esta sanción adquiere carácter expiatorio, en su evolución esta va dando lugar a la reciprocidad como modo de reestablecer el equilibrio dañado.

En estadios más evolucionados de sociedades en las cuales aún predomina una lógica retributiva de justicia, la interrelación social se regula mediante la aplicación de un orden normativo, que sin abandonar el terreno sancionatorio, encuentra en la reciprocidad el fundamento de la sanción. Este estadio en el cual se situán las sanciones reparatorias indica una etapa intermedia hacia un modo de recomposición del vínculo social en donde la sanción pierde progresivamente instrumentalidad, dado que el vínculo que se procura reestablecer obedece a un tipo cooperativo. En sociedades capitalistas en las cuales predominan los vínculos sociales asimétricos, aún no se han construido las condiciones que permitan la emergencia de órdenes normativos basados en la paridad, y que por lo tanto, puedan prescindir de las sanciones para el reestablecimiento de los lazos sociales que han sido dañados.

Complementariamente, en el marco de sus investigaciones psicogenéticas, y a partir de la observación de las alternativas a la sanción que los niños proponen como respuesta a las vulneraciones a las reglas de juego por parte de sus compañeros, Piaget concluye que la importancia de la sanción expiatoria decrece a medida que la cooperación entre pares es más importante para los niños que la presión adulta:

> Las ideas igualitarias se imponen en función de la cooperación y constituyen de este modo una forma de justicia que, sin estar en contradicción con las formas evolucionadas de la justicia retributiva (la sanción por reciprocidad es debida precisamente al progreso de estas nociones), se opone a las formas primitivas de sanción e incluso acaba por hacer que la igualdad esté por encima de la retribución, siempre que se dé un conflicto entre las dos (Piaget, 1984, p. 221)

En este sentido, en estadios primarios en los cuales las normas se consideran exteriores e impuestas por relaciones heterónomas basadas en la autoridad, la sanción expiatoria aparece como "el único medio de volver las cosas a su sitio". Progresivamente, las sanciones por reciprocidad van ganando terreno a medida que los niños van internalizando las normas y comprendiendo que los liga a sus semejantes un lazo de reciprocidad, en el marco de relaciones cooperativas que generan las condiciones para que se construya la autonomía. La complejidad de las sanciones por reciprocidad llevó a la identificación de seis etapas al interior de este universo, que van de la más a la menos severa: la exclusión momentánea o definitiva del grupo social; la apelación a la conciencia de los actos; la privación al culpable de aquello de lo que está abusando; la "reciprocidad simple", que consiste en hacer al niño exactamente lo que él ha hecho; la restitución, y finalmente, la simple censura, que se limita a hacer comprender al culpable en qué ha roto el lazo de solidaridad.

Incorporando estos aportes al estudio de las medidas tendientes a la reparación de los crímenes de Estado, puede observarse en primer lugar, que la multiplicidad de prácticas reparatorias relevadas no se vincula con un único modo de reestablecimiento del equilibrio social. Entre ellas, las prácticas indemnizatorias cuyo análisis se ha privilegiado en esta tesis se corresponden con la caracterización de las sanciones restitutivas: dada su inscripción en la órbita del derecho civil, las mismas se orientan a la reposición de lo dañado a su estado anterior en la medida en que ello fuera posible. En este sentido, se sitúan al interior del amplio gradiente de matices que se engloban entre las denominadas sanciones reparatorias, y que en conjunto expresan el momento de pasaje desde una lógica retributiva hacia una lógica distributiva de justicia.

El Estado como responsable del daño a reparar y la profunda asimetría que ello conlleva en la relación entre víctima y victimario debe ser el punto de partida para la reflexión en torno al carácter de las relaciones sociales involucradas en las prácticas indemnizatorias. Ello implica que toda práctica reparatoria supone un contrapeso al poder del Estado, en tanto promueve un intento por generar una mayor igualdad en la distribución social del poder, lo que permite atribuirle cierto matiz en un sentido tendiente a la autonomía. Sin embargo, toda vez que las prácticas reparatorias se sitúen al interior de una sociedad de clases, las mismas no podrán evolucionar más allá de la justicia retributiva que se corresponden con estadios en los cuales priman las relaciones de desigualdad. Al interior de este terreno, desentrañar cuáles son las prácticas concretas con las que se intenta llevar a cabo la reparación resulta fundamental para avanzar en la comprensión de este proceso reparatorio, así como sus implicancias en el terreno de las relaciones sociales.

Las prácticas indemnizatorias se sitúan en una etapa bisagra en la cual las sanciones por reciprocidad constituyen la respuesta a la ruptura del lazo social, en correspondencia con una sociedad cuyas relaciones sociales hegemónicas tienden hacia el establecimiento de vínculos basados en la autonomía, pero aún permanecen en el terreno de los vínculos heterónomos. En consecuencia, sin abandonar el ámbito de la sanción correspondiente a la justicia retributiva, presentan algunos aspectos que expresan una tendencia hacia un equilibrio de tipo cooperativo. Entre estos últimos, se destaca que la función sancionatoria –en términos de inhibición de conductas- que expresan las prácticas indemnizatorias no es expiatoria, sino que se orienta a la recomposición del vínculo social mediante una acción restitutiva. Sin embargo, es preciso desglosar los elementos involucrados en esta restitución para dar cuenta de su articulación simultánea con la perpetuación de vínculos sociales de asimetría. Ello indica que la pregunta por cuál es el vínculo social que las prácticas indemnizatorias se proponen reconstruir no puede responderse de manera unívoca; por el contrario, este interrogante está atravesado por tensiones y matices que lo constituyen.

El aspecto que mejor ilustra esta complejidad en tanto define a las prácticas indemnizatorias como tales es el dinero como instrumento mediante el cual se intenta llevar a cabo la reparación. El dinero es tanto la encarnación de la comunidad, como la expresión de la asimetría de clase sobre la cual se estructuran las sociedades capitalistas. En este sentido, la comunidad que encarna el dinero se presenta ante los sujetos que la constituyen como algo exterior a sí mismos, algo que les es impuesto desde afuera, y en cuya construcción no pueden reconocerse. Al mismo tiempo

que vincula a los hombres entre sí y con el mundo que los rodea, la contradicción inherente a la forma dinero mantiene veladas las relaciones sociales que conforman el vínculo social sobre el cual se construye la comunidad. Al homologar dinero y reparación, las prácticas indemnizatorias derraman sobre la problemática de la reparación las particularidades propias de la forma dinero, y en consecuencia, promueven la ajenización como modalidad de comprensión del proceso genocida.

Otro de los elementos afines a la construcción de vínculos sociales no cooperativos es la naturaleza individualizada que caracteriza la implementación de las prácticas indemnizatorias. En línea con la noción de sujeto de derechos propia de la ideología jurídica que se construye sobre una lógica individual, la interpelación ideológica de la categoría de víctima que pone en juego la reparación económica se erige sobre una concepción de daño que reace sobre cada uno de los individuos afectados, quedando así vedado el carácter colectivo de las rupturas producidas por el genocidio. Si bien la emergencia del daño subjetivo ha habilitado cierto reconocimiento de la dimensión social del daño sufrido, ello no parece impedir que se imponga sobre el mismo una representación individualizada –lo que se añade a la visión mercantilizada- del daño a reparar.

El daño producido por el genocidio tuvo como consecuencia la obturación de un proceso ascendente de construcción de vínculos sociales solidarios, autónomos y cooperativos, en un momento histórico en el cual comenzaba a construirse la posibilidad de instauración de un ordenamiento normativo superador de la asimetría social. Para poder dar cuenta del alcance de este daño, sería necesario desglosar cuánto de ese proceso pudo ser efectivamente destruido, qué elementos en esos vínculos sobrevivieron al genocidio y en qué medida se reconfiguraron, entre otros muchos aspectos significativos que exceden ampliamente el marco de esta investigación. No obstante, del análisis de las respuestas construidas para la reparación de esos daños desde la lente construida desde la epistemología genética, puede inferirse que la asimetría logró reinstalarse como hegemónica en la disputa que se encontraba abierta al momento de perpetración del genocidio. De la noción de daño jurídico, así como del espacio asignado al dinero como elemento central de la restitución se desprende que la reciprocidad que se estaba construyendo, pudo ser resquebrajada, para acercar la recomposición de las relaciones sociales dañadas hacia vínculos sociales desiguales y asimétricos. En la misma línea, la consideración del proceso represivo en que los daños se produjeron en términos del "terrorismo de Estado", que coloca el acento sobre la represión "desmesurada" llevada a cabo por el aparato estatal contra un

conjunto indiscriminado de individuos, atacados en su condición de ciudadanos, puede interpretarse como un indicador de esta desarticulación.

En este sentido, la reparación se plantea como una paradoja, dado que se trata de una sociedad dañada que debe darse a la tarea de reparar el daño que ella misma ha sufrido. Es esta la complejidad intrínseca que surge de la propia vinculación entre el daño y la reparación del genocidio: mientras que el daño se produjo sobre un tipo particular de vínculo social, es sólo después de producido este daño y por lo tanto con sus efectos ya en marcha que tienen lugar las medidas tendientes a la reparación de ese daño. En cada práctica reparatoria se disputa por lo tanto el genocidio en su momento de realización, a partir de ubicar su horizonte en acercamiento o distancia respecto de la reconfiguración social que el terror y el aniquilamiento se propusieron clausurar.

En la medida en que la sociedad se estructure sobre la base de relaciones sociales de desigualdad, la reparación tenderá a profundizar una reconfiguración social caracterizada por los vínculos heterónomos, dado que la ausencia de vínculos cooperativos –al menos en términos dominantes- obtura la posibilidad de apropiarse colectivamente del proceso atravesado. La noción de daño a reparar que se asienta en la ideología jurídica y se construye sobre una representación del daño en términos individuales se inscribe al interior de esta tendencia. Pese a ello, la emergencia de la noción de daño subjetivo habilita algunos elementos tendientes al reconocimiento de las identidades aniquiladas que permite introducir cierto matiz a la modalidad de ajenización que las prácticas indemnizatorias promueven como modo predominante en el que la sociedad se explica y comprende el daño perpetrado.

En este sentido, el proceso de recomposición de los lazos sociales del cual la reparación forma parte no puede considerarse cerrado, sino que aún continúa en curso en la sociedad posgenocida del presente. El daño a reparar no puede ser encapsulado en el pasado, en tanto sus efectos permanecen aún en la actualidad, e incluso pueden potencialmente ser contrarrestados a partir de la construcción de vínculos de reciprocidad que disputen la configuración social actual, en la cual se identifican vínculos de carácter heterónomo.

La sociedad anhelada y deseada que se ubica en el horizonte de la reparación es la resultante de la disputa entre los distintos modelos de comunidad posible que conviven y entran en lucha en un determinado momento histórico, al interior de una sociedad concreta, y cuya hegemonía cristaliza en el Estado. En la medida en que el Estado resulte la expresión de las relaciones de clase

hegemónicas en una sociedad capitalista, este implementará prácticas indemnizatorias que son consecuentemente afines a una configuración social basada en relaciones sociales desiguales y asimétricas. Como consecuencia, el ordenamiento normativo que estructura el Estado tenderá a perpetuar esta configuración social, tal como se ha evidenciado en el análisis situado en el aparato estatal jurídíco político a lo largo de esta tesis.

No obstante, ello no significa que en el propio seno del Estado no se libren batallas por la construcción de otro tipo de sociedad deseada, como parte de la lucha por construcción de vínculos de tipo cooperativo que intenten disputar el horizonte al que tienden las prácticas indemnizatorias. Hasta tanto no esten creadas las condiciones para que primen formas de justicia distributiva, esta disputa se libra al interior del terreno de la justicia retributiva. Así lo ha demostrado esta investigación, que permite concluir que las prácticas reparatorias implementadas involucran instrumentos correspondientes a etapas primarias –como bien lo demuestra la centralidad de la lucha por juicio y castigo para los genocidas- o intermedias –como es el caso de las prácticas indemnizatorias- desde el punto de vista evolutivo.

Conclusiones

Esta investigación nació con el objetivo de comprender la reparación de los crímenes de Estado perpetrados en Argentina a partir del análisis de las medidas reparatorias implementadas entre 1983 y 2015. Caracterizar dichos crímenes como un genocidio, en tanto proceso tendiente a la reconfiguración de las formas esenciales de vida de una sociedad mediante el aniquilamiento y el ejercicio del terror, me permitió situar la reparación en el terreno de la reconstrucción de los vínculos sociales que fueron vulnerados mediante el genocidio. Me propuse inscribir la problemática de esta reconstrucción no en el plano de la recuperación del estado de cosas previo a la perpetración del genocidio, sino en el marco del interrogante acerca de los modos mediante los cuales los sujetos construyen nuevas formas de vincularse entre sí y con el mundo en que habitan tras haber atravesado la experiencia genocida.

Esta reconstrucción forma parte de las luchas que entablan distintos grupos sociales por imponer sus interpretaciones acerca del proceso represivo, y se encuentran atravesadas por disputas ideológicas que encuentran en el Estado un escenario privilegiado para su expresión. Por ello, construí una herramienta conceptual que denominé *prácticas reparatorias* para referir a las medidas implementadas por el Estado en el seno de sus instituciones con el objetivo de reparar los crímenes que otrora cometió, cuyo observable privilegiado lo constituyen los instrumentos jurídicos que impulsan al Estado a llevar a cabo acciones específicas y concretas mediante las cuales se propone la reparación del daño ocasionado.

Tras el relevamiento sistemático de las prácticas reparatorias llevadas a cabo en el caso argentino, construí una categorización que partió de la distinción entre aquellas prácticas reparatorias dirigidas al conjunto social y aquellas que tienen como destinatarios principales a las víctimas directas, cuya implementación tiene una naturaleza individualizada. Esta categorización me permitió presentar una perspectiva completa acerca de las medidas tendientes a la reparación, tarea que hasta el momento no había sido abordada por investigaciones previas y que constituye un aporte relevante al incipiente campo de estudios sobre reparaciones en Argentina al que esta tesis pretende contribuir (capítulo 2).

La introducción de la variable temporal en el análisis de las prácticas reparatorias llevó a la identificación de tres constelaciones reparatorias en el transcurso del período abordado, en cuyo seno se construyeron representaciones diferenciales acerca de la reparación. Cada una de estas constelaciones se configuró a partir de la dinámica particular entre prácticas indemnizatorias -

aquellas que suponen el otorgamiento de una suma de dinero a las víctimas a modo de compensación económica por los daños sufridos- y prácticas de juzgamiento a los responsables de los crímenes perpetrados (capítulo 3).

Entre los hallazgos que se desprenden de esta periodización, se destaca la relevancia otorgada a las prácticas indemnizatorias al interior del universo de prácticas reparatorias. Esta relevancia obedece por un lado, a que las mismas fueron consagradas por el Estado como "Leyes Reparatorias", pese a la multiplicidad de medidas implementadas tendientes a la reparación. A su vez, refiere a la vigencia del modelo de las "reparaciones económicas", que una vez surgido, se mantuvo durante todo el período analizado, tiempo en el cual se fue profundizando mediante la sanción de nuevos instrumentos que ampliaron su universo de beneficiarios. En este sentido, el interés por comprender en profundidad las prácticas indemnizatorias fue resultante del propio proceso investigativo que se plasma en esta tesis.

Una vez construido el marco más amplio en el que se sitúan las prácticas indemnizatorias, me propuse dirigir los esfuerzos de esta tesis hacia la construcción de nuevo conocimiento acerca de las mismas. En primer lugar, construí una base de datos compuesta por más de 10.000 registros a partir de las cuales identifiqué algunas tendencias en la evolución y desarrollo de las prácticas indemnizatorias, producto de la implementación de las "Leyes Reparatorias". Estos datos resultan particularmente significativos en la medida en que la falta de acceso a información oficial sobre las reparaciones económicas atravesó los debates que estas suscitaron desde sus inicios, y fue asimismo una de las dificultades metodológicas más importantes con las que me enfrenté en el transcurso de esta investigación. A partir de la construcción y análisis de esta base de datos constaté la ampliación creciente y continua del otorgamiento de indemnizaciones durante el período analizado, aportando solidez empírica a la afirmación acerca de la relevancia de las prácticas indemnizatorias, y construí una síntesis de su evolución histórica en términos cuantitativos (capítulo 4).

A partir de allí, me aboqué al análisis de las representaciones que subyacen a las prácticas indemnizatorias, en torno a tres tópicos: el dinero como instrumento de la reparación (capítulo 5), la configuración del universo de víctimas en tanto sujetos de la reparación (capítulo 6), y el daño que las indemnizaciones pretenden reparar (capítulo 7). En lugar de reponer aquí las conclusiones parciales que se fueron presentando a lo largo de estos capítulos, en este punto quiero retomar esos hallazgos a la luz de una de las preocupaciones centrales que motorizaron esta investigación,

y que ha sido abordada de manera exploratoria a lo largo de esta tesis. Me refiero a la contribución de las prácticas indemnizatorias al proceso de reconfiguración de las relaciones sociales que tiene lugar durante la etapa posgenocida, y a su articulación con el proceso de construcción de representaciones acerca de la experiencia atravesada.

Abordé estos procesos a partir de la distinción propuesta por Jean Piaget entre las relaciones sociales de presión y relaciones sociales de cooperación, como dos polos que conforman una gradiente en cuya evolución los vínculos caracterizados por la heteronomía van dando paso progresivamente a vínculos basados en la autonomía respecto del poder. Al interior de cada formación histórico social concreta, estos dos tipos fundamentales de relaciones sociales no se presentan de manera "pura", sino que se configuran a partir de una imbricación particular entre elementos afines a tipos de heteronomía así como de autonomía, correspondientes a formas diferenciadas de construcción del lazo social. En el marco de este proceso de carácter secuencial, pueden identificarse estadios de equilibrio que se traducen en la construcción de ordenamientos normativos que regulan la práctica y los intercambios al interior de una sociedad.

Si el genocidio produjo un trastocamiento del equilibrio social en un momento de desarrollo de los vínculos sociales hacia una mayor autonomía, las prácticas reparatorias expresan un nuevo estado de equilibrio, construido como respuesta a la vulneración del lazo social producido por el genocidio. Dado que las prácticas reparatorias refieren a medidas implementadas desde el Estado, en tanto cristalización de las relaciones sociales hegemónicas al interior de una sociedad concreta, las mismas expresarán el tipo de equilibrio al que aspira el Estado: de ahí su potencialidad para aportar a la comprensión de la reparación en el entramado social en que ésta tiene lugar.

La reconstrucción de las relaciones sociales que conlleva la reparación se articula en este marco con el proceso de construcción de representaciones que comprenden, explican y otorgan sentido a la experiencia atravesada, y que forman parte del proceso de elaboración del genocidio. Como parte de este proceso de elaboración, los modos de representación del aniquilamiento así como de aquello que fue aniquilado pueden contribuir a la configuración de distintos tipos de vinculación respecto de lo vivido, entre los extremos de la ajenización y la apropiación. En los polos de esta gradiente, mientras que la ajenización remite a aquellos mecanismos que impiden la inscripción de la propia historia individual y colectiva en la trama de relaciones sociales sobre la cual se ha desplegado el genocidio, la apropiación refiere a modalidades que habilitan ese anudamiento.

En este sentido, la ajenidad implica un extrañamiento que nace de la dificultad para reconocerse como parte de una sociedad cuyos modos de ser y estar intentaron ser destruidos a través del terror. Para que la apropiación de la experiencia represiva sea posible al interior de un conjunto social, es preciso el establecimiento de relaciones de paridad que propicien el reconocimiento del otro como par; un *otro* que en este caso es la sociedad sobreviviente, sociedad que a su vez ha sido blanco de persecución y de aniquilamiento.

En este punto se advierte que el carácter de las relaciones sociales resulta clave para que las prácticas reparatorias promuevan la ajenización, o bien a la apropiación como modalidades hegemónicas de elaboración del genocidio: en aquellas sociedades en las que la heteronomía sea el vínculo social dominante, la reparación adoptará formas de equilibrio tendientes a la ajenización; por el contrario, allí donde las relaciones sociales de autonomía sean preponderantes, resultará más plausible la construcción de modos de apropiación de la experiencia atravesada. Desde esta perspectiva, esta tesis espera haber contribuido a iluminar algunos elementos de carácter exploratorio en la dirección propuesta por esta vinculación, a partir del análisis de las representaciones que subyacen a las prácticas indemnizatorias, identificadas como las prácticas hegemónicas llevadas a cabo para la reparación del genocidio.

En primer lugar, toda práctica reparatoria en general, así como cada práctica indemnizatoria en particular, presentará en su configuración elementos correspondientes con relaciones sociales asimétricas en el marco de las relaciones de clase propias de la formación social capitalista en la cual se sitúan. Del recorrido realizado puede concluirse que la ajenización es la modalidad predominante que las prácticas indemnizatorias contribuyen a construir como modo de comprensión y explicación del proceso genocida. No obstante, tal como se ha demostrado en el transcurso de esta tesis, ello no impide que en las mismas se expresen las disputas que se libran en el seno del Estado en el terreno de las representaciones acerca del genocidio, que potencialmente pueden involucrar elementos tendientes tanto a diversas formas de heteronomía como de autonomía.

El elemento privilegiado para la observación y análisis de estas disputas ha sido el dinero en tanto instrumento de la reparación. Por un lado, el dinero es la expresión de la comunidad en tanto encarnación del vínculo social fundamental al interior de la sociedad capitalista, el lazo capaz de vincular las actividades de los hombres entre sí y con el mundo que los rodea. Sin embargo, el

tipo de comunidad que nuclea el dinero hereda todas las contradicciones de la forma mercancía, de la cual constituye su expresión más acabada.

Entre estas contradicciones, la más relevante es la que se desprende del fetichismo de la mercancía, que mantiene veladas las relaciones sociales que se encuentran en la base del intercambio en el mercado sobre el cual se construye la comunidad. Ello impide que los sujetos que forman parte de esa comunidad se reconozcan en ella, la presenta como algo exterior y ajeno a sí mismos, que se les impone desde afuera y de cuya construcción no participan. Al hacer del dinero la herramienta reparatoria, el fetichismo recae sobre las prácticas indemnizatorias, y presenta la reparación como algo ajeno que resulta difícil de ser apropiado.

La ajenización se manifiesta tanto en las representaciones "positivas" –referidas a aquellas que puntualizan en lo que el dinero puede potencialmente construir- como en las representaciones que he llamado "negativas" en torno del dinero –que enfatizan en su carácter destructor. En las representaciones que surgen de su carácter creador, esta relación de exterioridad se observa en el tipo de comunidad que conforma el dinero: una comunidad cuyas relaciones sociales aparecen reificadas y en la cual los sujetos no pueden reconocerse. Las representaciones negativas por su parte, se construyen desde un rechazo a esta ajenidad, cuya base lo constituye el postulado acerca de la imposibilidad de transformar el daño a reparar en mercancía, en tanto operación fundamental que subyace a la reparación en dinero. El dinero expresa por lo tanto una doble relación de ajenidad: por un lado, una ajenidad que alcanza al proceso atravesado y a los daños que el mismo ha producido, al intentar convertirlo en mercancía; por otra parte, se hace extensiva al tiempo presente, en las formas que adquiere la comunidad construida en torno al dinero.

Sin embargo, existen elementos que permiten instalar la pregunta acerca de la posibilidad de que la ajenidad se combine con modalidades más cercanas a formas de apropiación de lo sucedido. En particular, he analizado algunos de ellos a partir de la modalidad de las pensiones en la esfera de la implementación de las prácticas indemnizatorias, cuyo carácter regular en el otorgamiento de dinero a los beneficiarios puede ser pensado como contrapeso a los efectos disolventes del dinero en la subjetividad de quienes lo reciben.

El análisis acerca de las representaciones en torno de las víctimas de la reparación también ha aportado elementos que abonan la interpretación de que las prácticas indemnizatorias tienden a la ajenización de la experiencia de aniquilamiento. En primer lugar, la naturaleza individualizada con la cual se construye la noción de víctima resulta afín a la construcción de vínculos sociales no

cooperativos. Esta particularidad no es privativa de las prácticas indemnizatorias, sino que remite a la propia noción ideológica de sujeto de derechos sobre la cual se fundamenta el paradigma del derecho liberal, y, en consecuencia, el ordenamiento jurídico político en el cual se inscriben las *indemnizaciones*. De allí que la interpelación ideológica se ejerza sobre los sujetos-víctimas poniendo de relieve su carácter individual, produciendo un borramiento del carácter colectivo de los sujetos en tanto grupo sobre el cual se perpetró el genocidio.

Esta ajenidad ha quedado evidenciada con contundencia en las tensiones que plantea la figura del sobreviviente en relación al desaparecido como víctima emblemática, y a la dificultad para construir una representación apropiada a esta experiencia en el marco de las prácticas indemnizatorias, que condujo a una invisibilización de los ex detenidos desaparecidos al interior de la configuración del universo de víctimas. Esta operación tiene su correlato en la representación de la desaparición forzada estrictamente en términos de aniquilamiento, permaneciendo inobservada la modalidad desaparición-aparición como constitutiva y central del proceso genocida.

En este sentido, he planteado que los sobrevivientes encarnan dos procesos cuya apropiación produce perturbaciones por parte de la sociedad posgenocida. El primero de ellos refiere a su participación en la historia previa a la dictadura, en una multiplicidad de experiencias de militancia y resistencia que sólo de manera parcial y tardía fueron reconocidas por las prácticas indemnizatorias. Esta tensión se observa especialmente en el campo de disputas en torno al reconocimiento de los "presos políticos" a propósito de la figura de "víctimas de detenciones arbitrarias". El segundo de estos procesos se vincula con la evidencia de la capilaridad de los daños producidos por el genocidio, cuyas marcas traían consigo los sobrevivientes, a partir de lo que se reactualizaba la permanencia del terror y la desconfianza en el conjunto social.

La reapertura de los juicios contra los genocidas ha posibilitado cierta asimilación de los elementos mencionados por parte de la sociedad sobreviviente, que se plasmaron en desplazamientos en las representaciones acerca de las víctimas que subyacen a las prácticas indemnizatorias. En especial, se produjo un reconocimiento a cierta praxis política de las víctimas, que potencialmente puede contribuir a la apropiación de los modos de ser y estar en el mundo que intentaron ser eliminados en el marco del genocidio.

El otro terreno en el cual se han identificado transformaciones que se articulan con la influencia del proceso de juzgamiento en el universo de las prácticas indemnizatorias es el de las

representaciones acerca de los daños a reparar. La reconstrucción del funcionamiento de las juntas de evaluación de daños -constituidas con el objetivo de ponderar las lesiones sufridas por las víctimas cuya situación corresponde a lo que he denominado una concepción ampliada de aparición- me permitió situar en este ámbito la emergencia de una concepción de daño que he propuesto llamar *daño subjetivo*.

El daño subjetivo emerge de la tensión que plantea la noción de daño jurídico para alojar en su seno los daños producidos por el genocidio. Si por un lado, el daño jurídico resulta insoslayable debido a la inscripción de las prácticas indemnizatorias en el marco del derecho, este resulta inadecuado para dar cuenta de las afectaciones subjetivas que las mismas intentan reparar. El daño psicológico, en tanto dimensión constitutiva del daño jurídico, ha operado como la puerta de entrada de la subjetividad al universo de la reparación; sin embargo, no puede trascender los límites que le impone el derecho, que obligan a la mensura de los daños para poner en marcha los mecanismos tendientes a su reparación. La emergencia de la noción subjetiva del daño implica un intento por alojar las particularidades de la los crímenes de Estado al lenguaje de la reparación en tanto iniciativa estatal.

En la evolución de la concepción del daño vuelve a hacerse presente la dificultad para la consideración de los daños grupales que el genocidio ha producido. La noción de daño subjetivo implica un avance en esa dirección, en la medida en que la consideración de la subjetividad implica un cierto reconocimiento de las identidades aniquiladas, identidades que necesariamente se construyen colectivamente. Sin embargo, la noción de daño jurídico en términos individuales opera como un corset al que deben ajustarse las prácticas indemnizatorias y que produce una limitación para la apropiación de estas identidades colectivas.

Esto último refuerza la interpretación que postula que las prácticas indemnizatorias promueven un vínculo de exterioridad, de ajenización respecto a la experiencia genocida, que se expresa fundamentalmente en la dificultad para dar cuenta de los daños colectivos que el mismo ha producido, tal como se desprende de los elementos analizados a lo largo de esta tesis y suscintamente reseñados a modo de conclusión. Sin embargo, también ha quedado demostrado que esta modalidad de elaboración de lo sucedido se articula con elementos que habilitan al menos parcialmente cierto reconocimiento de estas identidades, que disputan las representaciones construidas acerca del genocidio aunque no logren instalarse como hegemónicas. En este sentido, esta investigación no pretende arrojar resultados concluyentes, sino por el contrario, aportar a la

comprensión de un proceso complejo plagado de matices y gradientes, atravesado por luchas ideológicas, y que todavía se encuentra en desarrollo en la sociedad del presente. En otras palabras, si esta tesis contribuye a seguir complejizando las preguntas acerca de la reparación del genocidio en Argentina, habrá cumplido entonces con su objetivo principal.

En el saldo de lo pendiente que deja esta investigación, queda seguir dilucidando el interrogante acerca del vínculo social que las prácticas indemnizatorias se proponen reconstruir. Si bien he mencionado que esta pregunta formó parte del horizonte de esta tesis, no pudo ser abordada en el transcurso de la misma de manera acabada, sino tan sólo de manera exploratoria. Las conclusiones vertidas en este capítulo de cierre pueden ser leídas como un conjunto de interpretaciones en esta dirección, sobre las cuales espero continuar profundizando.

En igual sentido, para finalizar quiero señalar algunas limitaciones y potencialidades que encierra la reparación tal como se ha conceptualizado en esta tesis, y que se desprenden del análisis de las prácticas indemnizatorias. Al situarse al interior del aparato de estado jurídico político, las prácticas indemnizatorias responden al paradigma del derecho en el cual se inscriben. La concepción de sujeto de derechos que permea a este paradigma concibe a cada persona como sujeto jurídico e individual; desde esta perspectiva, la comunidad, a su vez, remite a un grupo de individuos "libres e iguales" que se vinculan entre sí, enlazados a partir de un conjunto de derechos y obligaciones a los que están obligados recíprocamente. Esta concepción supone una limitación para concebir a los grupos más allá de una sumatoria de individuos.

Lo antedicho se vincula con una discusión que no fue abordada directamente a lo largo de esta tesis, pero que la ha sobrevolado en la medida en que forma parte del proceso de construcción de representaciones sobre el proceso represivo: me refiero a las modalidades diferenciales de caracterización de los crímenes de Estado.

La investigación realizada ha evidenciado que la categoría consagrada institucionalmente para denominar los crímenes cuya reparación se procura mediante las indemnizaciones fue la de *terrorismo de Estado*. Esta categoría puso en juego un conjunto de representaciones que permearon las medidas tendientes a la reparación a partir de la consideración del proceso de aniquilamiento como una modalidad indiscriminada de ejercicio del terror desplegada contra la sociedad en términos de conjunto de individuos. Esta concepción resulta afín al paradigma del derecho liberal, y, por lo tanto, se hace eco de las limitaciones que presenta la ideología jurídica al momento de explicar los daños sufridos así como su reparación. Asimismo, identifica como

elemento central en el ejercicio de la represión la usurpación del poder constitucional por parte de los militares, en línea con una lectura del conflicto social que parte de la oposición entre dictadura y democracia.

En el capítulo 2 he identificado una operación análoga en el análisis de las representaciones que subyacen al paradigma de la justicia transicional. Este último comparte con los sentidos asociados al "terrorismo de Estado" la centralidad otorgada a las violaciones de los derechos humanos perpetrados contra los individuos en su carácter de ciudadanos a la hora de caracterizar los crímenes de Estado. La importancia otorgada a la institucionalidad democrática como medio privilegiado –e incluso excluyente- para la superación del conflicto que se encuentra en la base de la perpetración de los crímenes también puede observarse en ambos casos.

En la justicia transicional esta característica se evidenció en la centralidad que adquiere la jurisprudencia de transición para enfrentar los crímenes del pasado, que supone la superación de toda forma de violencia mediante su canalización en los marcos institucionales del Estado. Por su parte, en el caso del "terrorismo de Estado" este elemento se articula con la relevancia decisiva que adquirió el accionar del Estado -caracterizado como demoníaco o terrorista- en el despliegue de la violencia represiva. Es preciso señalar en este punto que "terrorismo de Estado" es un vocablo que ha sido acuñado en el ámbito local, mientras que las concepciones que atañen a la justicia transicional se ubican a nivel del ordenamiento normativo del derecho internacional humanitario. No obstante, pese a inscribirse en planos diferenciales, ambos paradigmas presentan dificultades para dar cuenta del conflicto social del que ha nacido un proceso represivo que se propuso la transformación de las bases esenciales sobre las cuales se configuraba la sociedad en su conjunto.

Al poner de relieve que el proceso represivo ha sido desplegado contra individuos en tanto parte de determinados grupos sociales, la perspectiva del genocidio permite trascender algunas de las limitaciones señaladas propias del paradigma del derecho liberal que permean tanto la justicia transicional como el "terrorismo de Estado". A partir de esta diferencia nodal, el genocidio habilita la consideración del carácter colectivo de los daños sufridos, así como la configuración grupal del universo de víctimas a partir del intento de destrucción de las relaciones sociales que las mismas encarnaban, para la generación de nuevas articulaciones sociales. Asimismo, jerarquiza en lugar de esconder la existencia del conflicto social que ha abonado un proceso ascendente de organización de los sectores populares que intentó ser obturado mediante el

genocidio, con el objetivo de detener la construcción de vínculos cooperativos que se gestaban al calor de su conformación.

Es por ello que he planteado en la introducción de esta tesis que el concepto genocidio resulta disruptivo para el paradigma del derecho liberal, lo que le ha valido su ubicación marginal en las modalidades construidas desde el Estado para la comprensión del proceso de aniquilamiento en el caso argentino. Digo que esta ubicación es marginal y no que se encuentra ausente, ya que en el marco del proceso de juzgamiento reabierto en 2006, la pertinencia en torno a la calificación de los hechos como un genocidio se ha instalado con fuerza en el escenario judicial. El desembarco de este debate en el terreno de los juicios fue impulsado por parte de algunas víctimas y organismos de derechos humanos en ese ámbito, y ha llevado al reconocimiento de su existencia por parte de algunos tribunales. Sin embargo, este movimiento no se ha replicado en el ámbito legislativo ni ejecutivo en el que se construyen y formulan las prácticas reparatorias, y por lo tanto, es una disputa que permanece inobservada en las representaciones que subyacen a las prácticas indemnizatorias que se han analizado en el transcurso de esta tesis.

Ante esta ausencia, no es posible determinar si el hecho de considerar el proceso atravesado como un genocidio en el universo de las prácticas reparatorias puede llevar a la construcción de modalidades más afines a la apropiación de la experiencia atravesada, que permitan a la sociedad sobreviviente reconocerse en aquellas relaciones sociales que configuraban modos de existencia social que fueron transformados por el terror y la desconfianza. Sin embargo, la relevancia de los conceptos en la construcción de representaciones para la comprensión del mundo, permite postular que allí habita una posibilidad para intentar reconocernos en aquello que fuimos y en el daño que sufrimos, como condición fundamental para proyectarnos hacia el futuro en aquello que queremos ser. A la luz de las consideraciones vertidas en esta investigación, esa proyección forma parte de la construcción de una forma de equilibrio que constituye el horizonte de la reparación, que adquiere la forma de una reconstrucción de los lazos sociales vulnerados por el aniquilamiento.

En el marco de los posibles modos de construcción de este equilibrio, habita otra de las preocupaciones que dieron origen a esta tesis, que tampoco puede responderse sin incurrir en afirmaciones de índole prescriptiva. Me refiero a la limitación que impone una formación social estructurada en torno a las relaciones de clase propias del capitalismo, atravesada por una desigualdad y asimetría fundante, en la construcción de una reconfiguración reparatoria tendiente

a la construcción de relaciones sociales más solidarias y cooperativas. Con el objetivo de profundizar en la comprensión de estas limitaciones, entre los desafíos próximos que se abren a partir de esta investigación, me propongo abordar la problemática de la reparación en el marco de la ofensiva neoliberal desplegada a partir del triunfo electoral de la Alianza Cambiemos en 2015. Desde entonces, las disputas ideológicas en torno a los modos de comprensión del proceso genocida produjeron un intento por socavar los consensos sociales acerca del pasado dictatorial, que se articularon con una avanzada dirigida a la imposición de un modelo de acumulación neoliberal en beneficio del capital financiero y de los sectores agroexportadores. A partir de la hipótesis de que esta ofensiva implica un intento por profundizar las relaciones sociales basadas en la desigualdad de clase, espero iluminar el proceso de articulación entre los vínculos sociales de presión y constreñimiento y la constelación reparatoria que estos habilitan a construir.

Pese a las limitaciones señaladas, tengo la convicción de que la reparación encierra siempre una posibilidad; es un terreno fértil para la disputa de los sentidos acerca del proceso genocida, que seguirá latiendo en la construcción e implementación de cada práctica reparatoria. Así lo ha demostrado la lucha del movimiento de derechos humanos que desde tiempos dictatoriales hasta el presente, ha batallado sin descanso por seguir ampliando el horizonte de la reparación, y que han impulsado al Estado a la puesta en marcha de las múltiples prácticas reparatorias analizadas, que con fortalezas y debilidades se enfrentaron a la tarea de reparar lo irreparable. La relevancia ético política de la reflexión en torno a los modos y representaciones de la reparación invita a mantener abiertas las preguntas que guiaron esta investigación, tanto para ser recuperadas en otros ámbitos de reflexión, así como en la guía hacia la elaboración de nuevos interrogantes, que me permitan profundizar en la contribución de la reparación a la reconstrucción ineludible a la que nuestra sociedad se enfrenta tras haber sufrido el genocidio, proceso al cual espero que esta tesis haya contribuido con nuevo conocimiento.

Bibliografía y fuentes

Fuentes documentales

Naciones Unidas (1948). *Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948)*, disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm

Naciones Unidas (1998). *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/estatuto_roma.pdf

Naciones Unidas (2004). *"El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos"* (S/2004/616)

Naciones Unidas (2005). Res. 60/147 *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

Fuentes judiciales

Código Civil de la Nación. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. (Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147)

CSJN. Causa Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ M° del Interior -resol. M.J.D.H. 221/00 (Sentencia del 14 de Octubre de 2004)

CSJN. Causa Noro, Horacio c/ Ministerio del Interior art. 3° s/ ley 24.043 (sentencia del 15 de julio de 1997)

Diarios y periódicos

Página 12. "La polémica de las reparaciones" (13/12/1998)

Madres de Plaza de Mayo. Números de junio 1986; julio 1986; Octubre 1997; enero 1999.

Diario La Nación. "*De la revolución a una pensión de por vida*" (21/11/2013)

Diario Clarín. "*Pensión vitalicia para Kunkel, Zannini y compañía*" (29/11/2013)

Bibliografía

Abós, A. (1984). *Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983)*. CEAL.

Abuelas de Plaza de Mayo. (2008). *Las Abuelas y la genética. El aporte de la ciencia en la búsqueda de los chicos desaparecidos*. Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Acha, O. (2008). La huelga bancaria de 1959 y los problemas de un movimiento obrero dividido. *Revista del Centro de Cultura y Cooperación*, *2*.

Acuña, C., González Bombal, I., Jelin, E., Landi, O., Quevedo, L. A., & Smulovitz, C. (1995). *Juicio, castigos y memorias: Derechos humanos y justicia en la política argentina*. Nueva Visión.

Acuña, C., & Smulovitz, C. (2007). Militares en la transición argentina: Del gobierno a la subordinación constitucional. En A. Pérotin-Dumon (Ed.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*.

AEDD. (1995). *¿Por qué sobrevivimos?* http://exdesaparecidos.org/por-que-sobrevivimos/

AEDD. (1997). Reparación económica: Debate y reflexión. *Asociación Madres de Plaza de Mayo*, 19.

Agamben, G. (1998). *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Pre-Textos.

Ageitos, S. M. (2011). *Historia de la impunidad. Las actas de Videla, los indultos de Menem y la reapertura de los juicios*. Adriana Hidalgo.

Águila, G. (2008). *Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983: Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura*. Prometeo.

Alonso, L. (2008). El surgimiento del movimiento argentino por los derechos humanos en perspectiva comparada. *Páginas - revista digital de la escuela de historia - UNR, Año 1*(N° 1).

Alonso, L. (2009). Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008. *Política y cultura*, *31*, 27-47.

Alonso, L. (2011). *Luchas en plazas vacías de sueños. Movimiento de derechos humanos, orden local y acción antisistémica en Santa Fe*. Prohistoria.

Alonso, L. (2013). La definición de las ofensas en el movimiento por los derechos humanos en la Argentina y la calificación de genocidio. *Revista Contenciosa*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.14409/contenciosa.v0i1.5044

Althusser, L. (1975). *Elementos de autocrítica*. Laia.

Althusser, L. (2005). *Ideología y aparatos ideológicos de Estado*. Nueva Visión.

Althusser, L., & Balibar, É. (2010). El marxismo no es un historicismo. En *Para leer el capital*. Siglo XXI.

Ambos, K., Malarino, E., & Elsner, G. (Eds.). (2009). *Justicia de Transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*. Konrad Adenauer Foundation.

Arendt, H. (1993). *La condición humana*. Paidós.

Asociación Madres de Plaza de Mayo. (1986a, junio). Por qué no fuimos el 16. *Madres de Plaza de Mayo*, 16.

Asociación Madres de Plaza de Mayo. (1986b, julio). Pesará tanto como la muerte. *Madres de Plaza de Mayo*, 4.

Balé, C. (2016). El problema de la periodización en las leyes reparatorias: La ley 26.564 y las transformaciones en el régimen de memoria vigente. *VIII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, 9 al 12 de agosto de 2016*. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.702/pm.702.pdf

Balé, C. (2018). *Memoria e identidad durante el kirchnerismo: La reparación de legajos laborales de empleados estatales desaparecidos*. Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Barahona de Brito, A. (2002). Verdad, justicia, memoria y democratización en el Cono Sur. En *Las políticas hacia el pasado: Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias* (pp. 195-246). Ediciones Istmo.

Barros, M. (2008). Lenguaje, política y movilización social: La formación identitaria del movimiento de derechos humanos en la Argentina. *Sociedad Hoy*, *14*, 39-53.

Basualdo, V. (2006). La participación de los trabajadores y sindicalistas en la campaña internacional contra la última dictadura argentina. *Sociedad*, *25*, 197-222.

Battaglino, J. (2020). Reflexiones sobre la transición a la democracia en la Argentina. En J. A. Olivar & M. Á. Martínez Meucci (Eds.), *Transiciones políticas en América Latina. Desafíos y experiencias* (Universidad Metropolitana, pp. 137-155).

Beckert, J., & Aspers, P. (Eds.). (2011). *The worth of goods: Valuation and pricing in the economy*. Oxford University Press.

Beristain, C. (2010). *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Bettelheim, B. (1973). *El corazón bien informado. La autonomía en la sociedad de masas*. Fondo de Cultura Económica.

Bonaldi, P. (2006). Si no hay justicia, hay escrache. *Apuntes de investigación*, *n° 11*, 9-30.

Bonetto, M. S. (2006). Memoria e identidad. La agrupación H.I.J.O.S. en Argentina. *Imago Americae, n°1,* 239-250.

Boraine, A. (2000). *A Country Unmasked – Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission*. Oxford University Press.

Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas Sobre la teoría de la acción*. Anagrama.

Bourdieu, P. (2014). *Sobre el Estado*. Anagrama.

Buci-Glucksmann, C. (1975). *Gramsci y el Estado. Hacia una teoría materialista de la filosofía*. Siglo Veintiuno Editores.

CADHU, C. A. por los D. H. (1977). *Argentina: Proceso al genocidio*. Elías Querejeta.

Calveiro, P. (1998). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Colihue.

Canelo, B., & Guglielmucci, A. (2005). (Re)aparecer en democracia: Silencios y pasados posibles. En *Anuario de Estudios en Antropología Social* (pp. 175-186). Centro de Antropología Social – Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).

Canelo, P. (2011). Consideraciones sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas argentinas durante los años noventa. En A. Pucciarelli (Ed.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal* (pp. 143-176). Siglo XXI.

Castelao, S. (2011). El daño psíquico; delimitación conceptual y su especificidad en casos de accidentes de tránsito, mala praxis médica y duelo. *Cuadernos de medicina forense argentina, Año 3*(N°1), 79-98.

Castex, M. (2005). *El Daño en Psicopsiquiatría Forense*. Editorial Ad Hoc.

Castillejo Cuellar, A. (2015). *La imaginación social del porvenir: Reflexiones sobre Colombia y el prospecto de una Comisión de la Verdad*. CLACSO.

Castillejo Cuellar, A. (2017). *La ilusión de la justicia transicional Perspectivas críticas desde el Sur global*. Ediciones Uniandes.

Chambliss, W. (1989). State organised crime. *Criminology, nº 27*, 183-208.

Charny, I. (1994). Toward a generic definition of genocide. En G. Andreopulos (Ed.), *Genocide: Conceptual and Historical Dimensions*. University of Pennsylvania Press.

Ciancaglini, S., & Granovsky, M. (1995). *Nada más que la verdad: El Juicio a las Juntas. La guerra sucia desde el golpe hasta las autocríticas militares*. Planeta.

CIDH. (1992). *Informe Nº 28/92. Publicado en el Informe Anual de la CIDH 1992 – 1993*. www.oas.org

CIDH. (1993). *Informe sobre solución amistosa N° 1/93. Publicado en el Informe Anual de la CIDH 1992 – 1993*. ww.oas.org

Colonomos, A., & Armstrong, A. (2006). German Reparations to the Jews after World War Two: A Turning Point in the History of Reparations. En P. De Greiff (Ed.), *The Handbook of Reparations* (pp. 390-419). Oxford University Press.

Comisión colombiana de juristas. (2007). *Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Bogotá, Colombia. Segunda sección: Reparaciones*.

CONADEP, C. N. sobre la D. de P. (2006). *Nunca Más*. EUDEBA.

Corradi, J. (1996). El método de destrucción. El terror en la Argentina. En H. Quiroga & C. Tcach (Eds.), *A veinte años del golpe: Con memoria democrática*. Homo Sapiens.

Crenzel, E. (2008). *La historia política del Nunca Más*. Siglo XXI.

Crenzel, E. (2014). De la verdad jurídica al conocimiento histórico. En C. Hilb, *Lesa humanidad: Argentina y Sudáfrica: Reflexiones después del mal*. Katz Editores.

Cueto Rúa, S. (2010). Hijos de víctimas del terrorismo de Estado. Justicia, identidad y memoria en el movimiento de derechos humanos en Argentina, 1995-2008. *Historia Crítica, 40*, 122-145. https://doi.org/10.7440/histcrit40.2010.08

Da Silva Catela, L. (2001). *No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos*. Al Margen.

Da Silva Catela, L. (2014). "Lo que merece ser recordado…". Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria/ "What Deserves to be Remembered...". Conflicts and Tensions about Public Projects... *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 1*(2), 28-47.

Dadrian, V. (1975). A tipology of genocide. *International Review of Modern Sociology*, *15*.

Daleo, G. (2001). Nosotros, además, somos testigos. *Milenio Nº 5*.

Danieli, Y. (2009). Massive Trauma and the Healing Role of Reparative Justice. En C. Ferstman, M. Goetz, & A. Stephens (Eds.), *Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity*. Brill.

D'Antonio, D. (2012). Los presos políticos en el penal de Rawson: Un tratamiento para la desobjetivación Argentina (1970-1980). *Años 90*, 141-168.

D'Antonio, D. (2016a). *La prisión en los años setenta: Historia, género y política*. Biblos.

D'Antonio, D. (2016b). Los Consejos de Guerra durante la última dictadura militar argentina (1976 – 1983). *Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 45*, 19-36. http://dx.doi.org/10.16993/iberoamericana.3

De Greiff, P. (2006). *The handbook of reparations*. Oxford University Press.

De Greiff, P. (2008). Justicia y Reparaciones. En C. Diaz (Ed.), *Reparaciones a las víctimas de la violencia política: Estudios de caso y análisis comparado*. ICTJ.

Dembour, M. B. (2004). Silencing Hearings? Victim-Witnesses at War Crimes Trials. *European Journal of International Law = Journal Europeen de Droit International*, *15*(1), 151-177.

Derrida, J. (2003). *El siglo y el perdón (entrevista con Michel Wieviorka)*. Ediciones de la flor.

Díaz, C. (2009). La reparación colectiva: Problemas conceptuales en perspectiva comparada. En *Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión* (pp. 145-192). Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia).

Douglas, L. (2005). *The memory of judgment: Making law and history in the trials of the Holocaust*. Yale University Press.

Duhalde, E. L. (1999). *El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica*. EUDEBA.

Durkheim, E. (1895). *Las reglas del método sociológico*. Prometeo Libros.

Durkheim, E. (1898). Representaciones individuales y representaciones colectivas. En *Sociología y filosofía*. Miño y Dávila Editores.

Durkheim, E. (1912). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Gorla.

Durkheim, E. (2004). *La división del trabajo social*. Ediciones Libertador.

Eagleton, T. (2005). *Ideología. Una introducción*. Paidós.

Elias, N. (2016). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. Fondo de Cultura Económica.

Elster, J. (2006). *Rendición de cuentas*. Katz Editores.

Equipo de Asistencia Sociológica a las Querellas (EASQ). (2015). Informe sobre el juzgamiento del genocidio argentino. Contiene las sentencias desde 2006 hasta Diciembre de 2014 inclusive. *Tela de Juicio*, *1*, 25-58.

Feierstein, D. (2000). *Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: Otredad, exclusión, exterminio*. EUDEBA.

Feierstein, D. (2007). *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*. Fondo de Cultura Económica.

Feierstein, D. (2012). *Memorias y representaciones. Sobre la elaboración del genocidio I*. Fondo de Cultura Económica.

Feierstein, D. (2015). *Juicios: Sobre la elaboración del genocidio, II*. Fondo de Cultura Económica.

Feierstein, D. (2017). Genocidio y Desaparición: Los distintos Usos de una Práctica Social en el contexto de una tecnología de Poder. En *Desapariciones: Usos locales, circulaciones globales* (pp. 53-73). Siglo del Hombre.

Feierstein, D. (2018). *Los dos demonios (recargados)*. Marea.

Feierstein, D., & Silveyra, M. (2017). II Informe sobre el juzgamiento del genocidio argentino. *Tela de Juicio, 2*.

Feierstein, D., & Silveyra, M. (2020). Genocidio o crímenes de lesa humanidad: El debate jurídico argentino como disputa por el sentido asignado al pasado. *Revista Estudios de Derecho, 77*(170), Article 170.

Feijóo, C. (1992). *En celdas diferentes*. Ediciones de Salto Mortal.

Feld, C. (2002). *Del estrado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina*. Siglo XXI.

Feld, C. (2010). La representación de los desaparecidos en la prensa de la transición: El 'show del horror'". En E. Crenzel (Ed.), *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)*. Biblos.

Feld, C., & Franco, M. (Eds.). (2015). *Democracia, hora cero: Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*. Fondo de Cultura Económica.

Figari Layus, R. (2015). "What Do You Mean By Transitional Justice?": Local Perspectives on Human Rights Trials in Argentina. En N. Schneider & M. Esparza (Eds.), *Legacies of State Violence and Transitional Justice in Latin America. A Janus-Faced Paradigm?* (pp. 3-15). Lexington Books.

Figueiro, P. (2013). Dinero y modernidad en Simmel: De la "comunidad vital" a las "comunidades fragmentarias". *Papeles de Trabajo, Año 7*(N° 12), 191-211.

Filc, J. (1997). *Filc, Judith (1997). Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983. Buenos Aires: Biblos*. Biblos.

Filippini, L., & Magarrell, L. (2006). La justicia penal y la verdad en la transición democrática. En L. Filippini & L. Magarrell, *El legado de la verdad. La justicia penal en la transición peruana*. FM Servicios gráfcias.

Folgueiro, H. (2004). El crimen de genocidio en el derecho internacional. En D. Feierstein & G. Levy (Eds.), *Hasta que la muerte nos separe. Poder y prácticas sociales genocidas en América Latina*. Ediciones al Márgen.

Foucault, M. (2001). *La verdad y las formas jurídicas*. Gedisa.

Foucault, M. (2006). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.

Foucault, M. (2007). *Los anormales*. Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2008). Notas para una historia de la violencia en la Argentina: Una mirada desde los discursos del período 1973-1976. *Nuevo mundo mundos nuevos*. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.43062

Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y «subversión», 1973-1976*. Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2018). La última dictadura argentina en el centro de los debates y las tensiones historiográficas recientes. *Revista de historia do tempo presente, 10*(23), 138-166.

Franco, M., & Iglesias, M. (2015). El estado de excepción a escala comparada. Notas a partir de los casos argentino, chileno y uruguayo durante la década de 1950. *Quinto Sol*, *19*(1), Article 1. https://doi.org/10.19137/qs.v19i1.964

Fraser, N., & Honnet, A. (2003). *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político filosófico*. Ediciones Morata.

Galante, D. (2019). *El juicio a las juntas: Discursos entre lo político y lo jurídico en la transición argentina*. Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional de Misiones.

Garaño, S. (2010). El 'tratamiento'penitenciario y su dimensión productiva de identidades entre los presos políticos (1974-1983). *Iberoamericana. América Latina - España - Portugal*, *10*(40), 113-130. http://dx.doi.org/10.18441/ibam.10.2010.40.113-130

Garaño, S., & Pertot, W. (2007). *Detenidos-aparecidos: Presas y presos políticos desde Trelew a la dictadura*. Biblos.

García Mendieta, C. (1984). La Obligación de reparar el daño moral a través del tiempo. En *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano* (pp. 221-238). Ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

García Villegas, M. (2014). *La eficacia simbólica del derecho. Sociología política del campo jurídico de América Latina*. Debate.

Gatti, G. (2011). *Identidades desaparecidas: Peleas por el sentido en los mundos de la desaparición forzada* (1. ed, 1. ed) [Computer software]. Prometeo Libros.

Gatti, G. (2017). *Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales*. Siglo del Hombre Editores.

Giddens, A. (1999). *Las consecuencias de la modernidad*. Alianza.

Gómez Isa, F. (2007). El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. *El Otro Derecho, 37*.

Gómez, J. D. V. (2012). La Acción Y El Enfoque Psicosocial De La Intervención En Contextos Sociales: ¿Podemos Pasar De La Moda a La Precisión Teórica, Epistemológica Y Metodológica? *EL ÁGORA USB*, *12*(2), 349-365.

González Bombal, I. (1991). El diálogo político: La transición que no fue. *Documento CEDES, núm. 61*.

González Bombal, I., & Sonderéguer, M. (1987). Derechos humanos y democracia. En E. Jelin, *Movimientos sociales y democracia emergente* (Vol. 1, pp. 85-112). Centro Editor de América Latina.

Gorini, U. (2006). *La rebelión de las Madres: Historia de las Madre de Plaza de Mayo (1976-1983)* (Vol. 1). Norma.

Gorini, U. (2008). *Historia de las Madres de Plaza de Mayo. La otra lucha: (1983-1986)* (Vol. 2). Norma.

Goyochea, A., Surraco, L., & Pérez, M. E. (2011). *Definiciones del universo de víctimas desde el Estado Posgenocida: La invisibilidad de los hijos de desaparecidos y asesinados como sujetos de derecho"*. 9 Conferencia Bianual de la International Association of Genocide Scholars, Buenos Aires.

Gramsci, A. (2000a). *Cuadernos de la cárcel. Tomo 3* (V. Gerranata, Trad.). Ediciones Era.

Gramsci, A. (2000b). *Cuadernos de la cárcel. Tomo 5* (V. Gerranata, Trad.). Ediciones Era.

Gramsci, A. (2008). *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*. Nueva Visión.

Gramsci, A. (2013). *Antología*. Siglo XXI.

Grandin, G. (2007). Las instrucciones de las grandes catástrofes: Comisiones por la verdad, historia nacional y formación del Estado en Argentina, Chile y Guatemala. *Sociohistórica*, *21-22*, 205-236.

Graybill, L. S. (2002). *Truth and Reconciliation in South Africa. Miracle or Model?* Lynne Rienner Publishers Inc.

Grupo de iniciativa por una convención internacional sobre la desaparición forzada de personas. (1987). *La desaparición. Crimen contra la humanidad* (APDH, Ed.). Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Gualde, A., & Luterstein, N. (2009). The Argentinean Reparations Programme for Grave Violations of Human Rights Perpetrated during the Last Military Dictatorship (1976–1983). En *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity*. Brill.

Guber, R. (2004). *El salvaje metropolitano: Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Paidós.

Guembe, M. J. (2006). Economic reparations for grave human rights violations: The argentinean experience. En P. De Greiff (Ed.), *The Handbook of Reparations.* (pp. 21-54). Oxford University Press.

Guglielmucci, A. (2007). Visibilidad e invisibilidad de la prisión política en Argentina: La "cárcel vidriera" de Villa Devoto (1974-1983). *A Contracorriente, Revista de Historia Social y Literatura en América Latina*, *4*(3), 86-136.

Guglielmucci, A. (2013). *La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina*. Antropofagia.

Guglielmucci, A. (2015). Transición política y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina: Algunos debates pendientes. *TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina, 4*(5).

Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: Una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. *Revista de Estudios Sociales, 59*, 83-97.

Guilis, G. (2007). *La reparación: Acto jurídico y simbólico*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Guilis, G., & Equipo de Salud Mental del CELS. (2005). El concepto de reparación simbólica. *Memorias del Seminario Internacional de integración de abordajes y acciones psicosociales en la asistencia jurídica a víctimas*.

Habermas, J. (2010). *Teoría de la acción comunicativa* (Vol. 2). Trotta.

Halbwachs, M. (2004a). *La memoria colectiva* (Vol. 6). Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Halbwachs, M. (2004b). *Los marcos sociales de la memoria*. Anthropos.

Hamber, B. (2000). Repairing the irreparable: Dealing with the double-binds of making reparations for crimes of the past. *Ethnicity and Health*, *5*(3-4), 215-226.

Hamber, B. (2005). The dilemmas of reparations: In search of a process-driven approach En Feyter, K. (Ed.). . Intersentia. En K. Feyter (Ed.), *Out of the ashes: Reparation for victims of gross and systematic human rights violations*. Intersentia.

Hamber, B. (2006). Narrowing the Micro and macro: A Psychological Perspective on reparations in Societies in Transition. En P. De Greiff (Ed.), *The Handbook of Reparations*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Akal.

Hayner, P. (2001). *Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad*. Fondo de Cultura Económica.

Hegel, G. W. F. (2015). *La fenomenología del espíritu*. Fondo de Cultura Económica.

Hilb, C. (2013). La virtud de la justicia y su precio en verdad. Una reflexión sobre los juicios a las Juntas en la Argentina, a la luz de la Comisión de la verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. En C. Hilb, *Usos del pasado*. Siglo XXI.

Hilb, C., & Lutzky, D. (1984). *La nueva izquierda argentina: 1960-1980: (política y violencia)*. Centro Editor de América Latina.

Hilb, C., Martin, L. G., & Salazar, P.-J. (Eds.). (2014). *Lesa humanidad: Argentina y Sudáfrica: Reflexiones después del mal*. Katz Editores.

Hinton, A. L. (2013). Critical genocide studies. *Genocide Matters. Routledge*, *7*(1), 52-68.

Hobbes, T. (2013). *Leviatan*. Ediciones Libertador.

Honig, F. (1954). The Reparations Agreement between Israel and the Federal Republic of Germany. *American Journal of International Law*, *48*, 564-578.

Horowitz, I. (1980). *Taking lives: Genocide and state Power*. Transaction Books.

Huntington, S. (1991). *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

Izaguirre, I. (1994). *Los desaparecidos: Recuperación de una identidad expropiada*. CEAL.

Izaguirre, I. (Ed.). (2009). *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983*. EUDEBA.

Jankelevicth, V. (1987). *Lo imprescriptible*. Muchnik Editores.

Jelin, E. (1995). La política de la memoria: El movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. En *Juicio, castigos y memorias* (pp. 101-146). Nueva Visión.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI.

Jelin, E. (2010). ¿Víctimas, familiares o ciudadano/as? Las luchas por la legitimidad de la palabra. En *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983- 2008)*. Biblos.

Jelin, E., & Langland, V. (2003). *Monumentos, memoriales y marcas territoriales* (Vol. 5). Siglo XXI de España Editores.

Jemio, A. S. (2013). *La construcción del enemigo interno en los reglamentos del Ejército Argentino de las décadas del sesenta y setenta. Continuidades y rupturas*. 27.

Jemio, A. S. (2019). *El Operativo Independencia en el sur tucumano (1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del genocidio* [Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales]. Universidad de Buenos Aires.

Jemio, A. S. (2021). Una revisión crítica del concepto "Estado terrorista". *Sociohistórica, 48*, e145-e145. https://doi.org/10.24215/18521606e145

Jensen, S. (2011). Exilio e Historia Reciente: Avances y perspectivas de un campo en construcción. *Aletheia*, *1*(2). http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr4806

Jessop, B. (1982). *The capitalist state*. Oxford.

Jodelet, D. (1986). La representación social: Fenómenos, conceptos y teoría. En S. Moscovici (Ed.), *Psicología Social II : Pensamiento y vida social* (pp. 469-494). Páidos.

Kirchner, N. (2007). *Palabras del Presidente Néstor Kirchner en la presentación el proyecto de ley de indemnización y reparación a los hijos de desaparecidos en el Salón Blanco*. http://www.presidencia.gob.ar/discursos-2007/11147

Kordon, D., & Edelman, L. (1986). *Efectos psicológicos de la represión política*. Sudamericana/Planeta.

Kritz, N. (Ed.). (1995). *Transitional justice: How emerging democracies reckon with former regimes*. Institute of Peace Press.

Kuper, L. (1981). *Genocide: Its political use in the twentieth century*. Yale University Press.

Lampasona, J. (2013). Desaparición forzada en Argentina: Entre la desaparición y la sobrevida. O sobre la 'regla' y la 'excepción' en el despliegue de la tecnología de poder genocida. *Aletheia. Revista de la Maestría de Historia y Memoria de la FaHCE*, *3*(6), Article 6. http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-6/articulos/desaparicion-forzada-en-argentina-entre-la-desaparicion-y-la-sobrevida.-o-sobre-la-2018regla2019-y-la-2018excepcion2019-en-el-despliegue-de-la-tecnologia-de-poder-genocida

Lampasona, J. (2017). Un pasado que no cesa: Reflexiones en torno a la experiencia de la (propia) desaparición y sus persistencias en el presente. *Astrolabio, 19,* 202-224.

Lampasona, J. (2020a). (Des)aparición y después: Entre el arrasamiento y la (re)construcción de los espacios de interacción. *Sociohistórica*, *46*. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr12025

Lampasona, J. (2020b). (Re)apariciones: Los sobrevivientes salen a la escena pública. *Revista Mexicana de Sociologí-a*, *82*(3), 501-527.

Lastra, M. S. (2019). ¿Víctimas de primera o de segunda categoría?: La compleja construcción social de una "jerarquía de las víctimas" en la Argentina posdictadura (1983-1987). *Páginas, 11, n.º27*. https://doi.org/10.35305/rp.v11i27.370

Leckie, S. (2005). Housing, Land and Property Rights in Post-Conflict Societies: *RESEARCH SERIES*, 56.

Lemkin, R. (2009). *El dominio del Eje en la Europa ocupada*. Prometeo y EDUNTREF.

Lenin, V. I. (1986). *El Estado y la Revolución*. Progreso.

Levi, P. (1987). *Si esto es un hombre*. Oceano.

Levi, P. (2006). *Deber de memoria*. Libros del zorzal.

Linz, J. (1990). Transiciones a la democracia. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 51*, 7-33.

Locke, J. (2004). *Segundo ensayo sobre el gobierno civil*. Losada.

Longoni, A. (2007). *Traiciones: La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión*. Grupo Editorial Norma.

López, M. A. (2012). Moral y don en las reparaciones económicas a las víctimas del terrorismo de estado en Argentina. *Anos 90, 19*(35), 383-415.

Luzzi, M. (2015). Pagar para reparar. Debates públicos y dilemas privados ante las políticas de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado. En *Gayol y Kessler (ed.): Muerte, política y sociedad en la Argentina*. Edhasa.

Luzzi, M. (2018). ¿Cuánto vale la reparación? Valuaciones monetarias y sentidos de justicia en el procesamiento de los crímenes de la dictadura argentina. En *Wilkis, Ariel (ed.) El poder de (e)valuar. La producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea* (pp. 213-223). UNSAM Edita/Editorial Universidad del Rosario.

Luzzi, M., & Sánchez, M. S. (2020). El dinero desde las ciencias sociales: Prácticas, instituciones, representaciones. Introducción al Dossier. *Sudamérica Revista de Ciencias Sociales, 12*, 9-18.

Lykes, M. B., & Mersky, M. (2006). Reparations and mental health: Psychosocial interventions towards healing, human agency, and rethreading social realities. En *The Handbook of Reparations*. Oxford University Press. https://philpapers.org/rec/LYKRAM

Madariaga, C. (2002). Trauma psicosocial, trastorno de estrés postraumático y tortura. *Colección CINTRAS*.

Mainwaring, S. (1992). Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Issues. En S. Mainwaring, G. O'Donnell, & J. S. Valenzuela (Eds.), *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective* (pp. 294-341). University of Notre Dame Press/Kellogg Institute.

Mallades, J., & Corte, M. (2013). La movilización en el kirchnerismo. Los motivos de los militantes para participar en organizaciones heterónomas. *X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires*, 12.

Maneiro, M. (2005). *Como el árbol talado. Memorias del Genocidio en La Plata, Berisso y Ensenada*. Al Margen.

Mannheim, K. (1993). *Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Marín, J. C. (2007). *Los hechos armados, Argentina 1973-1976: La acumulación primitiva del genocidio*. La Rosa Blindada.

Markusen, E., Bjornlund, M., & Mennecke, M. (2005). ¿Qué es el genocidio? En la búsqueda de un denominador común entre definiciones jurídicas y no jurídicas. En D. Feierstein (Ed.), *Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad*. EDUNTREF.

Martin, L. G. (2014). Regímenes criminales, refundaciones democráticas y formas de justicia (Argentina, Sudáfrica, Uruguay). En C. Hilb, P.-J. Salazar, & L. G. Martin (Eds.), *Lesa Humanidad. Reflexiones después del Mal*. Katz Editores.

Martinez, V. (1993). Psicología y derechos humanos en América Latina. *Papeles del Psicólogo, 56*.

Marx, K. (1962). Manuscritos económico filosóficos de 1844. En K. Marx & F. Engels, *Escritos económicos varios*. Grijalbo.

Marx, K. (1985). *La ideología alemana*. Ediciones Pueblos Unidos.

Marx, K. (2003). *La lucha de clases en Francia*. Prometeo Libros.

Marx, K. (2004). *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Ediciones Libertador.

Marx, K. (2005a). *Contribución a la crítica de la economía política*. Siglo Veintiuno Editores.

Marx, K. (2005b). *Manifiesto del Partido Comunista*. Gradifco.

Marx, K. (2011). *El capital. Libro primero. El proceso de producción de capital* (Vol. 3). Siglo Veintiuno.

Marx, K. (2019). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Grundrisse* (España, Vol. 1). Siglo XXI.

Mignone, E. (1991). *Derechos humanos y sociedad: El caso argentino*. CELS-Ediciones del pensamiento nacional.

Montero, A. S. (2012). *¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007)*. Prometeo.

Montero, A. S. (2016). Política y convicción. Memorias discursivas de la militancia setentista en el discurso presidencial argentino. *Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, 7*(2), 91-113. https://doi.org/10.35956/v.7.n2.2007.p.91-113

Morales, M. V. (2017). Escisión y dos modos de ser "Madres de Plaza de Mayo": Tensión y complejidad en la socialización de la maternidad. *Revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México, 3*(6).

Muleras, E. (2008). *Sacralización y desencantamiento. Las formas primarias del conocimiento de lo social*. Miño y Dávila Editores.

Nino, C. (2015). *Juicio al mal absoluto*. Siglo XXI Editores.

Nora, P. (2008). *Les lieux de mémoire*. Ediciones Trilce.

Novaro, M. (2007). Derechos humanos y política democrática. Las tareas de la historia y la justicia entre populismo y liberalismo. En P. Eiroa & J. Otero (Eds.), *Memoria y derecho penal*. Fabian Di Plácido Editor.

Novaro, M. (2009). *Argentina en el fin de siglo: Democracia, mercado y nación*. Paidós.

Novaro, M. (2010). Formación, desarrollo y declive del consenso alfonsinista sobre derechos humanos. En R. Gargarella, M. V. Murillo, & M. Pecheny (Eds.), *Discutir Alfonsín*. Siglo Veintiuno Editores.

Nowak, M. (2003). The right to reparation of victims of gross human rights violationes. En G. Ulrich & L. K. Boserup (Eds.), *Reparations: Redressing past wrongs.* Kluwer Law International.

O'donnell, G., & Schmitter, P. (1989). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas: Vol. T. 4*. Paidós.

Ohanian, B. (2018). *Condiciones de posibilidad y efectos de poder de la articulación entre memoria y derechos humanos en la presidencia de Néstor Kirchner* [Doctorado en Ciencias Sociales]. Universidad de Buenos Aires.

Parenti, P., & Pellegrini, L. (2009). "Argentina." En K. Ambos, E. Malarino, & G. Elsner (Eds.), *Justicia de Transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España* (pp. 133-52.). Konrad Adenauer Foundaiton.

Parsons, T. (1964). Levels of organization and the mediation of social interaction. *Sociological inquiry, 34*, 207-220.

Périès, G. (2009). La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad. En D. Feierstein (Ed.), *Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina*. Prometeo.

Piaget, J. (1978). *La representación del mundo en el niño*. Editorial Morata.

Piaget, J. (1984). *El criterio moral en el niño*. Ed. Martínez Roca.

Piaget, J. (1985). *La toma de conciencia*. Editorial Morata.

Piaget, J. (1986). La explicación en sociología. En *Estudios Sociológicos*. Editorial Planeta Agostini.

Piaget, J. (1990). *La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema Central del Desarrollo*. Siglo XXI Editores.

Piaget, J., & García, R. (1989). *Psicogénesis e historia de la ciencia*. Siglo Veintiuno Editores.

Pierini, A. (1999). *Diez años de derechos humanos (1989-1999)*. Ministerio del Interior.

Pierini, A. (2003). *Entrevista con Alicia Pierini* [Entrevista]. Memoria Abierta.

Pogany, I. S. (1997). *Righting Wrongs in Eastern Europe*. Manchester University Press.

Poulantzas, N. (2005). *Estado, poder y socialismo*. Siglo Veintiuno Editores.

Pozzi, P. (1988). *Oposición obrera a la dictadura. 1976-1982*. Contrapunto.

Pross, C. (1998). *Paying for the past: The struggle over reparations for surviving victims of the Nazi terror*. JHU Press.

Puget, J., & Kaës, R. (Eds.). (2006). *Violencia de estado y psicoanálisis* (1a ed, 1a ed) [Computer software]. Lumen.

Quint, P. (1997). *The imperfect union: Constitutional structures of German unification*. Princeton University Press.

Rama, C. (2017). La re-vinculación como problemática del proceso de reaparición de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención en Buenos Aires. *Revista de Historia*, *18*, 73-101.

Rettig, M. (2008). Gacaca: Truth, Justice, and Reconciliation in Postconflict Rwanda? *African Studies Review*, *51*(3), 25-50.

Risso, R. E. (2002). Daño psíquico. Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del dictámen pericial. *Cuadernos de medicina forense argentina*, *Año 1*(Nº 2).

Romanin, E. A. (2014). *¿Cooptación, oportunidades políticas y sentimientos? Las Madres de Plaza de Mayo y el gobierno de Néstor Kirchner*. 14.

Rosende, L., & Pertot, W. (2013). *Los días sin López. El testigo desaparecido en democracia*. Planeta.

Rousseau, J.-J. (2004). *El contrato social*. Gradifco.

Rousseaux, F. (2017). Las víctimas del terror de Estado en el marco de las políticas públicas de reparación. En G. Gatti (Ed.), *Un mundo de víctimas* (pp. 220-230). Anthropos.

Satta, S. D. (2012). *El daño psicológico*. http://www.saij.gob.ar/doctrinaprint/dacf120014-satta-dano_psicologico.htm

Schabas, W. (2011). *Transitional justice and the norms of international law.* Annual meeting of the Japanese Society of International Law, Kwansei Gakuin University.

Schindel, E. (2009). *Inscribir el pasado en el presente: Memoria y espacio urbano*. 24.

Schneider, L. (2017). Apuntes sobre las representaciones de la reparación en las sentencias judiciales. *Crítica Penal y Poder*, *13*, 208-229.

SDH. (2006). *Consecuencias actuales del terrorismo de Estado en la Salud Mental. Cuadernillo orientativo dirigido a profesionales de la salud mental*.

Sessarego, C. F. (1996). El daño al proyecto de vida. *Derecho PUC, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica*, *Nº 50*, 36.

Sidicaro, R. (2000). Sociología y filosofía y la actualidad de Durkheim. En E. Drukheim, *Sociología y filosofía*. Miño y Dávila.

Sikkink, K. (2011). *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*. The Norton Series in World Politics.

Sikkink, K., & Walling, C. B. (2008). La cascada de justicia y el impacto de los juicios de derechos humanos en América Latina. *Cuadernos del CLAEH*, *N °96-97*, 15-40.

Silveyra, M. (2018). Aproximaciones al concepto de genocidio desde una perspectiva marxista. Aportes para comprender el caso argentino. *Conflicto Social. Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*.

Silveyra, M. (2020). La sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Sentidos sobre el proceso histórico que se resignifican en el presente. *Question*, *1*(N° 65).

Silveyra, M. (2021). Presentes historizados. Sentidos sobre el genocidio argentino (1983-2014). *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, *67*(244). http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/71122

Silveyra, M., Schneider, L., & Crocco, N. (2017). La palabra de los sobrevivientes en el proceso de elaboración del genocidio argentino (1975-1983). *Tela de Juicio, 2.*

Simmel, G. (1977). *Filosofía del dinero*. Instituto de Estudios Políticos.

Siri, A. J. R. (2011). El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista internacional de derechos humanos, Año 1*(Nº 1).

Skaar, E. (2011). *Judicial independence and human rights in Latin America: Violations, politics, and prosecution*. Springer Series.

Skaar, E. (2012). ¿Puede la independencia judicial explicar la justicia post transicional? *América Latina Hoy, 61*, 15-49.

Snyder, J., & Vinjamuri, L. (2003). Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice. *International Security*, *28*(3), 5-44.

Solís Delgadillo, J. M. (2015). *Los tiempos de la memoria en las agendas políticas de Argentina y Chile*. Eudeba.

Stark, D. (2009). *The sense of dissonance: Accounts of worth in economic life*. Princeton University Press.

Surraco, L. (2013). *Políticas públicas reparatorias dirigidas al universo de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y efectos de los prácticas sociales genocidas. -El caso de los hijos de desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en Argentina y el posicionamiento del Cdh-*. Universidad Nacional de General San Martín.

Taboada, A. (2017). Macrismo y derechos humanos. Hacia la impunidad y el negacionismo. *Tela de Juicio, 2*, 19-34.

Teitel, R. (2000). *Transitional Justice*. Oxford University Press.

Teitel, R. (2003). Transitional Justice Genealogy. *Harvard Human Rights Journal*, *16*, 69-94.

Tello, M. E. (2003). La fuerza de la cosa dada: Derechos humanos, política y moral en las «indemnizaciones» a las víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina. *Antropologia e direitos humanos*, *2*, 37-73.

Theriault, H. (2014). Reparations for Genocide: Group harm and the limits of liberal individualism. *International Criminal Law Review*.

Ulloa, F. (1986). La ética del analista ante lo siniestro. *Revista Territorios, Nº 2,*.

Uprimmy, R., Díaz, C., & Sánchez, N. C. (Eds.). (2009). *Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión*. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia).

Uprimmy, R., & Saffon, M. P. (2007). Plan Nacional de Desarrollo y reparaciones—Propuesta de un programa nacional masivo de reparaciones administrativas para las víctimas de crímenes atroces en el marco del conflicto armado. *Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJuSticia*.

Vallejos, E. (1989). *Por amor a la libertad*. Dialéctica.

Valles, M. (2000). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.

Valls, A. (2003). Racial Justice as Transitional Justice. *Polity*, *36*(1), 53-71. https://doi.org/10.1086/POLv36n1ms3235423

van Boven, T. (2009). Victims' rights to a remedy and reparation: The new United Nations principles and guidelines. En *Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity* (pp. 17-40). Brill.

Vásquez, G., Condomí, J., & Tejera, L. (2011). Hacia la construcción de un sistema federal de información sobre el terrorismo de Estado Proyecto del Registro Unificado Nacional de Víctimas / Sistema Federal de Datos sobre el Terrorismo de Estado (Ruvte/Sifed). En Red Federal de Sitios de Memoria, *Sitios de memoria: Experiencias y desafíos*.

Vecchioli, V. (2001). Políticas de la Memoria y Formas de Clasificación Social. ¿Quiénes son las "Víctimas del Terrorismo de Estado"en la Argentina? En *La imposibilidad del Olvido. Recorridos de la Memoria en Argentina, Chile y Uruguay* (pp. 83-102). Ed. Al Margen.

Vecchioli, V. (2013). Las víctimas del terrorismo de Estado y la gestión del pasado reciente en la Argentina. *Papeles del CEIC, 2013/1*(90).

Vega Martínez, M. (1999). La desaparición: Irrupción y clivaje. En R. Sautu (Ed.), *El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores*. Editorial de Belgrano.

Velázquez Ramírez, A. (2015). De la concertación a la Multipartidaria: El espacio político partidario en los albores de la transición a la democracia en Argentina (1980- 1981). *Revista Contemporánea*, *1*(Ano 5, n° 7).

Verdoolaege, A. (2001). *The debate on truth and reconciliation: A survey of literature on the South African Truth and Reconciliation Commission*. Ghent University.

Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente: Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Siglo XXI.

Vezzetti, H. (2009). *Sobre la violencia revolucionaria: Memorias y olvidos*. Siglo XXI.

Vezzetti, H. (2015). Verdad jurídica y verdad histórica. Condiciones, usos y límites de la figura del «genocidio». En C. Hilb, P. J. Salazar, & L. Martín (Eds.), *Lesa humanidad: Argentina y Sudáfrica: Reflexiones después del Mal*. Katz.

Villarreal, J. (1985). Los hilos sociales del poder. En E. Jozami, P. Paz, & J. Villarreal (Eds.), *Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social (1976-1983)*. Siglo XXI.

Vocos Conesa, J. M. (2013). Las leyes reparatorias de violaciones a los Derechos Humanos, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema. *Estudios de derecho público*, 1073-1091.

Waldorf, L. (2014). Genocidio, justicia y reconciliación en Ruanda. *Política Exterior*, *28*(160), 106-113.

Weber, M. (1971). Religious Rejections of the World and their Directions. En H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber. Essays in Sociology*. Oxford University Press.

Wenar, L. (2006). Reparations for the Future. *Journal of Social Philosophy, 37*(3), 396-405. https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2006.00344.x

Wilkis, A. (2018). *El poder de (e) valuar. La producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea*. Editorial Universidad del Rosario.

Wolfe, S. (2013). *The politics of reparations and apologies*. Springer Series.

Woolford, A. (2013). The next generation: Criminology, genocide studies and settler colonialism. *Revista Crítica Penal y Poder,* 163-185.

Zalaquett, J. (1995). Confronting Human Rights Violations by Former Governments: Principles Applicable and Political Constraints. En N. Kritz (Ed.), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*. United States Institute of Peace.

Zamorano, C. (1984). *Prisionero político. Testimonio sobre las cárceles políticas argentinas*. Estudio.

Zamorano, E. (2012). Violencia y compensaciones económicas. *Lucha Armada*, *Anuario 2012*.

Zelizer, V. (2011). *El significado social del dinero*. Fondo de Cultura Económica.

Anexo 1. Corpus documental

Tipo	N°	Año	Resumen	Práctica reparatoria
Decreto PEN	157	1983	Declaración de la necesidad de promover la persecución penal a los responsables de instaurar formas violentas de acción política	Juzgamiento
Decreto PEN	158	1983	Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las Juntas Militares	Juzgamiento
Decreto PEN	187	1983	Constitución CONADEP	Reconocimiento
Res MEduc	56	1983	Reincorporación de docentes interinos cesanteados por motivos ideológicos, políticos o gremiales	Restitución
Ley	23040	1983	LEY DE PACIFICACION NACIONAL - Derógase por inconstitucional y declárase insanablemente nula la Ley de AUTOAMNISTÍA	Juzgamiento
Ley	23053	1984	Reingreso al cuadro permanente activo del Servicio Exterior de la Nación de los funcionarios declarados prescindibles	Restitución
Ley	23117	1984	Empresas del Estado -Reincorporación de despedidos y cesanteados por razones políticas	Restitución
Decreto PEN	3090	1984	Creación SDH	Democratización
Ley	23062	1984	Ley de reparación histórica	Democratización
Ley	23049	1984	Modificaciones al Código de Justicia Militar	Democratización
Ley	23278	1985	Reconocimiento del período de cesantía por motivos políticos a fines del cómputo jubilatorio	Restitución
Ley	23238	1985	Regimen de reincorporacion de docentes interinos	Restitución
Ley	23466	1986	Pension no contributiva para familiares de desaparecidos	Indemnización
Ley	23492	1986	Ley de punto final	Juzgamiento
Decreto Reglamentario	1228	1987	Reglamentación de la Ley 23466	Indemnización
Ley	23511	1987	Creación BNDG	Restitución
Ley	23521	1987	Ley de obediencia debida	Juzgamiento
Ley	23552	1988	Prórroga para el acogimiento Ley 23466	Indemnización
Ley	23523	1988	Reingreso de agentes bancarios dejados cesantes por causas politicas o gremiales	Restitución
Ley	23554	1988	Defensa Nacional	Democratización
Ley	23690	1989	Modificación a la ley 23466 de Pensiones para familiares de desaparecidos	Indemnización
Decreto PEN	1002	1989	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	1003	1989	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	1004	1989	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	1005	1989	Indultos	Juzgamiento
Decreto Reglamentario	1253	1989	BNDG - Modificación a la Reglamentación	Restitución
Decreto Reglamentario	700	1989	BNDG - Reglamentación Ley Nº 23.511.	Restitución
Ley	23793	1990	Modificación a la ley 23466 de Pensiones para familiares de desaparecidos	Indemnización
Decreto PEN	2741	1990	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	2742	1990	Indultos	Juzgamiento

Decreto PEN	2743	1990	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	2744	1990	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	2745	1990	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	2746	1990	Indultos	Juzgamiento
Decreto PEN	798	1990	Creación de una Comisión para la elaboración de un proyecto de ley que de solución a los reclamos por reparación de daños y prejuicios interpuestos ante la CIDH	Indemnización
Ley	24043	1991	Indemnizaciones a ex detenidos	Indemnización
Decreto PEN	70	1991	Beneficios para detenidos durante la vigencia del estado de sitio	Indemnización
Decreto PEN	2151	1991	Beneficios para detenidos durante la vigencia del estado de sitio	Indemnización
Ley	23852	1991	Excepción Servicio militar obligatorio	Democratización
Res MinInt	1328	1992	Antecedente de la Creación de la CONADI	Restitución
Decreto Reglamentario	1023	1992	Reglamentación Ley 24043	Indemnización
Reforma Constitucional		1994	Incorporación de los tratados de ddhh ratificados por argentina al derecho interno con rango constitucional	Democratización
Ley	24321	1994	Declaración de ausencia por desaparición forzada de personas	Reconocimiento
Ley	24411	1994	Indemnizaciones para desaparecidos	Indemnización
Res MEcon / MinInt	352 / 15	1994	Cálculo indemnizaciones ley 24043	Indemnización
Res MinInt	1768	1994	Cálculo indemnizaciones dec 70/91	Indemnización
Decreto PEN	1313	1994	Ampliación indemnizaciones ley 24043	Indemnización
Ley	24436	1994	Ampliación plazo acogemiento ley 24043	Indemnización
Ley	24499	1995	Prórroga del plazo para la presentación de la solicitud del beneficio establecido en la Ley Nº 24.411	Indemnización
Decreto Reglamentario	403	1995	Reglamentación Ley 24411	Indemnización
Ley	24556	1995	Aprobación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas	Reconocimiento
Ley	24736	1996	Reimplantación vigencia y modificación ley 23278	Restitución
Ley	24734	1996	Otorgamiento de servicios de cobertura médica a beneficiarios ley 23466	Rehabilitación
Ley	24823	1997	Modificatoria Ley 24411	Indemnización
Decreto PEN	479	1997	Observación ley 24823	Indemnización
Ley	24820	1997	Jerarquía constitucional Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas	Reconocimiento
Decreto PEN	726	1997	Emisión de bonos para pago indemnizaciones	Indemnización
Decreto PEN	205	1997	Modificatoria reglamentación ley 24043	Indemnización
Ley	24906	1997	Ampliación del plazo para el acogimiento ley 24043	Indemnización
Res MinInt	1392	1998	Creción de la CONADI	Restitución
Ley	24952	1998	Derogación de leyes 23492 Y 23521 ("Leyes de impunidad")	Juzgamiento
Decreto PEN	8	1998	Traslado de la ESMA a la Base Naval de Puerto Belgrano	Memorialización
Res MinInt	1745	1999	Creación del REDEF	Reconocimiento
Ley	25066	1999	Creación del Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños Secuestrados y/o Nacidos en Cautiverio en Argentina	Restitución
Ley	25497	2001	Prórroga del plazo de acogimiento de la ley 24043	Indemnización

Decreto PEN	1581	2001	Establecimiento de doctrina que se aplicará en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros.	Juzgamiento
Ley	25457	2001	Conformación CONADI	Restitución
Decreto PEN	357	2002	Se eleva la Subsecretaría de Derechos Humanos al rango de Secretaría de Derechos Humanos y Sociales	Reconocimiento
Ley	25633	2002	Institución del 24 de marzo como dia nacional de la memoria por la verdad y la justicia.	Memorialización
Ley	25814	2003	Prórroga del plazo de acogimiento de las leyes 24043 y 24411	Indemnización
Ley	25778	2003	Declaración de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad	Juzgamiento
Ley	25779	2003	Declaración de nulidad de leyes de obediencia debida y punto final	Juzgamiento
Decreto PEN	420	2003	Derogación el Decreto N° 1581/2001	Juzgamiento
Decreto PEN	579	2003	Jerarquía constitucional Convencion sobre la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de los crimenes de lesa humanidad	Juzgamiento
Decreto PEN	1259	2003	Creación Archivo Nacional de la Memoria	Reconocimiento
Decreto PEN	1200	2003	Institución de un premio anual denominado "Azucena Villaflor de Devincenti"	Reconocimiento
Ley	25914	2004	Indemnización para nacidos durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menos hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres. Víctimas de sustitución de identidad	Indemnización
Ley	25985	2004	Prórroga del plazo de acogimiento de las leyes 24043 y 24411	Indemnización
Ley	25974	2004	Creación Fondo de reparación histórica	Restitución
Decreto PEN	715	2004	Creación en el ámbito de la CONADI la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado	Restitución
Decreto PEN	848	2004	Declaración monumento histórico nacional a la Casa Mariani - Teruggi	Memorialización
Acuerdo	8	2004	Acuerdo entre el EN y la CABA conviniendo el destino del predio donde funcionara el Centro Clandestino de Detención identificado como "ESMA".	Memorialización
Resolución SDH	4	2005	Criterios para pago de indemnizaciones por exilio	Indemnización
Ley	26001	2005	Establecimiento del día 22 de octubre de cada año como Día Nacional del Derecho a la Identidad	Memorialización
Ley	26178	2006	Prórroga del plazo de acogimiento de las leyes 24043 y 24411	Indemnización
Ley	26085	2006	Feriados nacionales. Dia nacional de la memoria por la verdad y la justicia	Memorialización
Res MinJus	568	2006	Reedición del Informe sobre la situación de los ddhh en Argentina ante la CIDH	Reconocimiento
Decreto Reglamentario	727	2006	Reglamentación ley de Defensa Nacional Nº 23.554	Democratización
Ley	26267	2007	Modificatoria ley Nº 23.466/86	Indemnización
Decreto PEN	606	2007	Creación en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Programa Verdad y Justicia	Juzgamiento
Res MinJus	14	2007	Creación de la Red Federal de Sitios de Memoria	Memorialización

Decreto PEN	1852	2007	Modificación del Decreto Nº 1259/2003	Memorialización
Res SDH	3	2007	Aprobación del “Plan nacional de acompañamiento y asistencia integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de estado”	Rehabilitación
Ley	26415	2008	Ratifícación del Convenio celebrado para la creación, organización y funcionamiento del ente público denominado "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".	Memorialización
Ley	26394	2008	Derogación del Código de Justicia Militar y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan	Democratización
Decreto PEN	1333	2008	Decaración monumento histórico nacional al edificio del Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.	Memorialización
Res MinPlan	1486	2008	Ratifícase el Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas y el Archivo Nacional de la Memoria.	Reconocimiento
Decreto PEN	2130	2008	Declárase monumento histórico nacional a la Iglesia de la Santa Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Memorialización
Ley	26564	2009	Ampliación de los beneficios establecidos por leyes Nº 24.043 y Nº 24.411. Beneficiarios. LEY DOVENA	Indemnización
Ley	26521	2009	Prórroga del plazo de acogimiento de las leyes 24043 y 24411	Indemnización
Ley	26550	2009	CODIGO PROCESAL PENAL. Modificación por la que se habilita a los ODH a presentarse como querellantes en las causas relativas a delitos de lesa humanidad.	Juzgamiento
Ley	26548	2009	Creación del Archivo Nacional de Datos Genéticos	Restitución
Res MinJus	1229	2009	Creación del Grupo Especial de Asistencia Judicial (BNDG)	Restitución
Res MinJus	679	2009	Creación de la Unidad de Regularización Documental de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.	Restitución
Res MinDef	420	2009	Inclusión en los registros de las Fuerzas Armadas de la condición de detenidos-desaparecidos de aquellos soldados que fueron secuestrados durante la conscripción obligatoria	Reconocimiento
Res MinJus	1271	2009	Creación del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado "Dr. Fernando Ulloa"	Rehabilitación
Res MinJus	1207	2009	Creación de diversos Programas en el ámbito de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos.	Rehabilitación
Decreto PEN	935	2010	Codigo electoral nacional - procedimiento para dejar constancia de la situacion de ciudadanos declarados ausentes por desaparicion forzada.	Reconocimiento
Decreto PEN	4	2010	Desclasificación de toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983	Democratización
Res MinJus	1746	2010	Aprobación del Protocolo de Actuación para el Grupo Especial de Asistencia Judicial creado por la Resolución N° 1229/09. (BNDG)	Restitución
Ley	26691	2011	Declaración de sitios de memoria del terrorismo de estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represion ilegal.	Memorialización

Decreto PEN	1199	2012	Inscripcion de la condicion de detenido desaparecido en los legajos de las personas individualizadas en las planillas anexas, que revistaban como agentes de la APN	Reconocimiento
Res Gabinete	493	2012	Reglamentación decreto 1199/12	Reconocimiento
Ley	26913	2013	Regimen reparatorio. Ex presos politicos de la Republica Argentina	Indemnización
Res Gabinete / SDDHH	53/7	2013	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	339/26	2013	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	558/37	2013	Reparación de legajos	Reconocimiento
Decreto PEN	38	2013	Reglamentación de la Ley Nº 26.548. BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS	Restitución
Res Gabinete / SDDHH	53/7	2013	Reparación de legajos	Reconocimiento
Decreto Reglamentario	1058	2014	Reglamentación ley 26.913	Indemnización
Res Gabinete / SDDHH	73/8	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	111/11	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	112/12	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	113/13	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	119/16	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	153/19	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	154/20	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	380/1321	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	24/1322	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	382/1323	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	426/39	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	485/45	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	587/124	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	700/287	2014	Reparación de legajos	Reconocimiento
Decreto Reglamentario	1986	2014	Modificación a la reglamentación de la Ley N° 26.691	Memorialización

Ley	26990	2014	Institución del día 8 de enero de cada año como el Día Nacional de la Memoria en el Deporte en conmemoración del atleta Miguel Sánchez, desaparecido en 1978	Memorialización
Decreto PEN	1285	2014	Declaración del PARQUE DE LA MEMORIA monumento histórico nacional, lugar histórico nacional y bienes de interés histórico artístico.	Memorialización
Ley	27069	2014	Institución del día 14 de junio de cada año como Día Nacional del Barrendero, en homenaje a trabajadores barrenderos desaparecidos	Memorialización
Ley	27143	2015	Eliminación de plazo de caducidad leyes reparatorias .	Indemnización
Res Gabinete / SDDHH	11/115	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	10/114	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	85/1694	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	97/1853	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	106/2026	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	122/2104	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	123/2105	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	134/2106	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	231/2695	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	258/2893	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	256/2891	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	257/2892	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Decreto PEN	1133	2015	Creación del Museo del Sitio ESMA	Memorialización
Res Gabinete / SDDHH	93/219	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Res Gabinete / SDDHH	232/23	2015	Reparación de legajos	Reconocimiento
Decreto PEN	379	2015	Declaracion como lugar histórico nacional a Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado	Memorialización